

UNIVERSIDAD DE LEÓN
FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO BÁSICO



LA FUNCIÓN JUDICIAL DE LOS
CONCILIOS HISPANOS DE LA
ANTIGÜEDAD TARDÍA

ROSINE LETINIER Y MICHEL

LEÓN, 1996

INDICE

PROLOGO	7
---------------	---

CAPITULO I

LOS CONCILIOS: CLASES Y REGIMEN INTERIOR	11
--	----

1. Las diversas clases de concilios.....	11
2. Naturaleza esencialmente eclesiástica de los concilios	13
2.1. Cuestiones de Fé.....	13
2.2. Cuestiones de disciplina eclesiástica	14
3. Carácter político de los concilios	16
4. Tipos de causas judiciales en las que intervinieron los concilios.	19
4.1. Causas de naturaleza eclesiástica.....	19
4.2. Causas de naturaleza política.....	20
5. Régimen interno de los concilios: cuestiones de forma sobre las reuniones conciliares.....	21
5.1. Periodicidad.....	21
5.2. Convocatoria y lugar de celebración	21
5.3. Asistentes	22
6. Desarrollo de los concilios y su significado	23

CAPITULO II

LA NORMATIVA: CANONES SOBRE JUICIOS	27
---	----

7. Contenido de la normativa	28
7.1. Normas sobre condiciones previas a la actuación del concilio.....	29
7.2. Normas sobre la actuación judicial en sí.....	31
7.2.1. Asuntos que conciernen a la competencia del Sínodo.....	31
7.2.2. Indicaciones sobre el modo de juzgar	33
7.2.3. Recurso a la autoridad civil	34
7.2.4. Sobre las apelaciones	34
7.2.5. Apelación al Papa	36

CAPITULO III

JUICIOS SOBRE CUESTIONES DE LIMITES DIOCESANOS.....	39
8. Reivindicación de territorios diocesanos.....	41
8.1. Reivindicaciones interdiocesanas dentro de la misma provincia	41
8.2. Reivindicación de territorios diocesanos situados fuera de la provincia que los reclama.....	44
9. Invalidación de la creación de una sede episcopal	47

CAPITULO IV

JUICIOS SOBRE DISCIPLINA ECLESIASTICA, OBISPOS Y CLERIGOS.	49
10. Juicios sobre cuestiones de competencia episcopal.....	50
10.1. Cuestiones de competencia litúrgica	50
10.2. La competencia judicial del obispo	53
11. Juicios sobre cuestiones de comportamiento moral	54
11.1. El caso mencionado por S. Isidoro en su carta a Eladio y los demás obispos.....	54
11.2. El caso mencionado en el Concilio VIII de Toledo	56
11.3. El juicio entre los obispos Marciano y Avencio.....	56
11.4. El juicio al obispo Potamio de Braga	63
11.5. El juicio del Concilio II de Sevilla contra el liberto Eliseo	64

CAPITULO V

LA DEFENSA DEL PATRIMONIO ECLESIASTICO. EL TESTAMENTO DEL OBISPO RICIMIRO.....	67
12. La defensa del patrimonio eclesiástico.....	67
12.1. Sentencia del Concilio I de Sevilla	67
12.2. Sentencia del Concilio II de Sevilla.....	69
13. El testamento del obispo Ricimiro de Dumio	72

CAPITULO VI

LAS APELACIONES.....	75
14. Apelaciones al Concilio.....	75
14.1. Apelaciones contra la sentencia de un obispo: el caso de Fragitano de Córdoba.....	75
14.2. Apelaciones del juicio del obispo Marciano de Ecija ante los Concilios IV y VI de Toledo.....	76
15. Apelaciones o recursos a Roma.....	77
15.1. El asunto de Prisciliano.....	78
15.2. Los Concilios de la Tarraconense (s. V).....	80
15.3. Intervención de Gregorio Magno en la España bizantina.....	83

CAPITULO VII

JUICIOS SOBRE ASUNTOS POLITICOS.....	89
16. Legitimación del acceso al trono	90
16.1. Legitimación de Sisenando	90
16.2. Legitimación de Ervigio.....	93
17. Apreciación y corrección de actuaciones de reyes anteriores.....	95
17.1. Condenas morales.....	95
17.2. Apreciación y reparación de daños causados por mandatos reales	96
17.2.1. El Concilio VIII de Toledo y la validez del juramento de Chindasvinto.....	96
17.2.2. El Concilio VIII de Toledo y el <i>Decretum iudicii universalis</i> .	97
17.2.3. El Concilio XII de Toledo y la ley militar de Wamba.....	100
17.2.4. El Concilio XIII de Toledo y el indulto a los rebeldes del duque Paulo	101
17.2.5. El Concilio XV de Toledo y los juramentos prestados a Ervigio.	101
17.2.6. El Concilio XVI de Toledo y el caso de Teudemundo	103
18. Prevención y castigo de las conspiraciones	104
18.1. El juicio del obispo Sisberto.....	104
18.2. El <i>status</i> de la reina viuda.....	105
CONCLUSIONES	109

ANEXO I

CANONES CITADOS EN NOTAS	113
--------------------------------	-----

ANEXO II

ELENCHUS CANONUM	119
Agde (a. 506).....	119
Ancira (a. 314-315).....	120
Antioquía (a. 341)	121
Auvernia II (a. 549).....	123
Braga I (a. 561), Braga II (a. 572), Braga III (a. 675).....	124
Calcedonia (a. 451).....	125
Capitula Martini (a. 572).....	126
Carpentras (a. 527).....	127
Cartago I (a. 348-349).....	128
Cartago II (a. 390).....	129
Cartago III (a. 397)	131
Cartago IV (a. 398)	133
Cartago V (a. 401).....	135
Cartago VII (a. 419).....	136
Elvira (a. 300-306).....	137
Epaona (a. 517).....	138

Laodicea (a. 364?).....	139
Mérida (a. 666)	140
Mileva (aa. 402-418).....	142
Nicea (a. 325).....	143
Orange (a. 441).....	144
Orléans II (a. 538).....	145
Riez (a. 439).....	146
Sárdica (a. 347)	147
Sevilla I (a. 590).....	149
Sevilla II (a. 619).....	150
Toledo I (a. 400).....	153
Toledo III (a. 589).....	154
Toledo IV (a. 633)	156
Toledo VI (a. 638)	160
Toledo VIII (a. 653)	161
Toledo X (a. 656).....	169
Toledo XI (a. 675).....	172
Toledo XII (a. 681)	173
Toledo XIII (a. 683).....	176
Toledo XV (a. 688).....	180
Toledo XVI (a. 693).....	184
Toledo XVII (a. 694).....	185
Turín (a. 397?)	186
Vaison I (a. 442).....	187
Zaragoza I (a. 380)	188
Zaragoza III (a. 691).....	189

ANEXO III

TRADUCCION DEL JUICIO ENTRE MARCIANO Y AVENCIO	1911
--	------

ANEXO IV

CRONOLOGIA DE LOS REYES GODOS.....	197
------------------------------------	-----

ANEXO V

INDICE ONOMASTICO.....	199
------------------------	-----

ANEXO VI

INDICE TEMATICO	205
FUENTES.....	209
BIBLIOGRAFIA.....	211

PROLOGO

El tema objeto de esta Memoria es la actividad judicial de los concilios hispanos en la Antigüedad tardía. La razón de su elección responde a las consideraciones siguientes: si bien todas las sentencias estudiadas en este trabajo son, por supuesto, conocidas, han sido mencionadas en varias obras -como por ejemplo en el magnífico estudio de Orlandis y Ramos Lissón- sin embargo, los autores que las citan se limitan, o bien a exponer su contenido o a analizar alguno de sus aspectos juzgados importantes. Pero, ni se había analizado cada una exhaustivamente, para poder ofrecer una valoración completa de todas ellas, ni tampoco se habían estudiado todas ellas en su conjunto, de manera que permitiese obtener conclusiones sobre el significado de la *política* seguida por los concilios en su actividad judicial, como se ha intentado aquí.

Aunque la mayoría de las sentencias examinadas pertenecen a la España visigoda, se emplea la expresión *antigüedad tardía* para definir el ámbito temporal de este estudio; pues algunas sentencias importantes se dictaron, ya en la España todavía romana, ya fuera del ámbito geográfico del reino visigodo: la España bizantina.

Para acometer esta labor, se han utilizado todas las fuentes que ofrecen datos de interés. Pudieran ser sistematizadas, al objeto de este prólogo, en tres grupos. El primero lo constituyen, dada su importancia, los cánones de los concilios, los tomos regioes y algunas normas que se insertan junto a los primeros y que son de un tipo diferente: se trata de sentencias sobre asuntos civiles o eclesiásticos, no expuestas en cánones. Un segundo grupo lo constituyen las crónicas y los epistolarios. El tercero está formado por normas dispersas, así como obras de autores coetáneos que directamente atañen a nuestro objeto.

Conviene añadir, a propósito de los concilios que, al no estar aún completa la edición crítica de la *Hispana*, se ha utilizado la colección de Mansi, y, por supuesto, la obra de Vives.

La bibliografía tenida en cuenta como base de estudio de esta Memoria, muestra la laguna que existe precisamente sobre el objeto específico de la misma. Sin pretender la exhaustividad, conviene hacer una mención sucinta de los trabajos más importantes.

Obviamente, las Historias generales de la Iglesia proporcionan el marco histórico en el que este estudio se desenvuelve. Son de señalar aquí las contribuciones de

Gaudemet, Llorca y García Villoslada, Jedin y algunas otras, más antiguas pero también útiles: especialmente deben citarse los estudios de Duchesne, Daniel-Rops y Boulanger, si bien éste, por su actitud hagiográfica, debe ser siempre considerado con prevención. Dentro de este apartado de obras generales, hay que mencionar igualmente la extensa obra de Bousquet sobre el clero francés. Ciñéndonos a estudios que específicamente tratan de la Historia eclesiástica de España -siempre referidas al espacio temporal que nos ocupa- no pueden omitirse los varios estudios de Orlandis en primer lugar, seguidos de los de García Villoslada, Teodoro González y Magnin.

Los concilios han sido abordados en un excelente estudio de colaboración de Orlandis y Ramos-Lissón, obra de frecuente referencia en esta Memoria. Por otra parte, el propio prof. Orlandis ha abordado, en varios estudios más, cuestiones puntuales de la actividad conciliar. En este apartado, existen contribuciones muy apreciables de Martínez Díez, Michel, Hefele y Leclercq, Anton y Moreno Casado. También deben ser citados algunos estudios específicos, publicados con ocasión del XIV centenario del Concilio III de Toledo: entre ellos, destacan los de Ramos-Lissón, Díaz y Díaz, Salvador Ventura, Beltrán Torreira, Martín Hernández y el tantas veces citado Orlandis.

Se contaba con algunos estudios sobre geografía eclesiástica: además de uno antiguo de Sánchez Albornoz, han de resaltarse especialmente la obra de Mansilla Reoyo y la más antigua de Baudrillart. Por su parte, Vives ha tratado de la cuestión en la España bizantina.

El prof. Martínez Díez ha tratado en varios estudios del patrimonio eclesiástico, así como de la autoridad episcopal visigoda en sus diversas funciones. También se cuenta con un estudio de Mellado Rodríguez sobre la política judicial y fiscal de Recaredo. Es de especial importancia la obra de Justo Fernández Alonso sobre la cura pastoral. En fin, Vallejo Girves ofrece importante información sobre la España bizantina y su relación con Roma.

Los estudios sobre historia de las instituciones políticas y sociales visigodas son relativamente abundantes, y todos ellos ofrecen datos de interés sobre las cuestiones más políticas del objeto estudiado. Por no mencionar sino los más significativos, cabe citar la obra clásica de D'Abadal, junto con otras de Orlandis, García Moreno, Barbero de Aguilera y un estudio de García Gallo; así como las contribuciones de Iglesia Ferreirós, Petit, Gallego Blanco y del P. Antonio García.

No pueden dejar de citarse obras que pudieran calificarse de instrumentales, aunque su manejo sea tan útil como imprescindible: por ejemplo, la Prosopografía de García Moreno y el Léxico de los concilios de Mellado Rodríguez.

Por último, han de mencionarse algunos estudios histórico-jurídicos a los que puntualmente ha sido preciso acudir. Es el caso de las obras ya clásicas de Zeumer y de Brunner-Von Schwerin, las *Lecciones* de Torres López y del extenso estudio de García Gallo sobre la legislación y la costumbre visigodas, último sobre el tema que publicó. Además, con su proverbial concisión y su agudeza, Paulo Merêa abordó algunas cuestiones concretas del Derecho visigodo.

La Memoria que ahora se presenta consta de siete capítulos. Los dos primeros no entran directamente en el análisis de las sentencias, que constituye el objeto esencial del trabajo, pero proporcionan los datos necesarios de referencia sobre el marco histórico y jurídico en que éstas se producen. El primer capítulo distingue los concilios en cuanto al alcance de sus decisiones, a la naturaleza de los asuntos que trataron; y presenta un esquema de las sentencias que se dictaron. En él se describe el desarrollo de las sesiones conciliares y se pone de manifiesto la relación que tiene éste desarrollo con la naturaleza de la intervención conciliar. El segundo capítulo expone, agrupándola por materias, la normativa canónica vigente y aplicable en la época de la actividad judicial conciliar estudiada.

Los demás capítulos estudian esta actividad, separando en cada uno las diferentes materias objeto de intervención judicial. El tercero, referente a cuestiones de geografía eclesiástica, examina las reivindicaciones interdiocesanas de territorios, así como la creación de una sede episcopal nueva. El cuarto capítulo, que ofrece un abundante número de sentencias sobre cuestiones de disciplina eclesiástica, concierne, por una parte, al ejercicio de la competencia episcopal tanto en materia litúrgica como judicial y, por otra, al comportamiento moral de los miembros de la Iglesia, especialmente de los obispos.

En el quinto capítulo se examinan casos relacionados con la defensa del patrimonio eclesiástico, siendo el más relevante el del testamento del obispo Ricimiro de Dumio. El sexto se ocupa de las escasas intervenciones del concilio como tribunal de apelación, tanto de la decisión del obispo como de la de otro concilio; y, a continuación, trata de los recursos o apelaciones a Roma, éstas acaecidas siempre en la España sometida al Imperio de Oriente o de Occidente, y no en la visigoda.

El último capítulo, también de abundante materia, no concierne ya a juicios sobre materias puramente eclesiásticas, sino sobre asuntos de carácter político. Son casos en los que los concilios se pronuncian al nivel político más alto, como es el respaldo dado a un rey cuya legitimidad es contestable, o la apreciación y corrección de las actuaciones de algunos monarcas visigodos y, finalmente, en la lucha contra las conspiraciones.

Tras las conclusiones, y antes de las respectivas listas de fuentes y bibliografía, se han incluido cinco anexos. En el primero, mediante el tratamiento informático de base de datos, se han enumerado los diversos cánones citados por orden alfabético de concilios, con las notas en las que figuran. En el anexo II figura la reproducción de los cánones citados de cada concilio. Se ha preferido el orden alfabético al cronológico para facilitar su localización. Los concilios comprendidos en la Colección Hispana han sido reproducidos de la edición crítica de ésta. Para los demás se ha utilizado la colección de Mansi, aunque no siempre es del todo fiable.

En el anexo III, se incluye una traducción del *Exemplar iudicii inter Martianum et Aventium episcopos*. Este texto figura en el tomo XV de la *España Sagrada* de Flórez, en los *Suplementos al Concilio nacional VI*, editados por Fidel Fita, y aparece también publicado con su traducción en la *Colección de Cánones* de Tejada y Ramiro. No obstante, dada la quizá deliberada obscuridad del texto, esta traducción no siem-

pre parece del todo convincente. Por ello, se ha efectuado una nueva traducción, atendiendo sobre todo al sentido de cada pasaje. No es una traducción libre, pero sobrepasa lo meramente literal, cuyo respeto escrupuloso muchas veces priva de sentido a un determinado fragmento.

El anexo IV comprende una lista cronológica de los reyes godos, incluida como elemento de referencia. El V, un índice de nombres propios -177- citados a lo largo de la Memoria. Y finalmente, en el Anexo VI figura un índice de las instituciones jurídicas citadas en ella.

Para terminar, la autora quiere expresar su agradecimiento a las siguientes personas:

* al prof. D. José Orlandis Rovira, quien sugirió este tema de investigación, por sus observaciones, críticas y consejos que acertadamente formuló en el transcurso de la misma.

* al prof. D. César Rascón García, por su ayuda en la localización de leyes romanas citadas en los textos estudiados.

* al prof. D. Manuel Rozados Taboada, por su ayuda inestimable en la localización de obras cuya consulta revestía, en ocasiones, una evidente dificultad.

* a D. Manuel Pérez Recio, bibliotecario del Seminario Mayor Diocesano de León, por las facilidades dadas en la consulta de los fondos de esta biblioteca.

* y al director de la tesis, prof. Fernando de Arvizu. Su alto nivel de exigencia y su apoyo, además de sus conocimientos, han permitido que la autora de este trabajo pudiese cumplir todas sus fases con total regularidad a lo largo de estos años.

Página de gratitud que no por obligada, es menos sentida.

CAPITULO I

LOS CONCILIOS: CLASES Y REGIMEN INTERIOR

SUMARIO

1. Las diversas clases de concilios
2. Naturaleza esencialmente eclesiástica de estos concilios
 - 2.1. Cuestiones de Fé
 - 2.2. Cuestiones de disciplina eclesiástica
3. Carácter político de los concilios
4. Tipos de causas judiciales en las que intervinieron los concilios
 - 4.1. Causas de naturaleza eclesiástica
 - 4.2. Causas de naturaleza política
5. Régimen interno de los concilios: cuestiones de forma sobre las reuniones conciliares
 - 5.1. Periodicidad
 - 5.2. Convocatoria y lugar de celebración
 - 5.3. Asistentes
6. Desarrollo de los concilios y su significado

1. LAS DIVERSAS CLASES DE CONCILIOS

Los concilios españoles de la época que va a estudiarse deben ser divididos, por razón de su importancia, en cuanto a su alcance geográfico y, sobre todo, en cuanto a la índole de los asuntos sobre los que hubieron de pronunciarse.

Esta serie de concilios de la *antigüedad tardía* comienza en el año 306, con el de Elvira, y acaba a finales del siglo VII, al final de la época visigoda. En los comienzos del siglo VIII, como es sabido, tenemos noticia de la celebración de otros dos sínodos toledanos, cuyas actas están hoy perdidas, y a los que no se ha dado numeración.

Se celebraron un total de 40 concilios, aunque el número puede elevarse a 42, ya que existen dos dudosos¹. Treinta de ellos fueron provinciales, aunque uno de éstos fue quizá nacional, el Concilio III de Zaragoza, como se verá más adelante. Los 12 restantes fueron generales y se reunieron en Toledo.

Los concilios provinciales abordaron solamente cuestiones eclesiásticas, salvo el Concilio III de Zaragoza. Los generales o nacionales trataron de problemas eclesiásticos y políticos, siendo el primero de ellos el Concilio III de Toledo del año 589 (en adelante CTIII, o el ordinal que corresponda).

Puesto que el objeto de la presente investigación está constituido por la función judicial de los concilios de ese momento, se hace preciso ofrecer una enumeración o listado de los que tuvieron actuaciones judiciales, para distinguirlos de otros, que sólo tuvieron una función normativa. Los que más directamente nos interesan son los siguientes:

- 1) I Concilio Provincial de Zaragoza, a. 380.
- 2) Concilio Provincial de Toledo, sin numerar, a. 396.
- 3) I Concilio de Toledo, provincial, probablemente del a. 400².
- 4) I Concilio de Sevilla, a. 590.
- 5) Un hipotético Concilio de Toledo, reunido en fecha incierta, entre los años 615 y 633.
- 6) II Concilio de Sevilla, provincial, a. 619.
- 7) Otro concilio de la Bética, reunido probablemente entre los años 622 y 624³.
- 8) IV Concilio de Toledo, nacional, a. 633.
- 9) VI Concilio de Toledo, nacional, a. 638.
- 10) VIII Concilio de Toledo, nacional, a. 653.
- 11) X Concilio de Toledo, nacional, a. 656.
- 12) Un Concilio de Mérida, provincial, sobre a. 661.
- 13) Concilio de Mérida, provincial, a. 666.
- 14) XII Concilio de Toledo, nacional, a. 681.
- 15) XIII Concilio de Toledo, nacional, a. 683.
- 16) XV Concilio de Toledo, nacional, a. 688.
- 17) XVI Concilio de Toledo, nacional, a. 693.

Se conocen, por otra parte, varias cartas del Papa Gregorio I del año 603⁴, dirigidas a un defensor llamado Juan, para darle instrucciones sobre la revisión de un pro-

¹ Se supone la existencia de 2 concilios más, aunque no existe constancia de que se hayan celebrado. El primero de ellos sería un concilio de Toledo del 396, el cual habría integrado al obispo priscilianista Sinfosio. El segundo sería otro concilio de Toledo, cuya celebración se puede presumir en base a la carta que San Isidoro dirige a S. Eladio, para remitirle el juicio del obispo de Córdoba. Es la *Epistola V*, en MIGNE, «Patrología Latina», 83, París, 1850, col. 902.

G. MARTINEZ DIEZ, «Concilios nacionales y provinciales», *Diccionario de Historia Eclesiástica de España*, I, Madrid 1972, 537-577, especialmente 566-69.

² Ramos Lissón considera esta fecha como la más probable. J. ORLANDIS y D. RAMOS LISSON, «Historia de los Concilios de la España Romana y Visigoda», Pamplona 1986, 81.

³ *Ibidem*, 259. Ver también P. SEJOURNE, «Le dernier Père de l'Eglise: St. Isidore de Séville: son rôle dans l'Histoire du Droit Canonique», París 1929, 29 ss.

⁴ MONUMENTA GERMANIAE HISTORICA (=MGH), *Epistolarum* tom. II, «Gregorii I Papae Registrum Epistolarum», t. II, libri VIII-XIV, 47, 49, 50, (ed. L. HARTMANN).

ceso celebrado en la Hispania bizantina, en la que tenía que intervenir. De ello se ha supuesto la celebración de un concilio en dicha región por esas fechas, aunque no se tienen noticias de su celebración.

2. NATURALEZA ESENCIALMENTE ECLESIAÍSTICA DE ESTOS CONCILIOS

Todos estos concilios fueron asambleas eclesiásticas tanto por su composición, como se verá más adelante, como por la índole de las materias en ellos tratadas. Estas, objeto frecuente de las reuniones conciliares, pueden sistematizarse del siguiente modo:

2.1. *Cuestiones de Fé*

Para poder proclamar la Fé ortodoxa, cinco concilios de Toledo compusieron símbolos de Fé⁵. El CT XIV se reúne especialmente para acatar el Concilio III de Constantinopla, que condenó el monotelismo. El CT XV se preocupa de aclarar y demostrar la ortodoxia teológica de la Iglesia española⁶. De modo general, el *Ordo de celebrando Concilio* establece que los 3 primeros días de cada uno de ellos⁷, deben dedicarse a temas espirituales, especialmente sobre el misterio de la Santísima Trinidad.

En varios de estos concilios se recogen profesiones de Fé, no ya tanto para fijar la doctrina, sino para dejar constancia de antiguos herejes que manifiestan su conversión⁸. En esa época de peligro de herejía, a parte de fijar mejor la doctrina, se procede a la proclamación de anatemas⁹. Finalmente, en muchos concilios se adoptan medidas de protección de los católicos contra la herejía y los herejes¹⁰.

⁵ Son los siguientes: CT I, CT IV, CT VI, CT XI y CT XVI.

⁶ CT XIV: los obispos contestan a las críticas formuladas por el Papa al texto del *Apologeticum* de S. Julián de Toledo, enviado a Roma junto con la adhesión de los obispos españoles al Concilio de Constantinopla III, que condenó el monotelismo.

⁷ *Ordo de celebrando Concilio*, en ed. CH. MUNIER, «L'Ordo de celebrando Concilio wisigothique», *Revue des Sciences Religieuses*, XXXVII (1963) 250-271.

⁸ CT I: profesiones de Fé de los que abjuran del priscilianismo. CT III: profesión de Fé de los que abjuran del arrianismo. C. *Sevilla II*: profesión de Fé de un obispo sirio que abjuran del monotelismo, convencido por los argumentos de S. Isidoro. C. *Bética* (a. 622?): parece que en este sínodo, S. Isidoro convence a Sintharius, quien defendía una posición teológica no ortodoxa, y reconoce su error. «Gesta etiam sinodi, in quo Sintharius examinis vestri igne, etsi non purificatus, invenimus tamen decoctus...», en «Epistolario de S. Braulio», Epist. III, edición, crítica y traducción de L. RIESCO TERRERO, Sevilla 1975, 64. ORLANDIS-RAMOS LISSON, «Historia de los Concilios», 259.

⁹ CT I y C *Braga I*: anatematismos antipriscilianistas. CT III anatematismos antiarrianos.

¹⁰ C. *Iliberis*: establece muchos preceptos para impedir a los cristianos caer en las prácticas paganas o bajo la influencia judía. C. *Zaragoza I*: establece varias prohibiciones para evitar el contagio priscilianista. CT I: legisla en el mismo sentido. C. *Lérida*, can. 13: quiere evitar el contagio arriano. C. *Braga I*, can. 14: quiere evitar riesgos de priscilianismo entre los clérigos. CT III, can. 2: impone la recitación del Símbolo de Fé en la misa para afianzar al pueblo en la Fé católica; can. 14: quiere evitar el contagio judío. C. *Zaragoza II*: más rigorista que CT III, exige nuevo bautismo y nueva ordenación sacerdotal para los bautizados y clérigos arrianos que abjuran de la herejía. CT IV, can. 57-59: los judíos convertidos a la fuerza deben permanecer en la Fé católica; si bien se recomienda no usar de tales prácticas en lo sucesivo. CT VI, can. 3: se prohíbe vivir en el reino a los judíos no conversos; el rey promete no permitir a los conversos quebrantar la Fé católica. CT VIII: recoge varias decisiones de CT IV sobre los judíos. CT IX, can. 17: establece la vigilancia episcopal sobre los judíos conversos. CT X, can. 7: prohíbe a los eclesiásticos vender siervos cristianos a los judíos. CT XII: confirma 28 leyes sobre conversos judíos prevaricadores. CT XVI, can. 1: nuevas medidas contra los falsos conversos, prohibiéndoles comerciar con cristianos, entre otras cosas. CT XVII: endurecimiento extremo de las penas contra los judíos.

2.2. Cuestiones de disciplina eclesiástica

Junto a estas cuestiones de principios, era necesario entrar en la regulación de la vida cristiana cotidiana, cuyos problemas fueron los que ocuparon en mayor número las sesiones conciliares, las cuales consagraron muchos cánones a las cuestiones de disciplina eclesiástica.

En efecto, varios concilios trataron de cuál debía ser el comportamiento moral de los fieles¹¹. Otros muchos, del de los clérigos¹². En otras ocasiones, las asambleas se ocuparon de regular la administración sacramental, en especial del orden¹³ y del matrimonio¹⁴, así como de los ritos del viático¹⁵ y de la penitencia pública¹⁶. Incluso se encuentran cánones que regulan ciertos aspectos de la vida monástica¹⁷.

¹¹ *C. Iliberis*: insiste en la protección de la vida, en el recto uso de las relaciones sexuales y en la condena de las falsas acusaciones. *C. Narbona*: dicta normas de orden público, destinadas a su muy variada población: godos, romanos, griegos, sirios y judíos. *C. Barcelona II*: pronuncia la excomunión contra las vírgenes y penitentes que no observen la castidad. *CT VI*: persigue a los penitentes públicos prevaricadores, y recuerda a los laicos especialmente comprometidos con la Iglesia el cumplimiento de sus deberes. *CT VIII*: condena a los que se dejan llevar del vicio de la gula. *CT XII*: castiga el divorcio y persigue la pervivencia de la idolatría. *CT XVI*: persigue supervivencias idolátricas, la sodomía y condena el suicidio, que entonces se había extendido entre la sociedad.

¹² Se insiste reiteradamente en la exigencia del celibato eclesiástico para los clérigos mayores, y se adoptan medidas para su salvaguardia en los Concilios de *Iliberis*, *Tarragona*, *Gerona*, *Lérida*, *Toledo II y III*, *Sevilla I*, *Toledo del a. 597*, *Huesca*, *Egara*, *Toledo VIII y XI* y *Braga III*. A tal fin, se exigen garantías de pureza de costumbres a los candidatos a los órdenes sagradas (concilios de *Iliberis* y *Gerona*). Y para los que pueden casarse, se exige lógicamente que contraigan matrimonio lícito (*Tarragona*). Se limita o prohíbe el ejercicio del comercio a los clérigos, así como la práctica de la usura (*Iliberis* y *Tarragona*). Muchos concilios denuncian y persiguen las prácticas simoníacas (ver nota 13). Se busca naturalmente la ejemplaridad de los clérigos en su aspecto y comportamiento externos (*Barcelona*, *Narbona* y *Toledo IV*), siendo perseguidos los clérigos errabundos (*Valencia*). De esta preocupación se deriva que se quiera preservar la buena fama del clero. Así, el concilio de *Braga II* dificulta la admisión de acusaciones de fornicación contra clérigos.

También se nombran otras faltas o delitos, para castigarlos debidamente. *CT XI* se ocupa del odio y de los crímenes que engendra. Los crímenes de sangre son mencionados por el concilio de *Lérida*; las conspiraciones y conjuras por *Narbona* y *Toledo IV y VII*; la injuria a los superiores (*Narbona*) o a Dios (*CT XIII*); el abuso de castigos por parte del obispo (*Braga III*), a los que el concilio de *Tarragona* prohíbe fallar en causas criminales. Finalmente, se menciona la desesperación, castigando el concilio de *Lérida* el intento de suicidio.

¹³ Ver nota anterior sobre el celibato eclesiástico. Además, se establecen condiciones para poder recibir las órdenes: el concilio de *Iliberis* prohíbe ordenar a un antiguo hereje o a un liberto mientras viva su antiguo patrono, el *CT II*, al hablar de los que son adscritos a la clericalura desde la infancia, es testimonio de la formación recibida por dichos clérigos. *CT VIII* fija los conocimientos a exigir al candidato. Se exige que el clérigo pase cierto tiempo en el grado inferior antes de acceder al superior (*Braga I*, *Barcelona II*). Este primero, así como *CT XIII* determinan la competencia territorial del obispo para ordenar clérigos. Se persiguen las ordenaciones ilícitas (*Lérida*). También se abordan ciertas cuestiones de forma, por ejemplo, cuántos obispos pueden ordenar a otro (*Capitula Martini*, 2, 3). Sin embargo, no se tienen en cuenta los requisitos de libertad y voluntad, que se podrían juzgar necesarias para el ingreso en el estado eclesiástico: así *CT VIII*, basándose en la teoría del realismo teológico. Sobre ello, ORLANDIS-RAMOS LISSON, «Historia de los concilios», 353.

Finalmente, una de las cuestiones más preocupantes, y por ello más a menudo objeto de medidas canónicas es la simonía. De ella se ocuparon los concilios de *Barcelona II*, *CT VI y VIII*, *Braga III*.

¹⁴ Los concilios de *Iliberis* y *Toledo IV* establecen prohibiciones de matrimonio, respectivamente, a las cristianas con paganos y a las personas unidas con lazos de parentesco.

¹⁵ Regulado en el concilio de *Barcelona*.

¹⁶ *CT VI*: suaviza el rigor de sus efectos, permitiendo al joven casado seguir haciendo uso del matrimonio, pero establece medidas de castigo contra los demás prevaricadores. *CT XII*: establece que la penitencia pública surte sus efectos aún en el caso de ser administrada a quien no ha consentido en ella. *CT XIII*: precisa que la penitencia pública no impide recibir grados eclesiásticos.

¹⁷ Desde el concilio de *Lérida*, otros concilios demostraron en sus decisiones tanto el desarrollo como el favor de que gozaba la vida monacal en la España visigótica. *C Sevilla II*: después de adoptar medidas para

En varias ocasiones se manifiesta la preocupación por unificar la disciplina eclesiástica¹⁸, especialmente en materia litúrgica. Precisamente en este campo, muchos concilios legislaron sobre cuestiones de disciplina litúrgica¹⁹.

En relación con el ejercicio del poder eclesiástico, especialmente de los obispos, los concilios abordaron varios aspectos del gobierno provincial, diocesano y nacional²⁰; regularon también sus actividades judiciales²¹, y se ocuparon, asimismo, de reglamentar la reunión de los órganos de máxima autoridad: los concilios mismos. El Concilio de Toledo IV institucionalizó la reunión de los concilios generales y delimitó las respectivas competencias de los nacionales y provinciales²². Se encargó igualmente de establecer un *Ordo de celebrando concilio*, completado posteriormente²³.

el mantenimiento de los cenobios, establece el sistema de *tuitio* ejercida por los monjes sobre los monasterios femeninos. *CT IV*: reduce el poder de los obispos sobre los monasterios, y apoya el ingreso en la vida monástica hasta el punto de considerar que la *oblatio puerorum* efectuada por sus padres, les obliga de mayores aún en contra de su voluntad, aunque tal rigor fue suavizado por *CT X*.

¹⁸ Es de notar que los concilios de *Tarragona* y *Gerona* buscan la unidad disciplinar y litúrgica en la Tarraconense, en comunión incluso con decisiones de Iglesias de otros países, como también lo manifiesta el concilio de *Braga I*. *C Braga II* se ocupa de unificar la disciplina litúrgica de Gallaetia. *CT III*, con la exigencia de la recitación del símbolo de Fé en toda España, y de manera mucho más completa *CT IV*, van imponiendo la unidad disciplinar y litúrgica para toda España, especialmente en el rito del bautismo.

¹⁹ Ver los concilios citados en nota anterior, además, han de citarse en este apartado los de *Barcelona*, *Valencia*, *Narbona*, *CT X*, *Mérida*, *Zaragoza III*. Otros varios concilios se ocuparon de reprimir abusos litúrgicos: *C Sevilla II*, *Braga III*, *CT XVI*; *CT XVIII* nos da a conocer una práctica tan sorprendente como escandalosa: la de celebrar misas de difuntos por personas vivas. Este último concilio trata también de otros asuntos litúrgicos, como la instauración de letanías penitenciales, como lo habían hecho también *CT V* y *VI*.

²⁰ Los concilios de *Lérida* y luego el de *Mérida* determinan en qué consiste el control episcopal sobre los monasterios. Este último, así como *CT XIII* recuerdan a los obispos sufragáneos su deber de comparecencia cuando son llamados por el metropolitano. *CT IV* encarga a los obispos la misión de vigilar a los potentes en defensa del pueblo. Otros concilios, *Braga III*, *CT XI* y *XVII*, persiguen en cambio a los obispos que ejercieran abusivamente su poder a la hora de juzgar o castigar. *CT II* consagra la primacía de la sede toledana y trata también de la provisión de las sedes episcopales, prohibiendo, entre otras cosas, la existencia de dos obispos en una misma ciudad. Se recuerda a menudo a los obispos que deben ejercer su autoridad en sus diócesis, y no interferir en las demás (*CT II*, *Braga I*, *Capitula Martini*) y mucho menos, invadir una parroquia que no les pertenece (*Braga II*).

²¹ *CT IV* amplía la competencia judicial del concilio provincial, mientras que los de *Sevilla II* -éste con ocasión de un caso particular- y *CT XI* limitan la competencia judicial del obispo, persiguiendo éste último a los que dictan sentencias injustas. *CT XIII* determina las distintas instancias a las que puede acudir un clérigo o monje en litigio contra su obispo.

²² ORLANDIS-RAMOS LISSON, «Historia de los Concilios», 169 s.

²³ El canon 4 de *CT IV* constituye la base del *Ordo de celebrando concilio*, recogido en los códices Albeldense y Emilianense -OCW- aplicable a los concilios generales. Una versión breve de este *Ordo*, la de las falsas Decretales -OCF-, conviene a los concilios provinciales. Ver ORLANDIS-RAMOS LISSON, «Historia de los Concilios», 171, y la publicación del *Ordo*, por Ch. MUNIER, citada en nota 7.

CT XI recuerda las normas de disciplina eclesiástica que deben ser observadas en el aula conciliar. *CT XVI* ordena una minuciosa publicidad de las decisiones de los concilios en cada provincia. *CT XVII* determina los temas a tratar en las primeras sesiones, dedicadas a cuestiones teológicas.

Sobre la estructura de los concilios generales, ver J. ORLANDIS, «El Cristianismo y la Iglesia en la España visigoda», en R. MENENDEZ PIDAL (dir.), «Historia de España», III.1, Madrid 1991, 480.

También fueron objeto de numerosas normas las cuestiones relativas al patrimonio eclesiástico²⁴, así como a la geografía eclesiástica²⁵.

3. CARÁCTER POLÍTICO DE LOS CONCILIOS

Pese a ser asambleas esencialmente eclesiásticas, muchos concilios de este período intervinieron en asuntos políticos. Por este hecho, y por el de ser, casi siempre o siempre, concilios nacionales, se convierten en las asambleas más importantes y por ende, más conocidas que las demás. En realidad, fueron motivos políticos las verdaderas causas de su celebración.

3.1. Así ocurre a partir del concilio de Toledo III. Si en apariencia la causa de su reunión es esencial y exclusivamente religiosa, la conversión del rey y de todo el reino al catolicismo es un hecho de tal envergadura que tiene una incidencia política capital. En efecto, desaparecido el más importante factor de desunión política, que era la dualidad de religiones -católica y arriana- se pudo alcanzar, por fin, una unidad política que Leovigildo había intentado en vano años atrás bajo el credo arriano.

Religión y política aparecen en esta época -por supuesto que no sólo en ésta- como algo casi inseparable. Pero desde Recaredo, la unidad política basada en la unidad religiosa necesita de unas estrechas relaciones entre la Iglesia y la monarquía. Y justamente la primera manifestación de ellas es este primer concilio nacional visigodo.

²⁴ Los concilios se muestran preocupados por la conservación del patrimonio eclesiástico. Algunos dictan medidas para impedir la desaparición de bienes a la muerte del obispo (*Tarragona, Lérida, Valencia, CT IX*), o la confusión del patrimonio personal de los clérigos con el de la Iglesia (*CT IX*). Con la misma intención se regula también la manumisión de los siervos de la Iglesia (*CT III, IV, VI y IX*) y las liberalidades a cargo de bienes de la Iglesia (*CT IX*). Se establece la precaución de tener la propiedad de bienes eclesiásticos suficientemente documentada, al objeto de evitar reclamaciones injustas posteriores (*Braga II, CT VI*); también se exigen ciertos requisitos de índole económica a la hora de consagrar una Iglesia, al objeto de que esté suficientemente dotada (*Braga II*). En varias ocasiones se explicita que la administración del patrimonio eclesiástico pertenece al obispo, precisamente para evitar las pretensiones de los fundadores de iglesias propias (*Concilios de Lérida, CT III y IV*), cf. ORLANDIS-RAMOS LISSON, «Historia de los Concilios», 128 s. Por el contrario, *CT IX* hubo de confirmar los legítimos derechos de tales fundadores. Finalmente, otros varios tratan del reparto de bienes de la Iglesia y del uso que debe hacerse de ellos, insistiendo a menudo en la necesidad de la reparación de los templos (*Tarragona, Braga I, Toledo a. 597, CT IX y XVI*) y teniendo, a veces, que perseguir abusos episcopales en las cargas exigidas a las iglesias (*CT VII*).

²⁵ El concilio de *Toledo del a. 610* confirma a Toledo como sede metropolitana de toda la provincia Cartaginense del reino visigodo, corrigiendo un error sin fundamento, producido a la dominación bizantina de la parte sud-oriental de la Cartaginense. En efecto, hasta entonces se consideraba a Toledo como metrópoli de la sola Carpetania, que no es sino una parte de la cartaginense. ORLANDIS-RAMOS LISSON, «Historia de los Concilios», 247-252.

CT IV, can. 34, establece la prescripción de los 30 años para la adquisición de una iglesia por un obispo de la misma provincia. A propósito de la prescripción trinenal que invoca la Iglesia, debe mencionarse que una ley de Wamba (*LV IV,5,6*) prohíbe invocarla a quienes se hubieran apropiado de bienes de la Iglesia, especialmente, los obispos: «...definimus: abrogata ergo deinceps totius cupiditatis licentia, nulli pontificum ultra licebit, aut quicumque ab ecclesiis diocesis sui auferre, aut abstultum quodcumque per obpositionem tricennii vindicare. Non enim in hac causa deinceps tricennale tempus accipiendum est; sed quodcumque fuerit veritatis origo monstrata, iustitiam partis sue recipiat... Quicumque ergo episcoporum hec, que premissa sunt, in preteritis fecit et tricennium iam in hac perversa possessione implebit, ea ipsa, que in preteritis per XXX annos tenuit, Deo potius iudicanda relinquimus, quam nostro rescindenda iudicio definimus».

CT XII prohíbe la creación de nuevas diócesis.

Recaredo aparece como el autor de la conversión de su pueblo, e interviene en el concilio a la manera de los emperadores de Oriente²⁶, teniendo la iniciativa de esa reunión²⁷, y dando en el tomo regio instrucciones a los obispos sobre cuál habría de ser su papel en la difusión y en el mantenimiento de la Fé²⁸.

3.2. Es interesante resaltar, en cuanto a la interdependencia Iglesia-Monarquía, la intervención real en el nombramiento de los obispos²⁹. Esa mutua cooperación se manifiesta en muchos concilios que tratan de la autoridad que adquieren los obispos sobre los miembros de la administración, por ejemplo, en materia fiscal³⁰ o para vigilar a los *iudices* y *potentes*³¹; y según esa misma línea, el concilio provincial se convierte en instancia a la que pueden recurrir los agraviados por los obispos, *iudices* o funcionarios públicos y *potentes*. Al mismo tiempo, el concilio dispone de un brazo secular que le ayuda en su tarea de persecución³² de los inculpados. El concilio de Toledo IV menciona asimismo que, con frecuencia, los obispos eran nombrados jueces por los reyes en causas de lesa majestad³³.

3.3. A parte de esa misión de ayuda más o menos puntual, confiada a los obispos o al concilio, la Iglesia dictó, esencialmente en los concilios nacionales, normas numerosas y variadas en asuntos públicos. Muchas veces tuvo que intervenir para intentar mantener la seguridad del Estado, tomando diversas medidas contra en mal de aquellos tiempos: las conspiraciones contra la familia real³⁴. A la inversa, se interesó tam-

²⁶ *CT III*, alocución de Recaredo reproducida al principio de las actas: «Sicut enim divino nutu nostrae curae fuit hos populos ad unitatem Christi ecclesiae pertrahere, ita sit vestrae docibilitatis, catholicis eos dogmatibus instruere, quo in toto cognitione veritatis instructi noverint ex solido errorem haeresis perniciosae respere...».

Sobre el carácter mixto de los concilios generales, ver ORLANDIS, «El Cristianismo y la Iglesia...», 463 s. E.A. THOMPSON, «Los godos en España», Madrid 1971, 114.

²⁷ *Chronicon Johannis Biclarenensis*, 343-348: «Recaredus Rex... sancto intererat concilio, renovans temporibus nostris antiquum principem Constantinum Magnum, sanctam Synodum Nicaenam sua illustrasse praesentia, nec non et Marcianum, Christianissimum imperatorem, cuius instantia Chalcedoniensis Synodi decreta firmata sunt;...». En J. CAMPOS, Sch. P. (ed.), «Juan de Biclario, obispo de Gerona. Su vida y su obra», Madrid 1960.

²⁸ Ver texto de la nota 26.

²⁹ Por el concilio de *Barcelona* sabemos que a fines del siglo VI se practica en la provincia Tarraconense el nombramiento de obispos por designación regia.

CT XII confirma, con ocasión de la institución del primado Toledano, que tiene en adelante la función de formular el *iudicium episcopale* sobre los candidatos recogidos por el rey. *CT XII*, can. 6: «... licitum maneat deinceps Toletano pontifici quousquumque regalis potestas elegerit et iamdicti Toletani episcopi iudicium dignos esse probaverit, in quibuslibet provinciis in praecedentium sedium praeficere praesules et desidentibus episcopis eligere successores».

³⁰ Así en *CT III*. La *Epistola de Fisco Barcinonensi*, que sigue al concilio de Zaragoza II en el Códice Emilianense es un documento que, a pesar de ser único, muestra cómo en la práctica sí ejercieron los obispos su facultad de intervención en la fijación de las cuotas fiscales. Verla en la edición de J. VIVES, «Concilios visigóticos e hispano-romanos», Barcelona-Madrid 1960, 54. Sobre esta función inspectora, ver G. MARTÍNEZ DIEZ, «Funciones de inspección y vigilancia del Episcopado sobre las autoridades seculares en el período visigodo-católico», *Revista española de Derecho Canónico*, 15, 1966, 579-589, especialmente 584. THOMPSON, «Los godos en España», 118 s.

³¹ *CT IV*, can. 32, encarga a los obispos individualmente la defensa del pueblo contra los abusos de funcionarios y *potentes*.

³² *CT IV*, can. 3.

³³ *CT IV*, can. 31.

³⁴ *CT IV*, can. 75, presenta como un deber sagrado guardar el juramento de fidelidad prestado al rey, llamado «ungido del Señor», y no mezclarse, por consiguiente, en conspiraciones. Los concilios de *Toledo V*,

biém en la protección de los súbditos contra los abusos del poder, estableciendo garantías procesales³⁵.

3.4. En este clima político, que no cesó a lo largo de todo el período de la monarquía visigoda, de agitación, inseguridad y miedo, la intervención más destacada de los concilios fue la de fijar la «constitución» del reino³⁶: se ocuparon de fortalecer el poder del rey³⁷, de fijar el sistema sucesorio, eligiendo o más bien sancionando en un primer momento el sistema electivo³⁸, y admitiendo más tarde la legitimidad del rey designado por su antecesor³⁹, estableciendo las condiciones que debía reunir el candidato al trono⁴⁰, regulando el uso del poder real en cuanto a la apropiación de bienes por el rey, y distinguiendo entre el patrimonio privado de éste y el de la Corona⁴¹.

VI y XIII, además de confirmar lo dispuesto en el IV concilio, amplían las medidas de protección a la familia y los bienes del rey. CT VII sanciona unas leyes de Chindasvinto, persiguiendo a los laicos y, especialmente, a los clérigos conspiradores. Por su parte, CT XVI adopta igualmente medidas preventivas contra las conspiraciones, estableciendo que todo el pueblo preste juramento de fidelidad al rey ante unos *discussores iuramenti*, que recorrerían a tal efecto el reino. Además, prohíbe que se presten juramentos, salvo al rey o en los tribunales. CT XVII adopta, dentro de su conocida exacerbación de la política antijudaica, medidas rigurosísimas contra los judíos conspiradores.

³⁵ CT IV, can. 75 establece que ningún rey podrá juzgar como juez único en causas civiles, o en las penales que puedan llevar aparejada pena capital: «...ne quisquam vestrum in causis capitum at rerum sententiam ferat, sed consensu publico cum rectoribus, ex iudicio manifesto delinquentium culpa patescat...». El can. 6 prescribe que los *fideles regis* del rey muerto no deben ser perseguidos durante el reinado de su sucesor, y el can. 8 reconoce al rey el poder de indultar a los delincuentes.

CT VI, can. 11 trata de evitar las acusaciones abusivas, exigiendo ciertos requisitos a quienes se presenten como acusadores en un proceso. El can. 14 reproduce la decisión de CT IV, can. 6.

La legislación civil del Código Teodosiano obligaba al acusador a formalizar su acción antes del año de haber formulado la acusación mediante la *inscriptio* (C. Th (BA) IX,26,1). Por otra parte, una *antiqua* del Liber (LV, VII,1,5) contempla la principal garantía de que dispone el acusado para precaverse de acusaciones falsas: la condena al falso acusador a la misma pena que hubiese correspondido al acusado, de haber sido hallado culpable: «Si vero innocens adprobatur <el acusado>, de iudicio securus abscondat. Ille vero, qui accusabit, et penam et damnum suscipiat, quod debuit percipi accusatus, si de crimine fuisset convictus».

CT XII, can. 7 ordena que se devuelvan con retroactividad los derechos procesales a quienes los habían perdido por la aplicación de la ley militar de Wamba.

Unas disposiciones análogas, aunque no retroactivas, son adoptadas por CT XIII, can. 1, en favor de los que habían participado en la rebelión del duque Paulo contra Wamba, aplicables incluso a los rebeldes desde el tiempo de Chintila. En su can. 2, conocido como el *Habeas corpus* visigodo, se fijan una serie de garantías procesales destinadas sobre todo a los palatinos y eclesiásticos, especialmente el privilegio de ser juzgados por una asamblea de iguales. ORLANDIS-RAMOS LISSON, «Historia de los Concilios», 428.

³⁶ CT IV, can. 75. E. GALLEGU-BLANCO, «Los concilios de Toledo y la sucesión al trono visigodo», AHDE 44, 1974, 723-739, p. 726 s.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ *Ibidem*. CT V, can. 7 recoge las disposiciones de CT IV. CT VIII, can. 10 recoge igualmente las disposiciones de sínodos anteriores, y precisa el lugar donde había de celebrarse la elección del nuevo rey.

³⁹ CT XII, can. 1. Una de las pruebas de la legitimidad de Ervigio es un documento firmado por Wamba donde urgía al obispo de Toledo para que ungiera a aquél como rey: «...aliam quoque informationem iam dicti viri in nomine honorabilis et sanctissimi fratris nostri Juliani, Toletanae sedis episcopi, ubi sub domine diligentiae ordine, iam dictum dominum nostrum Herbigium in regno unguere deferet, et sub omni diligentia unctiois ipsius celebritas fieret».

⁴⁰ CT V, can. 3 y CT VI, can 17 establecen las condiciones exigidas al candidato al trono. CT XIII, can. 5 y C. Zaragoza III, can. 5, usando de más rigor, imponen a la reina viuda un comportamiento ejemplar, digno de su calidad. Aunque en ésta estriba aparentemente la razón para prohibirle las segundas nupcias, posiblemente se trata de un pretexto que oculta el verdadero motivo: evitar que el matrimonio con la reina viuda sea un medio de alcanzar el trono, como había ocurrido en casos anteriores, y suprimir una fuente de intrigas o una amenaza. Sobre ello, ver J. ORLANDIS, «La reina en la monarquía visigoda», AHDE 17-18, 109-135, p. 125.

⁴¹ CT VIII: *Decretum iudicii universalis*.

Los padres conciliares recibieron también el encargo de intervenir a nivel legislativo para revisar, antes de su promulgación, el conjunto de leyes reales de Recesvinto, reformado por Ervigio, que recibió el nombre de *Liber Iudiciorum*⁴².

4. TIPOS DE CAUSAS JUDICIALES EN LAS QUE INTERVINIERON LOS CONCILIOS

Lo hasta ahora expuesto se refiere a la actividad normativa de los concilios. Veamos ahora qué clases de materias y problemas examinaron y resolvieron en su actividad judicial. Y tanto en ésta como en su actividad normativa, los concilios trataron tanto de cuestiones eclesiásticas como políticas.

4.1. *Causas de naturaleza eclesiástica*

Las causas examinadas fueron de muy diversa naturaleza. Así, en materia de Fé hubo juicios contra herejes⁴³; en cuestiones de moral se juzgó a varios obispos⁴⁴. Hubo que resolver también varios problemas relativos al patrimonio de las iglesias⁴⁵ y a la geografía eclesiástica⁴⁶. Se examinaron cuestiones de competencia litúrgica del clero⁴⁷ y de competencia judicial de los obispos⁴⁸.

⁴² *CT VIII*, tomo regio. *CT XII*, tomo regio.

⁴³ Existen dudas sobre si el concilio de *Zaragoza I* (a. 380) condenó nominalmente a varios priscilianistas, entre ellos al propio Prisciliano. ORLANDIS-RAMOS LISSON, «Historia de los Concilios», 70-72.

Asimismo se ha pensado que existió un concilio reunido en *Toledo* el año 396, el cual pudo haber examinado una primera vez el caso de los clérigos juzgados por *CT I*. MARTINEZ DIEZ, «Concilios nacionales y provinciales», 566.

CT I depone a varios clérigos que no quieren retractarse del priscilianismo, y mantiene a los que abjuraron de él.

⁴⁴ Quizá se celebró un concilio en *Toledo* entre el 615 y 633, que habría juzgado a un obispo de Córdoba. Se deduce de una carta de S. Isidoro a Eladio, metropolitano de Toledo. MARTINEZ DIEZ, «Concilios nacionales y provinciales», 568.

C. Bética, celebrado entre 622-624: depone al obispo Marciano de Ecija, acusado por otro obispo que ambicionaba su sede. J. ORLANDIS, «Tras la huella de un concilio isidoriano de Sevilla», *Anuario de Historia de la Iglesia*, 1995, 237-246.

CT IV: revisa este proceso y devuelve la dignidad episcopal a Marciano, sin reponerlo en su sede.

CT VI: revisa nuevamente el proceso y restablece a Marciano en su sede de Ecija.

CT X, anexo: caso del obispo Potamio de Braga, que había cometido pecado carnal, sobre quien se resuelve que consagre toda su vida a la penitencia, nombrando como substituto a S. Fructuoso.

⁴⁵ *C. Sevilla I*, can. 1: anula la manumisión de siervos de la Iglesia por el obispo anterior.

C. Sevilla II, can. 3: se devuelve a su iglesia a un clérigo que la había abandonado, aplicando en este caso la legislación bajoimperial, y considerando que así como los colonos están adscritos al fundo, los clérigos lo están a su iglesia.

CT X, anexo: anula parcialmente el testamento de Ricimiro de Dumio, por perjudicar al patrimonio de su Iglesia con sus prodigalidades en favor de los pobres.

⁴⁶ *C. Sevilla II*, can. 1: devuelve a la sede de Málaga territorios de esta diócesis, pasados a Elvira, Ecija y Cabra a causa de la ocupación bizantina. Can. 2: se dispone una pesquisa en relación con la disputa sobre la pertenencia de una basílica entre los obispos de Ecija y Córdoba.

C. Mérida (antes de a. 661): devuelve a la provincia Lusitana sus antiguos límites, modificados tiempo atrás por la anexión sueva. L.A. GARCIA MORENO, «Prosopografía del reino visigodo de Toledo», Salamanca 1974, n° 440.

C. Mérida (a. 666), can. 8: admite la reclamación por el obispo de Idanha de unos territorios en ese momento bajo jurisdicción del de Salamanca.

CT XII: supresión del obispado de Aquis, irregularmente creado por Wamba.

⁴⁷ *C. Sevilla II*, can. 4: deposición de diáconos ilícitamente ordenados. Can. 5: depone a un presbítero y dos diáconos más por la misma razón. Can. 7: disculpa a un obispo que había delegado irregularmente la realización de ciertos actos litúrgicos.

CT XIII, can. 10: contesta a la pregunta de un obispo sobre si seguía conservando la posibilidad de ejercer sus funciones después de recibir la penitencia pública.

⁴⁸ *C. Sevilla II*, can. 6: anula por injusta la sentencia de un obispo que había depuesto a un presbítero, señalando que tal decisión no era competencia del obispo.

Finalmente, es preciso registrar que los concilios actuaron varias veces como tribunal de apelación⁴⁹.

4.2. *Causas de naturaleza política*

Varios concilios nacionales tuvieron que pronunciarse en causas de esta índole. No deja de ser curioso y revelador constatar -como resulta de la relación de causas examinadas- que, en el fondo, casi todas ellas están relacionadas de una u otra manera con el problema endémico de las conspiraciones y de la lucha entre facciones de los clanes que se disputan el poder.

En dos ocasiones, los concilios tuvieron que intervenir -en un primer momento- para sancionar una deposición de un rey⁵⁰, para poder proclamar luego la legitimidad del sucesor⁵¹.

Otras veces tuvieron que condenar la actuación de ciertos reyes -siempre reyes que ya habían dejado de reinar-⁵², concediendo a veces amnistías a condenados por un rey anterior⁵³.

No dejó de producirse, la intervención, igualmente *a posteriori* sobre la validez de juramentos⁵⁴ prestados a algunos reyes.

Por último, ocasionalmente juzgaron ellos mismos a conspiradores⁵⁵.

⁴⁹ *C. Sevilla II*, can. 6: el concilio interviene en apelación contra la sentencia de un obispo.

CT IV: sobre el problema del obispo Marciano de Ecija, se declara que el concilio es tribunal de apelación contra la sentencia de un concilio anterior: el concilio de la Bética (a. 622-624).

CT VI: continúa lo empezado por *CT IV* y vuelve a intervenir como tribunal de apelación en la misma causa.

⁵⁰ *CT IV*, can. 75: aunque el concilio no depone formalmente a Suínthila, de hecho el resultado viene a ser el mismo, puesto que se le presenta como indigno de reinar. Se declara la legitimidad de Sisenando.

CT XII, can. 1: algo parecido ocurre con Wamba -aunque aquí no se habla de deposición- pero se le considera incapaz de reinar por haber recibido la penitencia pública. Se declara la legitimidad de Ervigio.

Ambos casos se verán con detalle más adelante.

⁵¹ Ver la nota anterior.

⁵² *CT IV*, can. 75: pronuncia una severa condena moral contra Suínthila, al que exconmulga junto con su familia.

CT VIII: la primera parte del *Decretum Iudicii universalis* supone la condena moral de Chindasvinto, por su crueldad y su codicia durante su reinado: «... aut in culpis lex ardua saeviebat, aut in spoliis favorem lex voluntaria comodabat». En la segunda parte se propone una solución de reparación.

CT XII, can. 4: critica la ligereza de Wamba creando la diócesis de Aquis, que queda suprimida: «... praedictum principem consilio levitatis agentem...».

⁵³ *CT VIII*, can. 2: permite el indulto de los que habían sido condenados por Chindasvinto a no poder ser nunca perdonados ni mitigadas sus penas.

CT XII, can. 7: concede la amnistía a quienes habían caído en infamia por aplicación de la ley militar de Wamba.

CT XIII, can. 1: sanciona el indulto pedido por Ervigio para los que participaron en la rebelión del duque Paulo contra Wamba, e incluso a anteriores rebeldes.

⁵⁴ *CT VIII*, can. 2: considera sin efecto el juramento prestado a Chindasvinto por sus súbditos, de no perdonar nunca a los enemigos de la patria.

CT XII, can. 1: desliga a los súbditos del juramento de fidelidad prestado a Wamba.

CT XV: se pronuncia sobre la validez del juramento prestado por Egica a Ervigio de apoyar y proteger a los hijos de éste.

⁵⁵ *C. Bética* (a. 622-624): condena al obispo Marciano de Ecija, quien era acusado, entre otras cosas, de conspirar contra el príncipe.

CT XVI: condena al primado Sisberto, que había conspirado para asesinar a Egica y a varios de su entorno.

5. RÉGIMEN INTERNO DE LOS CONCILIOS

Si bien la esencia del concilio -considerado como arquetipo- no cambia, lo cierto es que su régimen interno varía según las épocas y el tipo de concilio de que se trate. El examen de esta cuestión se efectuará tratando en primer lugar del aspecto formal de estas reuniones, para abordar seguidamente el desarrollo mismo del concilio y su significado.

Cuestiones de forma sobre las reuniones conciliares

5.1. *Periodicidad*

Las directrices del Concilio de Nicea, y mucho más tarde una decretal del papa Hormidas, del año 517, determinan que el concilio provincial debe reunirse dos veces al año. Pero en Hispania nunca se respetó esta legislación.

En efecto, antes del Concilio III de Toledo, que establece la periodicidad anual del concilio provincial en la fecha del 1 de noviembre, se reunieron 11 ó 12 concilios provinciales a partir del año 306.

El Concilio IV de Toledo estableció que, en vez de concilios provinciales, podía celebrarse un concilio nacional según la naturaleza de los asuntos a tratar⁵⁶. El Concilio XI de Toledo no indica fecha, pero el XII vuelve a la del 1 de noviembre. Pero lo cierto es que, entre los años comprendidos entre el 589 y el 711, se reunieron menos de 30 concilios⁵⁷.

5.2. *Convocatoria y lugar de celebración*

Para la convocatoria de un concilio general, se imita el procedimiento seguido en Oriente, donde es el emperador quien convoca. En la Hispania visigoda, el concilio es convocado por el rey mediante una *iussio*⁵⁸. El concilio provincial es convocado por el

⁵⁶ CT IV, can. 3: «si fidei causa est, aut quaelibet alia ecclesiae communis, generalis totius Spaniae et Galliae synodus convocetur».

⁵⁷ Después de que el CT III fijase como fecha de reunión de los concilios el 1 de noviembre, se sabe que respetaron esa fecha: *Narbona*, reunido el 1 noviembre 589; quizá el de *Sevilla I*, reunido en otoño del 590; *Zaragoza II*, de 1 noviembre 592 y *Barcelona II*, de 1 noviembre 599.

En cambio, el de *Toledo* del a. 597 se reúne el 17 de mayo; *Huesca* en abril o mayo del 598; *Egara*, 18 enero 614; CT IV, 5 diciembre 633.

Después de que éste último cambiase la fecha de reunión al 18 de mayo, ninguno de los celebrados respetó esa fecha: CT V, junio 636; CT VI, 9 enero 638; CT VII, 18 octubre 646; CT VIII, 16 diciembre 653; CT IX, 24 noviembre 655; CT X, 1 diciembre 656, *Mérida*, 6 noviembre 666; CT XI 7 noviembre 675, CT XII, 9 enero 681. Después de que éste último volviese a indicar como fecha de reunión el 1 de noviembre, solamente la respetó *Zaragoza III*, reunido el 1 noviembre 691. CT XIII, 4 noviembre 683; CT XIV, 14 noviembre 684; CT XVII, 9 noviembre 694.

CT XV se reunió el 11 de mayo del 688 y CT XVI el 2 de mayo del 693.

ORLANDIS, «El Cristianismo y la Iglesia...», 479 s.

⁵⁸ J. ORLANDIS, «La problemática conciliar en el reino visigodo de Toledo», *AHDE* 48, 1978, 277-306, p. 295. ID., «Iglesia, concilios y episcopado en la doctrina conciliar visigoda», en la obra colectiva *El Colegio Episcopal*, I, Madrid 1964, 305-331, p. 322.

metropolitano con autorización del rey⁵⁹, e incluso a veces llega a ser convocado por éste⁶⁰.

La mayoría de los concilios indican que se celebraron en un templo, cosa bastante lógica; pero algunos simplemente mencionan la ciudad de celebración⁶¹, sin añadir más precisiones en cuanto al lugar exacto.

5.3. *Asistentes*

En cuanto a quienes participaron en los concilios⁶², hay que mencionar en primer lugar a los obispos de la provincia que convoca el concilio, quienes indefectiblemente asisten. Además, suelen asistir, en persona o por representantes, obispos de otras provincias. Naturalmente, en los concilios generales asisten los obispos de todas las provincias eclesiásticas del reino.

Cuando el obispo no asiste en persona, pero envía a un representante, el Concilio de Mérida del 666 indica que debe ser al menos arcipreste o presbítero, nunca un diácono. Sin embargo, en la mayoría de los concilios se encuentran diáconos que asisten en representación de sus obispos.

Además de éstos, asisten también presbíteros y diáconos, e incluso laicos, sin otro título -aunque del todo suficiente- de haber sido invitados por los padres conciliares.

Respecto de éstos, el Concilio de Toledo XVII les excluye de los tres primeros días de reunión, dedicados a temas eclesiásticos.

Además de los laicos invitados singularmente, el Concilio de Toledo III prescribe que han de asistir al concilio provincial los altos funcionarios civiles, con el objeto de que aprendiesen a ejercer su misión lo mejor posible, y fijen, de acuerdo con los obispos, la cuantía de las cargas fiscales exigidas a la población.

Además asistieron los miembros del oficio palatino, designados por el rey, para conocer las decisiones conciliares o incluso para participar en ellas, puesto que a menudo conciernen a asuntos temporales de capital importancia. Obviamente, estos magna-

⁵⁹ ID., «Iglesia, concilios y episcopado», 324.

⁶⁰ Así, Cc. *Mérida* (a. 666), *Braga III*, *CT XI*.

⁶¹ La mayoría dicen haberse celebrado en una iglesia: Cc. *Elvira*, *Zaragoza* -éste precisa que en la sacristía- *CTI*, *Braga I, II*, *Sevilla I* -en la Iglesia de la Santa Jerusalén-; *Barcelona I* (iglesia de la Santa Cruz); *Sevilla II* (sacristía de la iglesia de la Sacrosanta Jerusalén); *CT IV, V, VI* (basílica de Santa Leocadia); *CT VIII* (basílica de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo); *CT IX, X* (basílica de Santa María); *Mérida* a. 666 (iglesia de la Santa Jerusalén); *CT XI* (templo de la Virgen María); *CT XII* (basílica de los Santos Apóstoles); *CT XIII* (basílica de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo); *CT XIV* (iglesia de Santa María), *CT XV, XVI* (basílica prestoriense de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo); *CT XVII* (basílica de Santa Leocadia).

El concilio de *Lérida* se celebró en el convento ilderdense.

Otros concilios mencionan solamente la ciudad: *Tarragona*, *CT II*, *Barcelona I*, *Valencia*, *CT III*, *Narbona*, *Zaragoza II*, *Toledo a. 597*, *CT VII*, *Braga III*, *Zaragoza III*.

⁶² ORLANDIS, «La problemática conciliar», 289-294.

tes aparecen casi exclusivamente en los concilios nacionales. E incluso, a partir del Concilio de Toledo VIII, suelen firmar también las actas.

Por primera vez, en ese mismo concilio aparecen firmando sus actas un grupo de abades, en calidad de tales y no como vicarios episcopales⁶³.

6. Desarrollo de los concilios y su significado

Como ya se ha mostrado con detalle en el apartado 2 de este mismo capítulo, los concilios son asambleas eclesiásticas que se reúnen con el fin de fijar la doctrina y de legislar sobre el comportamiento a seguir por los cristianos.

Por ello, los lugares privilegiados del aula conciliar son para los obispos y, en un segundo término, para el resto del clero. El Concilio de Toledo IV, en su canon 4, precisa que los primeros en entrar sean los obispos y se sienten en lugar preferente. A continuación, y siguiendo el orden jerárquico, los presbíteros, los diáconos -que deben quedar en pie⁶⁴- y luego algunos invitados laicos.

Por ello también, en los concilios generales -que es cuando el caso se plantea- entra el rey -que es quien ha convocado la asamblea- acompañado de los magnates y una vez abierta la sesión. No es él quien la abre, sino que viene a pedir al concilio que se pronuncie sobre tal o cuál asunto.

Por tal razón, igualmente, se tratan en primer lugar -salvo en el caso del Concilio de Toledo VII- los asuntos eclesiásticos durante las tres primeras jornadas, sin la presencia del rey ni de los magnates. En tales días se discuten cuestiones de Fé o de disciplina eclesiástica; y parece que, al acabar éstas sesiones, es también el momento de los juicios eclesiásticos presentados por personas ajenas al concilio⁶⁵. Las actas conciliares que reproducen sentencias, no suelen aclarar en qué momento de la reunión tuvo lugar el juicio. Sí se sabe que el proceso del primado Sisberto por el Concilio de Toledo XVI tuvo lugar antes de la apertura de las sesiones, quizá porque se trataba de un obispo, y además primado; y en todo caso, probablemente, para que hubiese sido ya depuesto y substituido en la sede toledana a la hora de comenzar las sesiones propiamente dichas⁶⁶.

Estas asambleas, aunque de naturaleza eclesiástica, tuvieron un fuerte cariz político: se ha visto puntualmente a propósito de su convocatoria, así como de los numerosos asuntos temporales y políticos que examinaron los concilios nacionales. Pero, además, es importante subrayar que éstos, si se ocuparon siempre de problemas reli-

⁶³ *Ibidem*, 291

⁶⁴ Quizá la presencia de personas de pie, durante toda la asamblea, es una de las razones de la indisciplina y falta de compostura que era habitual en las aulas conciliares, a las que alude *CT XI*, can. 1. En efecto, resulta imposible estar quieto y prestar atención permaneciendo tantas horas y días de pie. El hecho de estar de pie mientras los demás están sentados, les haría quizá sentirse algo desvinculados de ellos, «prorrumpiendo en gritos inoportunos, entreteniéndose en vanas conversaciones y risas», como refiere este mismo canon.

⁶⁵ OCW-OCF, 15.

⁶⁶ Ver cap. VII, epígrafe 18.1.

giosos, igualmente fueron siempre reunidos porque así lo aconsejaban -y aún mandaban- las circunstancias políticas.

En efecto, el Concilio de Toledo III se reunió para recibir la conversión de Recaredo al catolicismo; el Concilio IV para legitimar la ascensión al trono de Sisenando y fijar la constitución del reino; el Concilio V para manifestar su apoyo al rey. Por esta misma razón fueron convocados los Concilios de Toledo VI y VII; el Concilio VIII lo fue para tomar medidas en pro de la pacificación del reino.

El Concilio X fue el menos politizado de todos, ya que en sus actas sólo figura un canon sobre la fidelidad debida a los juramentos prestados en favor del rey. El Concilio XII se reúne para proclamar la legitimidad de Ervigio; en el Concilio XIII, Ervigio intenta conseguir apoyos por medio de las amnistías cuya aprobación pide; en el Concilio XV, Egica solicita la anulación del juramento que le hizo prestar Ervigio. El Concilio de Zaragoza III, vuelve a decidir sobre el *status* de la reina viuda⁶⁷. El Concilio XVI se ocupa del acuciante problema de los judíos y de la lucha contra las conspiraciones. La misma finalidad tiene la reunión del Concilio XVII.

Parece, además, que todos los asistentes participan en las decisiones⁶⁸, al menos nominalmente.

Por otra parte los concilios, salvo dos excepciones⁶⁹, se pronuncian sobre los temas políticos elegidos e indicados por el rey, es decir, que no suelen tener iniciativa en asuntos de esta naturaleza. Es más, en la gran mayoría de los casos lo hacen en el sentido sugerido por el rey. Si bien es verdad que condenaron la conducta de varios de ellos, siempre ocurrió así cuando habían dejado de reinar, y su sucesor deseaba esta condena⁷⁰. No obstante, tal afirmación no puede aceptarse sin los debidos matices⁷¹.

Las decisiones de los concilios no adquieren fuerza civil más que una vez que han sido confirmadas por el rey. Esto no se produce en un primer momento, sino que apa-

⁶⁷ Por haber tratado un tema de esa índole, se ha pensado que tal concilio pudo ser nacional. Ver ORLANDIS-RAMOS LISSON, «Historia de los Concilios», 469 s.

⁶⁸ *CT VIII*, *Decretum Iudicii universalis*: «Adeo cum omni palatino officio, simulque maiorum minorumque conventu, nos omnes tam potifices quam etiam sacerdotes, et universi sacris ordinibus famulantes, concordii definitione decernimus...».

CT VIII: la suerte de los bienes acaparados por Chindasvinto, examinada en el '*Decretum iudicii universalis*' dado por el concilio, no es mencionada en el tomo regio, aunque guarda cierta relación con la situación de los perseguidos por ese rey, que sí es tema del tomo regio.

⁶⁹ *CT XII*: el examen de la anulación del obispado de Aquis, creado por Wamba, es iniciativa del concilio, probablemente por considerar la cuestión puramente eclesiástica.

⁷⁰ *CT IV*: condena a Suíntila, que ya no es rey, para agradar a Sisenando. También critica al rey Sisebuto por forzar la conversión de los judíos.

CT VIII: condena a Chindasvinto, con el consentimiento de su hijo Recesvinto.

CT XII: critica indirectamente la acción de Wamba, indultando a los que habían caído bajo las penas de su ley militar. Como ya se ha dicho, además suprime el obispado de Aquis, creado por el rey.

⁷¹ El *CT IV* no pronuncia la deposición de Suíntila, pero para lograr el mismo efecto ante la legitimación de Sisenando, declara que se privó del trono por sus malas acciones.

CT VIII: las decisiones del *Decretum Iudicii universalis* son más duras -al menos en su expresión- de lo que hubiera deseado el rey, como lo prueba la ley que promulga sobre el mismo asunto poco después.

CT XV: pese a la insistencia de Egica, el concilio se niega a considerar inválido el juramento prestado por éste a su predecesor Ervigio.

rece, a imitación de Oriente, con un instrumento jurídico especial: la *lex in confirmatione concilii*⁷². Ciertamente es que ésta siempre confirmó las decisiones conciliares, pero esto no supone prueba alguna en favor de una supuesta sumisión del rey al concilio, puesto que éste se pronuncia en el sentido deseado por el príncipe, salvo en el caso del juramento prestado por Egica a Ervigio, cuya validez se debatió en el Concilio de Toledo XV⁷³; y salvo también el supuesto del Concilio de Toledo VIII⁷⁴. No obstante, en ésta ocasión, Recesvinto, en una ley que siguió de cerca al concilio⁷⁵, promulgó con los retoques que le parecieron oportunos las decisiones conciliares del *Decretum Iudicii universalis*.

Se dió también el caso de concilios que intervinieron después de decisiones reales, que se pronunciaron sobre los mismos asuntos. Ello no significaba, por supuesto, que el concilio pudiera imponer su parecer contra la voluntad regia, puesto que siempre confirmaron las decisiones reales, sancionando sus leyes anteriores.

Por último, es preciso notar que, cuando los concilios intervienen en ciertos temas religiosos, también puede estar presente una finalidad política. Esto aparece claramente en la cuestión judía: los esfuerzos conciliares trataban, no sólo de afianzar la unidad de la Fé, sino de debilitar lo que era un Estado dentro del Estado.

En el mismo sentido ha de tomarse el motivo de la reunión del Concilio de Toledo III, puesto que la abjuración del arrianismo, y la conversión al catolicismo del rey y del reino entero es un hecho religioso en esencia, pero de una importancia política capital.

En el caso del juramento prestado a Chindasvinto, que examinó el Concilio VIII de Toledo⁷⁶, se trata sin duda de un problema moral, pero también de la pacificación del reino.

Política resulta también la lucha del Concilio XI de Toledo, entre otros, contra el mal comportamiento de los obispos, aunque en sí sea una cuestión puramente moral y disciplinar, pues, al mismo tiempo, se persigue mantener el orden y el ejemplo tan peligrosamente amenazados por la conducta indigna de los más altos dignatarios de la Iglesia.

⁷² J. ORLANDIS, «Sobre el origen de la ‘Lex in confirmatione concilii’», *AHDE* 41, 1971, 113-126. J.N. HILLGARTH, «El III Concilio de Toledo y Bizancio», *XIV Centenario del Concilio III de Toledo*, 297-306, p. 302.

La confirmación por el rey de las decisiones de un concilio conciernen siempre a las de concilios nacionales, pues son los que se pronuncian sobre asuntos políticos. Sin embargo, merece señalarse un caso que será estudiado en el capítulo III: la confirmación por Recesvinto de la sentencia de un concilio de Mérida sobre una cuestión de geografía eclesiástica.

⁷³ Ver nota 71.

⁷⁴ Ver nota 71.

⁷⁵ *LV*, II,1,6.

⁷⁶ *CT VIII*, can. 2.

CAPITULO II

LA NORMATIVA: CANONES SOBRE JUICIOS

SUMARIO

- 7. Contenido de la normativa
 - 7.1 Normas sobre condiciones previas a la actuación del Concilio
 - 7.2 Normas sobre la actuación judicial en sí
 - 7.2.1. Asuntos que conciernen a la competencia del Sínodo
 - 7.2.2. Indicaciones sobre el modo de juzgar
 - 7.2.3. Recurso a la autoridad civil
 - 7.2.4. Sobre las apelaciones
 - 7.2.5. La apelación al Papa

La normativa sobre juicios conciliares válida en la España visigoda es la que recoge la *Colección Canónica Hispana*, cuya primera redacción se debe a San Isidoro, y que encierra los cánones de los principales concilios orientales, africanos, galos y españoles, además de una serie de Decretales pontificias. Conviene, desde el primer momento, hacer la siguiente precisión: se ha querido recoger la normativa contenida en los cánones sobre juicios de la *Hispana*, por ser la colección canónica usada por la Iglesia visigoda del siglo VII. No obstante, que dicha colección recoja numerosas normas de concilios no hispánicos sobre materia judicial, no implica necesariamente la aplicación de hecho de esas normas en las actuaciones judiciales de los concilios españoles de la Antigüedad tardía.

Ha de decirse, sobre las Decretales pontificias de la *Hispana*, que son muy pocas las que atañen al objeto de esta investigación, que es la cuestión de los juicios. En cambio, sí se encuentra una importante información procesal en tres epístolas del papa Gregorio Magno, dirigidas al *defensor* Juan ya mencionado, a quien

envía a la España bizantina para revisar la condena que fue hecha de dos obispos¹. De estas epístolas no se tratará en este capítulo, sino en el séxto, donde se examina especialmente este caso de la España no visigoda.

En todo caso, sí hay que subrayar que no hubo tardanza en España para conocer y aplicar la legislación de los concilios no españoles, especialmente de los orientales, a la confección de la Hispana: en concilios anteriores, se alude repetidamente a la autoridad de los *antiguos cánones*², que han sido objeto de recopilaciones especiales, más o menos extensas. Hay que citar la *colección de Novara*, de mediados del siglo VI, los *Capitula Martini*, hacia el 572 y el *Epítome Hispánico*, de principios del siglo VII.

A este respecto, es pertinente señalar que el origen de ese conjunto de normas, por ser tan variado, explica ciertas diferencias en soluciones de casos similares; pero, en general, son convergentes en cuanto a las soluciones, ya que los padres conciliares del mundo cristiano en general procuran seguir la línea de sus antecesores, aunque no se trate de concilios ecuménicos³.

Para terminar esta breve introducción, es de señalar que las normas de origen eclesiástico no son las únicas fuentes de Derecho reconocidas en y por los Concilios: en ocasiones, se aduce también la autoridad de las leyes civiles al lado de la de los cánones⁴.

7. CONTENIDO DE LA NORMATIVA

Pueden distinguirse aquí dos tipos de normas: las que conciernen directamente al contenido de la actuación judicial del concilio y las que tratan de las condiciones previas a esta actuación.

¹ Ver cap. I, nota 4.

² Por ejemplo, *CT I*, al principio de las actas. *CT III*, 1, *C. Braga I*, 22. La *colección de Novara* en G. MARTINEZ DIEZ, «La colección del Ms. de Novara», *AHDE*, 33, 1963, 391-538. Los *Capitula Martini* en J. D. MANSI, «Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio...», 53 vols., Graz-Austria 1960-61, t. 9, 845-860. El *Epítome Hispánico* en G. MARTINEZ DIEZ, «El Epítome Hispánico, una colección española del siglo VII», en *Miscellanea Comillas*, 36, 1961, 5-90 y 37, 1962, 321-446.

³ Así, algunos concilios reproducen cánones de otros. Por no citar más que un caso, *C. Cartago IV* reproduce los cánones de *C. Hipona*. HEFELE-LECLERCQ, «Histoire des Conciles», II-1, 82-84.

⁴ *CC. Cartago VII*, 2; *Sevilla II*, 3, *Sevilla II*, 8: el concilio acepta una acción por ingratitud, según los cánones y las leyes civiles, contra un siervo que, una vez libre, cometió maldades contra su obispo y su iglesia. *C. Sevilla II*, 2: en una disputa sobre la posesión de una basílica entre dos diócesis, se recuerda que se puede oponer la prescripción de 30 años, como lo ordenaron tanto los príncipes seculares como la autoridad de los romanos pontífices. *CT VI*, 11: nadie puede ser llevado al suplicio antes de que se examinen las normas de las leyes y de los cánones.

Esta última norma, en especial, hace suponer que el desarrollo del proceso en el juicio conciliar tiene gran similitud con el proceso civil romano; aunque prácticamente en ninguna de las sentencias conciliares estudiadas se alude a la forma en que se desarrolla este proceso y, por tanto, no se sabe en qué coincide y en qué diverge de la *cognitio extra ordinem* del Código Teodosiano y del Código de Justiniano.

Sobre la *cognitio extra ordinem*, ver Max KASER, «Römische Zivilprozessrecht», München 1966, 339-349.

7.1. Normas sobre condiciones previas a la actuación judicial del Concilio

Ya se ha dicho que se puede acudir al concilio provincial cada vez que éste se reúne: en un principio, dos veces al año, y luego una sola vez⁵, si bien -como también se ha visto- la periodicidad de tales reuniones estuvo muy lejos de ser respetada.

En cuanto al momento preciso del juicio, una vez comenzada la reunión conciliar, se dejó dicho que lo había determinado el concilio IV de Toledo, al menos para los juicios ordinarios⁶.

Numerosas normas precisan cuáles son las personas capacitadas para intervenir en el juicio, ya como juez, como acusador o como testigo.

En cuanto a la facultad de ser juez, dos concilios⁷ declaran que los obispos que hubiesen ordenado sacerdotes de manera ilícita no podían participar en los concilios, ni ser, por tanto, jueces. Otros cánones precisan cuál es el número de personas que deben formar el tribunal para poder deponer a clérigos⁸.

Estas precauciones, encaminadas a garantizar un juicio lo más justo posible, se manifiestan asimismo en numerosas medidas, tendentes a evitar la admisión de acusaciones abusivas o temerarias.

Así, se prohíbe a las personas implicadas en crímenes declarar contra presbíteros y obispos⁹; a los clérigos o laicos excomulgados acusar a un clérigo¹⁰; los siervos, los libertos propios, los que las leyes públicas prohíben la acusación de crímenes públicos, los salpicados por la mancha de la infamia, es decir: actores, personas de vida deshonrosa, herejes, paganos y judíos, no pueden ser acusadores salvo en causas propias¹¹.

Se prohíbe a los acusadores que no han podido probar una de las faltas imputadas a un clérigo, seguir acusándole de las siguientes¹².

⁵ Cer cap. I, epígrafe 5.1.

⁶ Ver cap. I, nota 65.

⁷ CC. *Turín*, 2, *Riez*, 1. Este último precisa que se recoge en este punto la disciplina del concilio de Turín.

⁸ C. *Cartago II*, 10: un obispo no puede ser depuesto más que por un tribunal de 12 obispos; un clérigo por uno de 6; un diácono por otro de 3, incluido el propio obispo. C. *Cartago III*, 8: si un presbítero es acusado, el obispo examinará la causa con otros cinco obispos vecinos; si se trata de un diácono, el número se reduce a dos. En los demás casos, puede examinarla sólo.

Aunque otros cánones designan al concilio como instancia competente para la deposición de obispos y clérigos (ver nota 39 de este capítulo) en estos dos cánones citados se trata más bien del obispo que juzga con el concurso de otros, es decir, de una jurisdicción colegial, pero no forzosamente el concilio. Ver J. GAUDEMET, «L'Eglise dans l'Empire Romain (IV-Vème siècles)», en G. LE BRAS (dir.), *Histoire du Droit et des institutions de l'Eglise en Occident*, <III>, París 1958-1989, 238.

⁹ C. *Cartago II*, 6.

¹⁰ C. *Cartago VII*, 1.

¹¹ *Ibidem*, can. 2.

¹² *Ibidem*, can. 3.

También se exige, para admitir una denuncia por parte de un clérigo o de un laico contra un obispo o un clérigo, que se haga una investigación previa¹³.

Con el fin de evitar acusaciones motivadas por el odio, o que presentaren gentes poco fiables¹⁴, se debe examinar la conducta y la religión del acusado y del acusador.

Antes de enviar a alguien al suplicio, se exige que el acusador se haya presentado, se hayan examinado las leyes y los cánones, y comprobado que el acusador está autorizado a presentar su acusación. De otra manera no se admite ésta, salvo en caso de lesa majestad¹⁵.

En cuanto a los requisitos para ser testigo, se requieren al menos 14 años; no admitiéndose a los que han sido rechazados como acusadores, ni tampoco los testigos que el acusador pueda traer de su propia casa¹⁶.

Ni siquiera el obispo se libra del rigor exigido a la acusación: cuando acusa, debe poder probar¹⁷. De igual modo, tampoco puede pronunciarse sentencia contra un ausente¹⁸.

Finalmente, se persigue la acusación abusiva, si se produce¹⁹. Y ello con el objeto -ya antes señalado- de evitar acusaciones de tal género, en particular contra los clérigos. Sin embargo, puede sorprender que, al lado de estas medidas protectoras contra los acusados, se prohíba defender a un clérigo depuesto por el juicio de los obispos²⁰. Quizá la razón estirbe en que la primera preocupación de la Iglesia es no dar motivo de escándalo; pero cuando éste resulta evidente, la protección deviene inútil, e incluso contraindicada.

También para evitar ocasiones de escándalo, se quiere evitar lo más posible que los clérigos participen en procesos. Por ello, se invita a no abusar de las acusaciones entre obispos: un prelado que quiere *excluir* (excomulgar) a otro debe aceptar la súplica de los demás si sólo piden una reprimenda o una corrección, cuando ese hermano ha sido ya castigado y amenazado. Si, pese a ello, el obispo cree que debe ser condenado por su falta, debe constituirse en acusador contra él²¹. De modo general, se pide al concilio que avenga a los obispos que tengan desacuerdos entre sí²².

¹³ C. *Calcedonia*, 21.

¹⁴ C. *Cartago IV*, 58, 96. C. *Elvira*, 73: se castiga a los cristianos denunciados por cuya culpa alguien fuese condenado.

¹⁵ CT VI, 11.

¹⁶ C. *Cartago VII*, 4.

¹⁷ *Ibidem*, can. 5.

¹⁸ C. *Cartago IV*, 30.

¹⁹ Así C. *Auvernia II*. C. *Elvira*, 74: castiga el falso testimonio; *id.*, 75: castiga a los que acusan a los obispos y clérigos de falsos crímenes.

²⁰ C. *Cartago V*, 2.

²¹ C. *Vaison I*, 7.

²² C. *Cartago IV*, 25.

Se toman frecuentemente medidas para que los clérigos no intervengan en procesos civiles; incluso el obispo, aunque sea atacado, no debe participar en procesos sobre cuestiones temporales²³.

Un clérigo, sin permiso del obispo, ni puede llevar un proceso a un tribunal civil, ni tampoco puede emplazar a un laico ante éste²⁴; *a fortiori*, tampoco puede emplazar a un clérigo ante la jurisdicción secular²⁵. Sin embargo, si el clérigo es citado ante el tribunal civil, debe comparecer²⁶. Pero el laico que quiera citar al clérigo ante la jurisdicción civil, debe contar con el previo permiso de su obispo²⁷.

Los laicos tienen la facultad de denunciar a los clérigos de cualquier grado en asuntos criminales, sin otra obligación que la de decir la verdad²⁸. Pero el clérigo no puede presentar una denuncia criminal ante un tribunal civil²⁹.

Se quiere igualmente evitar que los clérigos sean obligados a testificar. Así, en la revisión de un proceso, no se puede llamar como testigo al clérigo que haya conocido la causa o estado presente en el primer proceso³⁰.

7.2. Normas sobre la actuación judicial en sí

7.2.1. Asuntos que conciernen a la competencia general del sínodo

El concilio es competente para conocer de los litigios entre obispos; pero si se trata de dos pertenecientes a la misma provincia, les juzgará el concilio de ésta y no de otra³¹.

Con carácter general, el concilio conoce de las denuncias que presentan los agraviados por obispos, jueces o poderosos³².

Si se diera disparidad de opiniones entre los jueces que juzgan a un obispo, debe llamarse a los obispos vecinos, quienes juzgarán juntamente con los primeros³³, o bien se acude al metropolitano más próximo, para que decida lo más conveniente³⁴.

También de modo general, el concilio es competente para examinar las causas de los presbíteros³⁵.

²³ *Ibidem*, can. 19.

²⁴ CC. *Epaona*, 7; *Agde*, 32; *Orleans II*, 34.

²⁵ *CT III*, 13; *C. Calcedonia*, 19.

²⁶ CC *Epaona*, 7; *Agde*, 32.

²⁷ *C. Orleans II*, 34.

²⁸ *C. Epaona*, 17.

²⁹ *C. Agde*, 32.

³⁰ *C. Cartago IV*, 1.

³¹ *C. Sárdica*, 3.

³² *CT IV*, 3.

³³ *C. Antioquía*, 14.

³⁴ *Capitula Martini*, 13. El texto no precisa si el metropolitano juzgará sólo, o presidiendo la asamblea de los obispos primeros y quizás también a los obispos de su provincia unidos a éstos.

³⁵ CC. *Antioquía*, 20; *Capitula Martini II*, 18.

Más precisamente se indica que el sínodo es la instancia competente para el juicio que enfrenta a un clérigo con su obispo o con otro³⁶; especialmente en casos de excomunión de clérigos y laicos, o de acusación de un crimen, presentada por el obispo contra un clérigo o laico³⁷.

En estos últimos casos citados, donde se examinan causas de presbíteros, clérigos inferiores y laicos, puede tratarse a menudo de intervenciones del sínodo como instancia de apelación -como se verá más adelante- pues el obispo es competente para juzgar en primera instancia muchos asuntos que les conciernen. Por ejemplo, en el caso de excomunión, es el obispo quien interviene en primera instancia.

Sobre la competencia del concilio general, se precisa que todos los obispos que lo componen son competentes para juzgar los asuntos del conjunto de las provincias que representan, y no los obispos de cada provincia, exclusivamente para los asuntos de ésta³⁸.

Junto a estas normas generales sobre la competencia general de los sínodos, se encuentran precisiones más concretas sobre los casos en que han de intervenir los concilios como tribunales de justicia.

Así, el concilio es la instancia competente para deponer a clérigos y obispos³⁹. Un concilio español insiste en que el obispo no puede deponer a un presbítero, sino que tal decisión es de competencia exclusivamente conciliar⁴⁰.

El concilio es quien debe juzgar a los clérigos conspiradores⁴¹. En relación con este tipo de asuntos, exactamente en caso de crimen de lesa majestad, un concilio español alude a la costumbre que tienen los reyes de recurrir a los obispos (probablemente en sínodo) para juzgar a los inculpados, y se les prohíbe intervenir en tales causas, a no ser que se sepa con certeza que no se pronunciará la pena capital⁴².

Si el concilio ha de intervenir en litigios sobre la pertenencia de iglesias rurales⁴³, puede hacerlo a condición de que no hayan transcurrido 30 años de posesión pacífica, siempre y cuando la cuestión se plantee dentro de una misma provincia.

El obispo debe rendir cuentas al concilio de los bienes de su Iglesia. Este será quien examine la acusación de malversación si se produjere, efectuando una investigación y decidiendo después las medidas a tomar⁴⁴.

³⁶ C. *Calcedonia*, 9.

³⁷ C. *Nicea*, 5 (excomunión de un clérigo o laico); C. *Cartago IV*, 29 (acusación de crimen formulada por el obispo contra un clérigo o laico).

³⁸ C. *Mileva*, 27.

³⁹ C. *Antioquía*, 12.

⁴⁰ C. *Sevilla II*, 6.

⁴¹ C. *Orleans II*, 23.

⁴² CT IV, 31. CT XI, 6 se pronuncia en sentido parecido, aunque de manera más general, prohibiendo a los obispos juzgar delitos que deben ser castigados con pena de muerte.

⁴³ CC. *Calcedonia*, 17; CT IV, 34; *Mérida*, 7. *Gelas. ep. ad Silicienses eps. /decretal/ «Praesulum nostrorum»*, LXXXIII, «P.L.», 84, 805-808. C. *Mileva*, 21 recuerda que está prohibido a los obispos apropiarse de iglesias o plebes que creen pertenecerles sin previo dictamen del concilio. Si lo hicieren, perderían sus eventuales derechos.

⁴⁴ C. *Antioquía*, 25.

Finalmente, se alude a un caso muy preciso de disciplina moral: el abandono de una mujer por su marido, por causa grave, es decidido por su obispo junto con los comprovinciales⁴⁵.

7.2.2. Indicaciones sobre el modo de juzgar

Existe una norma general, quizás válida para todo juicio, que establece que el que no quiere comparecer, se condena a sí mismo⁴⁶. En cuanto a las penas correspondientes a la contravención de las normas conciliares, son los propios cánones quienes las indican; pero ocurre que en ciertas sentencias se indica expresamente que deben servir de modelo, es decir, que sientan jurisprudencia. Y las hubo en diversas materias.

Empecemos por el patrimonio eclesiástico. A propósito de la queja de unos fieles que habían efectuado donaciones a una parroquia, y que habían sido gastadas por el obispo casi en su totalidad, sin dejar casi nada a aquélla, el concilio decide con carácter general en qué medida el obispo puede disponer de los bienes parroquiales⁴⁷. Sobre un clérigo que había huido abandonando a su iglesia, a la que había sido consagrado desde su más tierna infancia, se ordena que sea devuelto a su obispo, y que en adelante se juzgue en el mismo sentido para casos parecidos⁴⁸. Aplica el concilio la norma de los colonos, que deben seguir trabajando la tierra en la que están, equiparando a éstos a los clérigos, que trabajan *in agro ecclesiae*.

En materia de geografía eclesiástica⁴⁹, con ocasión de la reclamación de unos terrenos de la diócesis de Idanha a la de Salamanca, se accede a la petición de la primera, por no haber transcurrido 30 años desde que esas diócesis estaban comprendidas en la misma provincia; tal plazo era el estipulado para las reclamaciones dentro de la misma provincia. A pesar de aplicarse aquí una norma preexistente, los obispos estiman necesario, al final de la sentencia, insistir en que tal plazo de prescripción de be ser respetado invariablemente en casos similares.

En otro caso, de creación irregular de un obispado en Chaves, se perdona al obispo ordenado, pues no ha hecho sino obedecer al rey Wamba. Pero citando la sentencia de un concilio galo, se advierte que, en el futuro, el obispo que ordenara, o fuera ordenado en las mismas circunstancias, sería castigado.

⁴⁵ C. Agde, 25.

⁴⁶ C. Cartago III,7. Bonifat. Ep. ad episcopos Galliae, /decretal/ «Valentinae nos clerici», XXXI, «P.L.», 84, 677-80: «Nam manifestum est confiteri eum de crimine, qui indulto et toties delegato iudicio purgandi se occasione non utitur».

En estos dos textos se habla del caso de obispos acusados, y que no quieren comparecer en el juicio sobre su causa. Pero se puede considerar que la norma es extensible a los procesos contra cualquier persona, pues no hay razón para que se aplique sólo a los obispos. Y se sabe, además, que el derecho procesal romano penaliza a la parte que no comparece deliberadamente en el juicio.

Por otra parte, esta norma parece en contradicción con en C. Cartago IV, 30, que prohíbe pronunciar sentencia contra un ausente. Probablemente esta última no hace referencia al ausente contumaz.

⁴⁷ Así el C. Carpentras.

⁴⁸ C. Sevilla II, 3.

⁴⁹ C. Mérida, 8. CT XII, 4.

Sobre deposición de clérigos, es de aducir el caso de un presbítero y dos diáconos que habían sido ordenados ilícitamente, el concilio decretó que fuesen depuestos, y que se juzgase en igual sentido para el futuro⁵⁰. En el caso de otro presbítero, depuesto y desterrado injustamente por su obispo⁵¹, el concilio lo rehabilitó, disponiendo que, en adelante, tales casos fuesen traídos ante la propia asamblea.

También en otros dos tipos de asuntos se generaliza el alcance de la sentencia, hasta el punto de servir de precedente para casos similares que puedan presentarse en el futuro.

Con motivo de la queja de un obispo, presentada ante el concilio, sobre otro que no había respetado un pacto firmado entre ambos, se recuerda que, con carácter general, los pactos entre obispos deben ser respetados⁵².

El segundo caso es más pintoresco, diríase que truculento⁵³. Se trata de un hombre que, siendo novio de una mujer, tuvo relaciones con la hermana de ésta, con promesa de matrimonio. Pero, faltando a esta palabra, se casó con su novia, lo que produjo el suicidio de la cuñada. El concilio impone a tan innoble sujeto y a sus cómplices una larguísima penitencia, disponiendo que se juzgue en este sentido en causas parecidas. Esta situación parece *a priori* excepcional, pero el hecho de que se insista en que la sentencia sienta precedente, parece indicar que no lo era tanto. El valor ejemplificador de la penitencia impuesta no basta para llegar a concluir la excepcionalidad del caso.

7.2.3. Recurso a la autoridad civil

En un caso particular se nos muestra la posibilidad del recurso, por parte del concilio, a la autoridad civil. Se trata de un obispo⁵⁴, al que el concilio condenó a abandonar una iglesia que había invadido, cosa que se negaba a hacer. La asamblea pide al *rector provinciae*, para que la autoridad civil proceda contra el obispo contumaz y le obligue a cumplir la sentencia conciliar.

De manera general, en España se pone a disposición del concilio un *regius executor*, previa petición del metropolitano⁵⁵, para facilitar la comparecencia de los inculcados ante el concilio y la reparación de los abusos cometidos.

7.2.4. Sobre las apelaciones

En primer lugar, ha de decirse que no cabe apelación contra sentencias pronunciadas por jueces *elegidos* por las partes en litigio⁵⁶. En cuanto a las apelaciones a los tribunales civiles, los clérigos -obispos, presbíteros, diáconos y demás- no pueden acudir al tribunal civil si una acción, ya fuere civil o criminal, ha sido ejercitada

⁵⁰ C. Sevilla II, 5.

⁵¹ *Ibidem*, can. 6.

⁵² C. Cartago I, 12.

⁵³ C. Ancira, 25. Creo que este supuesto, por ser tan rebuscado, corresponde a un caso real, aunque el canon no tenga la forma de una sentencia particular, sino de una decisión de alcance general para cualquier supuesto de este género.

⁵⁴ C. Cartago III, 38.

⁵⁵ CT IV, 3.

⁵⁶ CC. Mileva, 23; Cartago III, 10.

ante la jurisdicción eclesiástica. Si se tratare de un juicio criminal, quienes lo hicieran serán depuestos; si se trata de un juicio civil, podrán seguir conservando su cargo previa devolución de todo lo obtenido en virtud de la sentencia⁵⁷.

Los clérigos, con carácter general, no pueden acudir al Emperador⁵⁸. Pero en España sí que existe una posibilidad de recurso al rey⁵⁹, como se verá inmediatamente. En cuanto a las apelaciones a otra instancia eclesiástica, son muchos los cánones que a ello se refieren. El caso más comúnmente contemplado⁶⁰ es la apelación al concilio por parte de un clérigo insatisfecho con la sentencia de su obispo. Pero un concilio español⁶¹ indica otra vía de recurso para tales casos: el clérigo o monje en litigio contra su obispo, puede recurrir: en primer lugar, ante su metropolitano, en segundo, al metropolitano de otra provincia y en tercer lugar, al rey. Un concilio africano y otro oriental insisten en la necesidad de la reforma, por el concilio, de la sentencia episcopal injusta, lo que lleva a pensar que no debían ser insólitas las injusticias cometidas por los obispos en tales lugares y momentos⁶². Algo más tarde, en España no sólo se supone, sino que se sabe con certeza que así ocurría, puesto que lo declaran los propios concilios⁶³.

El recurso ante el concilio no está únicamente reservado a los clérigos, sino que queda abierto a cualquier persona que no esté conforme con la sentencia de su obispo⁶⁴. Si se trata de causas en las que el obispo es parte, el concilio provincial no siempre parece ser la primera instancia judicial, puesto que se alude al recurso previo del obispo ante su metropolitano, precisando que si éste se negase a oírle por dos veces, queda expedita la vía de recurso al concilio. Este juzgará en tal caso como si se tratase de una verdadera apelación, siendo la sentencia, entonces dictada, definitiva⁶⁵.

El concilio general es instancia de apelación de las sentencias emitidas por el concilio provincial⁶⁶, como parece lógico. Hay que subrayar aquí que un obispo condenado unánimemente por el concilio provincial, no puede apelar ante otros obispos, queriendo ésto significar los de otra provincia o el concilio general. En todo caso, la unanimidad en los jueces que dictan sentencia, la vuelve irrevocable⁶⁷.

⁵⁷ C. *Cartago III*, 9.

⁵⁸ C. *Antioquía*, 12.

⁵⁹ Ver *infra*, nota 61.

⁶⁰ CC. *Sárdica*, 17; *Cartago II*, 8; *Cartago IV*, 66; *Mileva*, 22; *Orleans II*, 22.

⁶¹ *CT XIII*, 12.

Existe, además, una carta dirigida a Recaredo por un monje, llamado Tarra, quien había sido acusado por los demás monjes de fornicación, pidiéndole justicia: «Tarra monachus adulterii insimulatus Riccardum supplex per litteras adit», I. GIL, *Epistola IX*, en su «Miscellanea wisigothica», Sevilla 1972, 28 s.

⁶² CC. *Nicea*, 5; *Sárdica*, 17; *Cartago IV*, 28.

⁶³ Ver cap. I, nota 20.

⁶⁴ C. *Vaison I*, 5.

⁶⁵ C. *Auvernia II*, 16.

⁶⁶ CC. *Mileva*, 22; *Antioquía*, 12.

⁶⁷ C. *Antioquía*, 15.

Sin salir del supuesto de la apelación de una sentencia del concilio provincial ante el general, un caso particular⁶⁸, acaecido en España nos indica que el plazo para apelar es de un año.

Finalmente, debe mencionarse una norma válida para todos los casos de apelación⁶⁹: si la segunda sentencia infirma la primera, se presume sin embargo la buena fé de los jueces que la dictaron. Para poder culparles como prevaricadores, habría que probar que juzgaron movidos por el odio, o que fueron corrompidos.

7.2.5. La apelación al Papa

Esta posibilidad fue muy controvertida, y las vivas discusiones que suscitó llegaron al enfrentamiento entre Roma y la Iglesia africana en particular. La sede romana, naturalmente, defiende esa facultad, como expresamente lo manifiestan algunas decretales⁷⁰, incluso invocando la costumbre antigua. Pero el concilio de Mileva⁷¹ la rechaza para los presbíteros y clérigos inferiores.

Las actas del Concilio VI de Cartago reproducen la agitada discusión que se suscitó sobre este asunto a propósito de un presbítero llamado Apiario, quien había apelado a Roma su deposición por parte de su obispo, Urbano de Sicca⁷². El Concilio de Sárdica⁷³, cuyos cánones fueron invocados por los delegados del papa en ese concilio, como pertenecientes al de Nicea, para darles una autoridad indiscutible, permitió la apelación a los obispos. En efecto, un prelado no satisfecho de un juicio puede apelar al papa, quien designará otros jueces de las provincias vecinas. Pero si no se probare la necesidad de la revisión del proceso, se estará a lo que decida la Santa Sede.

Quien apele en estas condiciones, puede igualmente pedir al papa que envíe a presbíteros de su corte como delegados. Si el papa, discrecionalmente, accede a ello, los delegados tendrán la misma autoridad que éste⁷⁴.

⁶⁸ CT VI, en el *Exemplar iudicii inter Martianum et Aventium* <Habentium>, explicita que no se le puede reprochar al primero haber dejado pasar el plazo de un año para apelar, puesto que no tuvo libertad para hacerlo: «neque enim longinquitas obsistere potuit temporis, quia retrusus post delationem honoris intra annum nullius ei patuit aditus reclamationis...».

⁶⁹ C. *Cartago III*, 10.

⁷⁰ *Innocent. I Ep. ad Victorium /decretal/ «Etsi tibi frater»*, VIII, 3, «P.L.», 84, 645. Después de recordar que debe respetarse el Concilio de Nicea, en cuanto a que las causas de los clérigos sean examinadas por el concilio de la misma provincia, admite sin embargo la posibilidad de apelación al papa para causas mayores: «Si maiores causae in medio fuerint devolutae, ad sedem apostolicam, sicut vetus consuetudo exigit, post iudicium episcopale referantur».

Innocent. I Ep. ad Rufum et Gerontium /decretal/ «Mora episcoporum», XII, «P.L.», 84, 655 s. El papa explica a ambos obispos la conveniencia de la revisión que mandó hacer del proceso de los obispos Bubalio y Tauriano, los cuales habían sido ya condenados por sus comprovinciales: «Grave non oportuit videri piissimis mentibus vestris cujuscumque retracteri iudicium, quia veritas exagitata saepius magis splandescit in lucem, et perniciis revocata in iudicium gravius et sine poenitentia condemnatur».

⁷¹ C. *Mileva*, 22.

⁷² HEFELE-LECLERCQ, «Histoire des Conciles», II-1, 196-201.

⁷³ C. *Sárdica*, 4.

⁷⁴ *Ibidem*, 7.

La solución a la controversia adoptada por el Concilio VI de Cartago, una vez aclarado el origen de los cánones supuestamente nicenos, fue el rechazo de la facultad de apelación a Roma, por no hallarse prevista en un concilio ecuménico. Es decir, se rechazó la costumbre. Pero el debate fue más allá del caso del presbítero Apiario, quien apeló a la sede apostólica desoyendo la prohibición de un concilio africano -el de Mileva⁷⁵- sin poder invocar en su favor los cánones del Concilio de Sárdica, el cual vedaba la apelación a los presbíteros, aunque la permitía a los obispos.

Al final, el concilio cartaginés rechazó la posibilidad de apelación a Roma incluso para los obispos, pasando por encima de los cánones del sínodo sardicense⁷⁶.

⁷⁵ Ver nota 71.

⁷⁶ *C. Cartago VI*, 13: «Presbyterorum quoque et consequentium clericorum improba refugia, sicut te dignum est, repellat sanctitas tua, quia et nulla Patrum definitione hoc ecclesiae derogatum est Africanæ, et decreta Nicaena sive inferioris gradus clericos sive ipsos episcopos suis metropolitanis apertissime commiserunt. Prudentissime enim justissimeque viderunt quaecumque negotia in suis locis, ubi orbita sunt, finienda».

CAPITULO III

JUICIO SOBRE CUESTIONES DE LIMITES DIOCESANOS

SUMARIO

8. Reivindicación de territorios diocesanos
 - 8.1. Reivindicaciones interdiocesanas dentro de la misma provincia
 - 8.2. Reivindicación de territorios diocesanos situados fuera de la provincia que los reclama
9. Invalidación de la creación de una sede episcopal

Los juicios sobre esta materia que se suscitaron dentro de la época que nos ocupa, tuvieron todos ellos lugar en el siglo VII, y ponen de manifiesto que, para esas fechas, la Iglesia estaba preocupada por mantener intacta -en la medida de lo posible- la configuración geográfica ya consolidada de las provincias eclesiásticas y, dentro de ellas, de sus distintas diócesis.

Probablemente a causa de que ningún obispo quería ver menguada la importancia de su sede. Si ello entra dentro de lo que hoy llamaríamos deber pastoral, tampoco pueden desdeñarse otras razones de orden más inmediato: la pérdida de territorios afectaría necesariamente a los recursos económicos de la diócesis¹.

De varios tipos son los casos planteados que motivaron la intervención de los concilios en materia de geografía eclesiástica. Casi siempre se trata de la reivindicación de territorios diocesanos anexionados -a consecuencia, sobre todo, de una dominación

¹ G. MARTINEZ DIEZ, «El patrimonio eclesiástico en la España visigoda. Estudio histórico-jurídico», *Miscelánea*, Comillas 1959, 83-94.

extranjera en la zona²- por una diócesis de la misma provincia, o aún por otra provincia. Existe también un caso de invalidación de la creación de una sede episcopal.

Antes de entrar en el estudio de los supuestos concretos, conviene recordar, para facilitar la mejor comprensión de los que están relacionados con las anexionen de territorios por potencias extranjeras, en qué consistían éstas.

Bizancio estuvo presente en Hispania entre el 554 y el 624, ejerciendo una dominación que no siempre afectó a la misma extensión territorial. La provincia que más sufrió la presencia bizantina fue la Cartaginense, y en menor medida la Bética, donde perteneció a Bizancio una parte de la diócesis de Málaga, incluso esta ciudad hasta el 612.

Otros territorios de esta diócesis volvieron pronto bajo la dominación visigoda, por lo que fueron acaparados por las diócesis de Cabra -pronto liberada-, Ecija y Córdoba. Esta última ciudad quedaría libre de la dominación imperial ya en el 572.

En cuanto a los suevos, en una época no exactamente determinada por la falta de fuentes, pero que puede extenderse del 468 -fecha en que termina la crónica del galai-co Idacio, principal fuente de información sobre los suevos- y mediados del siglo VI, se sabe que rebasaron la línea del Duero, que era frontera entre las provincias de Galicia y Lusitania. Lo cual determinó que las cuatro sedes episcopales de esta última provincia: Coimbra, Viseo, Lamego e Idanha, pasasen a depender³ de la provincia eclesiástica de Galicia, sueva, y de su metrópoli Braga.

También conviene recordar que, por lo que concierne a la reclamación de territorios de una diócesis a otra, la normativa más antigua⁴ la autoriza a condición de que no se pueda invocar, por parte del demandado, una posesión pacífica de 30 años. El concilio de Mérida del 666 tiene ocasión de confirmar⁵ esa norma, mientras que el IV de Toledo⁶, años antes, había precisado que tal reclamación sólo era admisible dentro de una misma provincia, no pudiendo tener lugar si las diócesis en litigio perteneciesen a provincias diferentes.

² En caso de dominación extranjera, la suerte de los territorios es idéntica en cuanto a la autoridad eclesiástica que en cuanto a la autoridad política: se pierde el contacto entre la sede y los territorios de su jurisdicción cuando han sido repartidos entre potencias diferentes. Los obispos separados de su metrópoli por la fuerza de los hechos, se incorporaron a la metrópoli más próxima o a la única posible. Ver D. MANSILLA REOYO, «Geografía eclesiástica de España: estudio histórico-geográfico de las Diócesis», 2 vols., Roma 1994, en especial I, 320. L.A. GARCIA MORENO, «Historia de España visigoda», Madrid 1989, 352.

³ No todas ellas existían antes de la dominación sueva: Lamego y Egitania (Idanha) fueron creadas por los suevos, desmembradas de Viseo. MANSILLA REOYO, «Geografía eclesiástica», I, 198 s. Sobre estas ocupaciones de territorios tanto en la Bética como en la lusitania, ver ORLANDIS, «El cristianismo y la Iglesia», 472 s.

⁴ C. *Calcedonia*, 17. *Gelas. Ep. ad Silicienses episcopos /decretal/ «Praesulum Nostrorum»*, LXXXIII,2, «P.L.», 84, 806-808: «Placuit ut si, quod absit, facultates ecclesiae necnon et dioceses, quae ab aliquibus possidentur episcopis, jure sibi vindicent, quia et filiorum nostrorum principum ita emanavit auctoritas, ut ultra triginti annos nulli licent pro eo appellare quod legum tempus excludit».

⁵ C. *Mérida (a. 666)*, can. 8 in fine: «Omnibus vero episcopis id instituitur esse servandum, ut parochiam suam bene custodiant, nec a quolibet fratre eam usurpari permittant: quibus tricennalis numerus per voluntate aut neglegentia occurrerit, nullo modo reddenda erit».

⁶ CT IV, 34.

8. REIVINDICACIÓN DE TERRITORIOS DIOCESANOS

8.1. *Reivindicaciones interdiocesanas dentro de la misma provincia*

8.1.1. El primer caso es el juicio que tuvo lugar en el concilio II de Sevilla del 619⁷. En él intervinieron Teodulfo, obispo de Málaga, como demandante, contra los obispos de las iglesias o diócesis de Ecija, Elvira y Cabra⁸.

Teodulfo pedía la devolución de territorios de su diócesis que habían vuelto a dominación visigoda en una fecha que no precisa, pero que seguramente debía ser superior a treinta años atrás, por lo que resulta del propio proceso.

El fundamento jurídico invocado para legitimar esa reivindicación es un argumento por analogía, fundado en la autoridad de las leyes civiles: el *ius postliminii*⁹. Como es sabido, consiste en una *fictio iuris*, mediante la cual el que hubiese caído en esclavitud al ser hecho prisionero por el enemigo, si luego recobra la libertad y vuelve a Roma, recupera todos sus derechos como si nunca los hubiese perdido. Por tanto, a este derecho no puede oponerse ninguna prescripción.

Esto es lo que ocurre en el caso que nos ocupa. El concilio dice:

«non erit obicienda praescriptio temporis ubi necessitas interest hostilitatis»,

lo que significa que la iglesia de Málaga puede recuperar los territorios reclamados, perdidos a causa de la guerra. Se actúa como si no los hubiese perdido nunca, y, por ello, no puede oponerse la prescripción. Lo cual, dicho sea de paso, da a entender que había pasado ya más de treinta años desde que los territorios litigiosos pasaron a los obispados mencionados. El hecho de la guerra es presentado, precisamente, como una excepción a la regla de la prescripción tricenal¹⁰, cuya vigencia se reconoce, aunque no sea de aplicación al caso presente.

Puede pensarse que si Málaga hubiese tardado más de 30 años, contados a partir de su liberación y vuelta a la España visigoda, en hacer su reclamación, ésta no hubiese prosperado, por oponérsele, en tal caso, la prescripción de los 30 años.

⁷ *C. Sevilla II*, 1.

⁸ La redacción del canon parece indicar que todos los obispos participan en la decisión del concilio, incluso las partes en litigio, con excepción de Juan, obispo de Cabra.

⁹ *Gaii Institutiones*, I, 129: «Quodsi ab hostibus captus fuerit parens, quamvis servus hostium fiat, tamen pendet ius liberorum propter ius postliminii, quo hi qui ab hostibus capti sunt, si reversi fuerint, omnia pristina iura recipiunt; itaque reversus habebit liberos in potestate. Si vero illic mortuus sit erunt quidem liberi sui iuris; sed utrum ex hoc tempore quo mortuus est apud hostes parens, an ex illo quo ab hostibus captus est, dubitari potest. Ipse quoque filius neposve si ab hostibus captus fuerit, similiter dicemus propter ius postliminii potestatem quoque parentis in suspenso esse». (Se cita por la ed. a cargo de Johannes BAVIERA, «*Fontes Iuris Romani antejustiniani. Pars altera*», Florencia 1968, 33 s.).

Digesto, IL, 15,5 (principio): «Postliminii ius competit aut in bello aut in pace. In bello cum hi, qui nobis hostes sunt, aliquem ex nostris ceperunt, et intra praesidia sua perduxerunt: nam si eodem bello is reversus fuerit, postliminium habet, id est perinde omnia restituntur ei iura, ac si captus ab hostibus non esset». Vid. también *Codex*, VIII, 50. (Se cita por la edición de Theodor MOMMSEN, «*Corpus Iuris Civilis*», I, Wiedmann 1973, 884.

¹⁰ Aquí sería la formulada por *C. Calcedonia*, 17 y por la Decretal de Gelasio, «*Praesulum Nostrorum*». Ver nota 4 de este capítulo.

Por lo que se deduce de las actas, el concilio no declara la pertenencia de estos territorios a la diócesis de Málaga, puesto que la sentencia se produce antes¹¹ de que se haya probado esa pertenencia con anterioridad a la dominación bizantina, lo cual es condición necesaria¹², obviamente, para que tal recuperación pueda efectuarse, como indica el concilio.

8.1.2. El segundo caso es otro juicio que también tiene lugar en el Concilio II de Sevilla del año 619¹³. Se trata de la pertenencia de una basílica situada en una zona fronteriza entre las diócesis de Córdoba y Ecija.

Los obispos de ambas, Honorio y Fulgencio, respectivamente, estaban enfrentados por esta cuestión¹⁴. Pero la redacción de las actas no deja claro quién era el demandante y quién el demandado.

El concilio juzga oportuno exponer la razón por la que admite la demanda: se trata de aplicar la normativa canónica que, a su vez, permite interponer este tipo de acciones judiciales para poner coto a la codicia, e impedir que nadie pueda usurpar los territorios ajenos¹⁵. Pero, al mismo tiempo, recuerda la vigencia de la normativa sobre la prescripción aplicable en este tipo de asuntos; en este caso constatando que los hechos, tal y como han sido presentados¹⁶, no permiten oponer ninguna prescripción sobre la posesión de dicha iglesia.

Es interesante notar que aquí se invoca como fuente la normativa sobre la prescripción tricenal, al lado de la autoridad de los Romanos Pontífices, la de la autoridad civil: los edictos de los príncipes¹⁷. No se mencionan los cánones conciliares relativos a ella.

La solución del litigio no nos es conocida, puesto que, para poder adoptar una decisión -al no haberse probado por ninguna de las partes una posesión suficiente- se acuerda hacer una pesquisa con el fin de determinar dos cosas: la primera, los límites diocesanos controvertidos. La segunda, si se puede invocar -caso de que exista- una posesión de 30 años por parte del actual poseedor, en el caso de que la basílica no se encuentre dentro de los límites de su diócesis.

Parece ser que existe una delegación de los padres conciliares en el dictamen de los expertos¹⁸, ya que sus actuaciones se entienden acordes con la asamblea, y no necesitan posterior confirmación por ésta.

¹¹ *C. Sevilla II*, 1: «Pro qua re placuit ut omnis parrochia, quae ab antiqua ditone ante militiarum hostilitatem retinuisse, ecclesiam suam comprobaret eius privilegio restitueretur».

¹² *Idem*.

¹³ *C. Sevilla II*, 2.

¹⁴ Msr. A. BAUDRILLART (ed.), «Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques», IV, Paris 1930, 1184: «... une basilique située au delà du Guadalquivir, que St. Fulgence prétendait dépendre del *Celtici*, ses diocésains et Honorius, de Regina».

¹⁵ *CC. Cartago I*, 10; *Cartago II*, 11; *Cartago III*, 20; *Mileva*, 21; *Capitula Martini*, 9.

¹⁶ No se excluye, en efecto, que exista posesión de 30 años, simplemente no estaba probado. *C. Sevilla II*, 2: «Sin vero infra metas tricennalis temporis extra alienos terminos basilicae iniusta retentio, repetentis iuri sine mora restituetur».

¹⁷ *Ibidem*: «Hoc enim et secularium principum edicta praecipunt, et praesulum Romanorum decrevit auctoritas».

¹⁸ Ver nota 16.

En el supuesto de que se diera una injusta ocupación por la parte demandada, se procederá a la devolución inmediata de la basílica, sin que se mencione ninguna condena adicional para aquélla.

8.1.3. El último caso de devolución de territorios diocesanos dentro de una misma provincia eclesiástica se planteó en el Concilio de Mérida del año 666.

El obispo Sclúa de Idanha reclama al obispo Justo de Salamanca territorios suyos, que éste último retenía; y que no le había podido reclamar hasta entonces, puesto que Idanha pertenecía a la provincia de Galicia hasta una fecha reciente¹⁹, mientras que Salamanca pertenecía a Lusitania.

Se respetaba, por tanto, la prohibición del canon 34 del Concilio IV de Toledo, de reclamar territorios de una diócesis perteneciente a provincia distinta de la reclamante. Una vez desaparecido el impedimento -es decir, perteneciendo ambas a la misma provincia- es cuando la demanda puede ser planteada y admitida.

En cuanto a la prescripción tricenal, siempre presente en estos asuntos, la sentencia plantea una duda, dada la ambigüedad de su redacción: si el tiempo en que la diócesis de Idanha perteneció a otra provincia -lo que impedía la reclamación a Salamanca- no le hubiera perjudicado después -una vez reintegrada a Lusitania- para plantear su reclamación. En principio parece que no, ya que se dice que dispone de 30 años a partir de su reincorporación para reclamar²⁰, por lo que podría deducirse que no cuenta, para prescripción, el tiempo transcurrido mientras Idanha perteneció a Galicia.

Sin embargo, la frase siguiente permite dudar de lo anteriormente dicho: se admite la demanda porque el obispo salmantino no puede oponer una prescripción de 30 años²¹. Parece, pues, que si existiera tal posesión, la podría oponer. Y por tanto, el tiempo que Idanha hubiera estado en otra provincia, le hubiera perjudicado a la hora de reclamar.

Para la resolución de este caso concreto, la respuesta a esta pregunta no es necesaria, al haber transcurrido los 30 años desde que Salamanca retenía territorios de Idanha.

Ahora bien, ¿cómo interpretar la ambigüedad de la postura del concilio? Puede ser que éste no quisiera decidir si, en un caso como éste -donde el perjudicado no podía reclamar- era más importante respetar la posesión de 30 años, aunque en origen se tra-

¹⁹ Idanha fue devuelta a Lusitania en un concilio celebrado en Mérida unos años antes, en tiempos de Recesvinto, entre el 649 y posiblemente el 661, fecha en que aún vivía el obispo Oroncio, autor de esta iniciativa. L.A. GARCIA MORENO, «Prosopografía del reino visigodo de Toledo», Salamanca 1974, n° 440.

²⁰ C. *Mérida a. 666*, 8: «... perspeximus ut quia nec ille XXX^a annos adhuc habet quod ad huius provinciae metropolim reductus est, et ille quod per longo tempore non possedit percepit et triginta adhuc illi in hoc non sunt impleti anni, sicut ille ad debitam diocesem rediit, ita et hic qui pulsat diocesem sibi debitam ordinante metropolitano cum suis fratribus per suum saionem recipiat».

²¹ Ver nota anterior.

tase de una usurpación, que impedir este tipo de abusos, permitiendo una reclamación, aunque tardía.

O quizás, aunque se diese la posesión de 30 años, se hubiera permitido la reclamación; pero aquí se aprovecha el hecho de que no la hay, y subrayándolo, para dar aún más razón a la parte en favor de la cual se falla: la diócesis de Idanha.

El concilio, en todo caso, no quiere alentar este tipo de reclamaciones, como lo demuestra la exhortación a los obispos al final de la sentencia, para que guarden diligentemente sus diócesis, y que, si se pudiera oponer una prescripción de 30 años, no se devuelva de ninguna manera lo reclamado²².

En esta sentencia aparece también unos inspectores, enviados por el metropolitano, para delimitar exactamente los territorios contestados.

En cuanto a la recepción de éstos, se llevará a efecto por medio de del sayón del obispo de Idanha. Lo cual nos muestra, de paso, que este funcionario godo no se circunscribía al ámbito civil.

Finalmente, han de señalarse dos cosas más, contenidas asimismo en la sentencia: que el cambio de diócesis no deshace los pactos celebrados entre el obispo de Salamanca y otros obispos²³. Y que se alude a la devolución de unos territorios por Galicia a Salamanca, de la que procede hablar en el apartado siguiente.

8.2. *Reivindicación de territorios diocesanos situados fuera de la provincia que los reclama*

Como se ha visto, el principio establecido en el canon 34 del Concilio IV de Toledo es que no se permite reivindicar territorios por una diócesis a otra, si éstos se encuentran en provincias distintas. Igualmente, se ha señalado que en el Concilio de Mérida del 666 se había respetado tal prohibición en el caso arriba estudiado.

8.2.1. Sin embargo, el mismo canon²⁴ que resuelve el litigio entre Idanha y Salamanca alude al hecho de que el obispo de esta última diócesis -perteneciente a Lusitania- había recuperado territorios de su diócesis retenidos por la metrópoli de Galicia.

Lo cual lleva a plantearse varias preguntas. Según el propio concilio relata los hechos, parece que Salamanca había reclamado territorios suyos a la propia provincia de Galicia, y además con éxito: es decir, que se actuó en contra de la prohibición del Concilio IV de Toledo, canon 34.

²² Ver nota 5 de este capítulo.

²³ *C. Mérida a. 666*, can. 8: «Pacta vero, quae juxta canonicam regulam inter episcopos, per pacificam deliberationem iustissime fuerint facta, in omnibus placet esse servanda».

²⁴ *C. Mérida 666*, can.8: «... adiciens ut de <eo> id unde ad Galliciae metropolim diocesis sui fuerat possessum ille reciperet, quamvis longa post tempora, quae parochiae suae fueran debita».

Pero seguimos hoy sin saber cuándo tuvo lugar tal reclamación. En efecto, ningún concilio conocido habla del caso. Puede pensarse que quizá ocurrió en el concilio celebrado unos años antes en Mérida (antes del 661). La razón es la siguiente: en el momento en que las cuatro diócesis, situadas en un territorio que había pertenecido a Lusitania antes de la ocupación sueva del siglo V ó VI, son devueltas por Galicia, Salamanca pudo aprovechar la ocasión para reclamar un territorio que formaba parte de lo devuelto. Y en tal caso, se hubiese producido una recuperación dentro de la misma provincia.

De todas formas, se insiste en el hecho de que el territorio devuelto a Salamanca había sido retenido por Galicia durante muchos años²⁵ -quizá durante más de 30-; hecho que constituye un indicio para pensar que puede efectivamente tratarse de la recuperación de un territorio después de su devolución por Galicia a Lusitania. De no ser así, se habrían burlado, a la vez, la prohibición de reclamar territorios a otra provincia y la prescripción tricenal.

Esta, si las cosas ocurrieron como acaba de sugerirse, sería respetada en el caso presente, puesto que en ese mismo canon 8 del concilio de Mérida del 666, parece admitirse tal interpretación de la prescripción²⁶, pues la devolución de su territorio a Salamanca se hubiese producido al tiempo (si es en el concilio de Mérida de antes de del 661) o poco después de la reintegración a Lusitania de las cuatro diócesis pasadas a Galicia.

8.2.2. El segundo caso a estudiar en este epígrafe es el que se menciona al principio del canon 8 del concilio de Mérida del año 666.

El canon refiere lo que ocurrió en otro concilio celebrado en Mérida unos años antes, al que ya se ha aludido: siempre en relación con la ocupación sueva de una parte de Lusitania. Habiendo ocupado los suevos el norte de esta provincia, pasaron a depender de la metrópoli de Galicia, Braga, unas diócesis que hasta entonces habían pertenecido a Lusitania: Coimbra y Viseu. Esta última²⁷ debió ser dividida en tiempos de la ocupación sueva, y tal división dio lugar a la creación de otras dos nuevas diócesis: Lamego y Egítania (Idanha), citadas en este concilio. También parece que fue creada otra en ese mismo territorio de Viseu²⁸: la de Caliabria, aunque no es citada por el concilio.

Pese a terminar la dominación sueva en tiempos de Leovigildo²⁹, las dos provincias quedaron configuradas como en la época sueva durante muchos años después: unos 70 años aproximadamente, hasta que el obispo Oroncio de Mérida -metrópoli de

²⁵ Ver nota anterior.

²⁶ Ver nota 20, especialmente esta parte del canon allí reproducido: «... quia nec ille XXX^a annos adhuc habet quod ad huius provinciae metropolim reductus est».

²⁷ Ver nota 3 de este capítulo.

²⁸ El rey Witérico creó posiblemente este obispado, separándolo del de Viseu, aunque su ubicación exacta es desconocida. BAUDRILLART, «Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques», XI, 1949, 393. MANSILLA REOYO, «Geografía eclesiástica de España», I, 300.

²⁹ Como es sabido, Leovigildo anexionó la nación sueva al reino visigodo en el 585.

Lusitania- tomase la iniciativa de reconstruir la provincia de Lusitania tal y como era antes de la invasión sueva, pidiendo a Galicia la devolución de los territorios citados. No se cita a Caliabria, pero parece lógico pensar que se solicitó también su devolución.

Aquí se plantea una devolución interprovincial: la recuperación de unos territorios de una provincia por parte de otra. Y además, transcurrido un plazo mucho más largo de los 30 años. Puede adelantarse que el obispo Oroncio obtuvo satisfacción.

¿Qué argumentos jurídicos permitieron conseguir ese resultado?

Se alude a los antiguos cánones³⁰, pero no se encuentra en la *Hispana* ninguno que diga que haya que devolver a una provincia sus territorios pasados a otra. Solamente se prohíbe invadir parroquias o iglesias de otras diócesis³¹, además de la ya mencionada prohibición del canon 34 del CT IV, de reclamar territorios a otra provincia.

Lo que sí puede aducirse es la jurisprudencia del concilio II de Sevilla, cuyo canon 1 permitió a la sede de Málaga recuperar «cualquier parroquia³²» -se puede entender incluso que de otra provincia, aunque no se plantee la cuestión en ese caso concreto- que le hubiese pertenecido antes de la guerra con Bizancio, invocando el *ius postliminii*.

Como se entiende, además, que lo que se pierde en caso de dominación extranjera no se pierde por negligencia; y en este caso -por otra parte- la extensión de los territorios perdidos: cuatro diócesis, no supone el mismo perjuicio que una parroquia de más o de menos, por ello probablemente se pasa por alto la prescripción de posesión tricenal por parte de Galicia; prescripción, en cambio, que sí reconocía que debía aplicarse la sentencia del canon 1 del concilio II de Sevilla³³.

Finalmente, cabe preguntarse con qué autoridad puede un concilio provincial de la Lusitania obligar a la provincia de Galicia. Es claro que, por sí solo, carece de autoridad. Pero precisamente por ello se dirige al rey -Recesvinto- cuya autoridad es la que da fuerza³⁴ a la resolución conciliar que decreta que esas cuatro diócesis sean devueltas a Lusitania.

El rey, pues, aparece -como en alguna otra ocasión³⁵- como autoridad superior para tomar decisiones o resolver conflictos en materia eclesiástica.

³⁰ C. Mérida (a. 666), can. 8: «... suggerente sanctae memoriae sanctissimo viro Orontio episcopo, animum eius <se refiere a Recesvinto> ad pietatem moverit, ut terminos huius provinciae Lusitaniae, cum suis episcopis eorumque parrochiis, iuxta priorum canonum sententias, ad nomen provinciae et metropolitanam hanc sedem reduceret et restauraret».

³¹ Ver nota 15 de este capítulo.

³² Ver nota 11 de este capítulo.

³³ C. Sevilla II, 1: «... non erit obicienda praescriptio temporis ubi necessitas interest hostilitatis». Es decir, que si no existiese la causa de fuerza mayor de la guerra, se aplicaría la prescripción.

³⁴ C. Mérida (a.666), 8: «Hic ergo iuxta eandem regulam decreto sinodico iudicii formula et suae clementiae <del rey> confirmatione ad hanc metropolim reductis...».

³⁵ Por ejemplo, cuando interviene en el nombramiento de los obispos (ver cap. I, nota 29); o cuando es juez de apelación en causas que enfrentan a un clérigo con su obispo (ver cap. II, nota 61).

9. INVALIDACIÓN DE LA CREACIÓN DE UNA SEDE EPISCOPAL

Es el caso que plantea el canon 4 del Concilio XII de Toledo. No se trata de un litigio propiamente dicho, puesto que el autor de la irregularidad que se juzga es quien, reconociéndola, pide al concilio que se pronuncie para repararla³⁶. En efecto, Esteban, metropolitano de Mérida, se presenta al concilio por haber llevado a cabo una nueva ordenación episcopal en el monasterio de Aquis (¿Chaves?)³⁷, obligado a ello por el rey Wamba. Pide perdón por haber violado las normas canónicas, y solicita que el concilio resuelva sobre la situación del obispo ordenado en aquel lugar.

Conviene, antes de analizar la sentencia, hacer una observación preliminar. Este asunto, debatido en un concilio nacional, y con cierto cariz político, no es mencionado en el tomo regio: lo aborda el concilio por propia iniciativa. Es innegable el componente político, puesto que se trata de deshacer una decisión real, aunque se trate de un rey ya muerto y enemigo del actual: Ervigio. En todo caso, la actitud conciliar pone de manifiesto las buenas relaciones entre Ervigio y la Iglesia, que parece disfrutar de cierta libertad de maniobra.

Vayamos ahora a examinar el fondo de la sentencia. Dado que, ya bastante avanzada la época visigoda, se han creado sedes episcopales sin que se produjesen protestas³⁸, cabe preguntarse por qué ahora se decide suprimir la de Aquis: en qué reside la irregularidad de su creación. Se aduce la autoridad de una serie de disposiciones, de las cuales no todas parecen tener relación con el caso. Más bien parece una cita de todo lo que concernía a la creación de sedes episcopales, sin una previa decantación de las disposiciones aplicables al asunto concreto del obispado de Aquis.

La primera es una carta de S. Pablo³⁹, mandando establecer obispos en las ciudades: la cual, a menos que se interprete a contrario, no conviene al caso. Lo mismo ocurre con un canon del concilio de Nicea⁴⁰, que prohíbe que coexistan dos obispos en una misma ciudad.

Sí nos interesan una disposición del concilio de Laodicea⁴¹ y otra parecida del concilio de Sárdica⁴², que indican que no es conveniente que se ordenen obispos por las aldeas y lugares. También otras dos disposiciones de los concilios I y II de Cartago⁴³ prescriben que no tenga obispo el territorio que nunca lo tuvo antes. La última disposición, del concilio de Turín⁴⁴, castiga a los obispos que hubiesen ordenado a otros contra los cánones, así como a los por ellos ordenados. En cuanto a la prohibición contenida en los cánones de los concilios de Cartago que acaban de mencionarse,

³⁶ *CT XII*, 4: «... praedictus idem vir, postratus humo, medicamine nostri praecepti et sibi dari veniam petiit, et quid potissimum fieri oporteret de persona eius, qui illic ordinatus fuerat nostri oris sententia, decernendum poposcit».

³⁷ Se ha identificado a veces Aquis con la ciudad de Chaves, pero MANSILLA REOYO, en su «Diccionario de Geografía eclesiástica de España», I, 177 s, sostiene que esa identificación es errónea. Solamente puede decirse, según este autor, que Aquis se encontraba en la provincia de Lusitania.

³⁸ Por ejemplo, ver notas 3, 28 y 46 de este capítulo.

³⁹ S. Pablo, *Tit.* I, 5.

⁴⁰ *C. Nicea*, 8.

⁴¹ *C. Laodicea*, 58.

⁴² *C. Sárdica*, 6.

⁴³ *CC. Cartago II*, 5; *Cartago III*, 42.

⁴⁴ *C. Turín*, 2.

cabe objetar -como se señalaba más arriba- que en ocasiones anteriores se prescindió de ella. Luego, ¿por qué se invoca ahora?. Probablemente para dar más fuerza a la otra -de los concilios de Laodicea y Sárdica- que parece ser la verdaderamente adecuada en el presente caso.

En efecto, la sede creada lo fue para un monasterio, no para una ciudad, por lo que podría considerarse comprendido en las categorías de «lugar» o «aldea». Además ésa parece ser la causa de la irregularidad que reprocha el concilio a la creación de esta sede -estar en una aldea- pues se queja en otro lugar del cánón de otros intentos de Wamba de obligar a crear obispados en aldeas⁴⁵.

Sin embargo, hay que recordar que existen monasterios que son sede de un obispado⁴⁶. Por lo tanto, la decisión parece obedecer, en definitiva, a razones de conveniencia política eclesiástica, más que a una línea de jurisprudencia firme y estable, así como al respeto de las normas canónicas, como se dice en la decisión. Por supuesto, que si es la política la base de la misma, no podría decirse tan a las claras en una norma canónica de un concilio nacional.

La oposición de la Iglesia a este tipo de iniciativas es tal, que no sólo condena la creación de esta sede episcopal, sino que la suprime con tanta más autoridad cuanto se siente totalmente respaldada por la del rey Ervigio.

No castiga, sin embargo, al obispo Cuniuldo de Aquis, ordenado en contra de los cánones, porque no ha hecho otra cosa que obedecer a la voluntad del rey Wamba, a la cual le hubiera sido verdaderamente difícil sustraerse. Le conserva en su grado y dignidad, destinándole a otra sede, probablemente la de Itálica⁴⁷.

La solución adoptada es conciliadora y no traumática. De una parte, deshace una decisión arbitraria de Wamba -muerto éste, nótese- y de otra, no trata con ignominia al obispo Cuniuldo, consagrado en tales condiciones. Sin embargo, y citando la jurisprudencia establecida en el concilio de Turín⁴⁸, el concilio toledano advierte para el futuro que, el que ordenare a un obispo en lugares donde nunca lo hubo, así como el ordenado, serán anatemas, y perderán ambos su grado. Nada se dice del obispo Esteban de Mérida, el consagrante. Pero lo lógico es pensar que, si Cuniuldo no fue condenado, el metropolitano emeritense sería perdonado, pues, al fin y al cabo, se presentó ante el concilio con un caso que pesaba sobre su conciencia, para descargo de la misma.

⁴⁵ *CT XII*, 4: «Sed quia... noveramus praedictum principem consilio levitatis agentem... consuetis oblationibus definisset, ut hinc in suburbio Toletano in ecclesia pretoriensi sanctorum Petri et Pauli episcopum ordinaret, necnon et in aliis vicis vel villulis similiter faceret».

⁴⁶ La abadía de Dumio fue obispado en la segunda mitad del siglo VI, siendo obispo San Martín. J. ORLANDIS, «Estudios sobre instituciones monásticas medievales», Pamplona 1971, 104.

El monasterio llamado de Máximo era sede de los obispos de Britonia. *Ibidem*, 108; P. DAVID, «Etudes historiques sur la Galice et le Portugal du VIème au XIIème siècles», Lisboa-Paris 1947, en el capítulo *Critique du Parochole*, 57-61.

⁴⁷ GARCIA MORENO, «Prosopografía», n° 231.

⁴⁸ *CT XII*, 4: «Item de sententia eorum qui huiusmodi ordinationes faciunt, vel de his qui contra haec instituta canonum ordinantur, ex concilio Tauritano titulo II, ubi dicit: 'Gestorum quoque serie coscribi placuit ad perpetem disciplinam quod circa Octavium, Ursionem, Remigium ac Treferium episcopos synodus sancta decrevit, qui in usurpationis quandam de ordinatione sacerdotum ad invidiam vocabantur, quod eatenus his videbitur indultum, ut de cetero hac auctoritate conmoniti nihil usurpare conentur...'. Proinde, iudicavit synodus, ut si quis ex hoc fecerit contra instituta maiorum sciat is qui ordinatus fuerit sacerdotii se honore privandum, et ille qui ordinaverit, auctoritatem se in ordinationibus vel in conciliis minime retenturum».

CAPITULO IV

JUICIOS SOBRE DISCIPLINA ECLESIASTICA, OBISPOS Y CLERIGOS

SUMARIO

10. Juicios sobre cuestiones de competencia episcopal
 - 10.1. Cuestiones de competencia litúrgica
 - 10.2. La competencia judicial del obispo
11. Juicios sobre cuestiones de comportamiento moral
 - 11.1. El caso mencionado por S. Isidoro en su carta a Eladio y los demás obispos
 - 11.2. El caso mencionado por el Concilio VIII de Toledo
 - 11.3. El juicio entre los obispos Marciano y Avencio
 - 11.4. El juicio al obispo Potamio de Braga
 - 11.5. El juicio del Concilio II de Sevilla contra el liberto Eliseo

Dentro de la categoría de juicios relativos a cuestiones de disciplina eclesiástica, se pueden separar dos tipos de causas:

- * las relativas a cuestiones de competencia episcopal, bien sea litúrgica, bien judicial
- * las que conciernen a comportamientos morales delictivos de los miembros de la Iglesia.

Se puede señalar, por llamativo, el hecho de que la mayoría de los casos ofrecidos, lo son por un sólo concilio, que además es provincial: el concilio II de Sevilla del año 619.

10. JUICIOS SOBRE CUESTIONES DE COMPETENCIA EPISCOPAL

10.1. *Cuestiones de competencia litúrgica*

10.1.1. En primer lugar, debe citarse por especial, una sentencia del concilio XIII de Toledo¹, donde se pronuncia la resolución de un litigio sobre un caso particular. Este consiste en una pregunta, planteada por el obispo de Valencia quien, estando gravemente enfermo, había recibido la penitencia pública y, una vez restablecido, preguntaba si podía seguir ejerciendo las funciones correspondientes a su grado eclesiástico². Después de una larga reflexión sobre el sentido y finalidad de la penitencia, se resuelve que, si bien el penitente queda apartado del mundo, no tiene sentido que se aparte de su actividad eclesiástica, pues ésta más bien le acerca a Dios³.

La sentencia resuelve de forma general, haciendo referencia a los antiguos cánones⁴, que el obispo o sacerdote que hubiese recibido la penitencia pública, no abandone el desempeño de su ministerio, pero bajo una condición: que no se hubiese confesado públicamente culpable de pecado mortal. No obstante, si fuera reo de tal pecado, pero no lo hubiese confesado públicamente, es libre de elegir entre abstenerse de su cargo o seguir en él.

Por lo tanto, el haber cometido un pecado mortal no es de suyo motivo de incapacidad para desempeñar las funciones eclesiásticas; pero sí lo es cuando, por ser conocido, causa escándalo.

10.1.2. El segundo caso de este apartado es el del can. 5 del concilio II de Sevilla: trata de la ordenación irregular de un presbítero y dos diáconos.

Un diácono de Cabra, oído sin duda en calidad de testigo, cuenta como el obispo de esa Iglesia no ejecutó más que una parte del ritual de la ordenación de tres clérigos: impuso las manos sobre ellos, pero encontrándose impedido por dolores en los ojos, fue un presbítero quien les impartió la bendición. El concilio insiste en la gravedad de la falta cometida por éste último⁵, y si no le juzga, es porque ha fallecido antes de celebrarse este juicio; sin embargo, no se abstiene de condenarle moralmente.

¹ *CT XIII*, 10.

² *CT XIII*, 10: «... utrum, accepta poenitentia, liceret sibi praecepta sui ordinis se contractare ministeria vel solita explere officia, per synodalia instructionis se maluit certificare responsa».

³ *CT XIII*, 10: «Poenitens enim abstinere a peccatis pariter et negotiorum secularium tumultibus debet, non ab iis quae sancta videntur et summa se abstrahere, quae operantem plus expiant quam conmaculando deturpant».

⁴ Por ejemplo, el can 4 del concilio de *Orange* (a. 441) permite que los clérigos que lo deseen puedan recibir la penitencia: «Poenitentiam desiderantibus clericis non negandum». HEFELE-LECLERC, «Histoire des Conciles», II,1, p. 348. Hay que interpretar este canon en el mismo sentido que el 10 del *CT XIII*: se permite a los clérigos hacer penitencia sin ser depuestos, a condición de no haber cometido una falta capital. Lo cual no contradice la *carta de Siricio a Himerio*, párrafo XIV, «P.L.», 84, 636: «... ut sicut poenitentiam agere cuiquam non conceditur clericorum», pues en este caso el papa se refiere a la penitencia, por un pecado capital.

⁵ El concilio, hablando de su actuación, la califica de «*praesumptionis audacia*»; y por ello, los ordenados recibieron el baldón de la ignominia. Ver nota siguiente.

Puede sorprender, en cambio, que no mencione al obispo; habrá que pensar que no había autorizado tal licencia del presbítero: de otra manera, se hubiera hecho corresponsable de la actuación incorrecta del presbítero y, por lo tanto, igualmente culpable.

La resolución es severa: los ordenados deben ser depuestos de sus grados, quizás en un juicio ulterior⁶: la redacción en este punto no deja muy claro si habla de este mismo juicio o de otro que deba celebrarse en el futuro, con el fin de juzgar especialmente a los ilícitamente ordenados.

Claramente se aprecia que se quiere evitar a toda costa que los presbíteros se atrevan a ordenar a otros, o a diáconos, buscando con esta sentencia y ante todo, la ejemplaridad. Pues en este caso, la calificación de *usurpatio*, que se da a la manera en que los ordenados han alcanzado su grado, no es evidente. En efecto, el presbítero no les ordenó de *motu proprio*, sino que el obispo tenía la intención de ordenarles; y no sólo éso: empezó la ordenación y si no llegó a terminar, no fue porque cambiase de opinión, sino porque fue impedido por algo extraño a su voluntad, y que no quitaba ningún mérito a los ordenandos.

Por lo tanto, aunque la ordenación fuere irregular, se podía haber mitigado la severidad del juicio, considerando que la intención del presbítero fue la de actuar por delegación -al menos tácita- del obispo; ya que no consta en ningún momento que éste se opusiera a ello.

10.1.3. El mismo concilio II de Sevilla refiere en su canon 7 otro juicio: el del obispo Agapio de Córdoba, el cual había delegado en varias ocasiones, en presbíteros, actos litúrgicos propios del orden episcopal: levantar altares y consagrar iglesias.

No se le juzga, porque probablemente había muerto ya: se dice que fue obispo de Córdoba tiempo atrás, pero no se le menciona como asistente al concilio, ni aparece entre los firmantes de las actas, como obispo de Córdoba ni de otra sede.

En todo caso, aun si hubiera estado presente, probablemente no hubiera sido condenado, pues se habla de él con mucha deferencia -«*venerabilissimum Agapium*». Además, el concilio explica que la causa de su error fue su ignorancia. No aclara si ésta sirve de disculpa en todos los casos, pero sí juzga que lo fue en éste, pues había sido promovido al rango episcopal directamente desde la vida militar.

El concilio, sin embargo, quiere naturalmente que se eviten en el futuro tales abusos, y con tal propósito enumera actos reservados al obispo, por lo tanto, prohibidos a los presbíteros:

⁶ C. *Sevilla II*, 5: «... hii qui supersunt et ab eo non consecrationis titulum, sed ignominiae potius eloquium perceperunt, ne sibi licentiam talis ultra usurpatio faciat, decrevimus ut gradu sacerdotalis vel levitici ordinis, quem perverse adepti sunt, depositi aequo iudicio abutantur».

- * la consagración de altares y su erección, apoyándose en el ejemplo del Antiguo Testamento, donde la erección de altar es reservada a Moisés como sumo sacerdote, dignidad equivalente, en los tiempos actuales, a la de obispo.

Sigue la enumeración, con base en la autoridad de la Ley antigua y de las recientes reglas eclesiásticas⁷:

- * la consagración de presbíteros, diáconos y vírgenes, porque no está permitido a los presbíteros infundir el Espíritu Paráclito mediante la imposición de las manos.
- * la erección, bendición y unción de un altar.
- * tampoco pueden preparar el crisma, ni ungir con él la frente de los bautizados, ni reconciliar a alguien públicamente en la misa, ni enviar a nadie cartas oficiales⁸.
- * no pueden los clérigos, en presencia del obispo, entrar en el baptisterio, ni ungir o signar a un niño, ni ofrecer el sacrificio del Cuerpo y la Sangre de Cristo, ni enseñar al pueblo, bendecir, saludar o exhortar a los fieles. En estos últimos casos, se trata de facultades inherentes al presbiterado, pero que no pueden ser ejercidas *praesente episcopo*.
- * tampoco pueden reconciliar a los penitentes sin mandato episcopal: aquí -en cambio- se trata de un poder que no tienen, pero que pueden recibir y ejercer por delegación.

10.1.4. En otro canon de este mismo concilio⁹ se expone el caso de la ordenación en Ecija de diáconos casados con viudas.

La sentencia resuelve que deben ser depuestos. El argumento es que tal ordenación es ilícita, aunque no se mencionen las leyes violadas, sino que, de manera general, se dice al final del canon que en adelante no deben ser promovidos al grado de diáconos quienes fueron designados contra el Derecho divino y eclesiástico¹⁰. Queda la duda de si tal prohibición se refiere solamente a este supuesto de diáconos casados con viudas, o si hay que entenderla de manera literal: para todos los casos de ordenaciones en contra de las leyes divinas y eclesiásticas, y, por lo tanto, si aquí se considera que se

⁷ *C. Sevilla II*, 7: «Nam quamvis cum episcopis plurima illis <los presbíteros> ministeriorum communis sit dispensatio, quaedam tamen auctoritate veteris legis, quaedam novellis ecclesiasticis regulis sibi prohibita noverint».

⁸ Las *epistolae formatae*, necesariamente utilizadas para los viajes que realizaban los diocesanos fuera de su diócesis, eran necesarias para ser admitidos a la comunión en cualquier lugar; pues se trataba de una garantía del obispo de que el diocesano en cuestión -tanto laico como clérigo- era buen cristiano. Ver J. TEJADA Y RAMIRO, «Colección de cánones de la Iglesia de España y de América», I, Madrid 1859, 81, en nota al *C. Antioquía*, 7.

⁹ *C. Sevilla II*, 4.

¹⁰ *Ibidem*: «... convenit... nec ultra provehi ad diaconii ministerium qui contra divina atque ecclesiastica iura instituti reperiuntur».

han violado a la vez estas dos clases de leyes (lo cual sería una inexactitud, pues las disposiciones sobre el matrimonio de los clérigos no son de Derecho divino) o solamente las eclesiásticas¹¹.

10.2. *La competencia judicial del obispo*

Sobre esta materia sólo cabe citar un juicio, también del concilio II de Sevilla¹²: un presbítero de la Iglesia de Córdoba, de nombre Fragitano, había sido depuesto por su obispo y condenado al destierro siendo inocente. El concilio le devuelve su grado, aunque no se aclara si es reintegrado a su Iglesia. Si el concilio revoca la sentencia del obispo, es porque era injusta, al probarse que Fragitano era inocente.

Pero debe advertirse aquí -aunque este punto será examinado con más detalle en el capítulo VI- que se plantea la cuestión de saber de qué tipo de instancia se trata: leyendo las primeras líneas de la sentencia, se tiene la impresión de que el concilio interviene como instancia normal de apelación; es decir, que si Fragitano hubiera sido culpable, como pretendía el obispo, el concilio hubiera aceptado la sentencia de éste, sin más.

Sin embargo, el resto del canon indica que, en casos de deposición de un presbítero, el concilio debe intervenir en primera instancia, pues el obispo no tiene potestad para deponer. Para hacer tal afirmación se razona por analogía, invocando un argumento del Derecho civil: de la misma manera que el señor puede conceder la libertad a su siervo, no tiene poder para quitársela después, sino que el liberto debe ser públicamente acusado ante los jueces en los tribunales. *A fortiori* -sin duda porque se considera que afecta de manera más grave a la dignidad el deponer a un clérigo de su grado que reducir a alguien a servidumbre- el obispo, si bien puede otorgar los poderes a los presbíteros y clérigos inferiores, no tiene autoridad para quitárselos.

Esos clérigos, pues, no podrán ser juzgados por un solo juez, sino que deberán ser acusados ante el tribunal conciliar y juzgados por éste.

Ha de aclararse, a modo de inciso, que no queda muy claro en el canon si el obispo carece del poder de deponer solamente a los presbíteros y diáconos, o también a los clérigos inferiores, pues en un sitio se dice una cosa, y en otro, otra¹³.

El concilio, sin invocar aquí ninguna legislación eclesiástica, consideró oportuno dar las razones por las que se inclinó a juzgar en este sentido: la experiencia ha demostrado el peligro de arbitrariedad que suponían los juicios abiertos a los clérigos por su obispo¹⁴, pues muchas veces éste juzga movido por la pasión, y sin atender a las pruebas.

¹¹ Varias disposiciones conciliares establecen esa prohibición de ordenar diáconos a los casados con viudas, especialmente *CT I*, 3.

¹² *C. Sevilla II*, 6.

¹³ En el mismo concilio y canon de la nota anterior, se dice primero: «... decrevimus, ut iuxta priscorum patrum synodalem sententiam, nullus nostrum sine concilii examine deiciendum quemlibet presbyterum vel diaconum audeat». Y más adelante: «Episcopus enim presbyteris ac ministris solus honorem dare potest, auferre solus non potest».

¹⁴ *C. Sevilla II*, 6: «... nam multi sunt qui indiscussis potestate tyrannica, non auctoritate canonica, damnant, et sicut nonnullos gratiae favore sublimant, ita quosdam odio invidiaque permoti humiliant et ad levem opinionis auram condemnant, quorum crimen non adprobant».

11. JUICIOS SOBRE CUESTIONES DE COMPORTAMIENTO MORAL

Casi todos los casos sobre cuestiones relativas al comportamiento moral, conciernen a los obispos.

De uno de ellos -como se verá- solamente se tiene una noticia, y su existencia es hipotética, pues no aparece en las actas de los concilios. Otro es mencionado en un concilio, pero no existe constancia de la sentencia.

Otro juicio -muy célebre- podría estudiarse en este apartado: el del primado Sisberto, juzgado en el Concilio XVI de Toledo por conspirar contra el rey Egica; pero será estudiado en el capítulo VIII, dado el carácter también político del delito.

Antes de analizar los juicios referidos en las actas de los concilios, es preciso hacer alguna observación sobre los casos antes mencionados: uno, que pudo haber sido examinado en un hipotético concilio de Toledo entre los años 615 y 633; el otro, mencionado en el *CT VIII*.

11.1. *El caso mencionado por S. Isidoro en su carta a Eladio y a los demás obispos*

En una carta de San Isidoro al obispo Eladio de Toledo¹⁵, cuya autenticidad, por otra parte, ha sido discutida¹⁶, el obispo de Sevilla comenta y remite el caso de un obispo de Córdoba¹⁷ quien, ha caído en un pecado carnal -y quizá no siente remordimiento alguno¹⁸- y le pide que le deponga en un juicio conciliar, según las reglas canónicas¹⁹.

Si es auténtica la carta, y cierto cuanto en ella se refiere, se plantea la cuestión de saber por qué, tratándose de un obispo de la Bética, no se examina su caso en esa provincia.

La carta de S. Isidoro no tiene fecha²⁰. Pudo ser escrita entre el año 615 y el concilio de la Bética (622-624), donde se juzgó al obispo Marciano de Ecija y se le condenó injustamente²¹. En tal caso, resulta difícil explicar por qué no se quiso juzgar al

¹⁵ *Epistola V Isidori Helladio aliisque episcopis*, «P.L.», 83, 902.

¹⁶ Sobre la autenticidad, ver «P.L.», 81, 500-503. SEJOURNE la considera más bien auténtica, «St. Isidore de Séville», 78 s.

¹⁷ S. ISIDORO, *Epistola V*: «Afflicimur lacrymis... cum ruinam fratris agnoscimus, quia sicut de salute laetitiam, ita de periculo animae gemitus est. Cognovimus enim Hispalensem Cordubensis ecclesiae sacerdotem in pontificali, carnali labe dilapsus...»

¹⁸ Ver nota 17, donde la frase «quia sicut... gemitus est» quizá pudiera interpretarse en tal sentido; aunque puede simplemente querer reflejar literariamente el estado de ánimo de quien se alegra por la salvación de un hermano, y gime por el peligro en que se halla su alma. En todo caso, parece que el obispo no se ha arrepentido de su pecado, ni reconciliado con la Iglesia, cuando Isidoro escribe a Eladio.

¹⁹ *Ibidem*: «... vestram sanctitatem deposcimus, ut idem lapsus sancto coetui vestro praesentamus, agnito a nobis confessionis eloquio, synodali sententia a gradu sacerdotii deponatur».

²⁰ Tuvo que ser escrita entre los años 615 y 633, en que Eladio fue obispo de Toledo. GARCIA MORENO, «Prosopografía», n° 245.

²¹ Ver epígrafe 11.3, donde se trata de este asunto.

obispo cordobés en la Bética. Por el contrario, si la carta fue escrita después de ese concilio -como piensa Orlandis²²- sí cabe encontrar un motivo para que fuera trasladado el caso a otra provincia: el no repetir la lamentable experiencia del juicio y deposición de un obispo, sobre todo, después de lo bochornoso que fue el de Marciano.

Piensa Orlandis que S. Isidoro, basándose en la regla recogida en los *Capitula Martini*²³, según la cual si en un juicio contra un obispo, sus comprovinciales tenían criterios diferentes, debía llamarse a un metropolitano vecino, para que decidiese lo más acertado según la ley canónica. Debe decirse que aquí, S. Isidoro se dirige no sólo al metropolitano Eladio, sino también a los demás obispos -*Epistola Isidori Helladio aliisque episcopis*. Y además, que no hubo un primer juicio donde se hubiesen manifestado discrepancias entre los comprovinciales del obispo de Córdoba.

Existe también otra posibilidad: que la carta fuera escrita poco antes del 633, fecha de la reunión del Concilio IV de Toledo. Entonces no sería nada extraño que se remitiera la causa para que fuera examinada en un concilio el cual, por ser nacional, era sin duda alguna competente.

Una objeción se puede oponer a esta hipótesis: S. Isidoro se dirige a Eladio y a los demás obispos como si éstos fuesen los que van a tener que juzgar²⁴, sin incluirse entre ellos, cuando se trata de un concilio general, que además presidiría él mismo. Pero fácilmente se comprende que, con la carta, lo que hace S. Isidoro es informar a sus hermanos en el episcopado, y pedirles²⁵ que juzguen en el sentido que él indica; por lo tanto, en este contexto, es normal que no aluda al hecho de que él debía juzgar junto con Eladio y los demás.

Por otra parte, existe un indicio que permite pensar que este caso fue tratado de alguna manera en el *CT IV*: si no consta que la asamblea juzgase al obispo de Córdoba, conviene sin embargo fijarse en que el canon 21 recuerda que los obispos -sólo habla de ellos- deben vivir alejados de todo contacto carnal. No cabe duda de que, si se consideró preciso recordar ese precepto, fue porque las circunstancias lo pedían; y si sólo se mencionó a los obispos, fue porque la falta había sido cometida por uno de ellos, posiblemente el obispo de Córdoba.

Si las cosas ocurrieron así, tal vez no fue juzgado por haber fallecido entre tanto, o por haberse arrepentido; o incluso por la repugnancia que manifiestan los concilios a dar publicidad a las faltas de los obispos, y a declarar la deposición de uno de ellos, como se vé en varios casos²⁶ tratados en este mismo capítulo.

²² J. ORLANDIS, «La Iglesia en la España visigótica y medieval», Pamplona 1976, 82 s.

²³ *Capitula Martini*, 13: «De dissensione iudicii».

²⁴ S. ISIDORO, *Epistola V*: «Melius est illi ut temporaliter iudicetur a vobis, quam aeterno damnetur iudicio». Ver también nota 19.

²⁵ Ver notas 17 y 19.

²⁶ Así, el del *CT VIII*, 4, tratado en epígrafe 11.2; el del obispo Potamio del *CT X*, en epígrafe 11.4; y, especialmente, el juicio entre los obispos Marciano y Avencio, examinado por el *CT VI*, en el epígrafe 11.3.

11.2. *El caso mencionado por el Concilio VIII de Toledo*

El Concilio VIII de Toledo, en su canon 4, trata o más bien menciona un caso similar al anterior: la caída de un obispo en pecado carnal.

Los hechos, no son dudosos, pero la redacción del texto no deja claro si hubo juicio: más bien parece indicar que se perdonó el juicio al obispo en cuestión; si no fue así, lo cierto es que las actas no refieren la vista ni la sentencia del caso²⁷.

Cabe preguntarse, en el caso de que el obispo no fuera juzgado, el por qué de esta actitud conciliar. Pudo deberse a la benevolencia, caso de constatar que el culpable se había arrepentido. Pero quizá, y más probablemente, la verdadera razón fuese el no airear en exceso un asunto escandaloso: esta es una actitud permanente en el colegio episcopal, como se vé a lo largo de todo este capítulo.

En cualquier caso, el concilio no quiere que se entienda su benevolencia en esa circunstancia concreta como una muestra de tolerancia para este tipo de faltas, que califica del modo más severo²⁸; al par que anuncia que, en el futuro, a los obispos que cometiesen tales faltas, e incluso a los que tuviesen especiales familiaridades con las mujeres, se les aplicaría irrevocablemente la sentencia de los Padres: ser privados de la dignidad de su orden, así como de su lugar²⁹. En esta ocasión, como en alguna otra³⁰, se intenta contrarrestar el efecto de relajación que pudiera producir la clemencia, con la amenaza de un irremisible rigor para el futuro.

11.3. *El juicio entre los obispos Marciano y Avencio*

El caso que va a examinarse ahora es, en cambio, extremadamente rico en información, no sólo por los muchos detalles que se dan sobre el desarrollo del proceso, sino porque éste fue visto nada menos que tres veces: en primera instancia por un concilio de la Bética -que debió celebrarse entre los años 622 y 624-, en una primera apelación por el Concilio IV de Toledo y, en una segunda apelación, por el Concilio VI de Toledo.

Lo que sabemos de la historia de ese proceso, desde el principio, proviene solamente del relato efectuado por el *CT VI*³¹. Por tal razón, la cronología de los acontecimientos resulta a menudo confusa, a parte de que la redacción es particularmente oscura³².

²⁷ No sería muy extraño, pues en otras ocasiones un concilio llevó a cabo un juicio que no fue reproducido en las actas. Por ejemplo, las del *CT IV* no reproducen la vista en apelación del juicio entre los obispos Marciano y Avencio.

²⁸ *CT VIII*, 4: «Si deinceps episcopi detecti fuerint execrabilibus flagitiis cum quibuslibet foeminis pollui ac familiariter peculiaritate versari, noverint se irrevocabili sententia patrum ulcisci, id est, de loci et ordinis sui dignitate privari».

²⁹ Ver nota 28.

³⁰ Ver el caso del obispo Potamio, *CT X*, en el epígrafe 11,4.

³¹ Aunque el juicio esté datado en el mismo día que el concilio: 9 de enero del 638, no está incluido en las actas de éste, sino en un documento separado, titulado *Exemplar iudicii inter Martianum et Habentium Episcopos...*, publicado en E. FLOREZ, «España Sagrada», XV, Madrid 1759, primeras páginas sin numerar.

³² Si bien existe una traducción de este *Exemplar* en la obra ya mencionada de TEJADA Y RAMIRO, «Concilios», II, Madrid 1859, 326-330, se ofrece en apéndice una nueva traducción del texto, por apreciarse que algunas frases podían entenderse de manera algo diferente.

El precitado concilio de la Bética examinó el caso de un cierto Marciano, obispo de Ecija, acusado maliciosamente por otro, de nombre Avencio, quien ambicionaba su silla, de diversos crímenes: haber consultado a un adivino, haber tenido familiaridades sospechosas con una criada y haber hablado en contra del rey.

Avencio, por medio de testigos falsos, logró convencer al concilio, quien depuso a Marciano de su rango y de su sede, consiguiendo así el primero lo que ambicionaba: ser nombrado para ocupar el lugar del inculpado.

Como este caso, por su complejidad, interesa desde diferentes puntos de vista, en este capítulo se estudiará lo que concierne a la materia de la acusación, dejando para el capítulo VI las informaciones que han podido obtenerse sobre la cuestión de las apelaciones al concilio.

La superposición -en una misma sentencia- de todo lo ocurrido desde el primer juicio hace inevitable ordenar en primer lugar los hechos cronológicamente antes de analizar el proceso, para clarificarlos en la medida de lo posible.

11.3.1. *Reconstitución de las instancias sucesivas*

Fue un diácono llamado Timoteo quien urdió en favor de Avencio una conspiración para arrebatarse la silla episcopal a Marciano, obispo de Ecija. A raíz de lo cual, diversas personas se comprometieron con Avencio a mentir sobre las actuaciones de Marciano y a serle siempre hostiles.

Ciertos testigos, pues, recitan de memoria en el juicio de primera instancia -concilio de la Bética- un testimonio que otros han escrito a tal efecto. Uno de los testigos, de nombre Recesvindo, que aún no tenía 14 años, dijo que Marciano había convocado a una adivina llamada Simplicia, para interrogarle sobre la vida del rey y la suya, en presencia de un cierto Dormicio. Estos dos testificaron cosas que les habían sido dictadas.

Por otra parte dos mujeres, de nombres Franca y Honorata, testificaron mediante un escrito que fue leído en el juicio, -cuyo contenido desconocían, pues no sabían leer- donde se refería que Simplicia (la adivina) se había quedado sola en compañía del obispo después de que ellas dos se hubieron marchado, y que habían oído ciertas cosas, que no se precisan, pero que sin duda eran comprometedoras para el obispo.

Otros testigos dijeron que habían visto a una criada, llamada Ustania, entrar en la habitación del obispo.

Luego, se imputan a Marciano murmuraciones contra el rey que se le imputan a Marciano. Quizás -aunque no está muy claro- a propósito de éstas, la esclava Bonella, interrogada en secreto y bajo tormento, testifica en Ecija contra el obispo, y luego, en Sevilla, afirma que los hechos se habían producido en un día diferente.

Finalmente cuatro clérigos -Trasorio, Esteban, Adeodato y Hospital- obligados con Avencio por un pacto de fidelidad, y por medio del diácono Timoteo, habían acep-

tado las condiciones según las cuales testificaron Recesvindo y Dormicio, cuyo contenido desconocían, pero que les obligaban a decir muchas falsedades contra Marciano.

Después de esta vista en primera instancia, a resultas de la cual Marciano fue depuesto de su rango y de su sede, aunque no por opinión unánime de los jueces, aquél no tuvo la posibilidad de recurrir la decisión conciliar durante el año siguiente.

Apeló, por fin, la sentencia ante el Concilio IV de Toledo, y fue repuesto por éste en su rango, aunque no reintegrado a su sede. La razón entonces dada para esa revisión parcial del primer proceso fue el poco tiempo que el Concilio IV tuvo para examinar el asunto.

El Concilio VI de Toledo volvió a examinar el proceso en apelación, pues Marciano insistía en ser repuesto en su sede, una vez recuperado su rango.

Había entre los conciliares quienes consideraban, desde el principio, que Marciano había sido injustamente tratado, y por ello pidieron a Avencio y a quienes condenaron a aquél, la entrega de los documentos del proceso. Pero los requeridos se negaron, alegando no saber quién los custodiaba en secreto.

Finalmente, habiendo aparecido unos documentos reconocidos por todos como auténticos, los obispos supervivientes del primer juicio, los sucesores de los fallecidos y el resto de los obispos del concilio, decidieron que el juicio fuese revisado, volviendo a oír a los testigos.

El concilio ataja desde el primer momento el vicio de forma que podía ser alegado por Avencio y sus secuaces, en el sentido de que la apelación debía ser interpuesta en el plazo de un año, a contar desde la primera sentencia, declarando que no puede apreciarse, ya que Marciano no tuvo posibilidad de recurrir entonces.

La asamblea llama a una serie de testigos coetáneos del obispo Marciano³³. En primer lugar, el diácono Eulalio acaba confesando la conspiración urdida contra el obispo, en la cual participó. Y como prueba de ello, se hace traer por Avencio escritos de diversas obligaciones, por las cuales Eulalio se había asociado con el propio Avencio, comprometiéndose a mostrarse siempre hostil a Marciano en todas sus declaraciones.

Pero ésto es contrario, tanto a los cánones como a las leyes, ya que, como lee el propio Eulalio ante los conciliares, nada puede estipularse en contra de las leyes y de las buenas costumbres. Se alega también el canon 7 del concilio de Lérida, que condena al que se obligase con juramento a una hostilidad perpetua con su colitigante, debiendo volver a la caridad cuanto antes.

El examen que a continuación se hace -uno a uno- de los antiguos testigos, reveló sus mentiras, redactadas por otros, y que habían aprendido de memoria.

³³ *Exemplar iudicii*: «... accusatores praefati Martiani episcopi coevi nostro adducti sunt». Es decir, testigos de la época en que Marciano era obispo de Ecija, y se celebró el primer juicio.

Se trajo ante el sínodo a Recesvindo, quien afirmó bajo juramento no haber oído decir a Marciano nada de lo que dijo en su primer testimonio, pero afirmó haber recitado unas *noticias*, pues había sido obligado a ello bajo amenaza.

A parte de ésto, dos testigos llamados Scivila y Gundulfo, testificaron que Recesvindo no tenía 14 años -sin duda en el primer juicio- y que por ello, quedaba enervado el testimonio de Dormicio, devenido único testigo, y fue ilícito tenerlo en cuenta.

Franca y Honorata, por su parte, dijeron que la adivina Simplicia no se había quedado sola con el obispo, y que no habían oído en realidad lo que manifestaron en su primer testimonio. Esta vez testificaban oralmente, y ha de darse mayor valor a esta declaración que a la anterior, que fue la lectura de un escrito pretendidamente suyo, y en el que fueron engañadas, pues no sabían leer.

Dijeron ambas también que no se hubiera debido de tomar en consideración semejante acusación contra un pontífice, cuando provenía de personas de tan poca categoría.

En cuanto a la criada Ustania, un presbítero llamado Gregorio testificó que le había visto entrar en la habitación del obispo, como otros lo habían afirmado antaño³⁴. Pero tres testigos -el presbítero Tonanto, el diácono Juan y el subdiácono Loaila- dijeron que una vez que Marciano fue obispo, la criada en cuestión nunca tuvo las llaves de la habitación de éste: quien sí las tuvo fue su hermano Velesario, al objeto de cuidar de esa habitación, y que Ustania nunca fue camarera del obispo.

Sobre el asunto de las murmuraciones contra el rey, también apareció la falsedad de tal imputación.

Del testimonio de Bonella, se subraya su contradicción, así como su carencia de valor, por provenir de una esclava.

Aunque es posible que hubiese habido alguna otra imputación³⁵, sí se deja claro que no hay prueba de ninguna falta.

Es más, el concilio no se recata en afirmar que ha encontrado tanto vileza como malicia en las actuaciones de los acusadores de Marciano.

Son traídos al juicio los clérigos Trasoario, Esteban, Adeodato y Hospital, y les son devueltos los pactos que les ligaban a Avencio -y que éste trae al concilio- según los cuales debían testificar en falso contra Marciano.

En cuanto al artífice de todo, el diácono Timoteo, acaba por confesar su participación en la fabricación de las acusaciones de falsos crímenes, con lo cual queda demostrada la falsedad de éstos.

³⁴ Parece que Gregorio es un testigo nuevo, que aparece por primera vez en el *CT VI*.

³⁵ *Exemplar iudicii*: «Cetera vero ac singula quae nobis data fuerunt ad relegendum perquirentes, non culpas unde diceretur invenire potuimus, sed inquisitiones vilissimas et malivolas apertissime reperimus». De esta frase poco explícita se puede deducir que sí se formularon otras acusaciones (*cetera*) contra Marciano.

Y a propósito del pacto sobre la sede episcopal, se recuerda el canon 18 del concilio de Calcedonia, que prohíbe esa clase de conspiraciones, pues si las conjuras están prohibidas por las leyes civiles, con mayor razón deben ser castigadas en la Iglesia.

Después de esta consideración, aparecen dos personajes -Gonderes y Nepociano- acusados por Avencio de falsos crímenes contra el rey Sisenando, de cuya revisión de causa estaba encargado el concilio. Este pide su opinión a los instructores de esa causa, los cuales, considerando al uno culpable y al otro inocente, opinaron que Avencio debía ser desposeído de la sede, debiendo ser ésta devuelta a Marciano.

Los obispos aceptan esta sugerencia, que presentan como una «mejora» de la sentencia. Y deciden, además, que Avencio quede sometido a Marciano para hacer penitencia, aunque conservando su grado. Aunque no sabemos cómo se desarrolló esta nueva etapa de las relaciones entre ambos obispos, quizá no sea aventurado suponer que la vida de Avencio no resultó, a partir de entonces, muy llevadera.

Los jueces del concilio hispalense son exculpados, al haber sido engañados por los testigos y, por tanto, haber juzgado de buena fé. Se prohíbe a Marciano y Avencio recurrir contra éstos. Si lo hicieren, o apelaren de la última sentencia, perderían su grado y serían excomulgados.

No se menciona ningún castigo para los falsos testigos.

11.3.2. *Consideraciones sobre los distintos procesos*

Esta es, pues, la historia de una conjura, ideada por un obispo para quitar a otro su sede y coparla en su lugar. Se basa en falsos testimonios que, considerados válidos en primera instancia, son reexaminados uno por uno en la segunda revisión del proceso, efectuada por el Concilio VI de Toledo unos 15 años después. En la revisión del Concilio IV de Toledo, se ignora cómo se procedió.

Procede, antes de seguir adelante hacer algunas observaciones sobre la apreciación de las pruebas. En efecto, llama la atención la falta de rigor que manifiestan los jueces de primera instancia a la hora de aceptar los testimonios. Veamos cómo procedieron:

- * se admitió el testimonio de Recesvindo, que era entonces menor de 14 años.
- * también se recibió el de Dormicio, indebidamente, pues al ser el único en edad de testificar, no debió ser oído.
- * se admitió el testimonio escrito de dos mujeres -Franca y Honorata- que no sabían leer. Y no se les citó para comprobar si, siendo analfabetas, el documento escrito que pretendidamente contenía su declaración, coincidía con lo que efectivamente éstas habían manifestado. De haberlo hecho, se hubiera visto que no era así, ya que luego dijeron que no sabían lo que estaba escrito.

- * si en el *CT VI* los testimonios se producen bajo juramento -lo cual se dice expresamente para casi todos- no es seguro que ocurriese lo mismo en la primera instancia. Para los de Franca y Honorata se dice claramente que no: ellas insisten en que esta vez han testificado bajo juramento, no como la anterior, en donde se leyó un escrito.
- * se admitió también el testimonio de Bonella, que era contradictorio, y además, por ser esclava, su testimonio no debió ser admitido, ya que el concilio VII de Cartago, can. 2, prohibía expresamente a los siervos ser acusadores, salvo en causas propias. Con este interrogatorio en secreto -aunque fuera bajo tormento- quizá se tratase de evitar que se supiera que Bonella era esclava³⁶.
- * repasando el primer juicio, el *CT VI* reconoce que ha encontrado *inquisitiones vilissimas et malevolas*³⁷.

Este concilio, que pone de manifiesto todas estas anomalías, que demuestran la falsedad de las pruebas exgrimidas antaño contra Marciano, rechaza con una argumentación menos sólida la acusación relativa a sus relaciones con la criada Ustania. Sigue contando, a este efecto, la declaración que presenta en este juicio de apelación el presbítero Gregorio, quien sostiene -al igual que otros lo hicieran en primera instancia- que la vio entrar en los aposentos del obispo.

Pero se admite como prueba contraria el testimonio de tres clérigos -Tonanto, Juan y Loaila- según el cual Ustania nunca tuvo las llaves del aposento, aunque sí las tenía su hermano, ni nunca fue camarera del obispo. Que no fuese camarera, no demuestra que no pudiese entrar en esa habitación; que no tuviera las llaves, quizás lo hiciese más difícil, pero al tenerlas su propio hermano, eliminaba -en alguna medida- la dificultad de su obtención. Nunca se insinuó que el aposento pudiera ser abierto desde dentro...

Después de conocer los hechos que se juzgaron en el concilio de la Bética, así como la manera en que fueron juzgados, veamos lo que puede decirse sobre la sentencia de apelación del Concilio VI de Toledo.

Es indiscutible que los jueces se mostraron benévolos. Por una parte, con los culpables de la conspiración: no se menciona el castigo para los falsos testigos. Sin embargo, merece la pena subrayar -por otra parte- una frase que condena moralmente a una parte de ellos: los seglares, queriendo designarles como principales responsables de la injusticia cometida contra Marciano. Dice la asamblea de obispos:

³⁶ Sabemos, aunque se trata de algunos años más tarde, que según las leyes de Chindasvinto, solamente podía darse crédito a las declaraciones de los siervos ordinarios en juicios criminales, contra su dueño o contra terceros, si habían sido confirmadas bajo tormento. en cambio, los libres sólo podían ser torturados como reos y no como testigos. G. MARTINEZ DIEZ, «La tortura judicial en la legislación histórica española», *AHDE*, 32, 1962, 223-300, en especial, 241 s.

Ver también el capítulo II, epígrafe 7.1.

³⁷ Ver nota 35.

«*siquidem ... legitimus episcoporum numerus eum <Marciano> invenerit importunitate potius saecularium omni dignitate privatum*».

Imputación que no deja de ser asombrosa, cuando se sabe que la idea y la iniciativa de la conjura no salieron de un seglar, sino nada menos que de un obispo, Avencio, ayudado por el diácono Timoteo. Estos dos no hicieron otra cosa que coaccionar a terceras personas -sobre todo seglares- para quienes los eclesiásticos -sobre todo si había un obispo de por medio- representaban la más alta autoridad moral. Siendo, además, casi todos ellos gente sin instrucción, su responsabilidad en los hechos es ínfima en comparación con la de los eclesiásticos que participaron en la conspiración y, ante todo, los que la planificaron. Por ello seguramente, a pesar de que la ley visigoda indica que los perjuros «*animas suas periurio necant*» (LV, II,4,14), no se menciona que se haya castigado a los falsos testigos, pues hubiera sido manifiestamente injusto, sobre todo para los seglares. Se sabe también que, al menos, algunos testigos no habían prestado juramento la primera vez.

En cuanto al trato dispensado a Avencio, no parece tampoco muy riguroso, puesto que no se le aplica el castigo previsto por el canon 18 del concilio de Calcedonia para este tipo de delitos, y que cita la propia sentencia: la pérdida del grado. En efecto, Avencio es solamente depuesto de su sede -no hay otro remedio- pero no del rango episcopal. No es seguro, sin embargo, que la razón de esta clemencia haya sido un exceso de simpatía de los conciliares hacia Avencio, sino más bien la razón de siempre: procurar que el escándalo alcanzase lo menos posible a un obispo, pues, en efecto, resulta muy llamativo degradarlo.

Esta impresión se basa en dos datos: el mismo concilio, explicando los motivos de la moderación de su sentencia, reconoce que quiere evitar el escándalo³⁸. Por otra parte, la pena impuesta a Avencio, de hacer penitencia bajo la vigilancia de Marciano -las condiciones exactas se ignoran- corre el peligro de ser rigurosa, pues equivale a exponerle a la venganza de quien fuera su víctima durante tantos años.

Respecto a los obispos-jueces en primera instancia, sin duda con el mismo deseo de preservar el buen ejemplo que debía dar la Iglesia, se dictamina que fueron engañados, cuando en realidad obraron -según se ha visto- cuando menos con ligereza. Y parece que tienen conciencia de su proceder, cuando se niegan a entregar o buscar los ejemplares del juicio de primera instancia. Por éso, a pesar de la presunción de inocencia establecida en el concilio III de Cartago, canon 10, en favor de los jueces de 1ª instancia, CT VI insiste en declarar esa inocencia, pues no era descartable que alguien quisiera probar lo contrario.

Finalmente, debe señalarse que los padres conciliares consideran oportuno o necesario -dadas las circunstancias- afirmar el talante de la Iglesia como ejemplo de justicia: ésta no se avergüenza nunca a la hora de reexaminar una sentencia; quizá para que

³⁸ *Exemplar iudicii*: «... iudicii nostri formulam, quam pro pace ecclesiae et scandali remotione volumus temperare».

no se interprete mal la actitud del *CT IV*, quien revisó sólo parcialmente el juicio del concilio de la Bética, o la de los obispos supervivientes de ese mismo concilio, a la hora de facilitar sus actas.

Hace sonreír el eufemismo según el cual el juicio de apelación «mejoró» la primera sentencia³⁹, como si ésta hubiese tenido algo de bueno.

11.4. *El juicio al obispo Potamio de Braga*

El siguiente caso a estudiar en este apartado es el de un juicio que tuvo lugar en el concilio X de Toledo⁴⁰ al obispo Potamio de Braga. Este, en una carta enviada al concilio, se acusa a sí mismo de haber cometido un grave pecado carnal con una mujer: el sustantivo empleado es *stuprum*.

Los padres conciliares le convocaron en secreto para oírle confirmar de viva voz esta confesión. Potamio aseguró haberla efectuado voluntariamente y sin coacción, y, además, haberse privado él mismo del gobierno de su iglesia desde hacía nueve meses, para recluirse haciendo penitencia. Puede adelantarse desde ahora que la sentencia le condena a hacer penitencia perpetua.

Lo que quizás sea más llamativo en el desarrollo del proceso es la manifiesta -y comprensible- repugnancia de los conciliares ante la publicidad de un asunto de esta naturaleza, que afectaba a un obispo. En efecto, si el caso se examina es porque Potamio se había denunciado a sí mismo. Puede ser que nadie estuviese enterado de su culpa, pero también que se hubiera preferido ignorarla.

Por otra parte, se toman las precauciones para que no haya duda sobre la veracidad de la falta que afectaba al obispo y metropolitano, así como para evitar la publicidad de semejante asunto, mientras quede la duda: en efecto, no se considera suficiente la confesión por carta, y se le interroga con la esperanza de encontrar algún vicio que pudiera invalidarla⁴¹, como la coacción. El interrogatorio se lleva a cabo de manera no pública.

Es posible que, insistiendo así en la incredulidad de los padres conciliares ante esa falta, se quiera dejar claro que se trataba de un caso excepcional, casi inverosímil. Aunque sea dudoso que, en realidad, estén tan sorprendidos, pues las faltas de esta naturaleza, más o menos graves, no debían ser raras. Así lo muestran estas sentencias referentes a obispos: en todas ellas se alude a pecados carnales. Además, ha de tenerse en cuenta el elevado número de cánones normativos que tratan de esta materia.

³⁹ *Ibidem*: «Meliori <eorum?> iudicio consona voca praebentes assensum, robur conferimus, Deo confirmante, perpetuis temporibus valiturum».

⁴⁰ *CT X*, anexo. «Item, Decretum pro Potamio episcopo in eodem concilio».

⁴¹ *Ibidem*: «Rursum sub divini nominis contestatione hunc adiuvantes obtestati sumus, ut si non de se sponte mendacium diceret, aut alicujus violentiae proventu perterribus talia enarraret, veraciter indicaret».

Pero, vista la confirmación de Potamio, los obispos no tienen más remedio que condenarle. Sin embargo, le aplican una pena más benévola que la prescrita por la tradición de los Padres, que prevé -como lo recoge el concilio- la deposición del cargo: aquí se dice que no se le priva del nombre del honor⁴², con lo que parece que no pierde su grado de obispo, aunque sí su sede.

En definitiva, la pena infligida no es otra que la que él mismo ha elegido: la vida de penitencia, aunque aquí se precisa que es perpetua.

Puede pensarse que si Potamio no se hubiera obstinado en ser juzgado, se hubiese actuado -conocida su falta por el concilio- en la misma línea que la del caso ya expuesto del Concilio VIII de Toledo⁴³, el cual -al parecer- se abstuvo de juzgar al obispo caído en un pecado del mismo género.

Y también es interesante subrayar que, si el concilio incluye la sentencia en sus actas, es porque está obligado a hacerlo: para que conste que Potamio ha sido depuesto de su sede, y evitar juicios futuros⁴⁴.

Para substituir a Potamio en la sede metropolitana de Braga, el concilio designó como sucesor a S. Fructuoso, ya abad-obispo de Dumio, dándose el caso peculiar de un obispo titular de dos sedes⁴⁵.

Finalmente, como en alguna otra ocasión, puesto que se ha juzgado con benevolencia, se recuerda la normativa que castiga más severamente, previendo que serán removidos del Orden los diáconos, presbíteros y obispos culpables de un pecado mortal.

Seguramente por tal razón, se juzga necesario insistir en que los que se acusaren a sí mismos de esas faltas -como ha sucedido en el presente caso- no podrán ser absueltos, sino removidos de su grado. Se quiere con ello dejar claro que esta sentencia, bastante indulgente, quiere presentarse como excepcional, subrayando el final del canon que los obispos han obrado con misericordia, e insistiendo en que existen otras muchas normas para castigar tal abuso, que se podían haber citado. Se dice que no se han traído a colación porque los jueces no querían parecer demasiado crueles; aunque parece probable que también fuese para no dramatizar más el caso.

11.5. *El juicio del concilio II de Sevilla contra el liberto Eliseo*

El último juicio que corresponde examinar aquí es el que se vio en el concilio II de Sevilla⁴⁶. Refiere el caso de un cierto Eliseo quien, aunque no era clérigo, sí perte-

⁴² *Ibidem*: «... et licet hunc antiquitas paterna sacris regulis deicere ab honore decerneret, nos tamen miserationis iura servantes, non abstulimus nomen honoris».

⁴³ Ver epígrafe 11.2 de este capítulo.

⁴⁴ *CT X*, anexo: «Quia vero ad futurum prospicere convenit, ne exoriri in statu pacis possit quaedam commotio litis, patrum sententiam, quae iam dictum Potamium episcopum rectitudine damnat, huic decreto conectere vigilantia nostra procurat».

⁴⁵ Parece que S. Martín de Dumio, fundador de la abadía de este nombre, y luego obispo de ese mismo monasterio, no dejó de serlo al ser nombrado obispo metropolitano de Braga. J. ORLANDIS, «Estudios sobre instituciones monásticas medievales», Pamplona 1971, 104.

⁴⁶ *C. Sevilla II*, 8.

necía a la familia de la Iglesia de Cabra. Después de ser manumitido por su obispo, se empleó en malas acciones contra su iglesia patronal y su obispo, llegando incluso a intentar envenenarle.

Se dirige contra él -no se precisa quién es la parte actora- la acción de ingratitud, invocando a la vez la legislación canónica y la civil, como en muchas otras ocasiones. La pena infligida es la pérdida de la libertad, y la vuelta a la servidumbre.

Se puede subrayar, de paso, que este caso es un ejemplo de la aplicación de un principio jurídico, manifestado en el canon 6 de este mismo concilio: el que tiene poder para manumitir a un siervo, no lo tiene para quitarle esa libertad, sino que ello queda reservado a un tribunal.

En cuanto al contenido de la sentencia, el motivo de la elección de este castigo es que la actitud de Eliseo manifestaba que la libertad le había sido perniciosa, pues no había sabido emplearla para bien. Por lo tanto, le sentaba mejor la servidumbre⁴⁷, estado en el cual haría lo que se le mandase, y no lo que quisiese.

Pero no deja de ser sorprendente que, para los delitos de la naturaleza de los cometidos por Eliseo, sobre todo el intento de envenenamiento, se hable sólo de ingratitud y no se piense en otra pena más severa. Esto hace pensar que tal vez Eliseo tenía sus razones para vengarse de los malos tratos anteriores a su manumisión, lo cual no sería cosa insólita⁴⁸.

Si fue así, resulta chocante que no se indique. Pero es que, posiblemente, la sentencia constituye una especie de compromiso: no se mencionan los motivos de venganza que pudiera tener Eliseo, pero en cambio, sólo es acusado de ingratitud.

Parece, pues, que el juicio debe interpretarse de la siguiente manera: no se juzgan los crímenes que cometió Eliseo como tales, lo que podría hacer salir a la luz cosas que se prefiere tener ocultas, sino que los hechos se presentan directamente, sin preguntarse por el móvil, como motivos de ingratitud, calificación que -en esas condiciones- aparece como benévola y, por tanto, indiscutible.

De esa manera se consigue un resultado óptimo: eliminar el peligro que representa Eliseo, teniéndole bajo control y castigarle, disuadiendo así a otros para el futuro de semejantes venganzas. Todo ello sin que aparezca ninguna responsabilidad en lo ocurrido imputable a personas eclesiásticas.

⁴⁷ *C. Sevilla II*, 8: «Taliū enim status, qui contra episcopum suum, vel patronam ecclesiam nititur, decidi potius quam servare convenit, ut quorum libertas perniciosa est, sit salutifera servitus, et qui superbire noverint adepta libertate praediti discant obediri subiecti».

⁴⁸ *C. Braga II*, 2 recuerda a los obispos que no deben forzar a sus clérigos a trabajar para ellos como si fuesen esclavos. Aunque se trate de unos años más tarde, existen varias noticias de abusos episcopales a la hora de infligir castigos: *C. Mérida*, 10 prohíbe a los obispos arrancar o cortar miembro del cuerpo a ninguno de la familia de su Iglesia, sin examen del juez. *CT XI*, 6, les prohíbe la mutilación de siervos de la familia de la Iglesia. *C. Braga III*, 6, refiere que algunos obispos se han excedido con golpes, especialmente a presbíteros, abades y diáconos, y persigue tales excesos. Estos debieron ser singularmente llamativos, ya que tal decisión del concilio choca con la de *LV*, VI,5,8, que disculpa al maestro que ha dado muerte a su discípulo por abuso de golpes: «Quicumque discipulum... a magistro discreta disciplina percussus, fortasse mori de flagello contingat, cum nihil illi qui docet aut corripit in hunc invidie aut malitiae habuerit, qui cedit homicidio nec infamari potest nec adfligi. Quia dicenti Dei sancta scriptura: 'Qui disciplinam abicit, inflexit erit'».

CAPITULO V

LA DEFENSA DEL PATRIMONIO ECLESIASTICO. EL TESTAMENTO DEL OBISPO RICIMIRO

SUMARIO

12. La defensa del patrimonio eclesiástico
 - 12.1. Sentencia del Concilio I de Sevilla
 - 12.2. Sentencia del Concilio II de Sevilla
13. El testamento del obispo Ricimiro de Dumio

Tres sentencias conciliares¹ han de ser estudiadas en este capítulo. En todas ellas se trata de cuestiones relativas al patrimonio eclesiástico en su componente humano: sobre todo, la manumisión de siervos.

Solamente en el tercer caso, el del testamento del obispo Ricimiro, se trata también de bienes materiales. Este es, con diferencia, el más importante de este capítulo, dada la dimensión pecuniaria que alcanza la reivindicación, así como la diversidad de las cuestiones que plantea, que han merecido la atención de varios autores². Esta es la razón por la que se ha creído pertinente mencionarlo en el título de este capítulo, y tratarlo en epígrafe a parte.

12. LA DEFENSA DEL PATRIMONIO ECLESIASTICO

12.1. *La sentencia del Concilio I de Sevilla*

La sentencia del concilio I de Sevilla³ se presenta dividida en dos cánones, que corresponden -respectivamente- a dos cuestiones de un mismo asunto.

¹ CC. *Sevilla I*, 1 y 2; *Sevilla II*, 3; *CT X* (anexo): «*Item, aliud decretum eorundem prafatorum <sic> pontificum editum*».

² Así, MARTINEZ DIEZ, «El patrimonio eclesiástico en la España visigoda», 129-132; P. MERA, «Sobre o testamento de S. Martinho de Dume», en sus *Estudos de Direito Hispanico Medieval*, II, Coimbra 1953, 50-53; A. GARCIA-GALLO, «El testamento de San Martín de Dumio», *AHDE* 26, 1956, 369-386.

³ C. *Sevilla I*, 1 y 2.

El obispo actual de Ecija, Pegasio, presentó al concilio I de Sevilla -aunque sin asistir a él- una demanda contra la actuación del obispo Gaudencio, su predecesor en la sede. Este había manumitido siervos de su Iglesia, así como dado otros a sus parientes, sin dejar en compensación bienes suyos para la Iglesia. Los diáconos de Pegasio fueron encargados de presentar al concilio la lista de estos siervos.

La sentencia, redactada en forma de epístola dirigida al obispo Pegasio⁴, se ocupa en el canon 1 de la suerte de los siervos manumitidos. Así, el hecho de que el obispo Gaudencio no hubiese compensado la pérdida patrimonial que representa la manumisión de los siervos, no parece constarle al concilio, pues éste se cuida de precisar que solamente en caso de que así fuera⁵, se aplicaría la decisión que se explicita, basada en las reglas canónicas que consideran nula la donación o enajenación de bienes de la Iglesia, sin haberle dejado el obispo su hacienda⁶.

Por lo tanto el concilio, afirmando hacer muestra de benevolencia, decide que estos siervos manumitidos volverán a la servidumbre, pero en calidad de *idóneos*; de lo que se deduce que antes tenían una condición inferior: serían serviles. Permanecerán, pues, bajo el dominio de la Iglesia, pudiendo transmitir su peculio solamente a sus hijos, los cuales -así como los nietos- deberán permanecer como siervos idóneos en las mismas condiciones. La Iglesia tiene derecho de reversión patrimonial en caso de morir alguno de ellos sin descendencia.

Incidentalmente, cabe plantear la cuestión de si esta enumeración de los siervos, sus hijos y nietos, se entiende restringida *ipsis verbis*, o bien abarca todos los descendientes en línea recta. Parece ésto último lo más razonable, ya que el sustantivo *nepos* tiene un sentido lato.

El segundo canon se ocupa de los siervos de la Iglesia entregados por el obispo a sus parientes, sobre los cuales decide la devolución a la Iglesia, si es que no ha habido, tampoco, alguna compensación⁷. Finalmente, se indica que esta sentencia debe aplicarse⁸ a los casos similares que pudieran darse en las restantes iglesias de la Bética.

⁴ C. *Sevilla I*, principio: «Incipit epistola episcoporum de concilio spalense I ad Pegasium episcopum, missa de mancipiis ecclesiae ab episcopo manumissis».

⁵ C. *Sevilla I*, 1: «Qua de re canonum constituta consulimus, si talis libertas, aut transactio, potuisset esse stabilis. Comperimus autem in canone, ut episcopus qui res proprias, excepto filiis et nepotibus, alteris et non ecclesiae dimiserit, quidquid de ecclesiae rebus aut donavit aut vendidit aut quoque modo ab ecclesia transtulerit, irritum habetur. Et ideo, si res praecessoris tui Gaudentii episcopi ecclesia vestra non possidet, liberi qui ab eo facti sunt non sunt legitime liberti; ceterum, si res illius in compensatione ecclesiae vestrae deserviunt, illi prorsus maneat liberi; nam si, ut dictum est, praestitum de sus rebus non fecit, ecclesiae damnum utique inferre non debuit».

⁶ MARTINEZ DIEZ, «El patrimonio eclesiástico», 134 s.

⁷ Al igual que en el caso de los siervos manumitidos, tampoco aquí parece constarle al concilio la ausencia de compensación con bienes de Gaudencio.

C. *Sevilla I*, 2: «Ea vero mancipia, quae memoratus episcopus de iure ecclesiae sublata suis proximis contulit, si similia de proprio suo ecclesiae ipsus non compensavit, ecclesia vestra absque aliqua oppositione recipiat. Hanc formam non solum vestra, hoc est Astigitina, servabit ecclesia, sed et si qui per omnem Beticam provinciam, tali conditione vel sorte de iure ecclesiae conmeant, pari sententiae subiacent».

⁸ Ver nota 7.

Hay que notar, en primer lugar, que la regla canónica citada por el concilio para declarar nula la manumisión de los siervos, quizá por una mala redacción, no parece muy lógica: dice, en efecto, que el obispo que, sin tener hijos o nietos, hubiese dejado su hacienda a terceros y no a la Iglesia, si cometiese prodigalidades con los bienes de ésta, serán consideradas nulas⁹. Parece deducirse de ello que el obispo, teniendo descendencia y dejándole su hacienda, hubiese podido enajenar o donar válidamente bienes de su iglesia. Lo cual no tiene mucho sentido, pues de lo que se trata es de evitar un perjuicio económico a aquélla. Y si hay prodigalidades sin compensación, este perjuicio existe siempre, sin que importe la razón por la cual no hubo compensación: bien sea porque su herencia ha ido a parar a sus hijos o a terceros.

Quizá lo primero que deba destacarse de esta sentencia es que el objetivo primordial es conservar íntegro el patrimonio eclesiástico, por encima de cualquier otra consideración. No importa, entonces, hacer volver a la servidumbre a los siervos manumitidos, quienes, al fin y al cabo, no tienen la culpa de que el obispo Gaudencio no compensase el quebranto patrimonial que suponía su libertad para la iglesia: y sin embargo, ellos son quienes sufren las consecuencias de esa ligereza.

La sentencia recalca que es benevolente hacia ellos, queriendo decir que, al concedérseles la condición de idóneos, cuando quizá nunca hubieran salido de la de siervos viles, obtienen un beneficio. Pero más que de benevolencia, habría que hablar quizás de justicia, ya que la manumisión no fue ilícita por culpa de ellos y alguna compensación merecían.

En el segundo canon se manifiesta la preocupación de que la decisión conciliar se aplique no sólo al caso concreto de Ecija sometido a juicio, sino a cualquier otro de las mismas características¹⁰. Lo cual significa, sin duda, que esta clase de prodigalidades no debían ser infrecuentes; y si, como es posible, habían causado daños importantes al patrimonio eclesiástico, extender el alcance de la sentencia permitía remediar más fácilmente estos abusos sin necesidad de entablar nuevos juicios.

Queda la duda -porque el texto no lo precisa¹¹, y porque está señalado solamente en el segundo canon- de si este permiso de proceder a la reconstitución del patrimonio eclesiástico, recuperando a los siervos sin necesidad de juicio, es válido solamente para el supuesto del canon 2 (siervos entregados por el obispo a extraños), o si también se debe aplicar al supuesto del canon 1 (manumisión ilícita).

12.2. *La sentencia del Concilio II de Sevilla*

La segunda sentencia que debe examinarse en este apartado pertenece a otro concilio de la Bética¹². Se ocupa de la deserción de un clérigo de su iglesia. Si se

⁹ Ver nota 5.

¹⁰ Ver nota 7.

¹¹ Ver nota 7, «Hanc formam... subiacebunt». El modo general en que está enfocado el supuesto «... si qui per omnem Baeticam provinciam tali conditione vel sorte de iure ecclesiae conmeant...», autoriza sin embargo a pensar que puede referirse a los dos casos: el de los siervos entregados por el obispo a extraños y el de los siervos manumitidos ilícitamente.

¹² *C. Sevilla II*, 3.

incluye en este capítulo, es por el modo en que el propio concilio enfoca el asunto: la *pérdida de un trabajador*¹³.

El obispo Cambra de Itálica reclamaba que le fuera devuelto un clérigo suyo llamado Espasando; el cual, después de haber sido consagrado a esa iglesia desde su más tierna infancia, la había abandonado para marcharse a la de Córdoba. El concilio dispone que sea inmediatamente devuelto a Itálica, siempre y cuando no haya nada más que alegar respecto del mencionado clérigo.

El fundamento jurídico de la decisión es doble. En primer lugar, se recurre a un argumento por analogía, sacado de las leyes civiles: estas prevén que los colonos de fincas permanezcan en aquellas que han comenzado a habitar. En segundo lugar, se acude a lo prescrito por los cánones respecto de los clérigos que trabajan el *campo*¹⁴ de la Iglesia, y que tienen la misma misión: permanecer allí donde empezaron.

Finalmente, el resto del canon se ocupa de dar a esta decisión el alcance de norma general: el clérigo desertor de su iglesia, acogido y retenido en otra por el obispo de ésta última, debe ser devuelto a la de origen. Y el obispo que se niegue a esta devolución queda excomulgado mientras persista en su actitud, si no existe alguna razón o excusa para ello¹⁵. También está previsto un castigo para el clérigo desertor, el cual, despojado del cingulo de su honor y de su cargo¹⁶, será encerrado por un tiempo en un monasterio, antes de ser reintegrado al servicio de su ministerio.

El castigo previsto para el obispo recalcitrante se aplicará para el futuro, sin que quepa duda ninguna de la redacción del canon. Pero en cuanto al del clérigo, no es tan seguro; pues por una parte, el tiempo empleado es el presente pero, por otra, viene mencionado al final del canon, en la parte donde se generaliza el alcance de la sentencia. Además, cuando algo más arriba se trata del caso particular de Espasando, sólo se dice que debe ser devuelto a su Iglesia, sin mencionar castigo alguno. Por lo tanto, en el caso presente, no parece haber castigo alguno ni para el clérigo, ni para el obispo que se niega a devolverlo.

A propósito de la exposición de los hechos, pueden deducirse dos cosas, aunque no están explícitas. Se dice que Espasando había pasado a la Iglesia de Córdoba, pero seguramente habría que añadir que el obispo de ésta le retenía: porque en la parte de la sentencia que, con ocasión de este caso concreto, legisla para el futu-

¹³ Véase nota 14.

¹⁴ Ver nota 15.

¹⁵ *C. Sevilla II*, 3: «... quem <Espasando> elegimus ut si nihil proponeretur de eo citra dilationis obiecta proprio reformaretur episcopo. Scribitur enim in lege mundiali de colonis agrorum, ut ubi esse quisque iam coepit, ibi perduret. Non aliter et <est?> de clericis <qui> in agro ecclesiae operantur, canonum decreto precipitur nisi ut ibi permaneant ubi coeperunt. Ideoque placuit, ut si quis clericus ministeriis ecclesiae propriae destitutus ad aliam transitum fecerit, compellente ad quem fuerit sacerdote, ad ecclesiam, quam prius incoluerat, remittatur. Qui vero eum susceperit nec statim sine ullo nisu exceptionis ad propriam ecclesiam remittendum elegerit, quamdiu eum restituat communionem se privatum agnoscat. Desertorem autem clericum cingulo honoris atque ordinis sui excitum aliquo tempore monasterio deligari convenit, sicque postea in ministerium ecclesiastici ordinis revocari».

¹⁶ Ver nota anterior.

ro, se contempla la situación del clérigo desertor y retenido por el obispo en la Iglesia en la cual se refugia. En segundo lugar, dado que, sin duda, Espasando no está presente en el juicio y, por lo tanto, no es escuchada su versión, se deja una puerta abierta por si algo pudiera alegarse que cambiase el sentido de la sentencia¹⁷. Lo cual puede significar que se admite la posibilidad de que Espasando pudiera tener sus razones para huir, razones con peso suficiente para no tener que ser devuelto a su iglesia de origen.

En cuanto a la base jurídica de la decisión, se aduce -como en otras ocasiones- la autoridad de la ley civil al lado de la canónica, e incluso llega a citarse aquélla en primer lugar, como queriendo justificar el fundamento de la regla canónica¹⁸.

A este propósito, se debe notar la expresión empleada para designar en qué concepto se tiene la misión que el clérigo desempeña en la Iglesia: trabaja *in agro ecclesiae*. Tal expresión puede entenderse literalmente: el clérigo trabaja fincas de la Iglesia; pero también, y quizá más propiamente, en sentido figurado: el *ager ecclesiae* designaría la tarea de la Iglesia, la *mies que es mucha*, según el Evangelio. En cualquier caso, no parece dudoso que se haya empleado la palabra *ager* para expresar mejor la equiparación de la situación del clérigo a la del colono. Siendo los dos trabajadores del campo, puede ser invocada con propiedad la ley civil.

Sobre el hecho subrayado por el concilio, de que Espasando hubiera dejado una Iglesia, en la cual había sido consagrado desde su más tierna infancia, sólo da más peso a la decisión adoptada: parece que el abandono de la Iglesia en tales circunstancias es aún peor. Pero ello no quiere decir que condicione la decisión adoptada, pues las leyes invocadas no contemplan esa hipótesis.

La sentencia que, como se ha visto, establece castigos para el obispo y el clérigo desobedientes a lo que establece como una norma general, no deja muy claro cuál es el alcance exacto del castigo previsto para el clérigo. Se dice que será despojado del *cíngulo de su honor y de su cargo*, pero no explicita si se trata de una suspensión temporal o definitiva, pues podrá ser restituido al servicio del Orden eclesiástico¹⁹, tras un tiempo de encierro monástico: pero ¿en calidad de qué?, ¿con la misma situación que antes? El texto no es más explícito, pero quizá pueda suponerse que quedarán al arbitrio del obispo las misiones que nuevamente se encomienden a este clérigo.

Y finalmente, siempre a propósito de la suerte del clérigo, sí es preciso notar que la devolución no es automática: solamente lo es si el obispo que acogió al desertor no puede alegar excusa²⁰. No se precisa de qué género pudiera ser tal excusa - pudieran ser quizá malos tratos en la Iglesia de origen- pero, de haberla, parece que el obispo a quien el clérigo acude, puede recibirla.

¹⁷ Ver nota 15.

¹⁸ Ver nota 15.

¹⁹ Ver nota 15.

²⁰ Ver nota 15.

13. EL TESTAMENTO DEL OBISPO RICIMIRO DE DUMIO

La abadía de Dumio presentó al Concilio X de Toledo²¹ una reclamación contra el testamento de su anterior obispo, Ricimiro. En efecto, éste, pese a haber instituido a la abadía heredera de sus bienes, había establecido como condición -jurídicamente válida, como subraya el concilio²²- que los tributos y las rentas que proporcionase su herencia fuesen íntegramente destinados a los pobres, no dejando nada para provecho y utilidad de la iglesia.

Quizás en contrapartida de su herencia, Ricimiro dispuso antes de morir que se diesen a los pobres los objetos de uso doméstico que había encontrado a su llegada a la abadía, así las conquistas habidas en el patrimonio de la abadía durante su mandato, conseguidas ya por medio de su propia diligencia, ya por el trabajo de los siervos. Algunas cosas que no fueron donadas, fueron tan mal vendidas que supusieron una pérdida. Dispuso Ricimiro, por otra parte, la manumisión de algunos siervos, a los que se daban más de 500 esclavos, algunos de su propiedad y otros de la abadía, además de otras cosas.

En definitiva, tan *liberal* obispo había mermado considerablemente el patrimonio de la iglesia. Y, dadas las condiciones en que la dejaba heredera de su propio patrimonio, tales pérdidas no eran en absoluto compensadas.

El rey Recesvinto, como encargado de vigilar el cumplimiento del testamento de S. Martín de Braga²³, fundador de la abadía de Dumio, fue el que probablemente comenzó esta acción en justicia ante el concilio²⁴. En todo caso, es quien presenta este testamento por medio del ilustre Wamba -posiblemente su sucesor en el trono- con el indudable objeto de que el concilio calibre la incompatibilidad del testamento de Ricimiro con el de S. Martín.

Fácilmente se constata la incompatibilidad del testamento de Ricimiro con las disposiciones de S. Martín²⁵, dados los daños sufridos por la abadía de resultas de

²¹ CT X, anexo: «Item, aliud decretum eorundem prafatorum pontificum editum».

²² *Ibidem*: «Quo relato cognovimus eundem auctorem suum illic diversae constitutiones edidisse conditiones, inter quas unam validam conatus est religatione constringere, deputans et inlationes tributorum et pretia fruguum, absque aliqua diminutione, annua vice pauperibus erogare, nihilque esse absque deliberatione relictum quod usibus ecclesiae posset, quadam liberalitate servire».

²³ GARCIA-GALLO, «El testamento de S. Martín de Dumio», 372-381; MEREJA, «Sobre o testamento de S. Martinho de Dume», 51-53.

²⁴ GARCIA-GALLO, *ibidem*, 381. Pudo ser también S. Fructuoso, actual obispo de Dumio, quien comentara esta acción en justicia, como prevé LV, V,1,2, en una ley que establece que cada nuevo obispo, en cuanto es consagrado, debe hacer el inventario de los bienes de su iglesia. A su muerte, su sucesor debe comprobar que éstos siguen estando en dicha iglesia o, de otra manera, reclamarlos:

«Ideoque, praesenti sanctione censemus, ut mox episcopus fuerit ordinatus, statim rerum inventarium de rebus ecclesiae, praesentibus quinque ingenuis viris, facere moretur. Quod inventarium ingenui viri, coram quibus factum fuerit, sua subscriptione conroborent. Post episcopi vero ipsius obitum, dum alter fuerit episcopus ordinatus, secundum rerum inventarium res requirat ecclesiae, et si aliquid diminutum de rebus ecclesiae pervenerit, proprii haeredes episcopi, vel quibus facultas eius pertinere, vel relicta esse videtur, de praecedentis satisfaciant facultate. Quod si et aliquid de rebus ecclesiae vendere praesumpserit, succedens episcopus, reddito pretio quod a venditore acceptum est, cum omni augmento res ad ius reducat ecclesiae, et nullam calumniam permitescat».

²⁵ La inadecuación de las disposiciones de Ricimiro con las de S. Martín de Dumio parece deducirse de la frase citada en la nota 22: «... cognovimus eundem auctorem suum illic diversae constitutionis edidisse conditiones...». GARCIA-GALLO, *Ibidem*, 381.

lo que Ricimiro regaló de ella -cuando las necesidades de los pobres no eran graves- así como de las manumisiones efectuadas²⁶. Todo ello de manera contraria a los cánones, ya que, dado el tenor del testamento, la Iglesia no podía obtener ninguna compensación de la herencia.

Dada esta situación, se anula el testamento de Ricimiro parcialmente, de manera que los bienes materiales quitados a la abadía sean repuestos con cargo a los que el obispo dejaba a los pobres. Estos se aplicarían a la iglesia hasta que fuese compensada la merma patrimonial: solamente a partir de ese momento, podría cumplirse la voluntad del testador.

En cuanto a las manumisiones y los regalos hechos a los manumitidos y a sus hombres en bienes y esclavos, queda al criterio de Fructuoso, actual abad de Dumio, quien podrá de manera discrecional mantenerlas o no, premiando a los que considere merecedores de ello. Con todo, el concilio recalca que, *de iure*, estos actos²⁷ son nulos.

Lo que destaca de esta sentencia es que debe ser aplicado el principio según el cual el obispo no puede mermar el patrimonio de su iglesia. Aunque se admite una restricción, al menos teóricamente -puesto que en este caso no se aplica, o se dice que no hay razón para aplicarla: las necesidades de los pobres. Cabe preguntarse si tal necesidad realmente no existía, o si se juzgó por conveniencia que no existía. En segundo lugar, se respeta la voluntad del testador, en cuanto queda a salvo el primer principio. Por tal razón, se anula sólo parcialmente el testamento de Ricimiro: en cuanto que menoscaba el patrimonio de la abadía, en vez de anularlo totalmente.

Sobre las manumisiones, que también afectan a ese patrimonio, es notable la benevolencia de la sentencia, que contrasta aquí con la del concilio I de Sevilla²⁸; pues se toma en consideración la situación de las personas -al menos las de mérito- en perjuicio del patrimonio de la abadía, ya que en vez de aplicar rigurosamente la ley, se autoriza su permanencia en el nuevo estado de libertos, e incluso a conservar las donaciones recibidas -aunque nulas- de esclavos y bienes.

No obstante, el abandono de bienes a los libertos puede que no resulte tan generoso como parece, pues quizá están comprendidos en lo que se juzgó que debía ser compensado con la herencia de Ricimiro. Se juzgó que en este punto de las manumisiones de siervos y de las donaciones que recibieron, el obispo Fructuoso quedaba encargado de apreciar y decidir quiénes podían beneficiarse de ellas.

²⁶ MARTINEZ DIEZ, «El patrimonio eclesiástico en la España visigoda», 130.

²⁷ *CT X*, anexo «*Item, aliud decretum*»: «Libertos vero, qui ex familiis ecclesiae facti sunt, seu res universa quae in mancipiis aliisque corporibus vel illis vel suis hominibus collata esse dinoscitur, cuncta in discretione venerabilis fratris nostri Fructuosi episcopi disponenda relinquimus, ut quia haec evidens ordo Patrum in irritum devocat, illius temperamentum hoc ad miserationem adducat, qualiter nec regulam Paternam modus excedat, et miserationem severitas non exstinguat, ut secundum meritum servientium et libertatis praemia et rerum donaria, vel subtrahat vel concedat».

²⁸ *C. Sevilla I*, 2. Ver el epígrafe 12.1 de este capítulo.

Se trata, pues, de una delegación de juicio, diferida por el concilio a este obispo, lo que puede sorprender a primera vista, ya que parece que el concilio se inhibe a la hora de pronunciarse sobre los derechos de estas gentes. Pero, en realidad, no hay tal inhibición, pues no tienen derecho a permanecer libertos ni a conservar las donaciones, ya que son nulas tanto éstas como las manumisiones. Por lo tanto, dado que no se trata de reconocer un derecho, sino de conceder un favor, es obvio que el concilio puede hacerlo en las condiciones que considere más adecuadas, y ¿quién mejor que el obispo Fructuoso para conocer los méritos de sus siervos?

Finalmente, debe subrayarse que lo que Ricimiro ganó como producto de su diligencia²⁹ no es considerado patrimonio privativo suyo, sino de la iglesia, ya que es incluido por los representantes de la abadía de Dumio entre las cosas que, distribuidas a los pobres, se echan en falta en el patrimonio de la abadía, y el concilio no parece discrepar de esta valoración. Está claro, pues, que el obispo que trabaja en beneficio del patrimonio de su iglesia, lo hace como un servidor de ésta, sin capacidad para disponer o dedidir sobre los incrementos patrimoniales que pueda conseguir con su esfuerzo.

²⁹ *CT X*, anexo «*Item, aliud decretum*»: Tunc, ex voce partis ecclesiae Dumiensis adstructum est quod universae speciei, generis et corporis rem quae in ejusdem ecclesiae dono intrinsecus ad usus domesticos et tempore suae ordinationis idem episcopus Ricimirus invenit, et quae ipse aut de opere utriusque sexus artificum familiarum ecclesiae potuit habere confecta atque illata, aut quae sua provisione habuisse visus est conquisita, omnia moriens iussisset pauperibus erogare».

CAPITULO VI

LAS APELACIONES

SUMARIO

- 14. Apelaciones al Concilio
 - 14.1. Apelación contra la sentencia de un obispo: el caso de Fragitano de Córdoba
 - 14.2. Apelaciones del juicio del obispo Marciano de Ecija ante los Concilios IV y VI de Toledo
- 15. Apelaciones o recursos a Roma
 - 15.1. El asunto de Prisciliano
 - 15.2. Los Concilios de la Tarraconense (s. V)
 - 15.3. Intervención de Gregorio Magno en la España bizantina

Se tratarán en este capítulo dos tipos de apelaciones: los casos de apelaciones dirigidas al Concilio y las apelaciones o recursos dirigidos al Papa.

14. APELACIONES AL CONCILIO

De los dos casos a estudiar en este apartado, el uno es ejemplo de apelación de una sentencia episcopal al concilio provincial; el otro de la apelación de una sentencia conciliar provincial ante el concilio general.

14.1. *Apelación al Concilio contra la sentencia de un obispo: el caso de Fragitano de Córdoba*

Volvemos a encontrar aquí el caso del presbítero Fragitano de Córdoba¹, depuesto tiempo atrás por su obispo, y vuelto a examinar por el concilio II de Sevilla, en su canon sexto.

¹ C. *Sevilla II*, 6. Ver el capítulo IV, epígrafe 10.2.

Según lo que manifiesta el principio del canon², el concilio, considerando injusta la sentencia episcopal, la revoca. Estamos, pues, ante un juicio en segunda instancia: la apelación de la sentencia de un obispo ante el concilio provincial correspondiente, pues Fragitano pertenecía a la provincia Bética y había sido depuesto por el obispo de Córdoba. Se trata de una intervención, en principio, normal y conforme a los cánones. Lo particular del caso es que el concilio no tenía que haber intervenido en 2ª instancia, sino en 1ª, ya que, como se indica después, según las reglas canónicas³ el obispo no era competente para decidir tal deposición. Pero falló en este sentido, y la sentencia se ejecutó: Fragitano fue depuesto y desterrado; además quizá tanto la deposición como el destierro duraron tiempo⁴.

Por lo tanto, el concilio no tuvo otro remedio que intervenir, para revocar la sentencia del obispo y reintegrar a Fragitano en su grado presbiteral. Lo irregular, pues, no fue la intervención del concilio en apelación, sino la del obispo en 1ª instancia. No obstante no queda claro si la sentencia del obispo fue considerada nula, como parecería lógico, y si -por tanto- los efectos de ésta fueron retroactivos: parece que no ocurrió así, ya que no se menciona nada en este sentido, ni se habla de compensación o indemnización alguna por el destierro que sufrió Fragitano.

Después de la corrección de la injusticia cometida con él, que constituye la primera parte de la sentencia, en la segunda se pasa a legislar, o más bien a recordar la legislación existente⁵, que prohíbe a los obispos este tipo de deposiciones, sin duda para que quede claro que no sólo se había cometido una injusticia -pues Fragitano era inocente- sino también una irregularidad. Es decir, que el concilio no sólo actuó para remediar el mal cometido, sino para impedir que en el futuro se repitiesen tales decisiones, tan arbitrarias como injustas.

14.2. *Las apelaciones del juicio del obispo Marciano de Ecija ante los concilios generales IV y VI de Toledo*

El obispo Marciano de Ecija, como se vio, interpuso una apelación una primera vez ante el Concilio IV de Toledo de la sentencia que le había condenado en Sevilla, al menos por tres delitos⁶. No se conoce el contenido de la sentencia de apelación. Sí se sabe que fue repuesto en su grado, aunque no le fue devuelta su silla. Se trata de un caso normal de apelación de la sentencia de un concilio provincial ante la instancia superior competente: el concilio nacional; como igualmente lo es la segunda apelación ante el CT VI, igualmente nacional.

² C. *Sevilla II*, 6: «Sexta actione comperimus Fragitanum, Cordubensis ecclesiae presbyterum, a pontifice suo injuste olim deiectum et innocentem exilio condemnatum, quem rursus ordini suo restituentes id demo adversus praesumptionem nostram decrevimus, et iuxta priscorum patrum synodalem sententiam nullus nostrum sine concilii examine deiciendum quemlibet presbyterum vel diaconum audeat».

³ Ver nota 2.

⁴ C. *Sevilla II*, 6: «Fragitanum... olim deiectum et exilio condemnatum».

⁵ Ver nota 2, y C. *Sevilla II*, 6: «Qui (divinis altaribus consecrati) profecto nec ab uno damnari nec uno iudicante poterunt honoris sui privilegiis exui, sed praesentanti synodali iudicio, quod canon de illis praeceperit, definiri».

⁶ Ver capítulo IV, epígrafe 11.3.

¿Cuál la razón por la que sólo le fue devuelto su grado en la 1ª apelación? Desde luego, se le consideró inocente, tal como se demostró después en el Concilio VI de Toledo, pero ¿fue realmente la falta de tiempo para examinar el caso, como, hablando de la actuación del IV, dijo el VI Concilio de Toledo?. No es imposible, dada la cantidad y la entidad de los asuntos tratados por el CT IV. Puede también que San Isidoro, que había presidido probablemente el concilio de la Bética⁷, no tuviese interés en remover demasiado el asunto.

Lo que sí parece claro, y al mismo tiempo asombroso, es que no se debió estudiar el caso con mucha dedicación, pues el VI Concilio de Toledo, al revisarlo, procede como si efectivamente nunca lo hubiera sido: retoma y repasa el proceso de Sevilla, por entero y desde el principio. Es este concilio el que consigue hacerse con las actas desaparecidas del de la Bética: luego, no se tuvieron a la vista en el CT IV. En vista de lo cual, cabe preguntarse en base a qué pronunció su sentencia el IV Concilio. Una explicación plausible sería que la inocencia de Marciano era *vox populi*, lo cual dejaba a San Isidoro en evidencia, y le hacía sumamente penosa la revisión del caso.

La apelación al CT VI puede aparecer a primera vista como una tercera instancia: la apelación de una apelación. Pero en realidad, no es más que una continuación de la anterior 2ª instancia. En efecto, así ha de interpretarse, al decir que el CT IV no dispuso del tiempo imprescindible para estudiar a fondo la demanda de Marciano.

Aunque no sea éste el caso, no parece imposible, sin embargo, una apelación en tercera instancia, pues los jueces del CT VI prohíben tanto a Marciano como a su oponente Avencio, apelar contra su sentencia; si se creen obligados a advertirlo es porque seguramente existiese tal posibilidad. Se plantea entonces la cuestión de saber ante quién podría presentarse: otro concilio nacional o el Papa. No existe legislación ni ejemplo de una tercera instancia presentada a un concilio nacional. Y si cabe apelación al Papa⁸, ¿cómo puede prohibirla el concilio?. Quizá apoyándose en el precedente del concilio VI de Cartago⁹. Es cosa sabida que el ambiente de la iglesia visigoda no era anti-romano, pero sí a-romano, por causas que no nos toca examinar aquí, salvo dejar anotado que al episcopado visigodo no le agradaba que miembros de la Iglesia acudiesen a Roma con sus problemas particulares. En todo caso, no se dieron casos de apelaciones al Papa en la España visigoda, aunque sí los hubo en la España bajo dominio imperial, como se verá a continuación¹⁰.

15. APELACIONES O RECURSOS A ROMA

El motivo de que en el título de este epígrafe se haya distinguido entre *apelaciones* y *recursos* se explica porque los que acuden al Papa no siempre le elevan una

⁷ ORLANDIS-RAMOS LISSON, «Historia de los concilios», 260 y 323.

⁸ Ver capítulo II, epígrafe 7.2.5. y nota 70.

⁹ Ver *ibidem* y nota 73.

¹⁰ M. VALLEJO GIRVES, «Bizancio y la España tardoantigua (ss. V-VIII). Un capítulo de Historia mediterránea», Alcalá de Henares 1993, 421. Sobre las relaciones entre la Iglesia visigoda católica y Roma, ver ORLANDIS, «El cristianismo y la Iglesia», 482 ss.

apelación *stricto sensu*: en ciertas ocasiones se le pide que se pronuncie como la autoridad superior de la Iglesia que es, sin que ello implique la revisión de la sentencia de un tribunal inferior.

15.1. *El asunto de Prisciliano*

15.1.1. *Resumen de los hechos*

Aunque los hechos relativos a este caso son poco explícitos en las fuentes, y aún contradictorios, se ha podido -sin embargo- deducir su probable desarrollo¹¹.

Seguramente Idacio, metropolitano de Mérida, informado de las actuaciones de Prisciliano y sus seguidores, excomulgó a éste -que aún era laico- y a otro también laico llamado Elpidio, así como a los obispos lusitanos Instancio y Salviano. Un concilio debía reunirse en Zaragoza en el año 380 -sin que sepamos por qué se eligió esta ciudad- para tratar ese problema. El papa Dámaso, puesto al corriente o consultado sobre el particular, indicó en una epístola dirigida al concilio, que no se juzgase a los ausentes¹². Al acatar la asamblea la decisión papal, y no presentarse en él los obispos Instancio y Salviano, ni estar presentes tampoco Prisciliano y Elpidio, no pudo deponer aquéllos ni condenar por herejía a éstos¹³, al contrario de lo que afirma Sulpicio Severo¹⁴. Se debe entender la afirmación de éste¹⁵, seguramente, en el sentido de que el concilio aprobó e hizo suya la decisión de Idacio -la excomunión de los cuatro- por medio del canon 5¹⁶, en el cual se establece que, quienes fuesen puestos fuera de la comunión de los fieles por un obispo -disciplinariamente o por sentencia- no fuesen recibidos por otros obispos a su comunión.

Al proseguir los enfrentamientos entre Idacio y los priscilianistas, cuyo jefe había sido hecho obispo de Avila poco después, el concilio I de Zaragoza, se obtuvo del emperador Graciano, a petición de Idacio, un rescripto que condenaba al destierro a los que se califican de falsos obispos (Instancio, Salviano y Prisciliano) y a los maniqueos -se considera que los priscilianistas profesan tal herejía- de la provincia donde habían actuado. Los tres obispos decidieron emprender viaje a Roma, para defenderse ante el Papa, para cuya información habían redactado un escrito de justificación: el *Liber ad Damasum*.

¹¹ J.M. RAMOS Y LOSCERTALES, «Prisciliano. Gesta Rerum», Acta Salmanticensia, Salamanca 1952, en especial pp. 33-100. H. CHADWICK, «Priscillian of Avila», Oxford 198. VV.AA., «I Concilio Cesaraugustano, MDC aniversario», Zaragoza 1981.

¹² *Liber ad Damasum*, CSEL (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum) 18, p. 135: «ne quid in absentes et inauditos decerneretur», cit. por ORLANDIS-RAMOS LISSON, «Historia de los Concilios», 70. Del *Liber ad Damasum* se ha publicado una traducción en la obra de B. SEGURA RAMOS, «Prisciliano, tratados y cánones», Madrid 1975, 53-61. Esta cita se encuentra en p. 55.

¹³ RAMOS LOSCERTALES, «Prisciliano» 56-61.

¹⁴ SULPICIO SEVERO, «Chronica», II, 47, en CSEL, 1, p. 100. Existe una traducción española en SULPICIO SEVERO, «Obras completas», Estudio preliminar, traducción y notas de C. CODÓÑER, Madrid 1987. Esta cita se encuentra en p. 127.

¹⁵ RAMOS LOSCERTALES, «Prisciliano», 60.

¹⁶ C. *Zaragoza I*, 5: «Item lectum est: Ut hii qui per disciplinam aut sententiam episcopi ab ecclesia fuerint separati, ab aliis episcopis non sunt recipiendi; quod si scientes episcopi fecerint, non habeant communionem».

El Papa no les quiso recibir ni les admitió a su comunión, así como se abstuvo de juzgar la intervención del poder civil en este asunto eclesiástico: el destierro decretado por Graciano. Los obispos, entonces, intentaron en vano ser recibidos por S. Ambrosio, que lo era de Milán. Pero consiguieron de Macedonio, *magister officiorum*, la anulación del rescripto.

Finalmente, en el 384, un concilio reunido en Burdeos, encargado de juzgar a Instancio y a Prisciliano (Salviano había muerto en Roma), depuso al primero y accedió a la demanda de Prisciliano quien, antes de ser juzgado por aquél, solicitó apelar al emperador Máximo. Y ello fue para su desgracia, ya que fue condenado en Tréveris, con otros seguidores suyos, a la pena capital, mientras que Instancio fue solamente condenado al destierro.

Quince años más tarde, el CT I tiene que juzgar a varios seguidores de Prisciliano. Mientras perdona a algunos de ellos, arrepentidos, señala sin embargo que deberán esperar para «gozar de la paz del cielo»¹⁷ a que el Papa o Simpliciano, obispo de Milán, así como los demás obispos de las Iglesias¹⁸, les hayan admitido a la comunión.

15.1.2. *Comentario*

Vemos cómo en todo este asunto, en ninguna de las ocasiones en que se acude al Papa, se trata de apelar una sentencia, se trata más bien de simples recursos. En efecto, la primera vez se ha pedido al Papa -antes del juicio- instrucciones sobre la manera en que debe juzgar el concilio de Zaragoza; y el Papa responde en el sentido ya indicado, pero ni juzga directamente, ni manda legados suyos al concilio.

En la segunda ocasión, Prisciliano se dirige al Papa, pero tampoco hay apelación, pues el concilio de Zaragoza no ha condenado nominalmente a los autores del recurso, como ellos se cuidan de subrayar en su escrito¹⁹. Se pide al Papa que ponga fin a una situación de persecución de hecho, reconociendo la validez de las razones que esgrimen en su defensa.

En la tercera, finalmente, es el mismo concilio (CT I) quien, considerándose, al parecer, con insuficiente autoridad para decidir definitivamente sobre la suerte de los priscilianistas perseguidos, juzga necesaria la intervención del Papa. Pero, curiosamente, no sólo se dirige a él el concilio, sino también a otros obispos destacados, entre ellos, Simpliciano de Milán.

¹⁷ CT I, *Exemplar definitivae sententiae translatae de gestis*: «Reliqui, qui ex provincia Galiciae ad concilium convenerant, et in Symphosii semper communione duraverant, accepta forma a concilio missa, si subscripserint, etiam ipsi in caelestis pacis contemplatione consistant; expectantes pari exemplo quid Papa, qui nunc est, quid Sanctus Simplicianus Mediolanensis episcopus reliquique ecclesiarum rescribant sacerdotes; si autem subscriptionem formae, quam missimus, non dederint, ecclesias quas detinent non retineant, neque his communicent qui reversi de synodo, datis professionibus ad suas ecclesias reverterunt».

¹⁸ ORLANDIS-RAMOS LISSON, «Historia de los Concilios», 96. Estos «demás obispos» son los que han intervenido en este caso.

¹⁹ *Liber ad Damasum*, CSEL, 18, p. 35: «Denique in conventu episcopali qui Cesaraugustanae fuit, nemo e nostris reus factus tenetur, nemo accusatus, nemo convictus, nemo damnatus est». Cit. por ORLANDIS-RAMOS LISSON, «Historia de los Concilios», 70. Traducción en SEGURA RAMOS, «Prisciliano», 54.

Cabe preguntarse qué valor tendrán las decisiones que éstos adopten: ¿serán meramente indicativas o, por el contrario, determinantes para la readmisión de los arrepentidos a la comunión de los fieles?. Y en este caso, ¿qué ocurriría si hubiese divergencia de opinión?, pues es evidente que no habría problema alguno si la decisión resultase de un acuerdo de todos ellos. Pero parece que no debía ser así, pues para cuatro de ellos -Dictinio, Anterio, Sinfosio y Paterno- así como para los demás de la provincia de Galicia, dice la sentencia del CT I que esperen a que les admitan a la comunión el Papa o Simpliciano. Parece, en todo caso, que la decisión de los consultados tendrá carácter determinante, pues se dice de los arrepentidos que han sido perdonados condicionalmente por este Concilio I de Toledo²⁰.

15.2. *Los Concilios de la Tarraconense (s. V)*

15.2.1. *Resumen de los hechos*

Se tratarán en este apartado los casos de los obispos Silvano de Calahorra (a. 464) e Ireneo de Barcelona (a.465), que aparecen en los mismos documentos, y no admiten, por ello, separación en apartados diferentes.

Los obispos de la Tarraconense se dirigen en una epístola al Papa Hilario²¹, porque no han surtido efecto las amonestaciones que han hecho al obispo Silvano de Calahorra, quien ordenó a un obispo sin previa petición del pueblo; asimismo, había consagrado a un presbítero como obispo de un lugar donde estaba antes destinado, contra su propia voluntad, y cuando había sido agregado ya al grupo de obispos que escriben al Papa²². Parece que lo que a éste se pide, es su opinión para que se pronuncie sentencia en un concilio ulterior, probablemente de la Tarraconense.

Los mismos obispos se dirigen nuevamente al Papa con dos peticiones²³:

1) que confirme el nombramiento hecho por ellos mismos, del obispo Ireneo en la sede de Barcelona. El obispo Nundinario, ya fallecido, con anuencia del metropolitano Ascanio, había constituido anteriormente a Ireneo en otra iglesia de su diócesis, y manifestó antes de morir su deseo de que éste fuese promovido a la sede de Barcelona.

2) se vuelve a pedir al Papa que se pronuncie sobre el caso expuesto en la epístola anterior relativa a Silvano, pues no se había recibido aún ninguna respuesta de Roma.

²⁰ CT I, *Exemplar definitivae sententiae translatae de gestis*: «Constituimus autem, priusquam illis per Papam vel per Sanctum Simplicianum communitio reddatur, non episcopos, non presbyteros, non diaconos ab illis ordinandos; ut sciamus, si vel nunc sciant, sub conditione remissi tandem synodicae sententiae praestare reverentiam».

²¹ *Epistola Tarraconensium Episcoporum ad Hilarium papam*, «P.L.», 58, 14-16.

²² *Ibidem*: «Denique contra vetustatem canonum, contra synodi constituta, alterius fratris nostri praesbyterum, spiritu tantam praesumptionis accensus, in eodem loco, qui illi fuerat destinatus, cui invito et repugnanti imposuerat manus, et qui nostro jam coetui fuerat aggregatus episcopum fecit.»

TEJADA Y RAMIRO, «Colección de Cánones», II, 947, comentando este pasaje, explica que la expresión *nostro coetui aggregatus* significa que el presbítero estaría ya electo como obispo y aprobado por el metropolitano.

²³ *Ibidem*, «P.L.» 58, 16 s.

El Papa, a modo de respuesta, envía la decisión de un concilio romano sobre el asunto de Ireneo. Y vuelve a contestar a éste, junto con el caso de Silvano, en una carta dirigida a los obispos de la Tarraconense y en otra dirigida al metropolitano Ascanio. Es necesario resumir separadamente el contenido de los tres documentos.

1) Respecto a lo acordado en el concilio romano, celebrado en la basílica de Santa María: se dispuso que no se elijan sucesores en las sedes, al parecer para el futuro²⁴. No se dice claramente qué se ha resuelto en el caso de Ireneo.

2) Sobre el caso de Silvano, el Papa vuelve a escribir una epístola a los obispos de la Tarraconense. En ella dice que ha recibido peticiones de personas honradas y pudientes de Tarazona, Cascante, Calahorra, Varea, Tricio, León y Briviesca en sentido contrario, es decir, apoyando a Silvano. Pero las ha considerado como no fundadas, pues en algunas ciudades se ordenaron sacerdotes sin anuencia del metropolitano, probablemente a instigación de Silvano²⁵. Para este último caso, se perdona lo irregularmente hecho, pero se decreta que en el futuro no se actúe en contra de los cánones nicenos. En cuanto a Ireneo, se condena su acceso a la sede de Barcelona, por ser ya obispo de otra sede²⁶. Hace responsable al metropolitano Ascanio de elegir otro obispo para Barcelona.

3) En la epístola a Ascanio, el Papa amonesta severamente al metropolitano²⁷, reprochándole el no haber sabido oponerse a la petición de los barceloneses y de los obispos que se pronunciaron en este sentido. Afirma que la decisión última pertenece al metropolitano, que tiene más autoridad que todos ellos, llamando curiosamente al concilio *número de ignorantes*²⁸. Se repite el decreto general: que vuelva Ireneo a su propia iglesia -por su propia voluntad, si no quiere ser castigado- y sea ordenado para Barcelona un prelado de su clero. En cuanto a los obispos ordena-

²⁴ *Epistola I Hilarii Papae ad Episcopos Tarraconenses, 'De synodali decreto', V, «P.L.», 58, 12-14: «Praeterea, fratres, nova et inaudita, sicut ad nos missis de Hispaniis epistolis sub certa relatione pervenit, in quibusdam locis perversitatum semina subinde nascuntur. Denique, nonnulli episcopatum, qui non nisi meritis praecedentibus datur, non divinum munus sed hereditarium putant esse compendium, et credunt sicut res caducas atque mortales, ita sacerdotum velut legali <legatorio> aut testamentario jure posse dimitti. Nam plerique sacerdotes in mortis confinio constituti in locum suum feruntur alios designatis nominibus subrogare, ut scilicet non legitima expectetur electio, sed defuncti gratificati populi habeatur assensu. Quod quam grave sit aestimatis <aestimate>: atque ideo, si placet, etiam hanc licentiam generaliter de ecclesiis auferamus...»*

²⁵ TEJADA Y RAMIRO, «Colección de Cánones», II, 947.

²⁶ *Epistola II Hilarii Papae ad Ascanium et reliquos Tarraconensis provinciae episcopos, II, «P.L.», 58, 17-19: «In quorum contumeliam a superbo spiritu etiam pars illa contemnitur, qua cavetur, ne quis relicta ecclesia sua ad alteram transire praesumat. Quod nimis improbe conniventibus, et (ut doleatur gravius) vobis asserentibus, Irenaeus episcopus conatur admittere, qui <quod> nostra auctoritate roborari cupitis, quos maxime de rebus illicitis magna indignatione probatis accendi».*

²⁷ *Epistola III Hilarii papae ad Ascanium Tarraconensem episcopum privatum scripta, «P.L.», 58, 19-20: «Unde directis per Trajanum subdiaconum nostrum litteris admonemus, ut quae male sunt facta corrigantur. Et miramus admodum dilectionem tuam Barcinonensium petitiones, non solum nulla auctoritate retudisse, verum etiam directis ad nos litteris conversationem pravi desiderii postulasse, adhibendo in epistolarum proemio concilii mentionem, tamquam culpae minuerentur excessus per multitudinem imperitorum, quum si etiam sub significatione unusquisque sui non minus tecum pariter retulisset, et subscriptiones proprias fratres singuli commodassent, dilectionem tamen tuam rei, de qua displicet, summa tangebatur, quia pro loco et honore tibi debito ceteri sacerdotes docendi fuerant, non sequendi».*

²⁸ Ver nota 27.

dos sin el consentimiento del propio Ascanio, el papa adelanta que debieran ser depuestos, pero en atención al problema circunstancial de la escasez de ministros, se decreta que queden donde se les ha puesto, si sus respectivas ordenaciones no adolecen de otras irregularidades. Finalmente, se prohíbe la presencia de dos obispos en la misma iglesia -lo cual no parece tener relación con los casos expuestos²⁹- quedando encargado de la observancia de este mandato el subdiácono Trajano, enviado a España por el Papa a tal efecto.

15.2.2. Comentario

Tampoco en estos dos asuntos se apela al Papa contra una sentencia, sino que se acude a él, la primera vez, para que decida en primera instancia sobre las actuaciones de un obispo, consideradas incorrectas; mientras que la segunda vez se acude al Papa para que confirme una decisión propia de los que a él recurren, pues existía la sospecha de que podía no ser absolutamente correcta.

Este segundo supuesto es en extremo singular: se recurre a la autoridad superior para que se pronuncie sobre lo decidido por la autoridad inferior. ¿Cabe hablar de apelación en este sentido? En todo caso, es la propia autoridad decisoria inferior quien apela, con la pretensión de que el superior confirme la decisión, no de que la infirme. Este recurso de los obispos de la Tarraconense manifiesta a la vez el reconocimiento de su propia incapacidad para decidir, al tiempo que un cierto atrevimiento, puesto que han tomado la decisión que les interesaba, aunque fuera de modo condicional, con el fin de hacer presión sobre la decisión final de Roma: es el argumento de los hechos consumados.

En el caso de Ireneo, la decisión papal es particularmente rigurosa, y el Papa emplea un tono severo, con la exigencia de que aquél acepte la sentencia³⁰ por su propia voluntad. Pero en el de Silvano, hay que subrayar que la aplicación de los cánones no es muy estricta. Si bien la actuación de este obispo es incorrecta, no se depone a los obispos ilícitamente ordenados, quizá por temor al escándalo, o incluso a provocar un cisma³¹. Solamente se exige que las ordenaciones no presenten, además, otras irregularidades, pues entonces no cabría benevolencia alguna. Se adopta, pues, una solución de compromiso entre las normas aplicables y la oportunidad política. Hay que tener en cuenta las presiones que el Papa había recibido de personas *honradas y pudientes* de diversos lugares en favor de Silvano, quizá a instigación de éste mismo quien «se habría movido» buscando apoyos, como hoy se dice. Quizá por esta razón, sin descartar otras de matiz político, el Papa no había contestado a la primera epístola que le solicitaba intervenir contra Silvano.

Para el futuro, se exige que los nombramientos de obispos se hagan con los necesarios requisitos, señalando especialmente que se dé el consentimiento del

²⁹ TEJADA Y RAMIRO, «Colección de Cánones», II, 950.

³⁰ *Epistola II Hilarii papae ad ascanium et reliquos Tarraconensis provinciae episcopos*, V, «P.L.», 58, 19: «Quod si Irenaeus episcopus ad ecclesiam suam, deposito improbitatis ambitu, redire neglexerit, quod ei non iudicio, sed humanitate praestabitur, removendum se ab episcopali consortio esse cognoscat».

³¹ TEJADA Y RAMIRO, «Colección de Cánones», II, 950.

metropolitano Ascanio. Esta actitud es la misma que tantas veces se ha observado al dictar una sentencia indulgente: se admiten los hechos consumados, pero se refuerzan las prohibiciones, para el futuro, a fin de que tales irregularidades no creen precedentes laxistas.

Es de notar algo curioso, a propósito de la manera de utilizar los argumentos en uno u otro sentido, según convenga: en la epístola a Ascanio, el Papa le reprocha el haber escuchado a los obispos del concilio, aceptado nombrar a Ireneo y haberse dejado influir por un grupo de ignorantes³². Sin embargo, y quizá para dar más fuerza a sus propias decisiones, cita varias veces el número de obispos que las aclamaron³³.

La contestación a las peticiones de los obispos tarraconenses no se hace por medio de los decretos del concilio de Roma: no resuelven el caso de Ireneo -único aludido- sino que legislan para el futuro. Se mandan los decretos conciliares para que se conozca la nueva legislación que prohíbe que un obispo coopte a su sucesor.

La contestación se remite en las dos epístolas mencionadas. Cabe preguntarse: ¿por qué dos epístolas, si resuelven lo mismo?. Sin duda, para insistir en la responsabilidad que el Papa atribuye al metropolitano. Por tal motivo, después de contestar a los obispos, le escribe particularmente a éste, dirigiéndole una severa reprimenda. La responsabilidad del metropolitano, ¿puede considerarse absoluta o limitada a este caso, por la ignorancia que el Papa reprocha a los sufragáneos de Ascanio?. Probablemente es absoluta, extensible a todos los metropolitanos, ya que aunque sea motivada por la ignorancia de los sufragáneos, no hay por qué pensar que sólo eran ignorantes los obispos de la Tarraconense.

Esta realidad puede ser indicativa del bajo nivel cultural y jurídico del común de los obispos en aquel entonces.

15.3. *Intervención de Gregorio Magno en la España bizantina*

15.3.1. *Resumen de los hechos*

Se tratará en este epígrafe de la apelación al Papa de los obispos de la España bizantina, Jenaro y Esteban. El primero lo era de Málaga, mientras que el segundo era probablemente obispo de Assido³⁴. Después de haber sido condenados por un funcionario del emperador Mauricio, llamado Comiciolo, ambos apelan al Papa sobre el año 595. Jenaro parece ser que no fue juzgado, sino simplemente expulsado a la fuerza por clérigos y hombres de Comiciolo. Esteban fue sentenciado.

³² Ver nota 27.

³³ *Epístola I Hilarij papae ad episcopos Tarraconenses*, 'De synodali decreto', IV, VI, «P.L.», 58, 12-14: «Ab universis episcopis dictum est sexies: 'Haec et confirmamus et docemus'. Dictum est octies: 'Haec tenenda sunt, haec servanda sunt'...».

³⁴ VALLEJO GIRVES, «Bizancio y la España tardoantigua», 424.

El Romano Pontífice no se ocupa del caso hasta el año 603, mandando a España un enviado suyo, el *defensor* Juan, al cual en tres epístolas da diversas y detalladas instrucciones para la revisión de los³⁵ casos, prácticamente convencido de la inocencia de los condenados.

La primera epístola³⁶ contiene indicaciones sobre la manera en que se deberá llevar la instrucción en ambos casos. En cuanto a Jenaro, habrá que comprobar si ha sido sometido a juicio y, en tal caso, si éste se ha desarrollado regularmente. Si aparecieran irregularidades, el Papa indica las sanciones que han de infligirse al obispo que le substituyó: será privado de todo ministerio eclesiástico y sometido a Jenaro, o bien enviado a la Sede Apostólica. Los que han ordenado al obispo sustituto serán igualmente sancionados, pero el castigo se moderará en el caso de haber actuado por temor a Comiciolo. Si el primer sustituto de Jenaro hubiere fallecido, y se hubiese nombrado un segundo sucesor, será igualmente sancionado, aunque en menor medida. Finalmente, Comiciolo -a quien se llama *gloriosus*- deberá reparar los daños causados.

En lo que concierne a Esteban, deberá repasarse el procedimiento seguido en el juicio que le condenó: comprobar si los testigos fueron diferentes de los acusadores; si las sanciones impuestas -exilio y deposición- correspondían al delito imputado; si los testimonios se efectuaron por escrito, o bajo juramento; si el acusado pudo defenderse; si los testigos eran idóneos y si la sentencia fue leída en presencia de las partes.

Si, después del examen, el juicio pudiera considerarse inicuo, se deberán imponer sanciones a los que le condenaron, al obispo que le substituyó en su sede en primero o en segundo lugar -si se diera el caso, como ocurrió con el de Jenaro- y a los obispos que les ordenaron, aunque temperando el castigo si hubieran actuado por miedo.

Pero puede ocurrir que Esteban fuese culpable, al menos por algunas de las faltas que le fueron reprochadas. Aunque si se demuestra su inocencia, Comiciolo deberá devolver lo que se quitó a Esteban, y, si hubiera muerto, deberá hacerlo su sucesor, pues no tiene derecho alguno a despojar a la Iglesia de sus bienes, incluso aunque Esteban fuese culpable.

La otra epístola³⁷ -que aparece clasificada como la última, nº 50, pero que por su contenido es más lógico presentar en segundo lugar- expone las leyes que deben tenerse en cuenta para la revisión de esas condenas. Se trata de las siguientes:

³⁵ El Papa, al referir los hechos al defensor Juan, los menciona sin manifestar duda alguna sobre su realidad. Ejemplo: *Gregorii I Epistola 50*, MGH, «Epistolarum», II, Gregorii I Papae Registrum Epistolarum», Berlín 1957, 415: «De persona Januarii episcopi sciendum est graviter omnino et contra leges actum, ut violenter de ecclesia traheretur...»; en p. 416: «De persona episcopi Stephani hoc attendendum est, quia nec invitum ad iudicium trahi nec ab episcopis alieni concilii debuit iudicari».

³⁶ *Gregorii I Epistola 47*, MGH, «Epistolarum», II, 410-412.

³⁷ *Gregorii I Epistola 50*, en MGH, «Epistolarum», II, 414-418.

- * dos constituciones de Justiniano³⁸, según las cuales el clérigo acusado debe ser juzgado por su propio obispo, especificando que por clérigo ha de entenderse también presbítero.
- * una constitución de Honorio y Arcadio³⁹, a propósito del atropello que sufrió Genaro, según la cual debe castigarse como culpable de lesa majestad a todo aquel que, introduciéndose en una iglesia, causase afrenta a los presbíteros y ministros, o al lugar mismo del culto.
- * una constitución de Honorio y Teodosio⁴⁰, que castiga como reos de del crimen de lesa majestad a los que violan el derecho de asilo, sacando de las iglesias a los que se han refugiado en ellas.
- * una constitución de León⁴¹, quien para idéntico caso prescribe la pena capital.

Por lo que se refiere a Esteban, el Papa precisa que no debió ser conducido a juicio por la fuerza, ni juzgado por obispos de otro concilio, según la constitución precitada de las Novelas⁴², que trata de los obispos. En ella se prohíbe llevar a un obispo ante un juez civil o militar sin previo mandato imperial, dispone que la causa incoada por un clérigo u otro sea llevada al metropolitano, y si se quiere recurrir de ella, debe hacerse ante el arzobispo o patriarca, y faltando éstos, a la Sede Apostólica.

Además, se citan otras leyes:

- * una constitución de Graciano, Valentiniano y Teodosio⁴³, según la cual, la sentencia dictada por el juez no adecuado no tiene fuerza de obligar.
- * una constitución de Honorio y Arcadio⁴⁴, en donde se condena a la pena capital a los parientes o servidores de quien es acusado por ellos, aunque con la excepción del crimen de lesa majestad.
- * un capítulo del Digesto⁴⁵, que trata de la tipificación de este crimen: no debe ser tomada en cuenta una manifestación hostil ocasional, sino que debe examinarse la conducta habitual del acusado, y si ha habido premeditación.
- * una Novela de Justiniano sobre testigos⁴⁶, que establece que los testigos deben ser oídos por ambas partes, no sólo por la que desde otra ciudad acude al juez, sino por la que se halle en la ciudad en la que se prestan los testimonios, previo aviso del juez o del defensor. Pero si esta parte no quiere acudir, para que los testimonios dados por una sola parte no sean válidos, serán considerados válidos, como si estuviesen prestados estando presentes las dos partes. El Papa, al saber que esta disposición no ha sido respetada, ya que el adversario -Esteban- no ha sido advertido, y por tanto, no ha podido oír a los testigos, declara que lo que le ha sido hecho despreciando las leyes, carece de autoridad.

³⁸ *Novellae* 123, 21 y 123, 19.

³⁹ *Codex* I, 3, 10.

⁴⁰ *Codex* I, 12, 2.

⁴¹ *Codex*, I, 12, 2.

⁴² *Novellae*, 123, 8 y 123 22.

⁴³ *Novellae*, 123, 8 y 123, 22.

⁴⁴ *Codex*, VII, 48, 4.

⁴⁵ *Digesto*, ILL, 4, 7, 3.

⁴⁶ *Novellae*, 90, 9.

- * una constitución del Código⁴⁷, según la cual una sentencia no puesta por escrito no tiene valor de tal.

La última epístola⁴⁸ -que aparece enumerada en segundo lugar, n° 49, pero que por su contenido debe tratarse al final- contiene la fórmula de la sentencia según la cual el *defensor* deberá emitir su juicio. Se refiere solamente al caso de Jenaro. Empieza por una declaración de la imparcialidad de Juan en cuanto juez, quien juzga por delegación del Papa. A continuación, enumera los hechos reprochados: la violencia sufrida por el obispo en su iglesia y el no haber cometido Jenaro falta que mereciese el exilio y la deposición. Luego se anuncia el carácter benigno de la sentencia, que consiste en la pena de reclusión en un monasterio para los obispos que se mostraron favorables a la condena de Jenaro, en la privación del sacerdocio y todo otro orden eclesiástico para su sustituto, y en el restablecimiento de Jenaro en su silla y *en todo* lo demás. Curiosamente, no se hace mención alguna de una posible sanción para Comiciolo.

15.3.2. Comentario

El Papa se retrasó unos 7 ú 8 años en atender los recursos de los obispos españoles, lo que parece indicar que esperó a la muerte del emperador Mauricio, y probablemente también la de Comiciolo⁴⁹. Lo cual demuestra la muy relativa independencia de la Sede romana frente al poder imperial, e ilustra la realidad del cesaropapismo. Conviene resaltar aquí que todas las leyes invocadas son civiles, unas especialmente dirigidas a la Iglesia, y otras no, pero aplicadas por analogía. Sin duda esta falta de independencia del Papa explica la sanción no penal prevista para Comiciolo, la cual, al final, ni siquiera es mencionada en la fórmula de la sentencia.

Llama la atención el tipo de delegación que el Papa confiere al *defensor* Juan. Este es delegado, pero recibe instrucciones muy precisas, ya que tiene trazado con tal precisión el sentido en que debe desempeñar su misión, que aparece como un instrumento pasivo de la voluntad del Papa, como su representante en el sentido más estricto de la palabra. La única libertad que se le concede es la única que cabe en quien tiene tan delimitada su actuación: comprobar la realidad de los hechos que son objeto de la apelación; cosa que no puede hacer personalmente el Papa, quien no se desplaza a España. Pero, fuera de ésto, Juan no puede apreciar la gravedad de los hechos ni elegir por sí mismo la pena, al menos si se comprueba la inocencia de Jenaro y Esteban.

En cuanto a la comprobación de los hechos, debe subrayarse la prudencia del Papa, pues parece que los conoce bastante bien. Sin embargo, no quiere obrar solamente por lo que él sabe, y de lo que está convencido, sino que encarga a Juan esa comprobación. Es posible que su convencimiento no sea tan absoluto para el caso de Esteban, lo que explicaría por qué no envía para éste modelo de sentencia.

⁴⁷ *Codex*, VII, 44, 3, 1.

⁴⁸ *Gregorii I Epistola 49*, en MGH «Epistolarum», II, 413-414.

⁴⁹ VALLEJO GIRVES, «Bizancio y la España tardoantigua», 423.

De todas formas, el Papa da la impresión de mostrarse, en todo momento, seguro de la inocencia de ambos obispos, pues de otra manera no se entiende cómo deja a Juan la libertad de decidir sobre la manera de juzgar en la hipótesis de que sean culpables, cuando en el caso contrario no deja nada a su iniciativa, como se ha visto. A no ser que se tenga mucho más interés en perseguir y castigar afrentas hechas a obispos inocentes que en castigar a obispos culpables, cosa que, desde luego, queda manifiesta en la minuta de la sentencia, pues anuncia la benevolencia papal a la hora de sancionar a los obispos que han sido injustos con Jenaro⁵⁰.

Resulta llamativo que el modelo de sentencia no recoja todo lo indicado en la 1ª epístola, a propósito del obispo usurpador de la sede de Jenaro. En efecto, no vuelve a decirse que aquél debe ser entregado a éste ni a la sede apostólica, castigo, dicho sea de paso, que parece corriente, pues lo mismo fue dictaminado por el Concilio VI de Toledo en el caso de Avencio⁵¹. Tampoco se habla de ninguna sanción para Comiciolo. Hay que pensar que el modelo de sentencia es simplemente indicativo y se habla sólo de lo fundamental. No cabe otra explicación posible, ya que, aunque Comiciolo hubiera muerto u ocupase otro cargo cuando se envía la minuta de la sentencia, ya se había dicho que la reparación económica debía ser igualmente efectuada por sus sucesores.

Finalmente, debe notarse cómo la Sede Apostólica quiere, sin duda, afirmar su autoridad⁵², pues juzga necesario, por una parte, dejar claro que la apelación es sustentada por el Papa, aunque sea por persona interpuesta y, por otra, que su intervención es imparcial y justa.

⁵⁰ *Gregorii I Epistola 49*, MGH, «Epistolarum» II, 413: «Et quamquam huius modi temeritatem legum censura districtissime feriat, ego tamen legum vigorem sacerdotali moderatione temperans mediis sacrosanctis evangeliis, quibus praesentibus ab initio in hoc cognitor resedi indicio, ea quae contra eum statuta sunt, licet jure non teneant nec alicujus momenti sint, infirma tamen et injusta esse pronuntio atque memoratos illum et illum episcopos, qui postposita sacerdotali consideratione in fratris sui praejudicium atque damnationem injuste et contra Dei timorem versati sunt, condemnamus in monasterio recipiendos ad agenda temporis poenitentiam statuo atque decerno».

⁵¹ Ver capítulo IV, epígrafes 11.3.1. y 2.

⁵² *Gregorii I Epistola 49*, MGH «Epistolarum», II, 413: «Cui officium cognitoris iniungitur, ita se pura atque intemerata conscientia debet in omnibus exhibere, ut ex his quae aliis iudicat ipse ultionem aeterni examinis non incurrat. Dum igitur ex deputatione sanctissimi et beatissimi atque apostolici domni mei Gregorii, ego Iohannes defensor...»

CAPITULO VII

JUICIOS SOBRE ASUNTOS POLITICOS

SUMARIO

- 16. Legitimación del acceso al trono
 - 16.1. Legitimación de Sisenando
 - 16.2. Legitimación de Ervigio
- 17. Apreciación y corrección de actuaciones de reyes anteriores
 - 17.1. Condenas morales
 - 17.2. Apreciación y reparación de daños causados por mandatos reales
 - 17.2.1. El Concilio VIII de Toledo y la validez del juramento de Chindasvinto
 - 17.2.2. El Concilio VIII de Toledo y el *Decretum iudicii universalis*
 - 17.2.3. El Concilio XII de Toledo y la ley militar de Wamba
 - 17.2.4. El Concilio XIII de Toledo y el indulto a los rebeldes del duque Paulo
 - 17.2.5. El Concilio XV de Toledo y los juramentos prestados a Ervigio
 - 17.2.6. El Concilio XVI de Toledo y el caso de Teudemundo
- 18. Prevención y castigo de las conspiraciones
 - 18.1. El juicio del obispo Sisberto
 - 18.2. El *status* de la reina viuda

Es bastante llamativo el elevado número de sentencias sobre asuntos políticos, si se le compara con el de sentencias de naturaleza eclesiástica. Ha de tenerse en cuenta que los asuntos políticos solo fueron tratados por los concilios nacionales y que todos los concilios -nacionales y provinciales- no dejan de ser, ante todo, asambleas eclesiásticas, y que las intervenciones en asuntos políticos sólo fueron accesorias. La razón por la que los asuntos políticos sólo sean examinados por concilios generales -o nacionales¹- se comprende fácilmente: deriva de la importancia del

¹ El concilio III de Zaragoza no figura en la lista de los concilios nacionales, aunque posiblemente lo fue. Ver epígrafe 18.2.

asunto, que, por ser de naturaleza política, es normalmente de interés nacional y no sólo provincial.

El título de los epígrafes que agrupan estas sentencias así lo indica, como también refleja la naturaleza y la omnipresencia del problema político fundamental del reino visigodo del siglo VII: la fragilidad del trono, amenazado constantemente por el riesgo de rebeliones internas; que, en ocasiones, fueron bastante más que un riesgo: una realidad. El estudio de estos asuntos se agrupará en tres grandes divisiones. En primer lugar, el problema crucial de legitimar los accesos al trono de Sisenando y Ervigio, que tenían todas las apariencias, no ya de irregularidad, sino también de ilegitimidad. A continuación se examinarán los casos en que los concilios de Toledo tuvieron que sopesar y normalmente corregir ciertas decisiones de reyes anteriores: se dan aquí varios casos en los que se perdona a los perseguidos por un rey anterior por rebelión o conspiración. Por último, se tratará la prevención y castigo de las conspiraciones.

16. LEGITIMACIÓN DEL ACCESO AL TRONO

16.1. *Legitimación de Sisenando*

El Concilio IV de Toledo², convocado por el rey Sisenando, tuvo, en cuanto a su actuación política, la misión de establecer la constitución del reino³: esencialmente, de fijar las reglas de la sucesión al trono, con el propósito -mencionado en ocasiones- de conseguir la estabilidad del reino. Es lo que el concilio hace en la primera parte de su largo canon 75. La segunda parte del mismo contiene el juicio efectuado contra el rey anterior a Sisenando y derrocado por él: Suínthila. El concilio no menciona en ningún momento tal derrocamiento, sino que presenta los hechos de manera muy diferente: la pérdida del trono por parte de Suínthila resulta de su autoprivación del trono -es mejor no hablar ni de dimisión ni de abdicación, sino atenerse al tenor del canon-, resolución que adoptó por encontrarse él mismo abrumado por sus propios crímenes⁴; los cuales son evocados genéricamente, pero no explicitados.

El castigo impuesto es teóricamente duro en el plano moral, pues Suínthila queda exconmulgado para siempre junto con su esposa e hijos, aunque ni a éstos ni a aquélla se imputen faltas concretas. Toda la familia se vé privada de lo que se dice que obtuvo mediante la exacción a los pobres, salvo lo que obtuvieren por perdón

² *CT IV*, 75.

³ ORLANDIS-RAMOS LISSON, «Historia de los Concilios», 261-298, en especial 292-296. GARCIA MORENO, «Historia de España Visigoda», 323 s. ORLANDIS, «Historia del Reino Visigodo español», 112 s. y 153 s.

⁴ *CT IV*, 75: «De Suinthilane vero qui scelera propria metuens se ipsum regno privavit et potestatis fascibus exiit, id cum gentis consultu decrevimus: ut neque eundem vel uxorem eius propter mala quae commiserunt neque filios eorum unitati nostrae unquam consociemus, nec eos ad honores a quibus ob iniquitatem deiecti sunt aliquando promoveamus; quique etiam sicut fastigio regni habentur extranei, ita et a possessione rerum, quas de miserorum sumtibus hauserant, maneant alieni, praeter in id quod pietate piissimi principis nostri fuerint consecuti».

del rey. También es exconmulgado Geila, el hermano de Suínthila, junto con su esposa. A éste se le reprocha el no haber sido fiel ni a su hermano, ni al rey: en definitiva, ser un conspirador⁵. Igualmente son privados de los bienes que hubieren adquirido inicualemente, salvo lo que obtuvieren por perdón del rey.

No se habla expresamente -como en el caso de Ervigio- de la legitimidad de Sisenando; pero el hecho de que el juicio de Suínthila esté incluido en el mismo canon 75, precisamente a continuación de las normas de sucesión al trono y de la prohibición de usurparlo tiránicamente, demuestra que declarar esta legitimidad era una importante preocupación tanto del concilio como del rey. Precisamente para que tal legitimidad no se preste a discusión, se presentan los hechos evitando deliberadamente aludir al derrocamiento de Suínthila por Sisenando.

En cuanto a las penas impuestas, llama la atención en primer lugar el hecho de que sean castigadas personas a las que no se les imputan faltas: la mujer e hijos de Suínthila. Quizá ello se deba a una reminiscencia del Derecho germánico, que admite la venganza hacia los parientes del malhechor⁶. En cuanto al rey depuesto, solamente se le hace una muy vaga imputación de sus crímenes⁷. Lo cual induce a pensar que no fuese culpable de ningún crimen especial que mereciese que fuera presentado como tirano, como da a entender la sentencia que le condena⁸.

La lectura de la sentencia produce un inevitable desconcierto: Sisenando es legitimado, cuando se sabe que derrocó a Suínthila, lo cual es un crimen que el mismo concilio presenta como abominable y que procura impedir. Suínthila, probablemente inocente, es presentado como un mal rey, y siendo así, sin embargo el concilio no declara formalmente su deposición. En resumen, los hechos son tergiversados y una parte de la sentencia parece ilógica.

Pero lo que resulta evidente es que la única preocupación del concilio es presentar a Sisenando como rey legítimo. ¿Por qué se actuó de esa manera? Para poder contestar a esta pregunta, hay que exponer el contexto en el que se produjo esta decisión, y considerar en qué términos se planteaba el problema de la legitimación de Sisenando.

Es este rey quien convoca el concilio -lo que evidentemente le resta independencia respecto del rey- al objeto de establecer la constitución del reino, de manera que se eviten en el futuro los destronamientos y se consiga, por fin, la paz en este

⁵ ORLANDIS-RAMOS LISSON, «Historia de los Concilios», 297.

⁶ Por ejemplo, en la obra de H. BRUNNER y C. VON SCHWERIN, «Historia del Derecho germánico» (trad.), Barcelona 1936, 21. En todo caso, conviene no insistir demasiado en esta supervivencia, estando bastante pasada de moda la polémica entre *romanismo* y *germanismo*, e incluso pudiéndose poner en duda la validez de esa construcción doctrinal que es el llamado *Derecho germánico*. Conviene citar, para sustentar una posición, si no excéptica, al menos desconfiada, el trabajo magistral de A. GARCIA-GALLO, «Consideración crítica de los estudios sobre la legislación y la costumbre visigodas», *AHDE*, 44, 1974, 343-464, en especial epígrafes 41 a 45, pp. 410-422.

⁷ Ver nota 4 de este capítulo.

⁸ J. ORLANDIS, «Historia de España. La España Visigótica», Madrid 1977, 144 y 154. THOMPSON, «Los godos en España», 196 ss.

aspecto. En tales circunstancias, es evidente que Sisenando debe aparecer como símbolo de lo que se busca: un rey que ha accedido legítimamente al trono. Y como por otra parte es dudoso que Suínthila se hubiera comportado como un tirano -como ya se ha dicho- parece inevitable que el reconocimiento de la legitimidad de Sisenando depende de si se declara que la deposición de su predecesor en el trono fue justa o no.

Pero es prácticamente imposible pronunciarse en un sentido o en otro. En efecto, si el concilio aprueba la deposición, por una parte comete una iniquidad contra Suínthila, pero por otra legitima el acceso al trono *per tyrannidem*⁹, es decir, por rebeldía, que es precisamente lo que se trata de impedir. Pronunciarse en contra de la deposición resultaría muy difícil, por tres razones que se dan en este caso simultáneamente: la primera, que el concilio no está en una situación de independencia que se lo permita; la segunda, porque se enfrenta a los hechos consumados, que hacen imposible, en la práctica, una vuelta atrás; y la tercera, porque, en el caso de que pudiese hacerlo, el concilio estaría animando a la rebelión contra Sisenando y peligraría la paz.

Hay que meditar un momento en que el concilio debe resolver un problema político, no un problema moral, y debe -porque no le queda otro remedio- sopesar los bienes en juego: la ilegitimidad de la ascensión de Sisenando, conectada con el posible mal gobierno de Suínthila -del que no se detallan en concreto sus crímenes- y la paz y estabilidad del reino. Si Sisenando se presentó al concilio atormentado por escrúpulos de conciencia, o simplemente para forzar de los conciliares un refrendo a su actuación, no lo sabemos. De ser así, hay que convenir que este rey sabía mucho de política, pues había jugado muy bien sus bazas.

La Iglesia supo salir brillantemente del *impasse* en que se encontraba, que bien pudiera calificarse de *trampa saducea*. Si el concilio denunciaba la ilegitimidad de Sisenando, que accedía al trono por medios tiránicos, el reino podría verse envuelto en guerra civil, y la propia Iglesia quedaría dividida y maltrecha. Si por el contrario, legitimaba sin más la ascensión de Sisenando, y además prohibía para el futuro conspirar contra el rey, estaba cometiendo, a sabiendas, una injusticia; y -por otra parte- en este caso justificaba la rebelión que éste había acaudillado. Por ello fijó los términos del dilema de otra manera tan hábil como sólida: ¿es lícito considerar tirano al que asume el poder cuando el rey se privó del reino por sus malas acciones:»...*sce- lera propria metuens se ipsum regno privavit*?». Por supuesto que no: la respuesta favorable a Sisenando era obligada, pues resultaba naturalmente de la propia pregunta que mentalmente debieron hacerse los conciliares.

Parece claro que el razonamiento fue el que acaba de describirse. Pero quedan aún varios aspectos a considerar. El primero es saber si el concilio actuó coac-

⁹ Es sabido que el concepto de tiranía tiene dos acepciones en la España visigoda. Se llama tirano al que hace mal uso del poder, pero también y con anterioridad a esa primera acepción, al que se rebela contra la autoridad legítima, y se hace con el poder por medios ilegítimos. J. ORLANDIS, «En torno a la noción visigoda de tiranía», *AHDE*, 29, 1959, 5-43. Sobre el problema de la elección de Sisenando, ver THOMPSON, «Los godos en España» 200-202.

cionado por la voluntad real. Sin descartar totalmente los escrúpulos de Sisenando, parece obvio que la voluntad del rey que convoca el concilio es que éste refrende lo que hizo. En este sentido, la voluntad del rey fue respetada. Pero también es cierto que no sólo sirvió aquél a los intereses del rey, sino también a los generales del reino, pues la solución adoptada era -como se vio- la única posible. Por lo tanto, las dos voluntades -la del rey y la de la Iglesia- eran muy probablemente coincidentes.

La sentencia parece descansar sobre un error judicial voluntario, pero imprescindible: si se sacrificaron la verdad y la justicia respecto de Suínthila, fue en aras de un bien considerado superior: la estabilidad del trono, que conllevaba la paz del reino. Por otra parte, hay que señalar que la condena de Suínthila y los suyos es bastante benigna: conservaron la vida, lo cual es admirable en el reino visigodo, cuando se trata de un rey derrocado; y si se les privó de sus bienes, se abría la puerta a que el príncipe las perdonase, según su benignidad, este castigo. Es fácil entrever, en el lenguaje de sobreentendidos que emplea la sentencia, una incitación al perdón real, probablemente como compensación al esfuerzo realizado por los conciliares para *limpiar* su acceso al trono.

La sentencia, bueno será repetirlo una vez más, ha de ser considerada como un magistral ejemplo de sutileza política: se consigue -por una parte- preservar la estabilidad del reino, y por otra, y como siempre, preservar el prestigio de la Iglesia, haciendo que la injusticia cometida sea tolerable, sacrificando solamente lo imprescindible, y evitando el riesgo que presentaba la solución del caso, de volverse contra ambos fines.

16.2. *Legitimación de Ervigio*¹⁰

El rey Wamba, recibió -como es sabido- la penitencia pública por encontrarse aparentemente en trance de muerte, aunque se sospecha -con sólidos fundamentos- que quienes se la administraron sabían que su estado no era grave, pues en realidad se le había dado un narcótico para simular un estado próximo a la muerte. Ervigio subió al trono y Wamba, una vez recuperado, se encontró *fuera del mundo*, e incapacitado para reinar al haber recibido la penitencia pública. No tuvo más remedio que firmar un documento designando a Ervigio como sucesor, y encomendando que fuese ungido a la mayor brevedad.

El Concilio XII de Toledo, sin hacerse eco de la *mise en scène* de quienes le administraron, primero la esparteina y luego la penitencia pública, interviene para dar fé de la legitimidad de Ervigio, demostrando que accedió lícitamente al trono, es decir, sin arrebatarlo a su antecesor. Los hechos son presentados de esta manera: la causa de la substitución del nuevo rey al anterior fue la recepción regular, dado el estado de Wamba, de la penitencia, que además fue presenciada por los

¹⁰ CT XII, 1.

*seniores palatii*¹¹; también el consentimiento, o más bien, el deseo expresado por Wamba de forma escrita de que Ervigio le sucediese, y presentado como indudablemente sincero, pues se insiste en que Wamba recomendó prontitud en la unción de éste¹². Termina desligando a los súbditos de su juramento de fidelidad a Wamba, recordándoles que deben ser fieles a Ervigio y no atreverse a conspirar contra él.

Se dijo que la superchería era posible, e incluso probable, pues parece fuera de duda que si no hubiera existido, no hubiera sido necesario que un concilio se pronunciase para convalidar este traspaso de poder, pues no presentaría anomalía alguna. Y siendo así, no se demuestra que no la hubo, ni siquiera se la menciona directamente: solo se hace mención de la presencia de los *seniores palatii*, lo cual no demuestra nada. En definitiva, el concilio se limita a afirmar que la aparente corrección de lo sucedido fue realidad; lo cual demuestra la indudable autoridad de la Iglesia y la necesidad que tiene el rey de su apoyo.

Otro dato también confirma la sospecha de que lo que hubo realmente fue una deposición *de guante blanco*: el concilio no juzga suficiente la incapacidad de Wamba para reinar, de resultas de la recepción de la penitencia, para justificar el acceso de Ervigio al trono: se insiste -ya hemos visto en qué términos- en el deseo manifestado por Wamba de que le suceda Ervigio, hecho innecesario en condiciones normales, pues no está previsto para validar al sucesor.

Se podría pensar que se ha cambiado de criterio, adoptando como modelo de sucesión al trono la designación de sucesor por el propio rey, como ocurrió otras veces, y concretamente en una ocasión reciente: Chindasvinto asoció al trono a Recesvinto para que le sucediese, e incluso dicha asociación se efectuó a petición de la Iglesia. Pero aquí no puede darse el caso, pues cuando Wamba manifiesta su deseo, ha recibido ya la penitencia, y ni es rey ni tiene -sobre todo- capacidad para ningún asunto temporal, de acuerdo con la expresión que describe la muerte civil, que resulta de la recepción de la penitencia: *mortuus huic mundo*.

¿Cómo valorar en ese asunto la actuación de la Iglesia? A primera vista puede pensarse que, como en el caso de Sisenando, defendió los intereses del reino, principalmente la paz, consagrando lo hecho por obligación; por lo que no quiso indagar acerca de las circunstancias en que fue administrada la penitencia a Wamba. Pero si se tiene en cuenta que no tenía muy buenas relaciones con este rey, mientras que

¹¹ *Ibidem*: «Vidimus enim et pariter pabulo alternae visionis intuitu praelucente perspeximus huius praemissi ordinis scripturas, id est notitiam manu seniorum palatii roboratam, coram quibus antecedens princeps et religionis cultum et tonsurae sacrae adeptus est venerabile signum: scribaturam quoque definitionis ab eodem editam ubi gloriosum dominum nostrum Ervigium post se fieri regem exobtat; aliam quoque informationem iam dicti viri in nomine honorabilis et sanctissimi fratris nostri Iuliani Toletanae sedis episcopi, ubi sub omni diligentiae ordine iam dictum dominum nostrum Herbigium in regno unguere deberet et sub omni diligentia unctionis ipsius celebritas fieret, in quas scripturas et subscriptio nobis eiusdem Wambanis principis claruit et omnis evidentia confirmationis earundem scribaturarum sese manifeste monstravit.

Sobre la penitencia, ver F. LOZANO SEBASTIAN, «La Penitencia canónica en la España romano-visigoda», Burgos 1980. S. GONZALEZ RIVAS, «La Penitencia en la primitiva Iglesia española», Salamanca 1949.

¹² Ver nota 11.

veía con buenos ojos a Ervigio y que, como también se sospecha, aunque no interviniese en la conjura, al menos podría estar al corriente¹³, su actitud es menos admisible. Y de ser así, tampoco puede decirse que actuó presionada por el nuevo rey, quien convocaba el concilio, pues la voluntad de ambas instituciones tenía que ser convergente.

17. APRECIACIÓN Y CORRECCIÓN DE ACTUACIONES DE REYES ANTERIORES

Todas las sentencias que pertenecen a este apartado tienen en común el que juzgan a reyes que han dejado de serlo, lo que demuestra la poca independencia de la Iglesia en esa materia, cosa, por otra parte, comprensible.

17.1. *Condenas morales*

En algunas ocasiones, la intervención de los concilios consistió en la expresión de una simple condena moral, más que en un juicio propiamente dicho; salvo en el caso de Suínthila, en el cual la condena moral va acompañada de una pena canónica -la excomunión- y también de una pena pecuniaria, entre otras razones, porque sigue vivo en el momento del juicio.

En otras tres ocasiones, los concilios no pasan de pronunciar una condena moral: en una ocasión, contra Sisebuto, en otras dos, contra Recescinto y Wamba, respectivamente. El Concilio IV de Toledo, en su canon 57, condena -si bien respetuosamente- la conversión forzosa de los judíos, ordenada por el rey Sisebuto, dictaminando que, en el futuro, sean convertidos por la persuasión y no por la violencia. El Concilio VIII de Toledo, en el '*Decretum iudicii universalis*', no se contenta con determinar las reparaciones que le parecen oportunas respecto a las injusticias y desmanes cometidos en vida del temido Chindasvinto, sino que consagra la mitad de ese decreto a calificar en los términos más severos su talante de tirano, aunque sin nombrarle¹⁴. Quizá la Iglesia se vengaba -*a posteriori*- de lo que tuvo que acatar a la fuerza mientras vivió este rey octogenario, especialmente, no perdonar nunca a los enemigos de la patria¹⁵.

¹³ En cualquier caso, la Iglesia era favorable al acceso de Ervigio al trono. Y, como ha sido puesto de relieve, dejó zanjada la cuestión de la validez de la penitencia pública recibida por personas privadas de sentido, que, recobrado éste, se negaban a aceptar su estado de muerte civil. El canon 2 no alude a Wamba, pero plantea la similitud de este caso con el bautismo de los niños; al final -y para el futuro- se prohíbe administrar el ritual de la penitencia a personas privadas de sentido si no consta que la hubieran solicitado. El concilio, muy diplomáticamente, apartó definitivamente del trono a Wamba.

ORLANDIS, «La España Visigótica», 267-269; ID., «Historia del Reino visigodo, 136 s.

¹⁴ *CT IV*, 57: «Ergo non vi, sed liberi arbitrii facultate ut convertantur suadendi sunt, non potius impellendi. Qui autem jam pridem ad christianitatem venire coacti sunt, sicut factum est temporibus religiosissimi principis Sisebuti...».

CT VIII, '*Decretum iudicii universalis*': «sicque solo principali ventre subpleto cuncta totius gentis membra vacuata languescerent ex defectu».

¹⁵ Ver epígrafe 17.2.1.

El Concilio XII de Toledo, con ocasión de la sentencia en que se establece la ilegalidad de la creación del obispado de Chaves por mandato de Wamba, se permite criticar no sólo ese mandato real, sino también a su autor¹⁶.

17.2. *Apreciación y reparación de daños causados por mandatos reales*

17.2.1. *El Concilio VIII de Toledo y la validez del juramento de Chindasvinto*

El CT VIII, en un extensísimo canon¹⁷, examina la validez del juramento prestado por exigencia de Chindasvinto, por todos los súbditos, incluidos los obispos, de respetar la ley *Quantis actenus* -luego recogida en LV, II, 1, 8- que sancionaba a los enemigos de la patria, a consecuencia de lo cual, éstos nunca podrían ser perdonados.

El concilio, recogiendo el deseo de S. Fructuoso¹⁸, quien más tarde se convertiría en abad de Dumio y obispo de Braga, examinó esta delicada cuestión, buscando cómo salir del dilema, a saber: violar el juramento o respetarlo, negándose en éste caso y para siempre, a aplicar el precepto divino de la misericordia.

Citando una larga lista de pasajes de la Sagrada Escritura¹⁹ y de algunos Padres de la Iglesia²⁰, el concilio se decidió, finalmente, por la invalidez del juramento²¹. Esta decisión, sin duda es acertada, pero no puede olvidarse que se produce cuando la autoridad civil ha cambiado de parecer, pues Recesvinto tiene un talante y muestra unas disposiciones diferentes a las de su padre Chindasvinto. Los argumentos esgrimidos en este canon no son una novedad y, sin embargo, nadie se preocupó siquiera de recordarlos cuando hubo que jurar. Es evidente que la Iglesia, en aquel entonces, actuó por miedo al poder civil, cosa por otra parte comprensible dado el talante despótico de Chindasvinto. También hay que subrayar que se abstiene de reconocerlo: busca una justificación noble, diciendo poco menos que el juramento apareció entonces como algo necesario para atajar el peligro de las revueltas²².

¹⁶ El *CT XII*, 4, habla de las «iniustis Wambae principis iussionibus», diciendo sobre éste rey: «praedictum principem consilio levitatis agentem...». Ver capítulo III, epígrafe 9.

¹⁷ *CT VIII*, 2.

¹⁸ ORLANDIS-RAMOS LISSON, «Historia de los Concilios», 342 s.

¹⁹ *CT VIII*, 2, en especial: «Et Jacobus: 'iudicium sine misericordia illi qui non fecerit misericordiam; super exaltat autem misericordia iudicium'».

²⁰ *CT VIII*, 2, en especial: «Vir quoque sanctissimus Augustinus... haec in suis narrat affatibus...: 'Non auferat, inquit, veritas misericordiam, nec misericordia impediatur veritatem; si enim pro veritate aut quasi rigida veritate oblitus fueris misericordiam, non ambulabis in via Domini, in qua misericordia et veritas obiaverunt sibi'».

²¹ *Ibidem*: «...ceterum quibus haec nequaquam sufficiunt, vel hinc summant cum rubore silentium, quia optamus, ut vas electionis, anathema esse in Christo pro fratribus nostris, quam perdurare crudelibus in delictis».

²² *Ibidem*: «Sed quum illarum series conditionum, ad quas decursis non longe temporibus pro eorum penuria hostilitatis vastitas nos iurare coegerat, nostris esset auditibus recensita...»

17.2.2. *El Concilio VIII de Toledo y el Decretum iudicii universalis*²³

Este mismo CT VIII, esta vez sin indicación del tomo regio, interviene formulando este decreto para reparar la *mala administración* de Chindasvinto, debida a su codicia.

Explica el concilio su intervención haciendo una larga condena en que, sin nombrar a Chindasvinto -a quien más adelante se califica de rey de gloriosa memoria o de divina memoria- concreta las manifestaciones de la codicia real: hubo reyes que se apropiaron de lo que habían recibido por ser reyes, cuando debieron haberlo dejado al reino y no considerarlo como cosa privada. En base a estas consideraciones, el decreto distingue entre lo que pertenece al patrimonio de la corona y lo que es privativo del rey, y resuelve el caso de Chindasvinto de la siguiente manera:

- * los bienes de cualquier clase, de los que Chindasvinto se apropió desde su acceso al trono pasarán a Recesvinto, pero no por herencia, sino como patrimonio real, para usarlos de modo que cada cual reciba lo que le es debido y el resto se emplee como le parezca para auxilio de sus súbditos.
- * lo que Chindasvinto poseyó antes de subir al trono por herencia o que justamente adquirió, también antes de subir al trono, pasaría a sus hijos y a Recesvinto como patrimonio particular. Igualmente éstos, u otros, conservarán lo que Chindasvinto les dio en vida o les dejó de sus justas ganancias.

Las actas del concilio incluyen a continuación de este decreto una ley de Recesvinto que recoge con modificaciones esas disposiciones. La ley quiere evitar la extorsión de bienes a particulares que puedan practicar los reyes, así como reparar las que se hubieren cometido. Por ello dispone que se podrán examinar las escrituras por las que los bienes particulares pasaron a manos del rey: si no hubo coacción, quedarán para siempre en su poder, si se demuestra que la hubo, la escritura queda anulada. El supuesto de la extorsión de bienes por el rey a particulares no era contemplado -al menos, tan claramente- por el Decreto.

En cuanto a la suerte de los bienes que el concilio consideró -los del patrimonio de la corona y los privados del rey- se dispone que los adquiridos desde Suínt-hila y los que adquieran en el futuro, así como lo dejado por el rey *ab intestato*, pertenecen al sucesor en el trono²⁴, pues lo adquirió en calidad de rey, y éste podrá disponer libremente de ello.

En cuanto a lo que el rey hubiere recibido por herencia, se le respetarán los derechos hereditarios como a cualquier otra persona, así como también a sus hijos

²³ Al final de las actas de *CT VIII*: «Item Decretum iudicii universalis editum in nomine principis».

²⁴ *CT VIII, Lex edita in eodem concilio a Recesvinto principe namque glorioso*: «De rebus autem omnibus a tempore Suintilani regis hucusque a principibus acquisitis aut deinceps si provenerit acquirendis quaecumque forsitam princeps inordinata sive reliquit seu reliquerit, quoniam pro regno apice probantur acquisita fuisse, ad successorem tantumdem regni decernimus pertinere, ita habita potestate ut quidquid ex his elegerit facere liberum habeat velle».

o, en su defecto, a sus herederos legítimos. Si no dispone por testamento de estas cosas u otras recibidas por donación o adquiridas por contrato, pasarán *ab intestato* a sus familiares y no a su sucesor en el trono²⁵.

Los bienes que el rey antes de ser rey, por herencia o justa adquisición, serán suyos propios, pasando luego a sus hijos o, a falta de éstos, a sus herederos legítimos.

El *Decretum* y la ley de Recesvinto que, como se ve, son distintos, coinciden en lo fundamental: delimitar el patrimonio privado del rey y el de la corona, para que el primero no aumente a costa del segundo. Pero mientras el concilio sólo se ocupa del caso de Chindasvinto, la ley tiene, a su vez, un efecto retroactivo hasta el reinado de Suínthila, además de sus efectos para el futuro. Por otra parte, el concilio sólo alude a la codicia de Chindasvinto, en cuanto acaparó bienes que pertenecían al patrimonio público, y no insiste, como lo hace la ley, en el expolio de particulares mediante coacción, ni contempla claramente la reparación por restitución voluntaria del rey arrepentido o por sus herederos, a la muerte de éste.

La última parte de las disposiciones del decreto queda poco clara, pero puede explicarse en función de lo anterior: lo que el rey Chindasvinto haya entregado a sus hijos o a otros de sus justas ganancias, seguirá perteneciéndoles. ¿Qué se debe entender por justas ganancias? o más precisamente, ¿de qué bienes se trata? No son los que adquirió el rey antes de subir al trono, pues la suerte de éstos está contemplada en otro lugar. Por lo tanto, tiene que tratarse de bienes adquiridos después de subir al trono, pero no adquiridos en su condición de rey, sino los bienes que hubiese adquirido como un particular cualquiera y de modo justo. Seguramente esos bienes son los mismos que apunta la ley de Recesvinto, cuando habla de lo que el rey hubiere adquirido sin sombra de coacción de lo que hubiera heredado de parientes o adquirido por contrato o donación y sobre los que también le concede libertad de disposición; que son también bienes adquiridos desde que subió al trono, porque el supuesto de la coacción corresponde a ese período, y porque los bienes que obtuvo antes de ser rey, reciben tratamiento aparte. Y no son los que consiguió en calidad de rey, pues la suerte de éstos tiene también tratamiento aparte.

Precisamente respecto de estos últimos, hay algo sorprendente en la ley: su redacción da a entender que la prueba de que son bienes adquiridos en calidad de rey, resulta del hecho de que éste los deja *ab intestato*²⁶, lo cual sorprende por dos razones: porque se contempla en otro lugar²⁷ la posibilidad que tiene el rey de dejar

²⁵ *Ibidem*: «Quod si aliquid ex rebus de quorumcumque parentum aut proximorum non solum successione, sed etiam quaelibet conlatione aut quocumque contractu, ad ius ipsius pervenisse patuerit, si contingat haec inordinata relinqui, non ad successorem regni sed ad filios vel haeredes eius qui acquisivit, specialiter omnis eadem adquisitio pertinebit».

²⁶ Ver nota 24 de este capítulo. Thompson interpreta esta manera de designar los bienes que deberán permanecer en la Corona como una manifestación de mala fé por parte de Recesvinto; pues de este modo, guarda entera libertad para disponer de las adquisiciones de Chindasvinto que, seguramente, había dejado a sus hijos. THOMPSON, «Los godos en España», 232-234.

²⁷ Ver nota 25.

ab intestato bienes que adquirió siendo rey, y que sin embargo pertenecen a su patrimonio privado. Y porque el hecho de dejar bienes *ab intestato* como prueba de que pertenecen a la corona presupone la buena fé del rey, cuando de lo que se trata es precisamente de evitar las consecuencias de su mala fé, manifestada en numerosas ocasiones: tanto el decreto como la ley recuerdan que los reyes se apropiaron de los bienes de la corona, sin duda con el propósito de dejarlos a sus herederos.

Habrá que pensar que la redacción de la ley es confusa, y que lo que hay que entender es que la adquisición de bienes por parte del rey, en su calidad de tal, deberá probarse, aunque la ley no diga cómo; estos bienes, como patrimonio de la corona, no podrán ser objeto de disposición testamentaria por su titular.

¿Qué debe pensarse de estas divergencias entre el *Decretum* y la ley? Si el concilio sólo se ocupa del caso de Chindasvinto es porque fue -sin duda ninguna- el rey que más irregularidades cometió en este terreno. Y si su hijo promulga una ley mucho más amplia, es probablemente para diluir la culpa de su padre. Si el concilio apenas evoca la devolución de lo injustificadamente adquirido, mientras que con la ley ocurre exactamente lo contrario, puede explicarse porque aquél conocía la disposición de Recesvinto para efectuar tales devoluciones: lo da a entender, por lo que no juzgó necesario entrar en ello²⁸. No obstante, si se conocen las buenas disposiciones de Recesvinto, ¿por qué entonces intervino el concilio para reparar la mala administración de Chindasvinto, ya que el rey no se lo pidió en el tomo regio? El *Decretum* es, sin duda, una incitación para que el rey materialice sus buenas intenciones de corregir las injusticias cometidas por su padre.

Por esta razón tal vez se ha traducido el título del decreto *Decretum iudicii universalis editum in nomine principis* por *decretum* dirigido por el concilio al rey²⁹. Pero tal traducción es indefendible: la expresión *in nomine* seguida de genitivo se encuentra en muchos concilios, y significa siempre *en nombre de N*³⁰. En cuanto al participio *editum*, se encuentra también en muchos concilios, en el sentido de *dado o promulgado*³¹.

Vives da otra traducción de este título del decreto: *Decreto acerca del alto tribunal dado en nombre del rey*. Tampoco parece correcta la expresión *acerca del alto*

²⁸ *CT VIII*, '*Decretum iudicii universalis*': «...sed illae res quas praedictus princeps de iustis proventibus filiis suis vel quibuslibet iustissime visus est contulisse vel reliquisse, omnes in eorum iure manent inconvulse, illa negotii huius veritate servata, ut quia grata voluntas gloriosi domni nostri Recesvinti regis reddere decernit unicuique iustissime debita, nemo invasionis calumniam moveat aut damna requirat, propter quod gloriosae memoriae genitorem eius quaedam indebite abstulisse constiterat».

²⁹ Este es el sentido que da Torres López, siguiendo la interpretación de Zeumer. M. TORRES LOPEZ, «Lecciones de Historia del Derecho español», II, Salamanca 1936, 262.

³⁰ Por ejemplo, la ley de Chíntila, que confirma ciertos acuerdos del *CT V*, y se encuentra al final de sus actas: «In nomine Domini Flavius Chintila Rex». O también, las primeras palabras del *CT VII*: «Item concilium Toletanum VII, in nomine Domini et Salvatoris nostri sinodale decretum in toletana urbe». O, en este mismo *CT VIII*, la firma del tomo regio por Recesvinto: «In nomine Domini Flavius Recesvintus rex hanc fidei et bonae voluntatis meae deliberationem manu mea subscripsi».

³¹ Por ejemplo, en el mismo *CT VIII*, a propósito de la ley de Recesvinto relativa al '*Decretum iudicii universalis*': «Lex edita <promulgada> in eodem concilio a Recesvinto principe. Igualmente, la lex in confirmatione concilii en *CT XIII* y *XVI*: «Lex in confirmatione concilii edita» <dada>. O el decreto de condena de Sisberto dado por los obispos del *CT XVI*: «Decretum iudicii ab universis editum».

tribunal. ¿por qué *acerca de*, si el texto no trata en ningún momento de decretar nada sobre el tribunal? En cuanto a *alto tribunal*, puede admitirse que *iudicium* signifique tribunal, pero el adjetivo *universalis*, que se emplea a menudo en los concilios de Toledo, calificando a las asambleas episcopales, designa a los concilios generales³².

Por lo tanto, entiendo que la traducción correcta del título es: *Decreto del tribunal general, dado en nombre del príncipe*. Tribunal general designa al concilio actuando como tribunal.

La intervención del concilio con este decreto puede ser la de una sugerencia hecha al rey, pero el título no la llama así. Quizás para hacer más presión sobre el rey, ya que así parece hablar en nombre de éste, de manera que, en tal situación, le resulte más difícil inhibirse o, al menos, demorarse.

17.2.3. *El Concilio XII de Toledo y la ley militar de Wamba*

EL *CT XII*³³, a petición de Ervigio, y arguyendo que la ley no puede castigar de manera que no haya esperanza de perdón, levanta una de las penas que afectaban a los que habían caído bajo los efectos de la ley militar de Wamba³⁴. Dicha ley trataba de luchar contra el desinterés, al parecer generalizado, por la defensa militar del reino, y obligaba tanto a clérigos como a laicos que viviesen en un radio de cien millas, a acudir al lugar del reino donde la paz estuviese amenazada. El castigo impuesto a los infractores consistía en penas pecuniarias, destierro, servidumbre e infamia legal, pena esta última reservada a los laicos. Precisamente, los alcanzados por esta infamia legal eran muy numerosos: según dice Ervigio en el tomo regio, la mitad de la población; y a ellos les concede el concilio una amnistía, autorizándoles a testificar, también con carácter retroactivo, en las causas en que hubieran podido hacerlo de no haber caído en la infamia prescrita por dicha ley³⁵. No mencionan las penas de confiscación previstas en la misma, quizá porque no se hubiesen aplicado.

Las primeras palabras del canon indican que se recoge la jurisprudencia del canon 2 del Concilio VIII de Toledo, donde se condenaba la negación de un posible perdón. Al mismo tiempo aparece una condena categórica a la actuación de Wamba -a quien no se menciona explícitamente- puesto que no sólo se levanta el castigo para el futuro, sino que se produce una verdadera amnistía, al tener el perdón carácter retroactivo.

³² Por ejemplo, , al final del tomo regio del *CT III*, dice el rey: «His itaque cum omni undique subtilitate et diligentia a nobis ordinatis, statuit sancta synodus et universalis aliam fidem nulli licere, proferre aut scribere aut edere aut sapere aut docere aliter». El adjetivo *universalis* indica que se trata de un sínodo general.

Igualmente el can. 7 del *CT V*, hablando del *CT IV* lo define como «concilium universale» con el mismo sentido del concilio general.

³³ *CT XII*, 7.

³⁴ *LV*, IX, 2, 8.

³⁵ ORLANDIS, «La España Visigótica», 271.

No deja de sorprender ésto, pues favorece la apatía que Wamba quiso combatir. La explicación probablemente resida en la siempre frágil posición de Ervigio, quien buscaría atraerse la simpatía de los enemigos de Wamba, que en este caso eran numerosos. De todas formas, el propio Ervigio promulgó su propia ley de movilización militar³⁶, éso sí, más suave que la de Wamba.

17.2.4. *El Concilio XIII de Toledo y el indulto a los rebeldes del duque Paulo*

El CT XIII interviene³⁷, también a petición de Ervigio, con una finalidad similar: la de indultar a los condenados bajo el reinado de Wamba por haber participado en la rebelión del duque Paulo, acaecida en la Galia Narbonense, que pertenecía al reino visigodo. Los condenados son restablecidos en su derecho a testificar, así como igualmente lo son todos los que hubieran caído en infamia desde el rey Chíntila. Se les devuelven sus bienes confiscados; pero no se devuelven los que hubieran sido entregados por el rey a terceros en donación o estipendio³⁸.

Es conocida la hostilidad que existía entre Wamba y Ervigio, y el peligro que suponía para éste último, así como la nota de permanente debilidad que marcó su reinado, siempre con el temor de una revuelta del poderoso clan de Wamba. Al final, este grupo consiguió el poder al acceder al trono Egica como sucesor y yerno de Ervigio. Por ello, no es aventurado pensar que el concilio quiso ayudar a éste, tanto con la decisión que se está comentando como con la anterior, a conservar la simpatía de los enemigos de Wamba, así como a atraerse la de otros, que hubiesen sufrido una condena semejante desde Chíntila.

Seguramente a causa del temor a las rebeliones, que en ningún caso se quieren justificar, se tiene buen cuidado de llamar *traidores*³⁹ a los que ahora son indultados, y no se hace retroactivo -como ocurrió en el caso anterior- su derecho a testificar. Esta actitud conciliar justifica lo que acaba de decirse más arriba: más que hacer justicia, se trataba de una intervención por necesidades políticas.

17.2.5. *El Concilio XV de Toledo y los juramentos prestados a Ervigio*

EL CT XV⁴⁰, siguiendo la petición que le hace Egica en el tomo regio, tiene que pronunciarse sobre la validez de dos juramentos prestados por este rey a su suegro y antecesor, Ervigio, a petición de éste.

³⁶ LV, IX, 2, 9.

³⁷ CT XIII, 1.

³⁸ Sobre el estipendio, que originariamente se refiere a los bienes necesarios para el sustento de los clérigos y servidores de las iglesias, y luego se extendió al ámbito civil, ver P. MEREÁ, «Precarium e stipendium», en su *Historia e Direito*, I, Coimbra 1967, 1-29, en especial 17 ss.

³⁹ CT XIII, 1: «...decernendum nobis occurrit ut omnes quos scelerata condamn gentem et patriam conjuratio Pauli in perfidiam traxit et titulo testimonii honestioris abegit, ad statum dignitatis pristinae redeant et nulla deinceps illis ob hoc catena iudicialis obsistat, sed omnes ita generose stirpis ac nobilitatis propriae subeant decus ut preteritae infidelitatis nullum perferant dedecus».

Sobre la traición de estos rebeldes, ver ORLANDIS, «Historia del Reino visigodo español», 131 s.

⁴⁰ CT XV, después de la respuesta de los obispos a las objeciones formuladas por el Papa al *Apologeticum* de S. Julián de Toledo.

Una primera cuestión concierne a estos juramentos. Egica había jurado a su suegro defender siempre, después de la muerte de éste, a la reina viuda Liuvigoto y a sus hijos, es decir, reservarse el derecho de sostenerles en los juicios incoados contra ellos y con fundamento legal, así como de defender su causa como si el propio Egica fuese parte, en los juicios que aquéllos incoaran. El segundo juramento, prestado igualmente a petición de Ervigio y poco antes de la muerte de éste, consistía en hacer justicia a los pueblos y no dañar a nadie.

Egica sostiene ante el concilio que esos dos juramentos son contrarios: si respeta el primero, y se convierte en parte interesada, no puede ser imparcial como prometió en el segundo.

El concilio juzga⁴¹ que tiene más valor el segundo juramento, por ajustarse al deber general de equidad, mientras que el primero sólo favorece los intereses particulares de una familia. Sin embargo, no quita a éste todo valor, al explicar que se debe incluir en el segundo, pues la familia de Ervigio debe ser tratada con igual justicia que cualquier otra del pueblo.

La segunda cuestión se refiere a un tercer juramento, que Ervigio había exigido a su pueblo en favor de la seguridad de sus hijos. Egica pretendía que tal juramento cerraba la puerta a toda reclamación, afirmando que muchos habían sufrido opresión por parte de Ervigio. En este caso, el concilio no hace ninguna concesión a Egica, considerando que el juramento no atenta contra la equidad, sino que solamente evita ocasiones de maldad o de venganza, pero no conlleva prohibición alguna de reclamaciones justas por parte de los presuntos oprimidos. Se dice incluso que Ervigio permitió que se castigaran conforme a la ley los delitos de sus hijos y que cada uno pudiera presentar judicialmente sus reclamaciones⁴².

Lo primero que aparece, con claridad meridiana, es el temor de Ervigio a futuras represalias contra su familia, lo cual dice bastante del clima de inseguridad en que vivió, y que se recordaba más arriba; y, al mismo tiempo, la excepcional buena disposición del concilio hacia un rey desaparecido. Llama la atención la minuciosidad con que aquél examina los juramentos, en vez de dar por buenos los argumentos de Egica y acatar -como hizo otras veces la Iglesia- la voluntad del rey actual. El concilio no se dejó manejar, y consiguió defender, en la medida de lo posible, la posición de Ervigio.

⁴¹ *CT XV*, loc. cit. nota anterior: <7> «Sic ergo ab illis vinculis iuramenti quibus socero ante iuravit principem nostrum Egicanem regem, sancta synodus absolvendum elegit, ut aut cognatos ad populorum regulam dirigat aut populos in cognatorum iustam defensionem adumat, ut quasi unius patris germenisque filios utrumque uno devocans in affectu, nec in cognatorum iustis negotiis favorem populorum obtendat nec rursus in populorum questibus cognatis favore pertentet...».

⁴² *Ibidem*: <9> «Nec enim illic iuramentum est ut aut causantes contra filios suos nemo iuvaret aut nullus super eos aequitatis iudicium promeret, ubi iam dictus princeps non solum in singulis negotia sua iudicialiter proponendi aditum tribuit, sed et scelera filiorum suorum, si qua accidissent, legibus ulciscenda permisit... Neque enim quorundam incauta illa dicacitas attendit quae impudenter adstruere nititur illos tantum innoxios esse a periurii crimine qui negotia sua tantum visi fuerint obiecisse, illos autem qui vel talia negotia iudicanda susceperint vel huiusmodi pro aequitate adiuverint inexplabili profanationis crimine irretiri».

Es llamativa también la valentía de que hace gala el concilio, al calificar de maliciosa⁴³ la interpretación del tercer juramento exigido por Ervigio a su pueblo para garantizar la seguridad de sus hijos: no nombra el concilio a Egica, pero lo designa implícitamente, ya que la afirmación calificada de maliciosa es hecha por el propio Egica⁴⁴ en el tomo regio.

No se sabe cuál era el contenido exacto de este juramento. Es dudoso que contuviese -como lo dice el concilio- el explícito permiso de castigar los delitos de sus hijos y la posibilidad para cada uno de defender judicialmente sus derechos. Se trata probablemente de una interpretación algo forzada -que prestigia a Ervigio- del segundo juramento de Egica: hacer justicia a los pueblos, y del primero, donde Egica se reserva el derecho de defender a los familiares de Ervigio si fueran citados a juicio. El juramento es interpretado *a contrario*: se deja libre a Egica para no defenderles si considera que no tienen razón.

En definitiva, el concilio desmonta, al menos en el caso del tercer juramento, la pretensión de Egica de que se reconociese el nepotismo de Ervigio, interpretando la actitud de este rey como un deseo de justicia imparcial, exenta de favoritismo hacia los suyos. Insisto en la palabra *interpretando*, pues no está contemplada nunca claramente por Ervigio la posibilidad de una condena de sus familiares.

Y aunque en la primera sentencia -sobre la contradicción de los dos juramentos prestados por Egica- el concilio tenga que admitir el trato de favor solicitado por Ervigio en beneficio de los suyos, sin embargo consigue con mucha habilidad desechar la pretensión de Egica de anular el primer juramento. Lo cual hubiese puesto en peligro la seguridad de los familiares de Ervigio. De esta manera, la obligación de justicia contraída por Egica para con éstos no se convierte en un simple deber moral, sino que el rey sigue ligado por el juramento que prestó.

17.2.6. *El Concilio XVI de Toledo y el caso de Teudemundo*

Se tiene noticia, por un documento anejo al CT XVI, de la petición hecha por el rey Egica a este concilio, de que aparte a un *spatarius* suyo, de nombre Teudemundo⁴⁵, de toda acción judicial motivada por el hecho de que hubiese desempeñado indebidamente durante un año el cargo de *numerarius* de Mérida, en contra de todas las costumbres de su linaje y clase social, por orden de Wamba y a petición del entonces obispo de la ciudad, Festo.

⁴³ Ver nota 42.

⁴⁴ CT XV, tomo regio: «... pro quibus omnibus haec adhuc insuper in querimoniam venit, quod omnem populum regni sui ob tuituionem filiorum suorum iurare compulerit et ex hoc cunctis quasi aditum reclamandi obstruxerit».

⁴⁵ Alocución de Egica al CT XVI, distinta del tomo regio, que aparece al final de las actas de este concilio. Sobre este Teudemundo y su caso, que no está en la *lex in confirmatione concilii*, como pretende García Moreno, así como otro *comes procer* del mismo nombre que aparece suscribiendo las actas de este concilio, ver GARCIA MORENO, «Prosopografía», n° 148; ID., «Estudios sobre la organización administrativa en el reino visigodo de Toledo», *AHDE*, 44, 1974, 47-48.

No se conoce cuál fue el fallo del concilio. No deja de sorprender la petición de Egica, sabiendo que Teudemundo pertenece al clan de Wamba. Quizá sospechase, porque temía, que tanto éste como su familia pudieran ser molestados cuando hubiese dejado de ser rey. De todas formas, la mención de este caso es interesante desde el punto de vista social, porque demuestra que las clases sociales eran bastante cerradas. En efecto, no se trata del ascenso o promoción de una persona a un puesto más elevado que el que le corresponde, sino al contrario, del desempeño de un puesto de categoría inferior a la debida.

18. PREVENCIÓN Y CASTIGO DE LAS CONSPIRACIONES

18.1. *El juicio del obispo Sisberto*

A petición del rey Egica, el Concilio XVI de Toledo juzga el crimen de conspiración de Sisberto⁴⁶, obispo de Toledo, quien había planeado no sólo quitarle el trono, para poner en su lugar a otro cuya identidad no se menciona, sino también para darle muerte junto con otras personas de su entorno: Frogelo, Teodomiro, Liuvilana, Liuvigoto -acaso la viuda de Ervigio- Tecla y otros cuyos nombres no se especifican. El juicio se celebra antes de la apertura del concilio, para que, llegado este momento, esté ya nombrado el sustituto del obispo de Toledo.

Sisberto, que confiesa su crimen, es depuesto del orden y honor episcopal en virtud de las leyes canónicas y civiles, es condenado al exilio perpetuo y excomulgado hasta el final de su vida. Se menciona la posibilidad de que sea absuelto por decisión del rey y con anuencia de los obispos. Su sustituto será Félix, hasta ahora obispo de Sevilla, quien será sustituido en la sede hispalense por Faustino, obispo de Braga, y éste a su vez por otro Félix, obispo de Oporto.

El canon 9 del mismo concilio reproduce la sentencia del decreto dado antes de la apertura del concilio, mencionando una pena suplementaria: la confiscación de sus bienes. En este canon solamente se invoca la legislación canónica y se legisla para el futuro, estableciendo que la misma pena se aplicará a los varones religiosos de cualquier grado u honor que conspiren contra el príncipe.

El hecho de que la conspiración de Sisberto se trate dos veces -una sólo entre los obispos, la otra en el concilio, en presencia de los magnates- expresa bien la doble naturaleza de la causa, eclesiástica y política. Si solamente hubiese sido examinada por el concilio, al tener cariz político, e intervenir en el juicio los magnates, se hubiesen vulnerado las reglas de competencia respecto al juicio de un obispo. En efecto, éste debe ser juzgado por el concilio en sentido estricto, y no por un tribu-

⁴⁶ Los miembros del concilio reunidos antes de su apertura juzgan a Sisberto y expresan su sentencia en el '*Decretum iudicii ab universis editum*', reproducido al final de sus actas. Igualmente, expresan nuevamente su condena en el canon 9 de este concilio. Sobre Sisberto, ver GARCIA MOERNO, «Protopografía», nº 252. Frogelo debía ser una persona íntimamente ligada con Egica. Teodomiro, igualmente un alto personaje, como Liuvila y Tecla. *Ibidem*, respectivamente nos. 63, 152, 93 y 145. Sobre Liuvigoto ha de volverse más adelante.

nal mixto, en el que se hallen presentes personas laicas. Esta puede ser una de las razones de este doble examen. La otra la conocemos, al mencionarse expresamente: el hecho de que el reo sea un obispo y deba ser depuesto, origina un problema de naturaleza estrictamente eclesiástica: su substitución, que debe ser resuelta, lógicamente, antes de la apertura del concilio.

La condena no parece excesivamente dura: condenarle más benignamente por semejante crimen parece imposible. Se enmarca en la disposición benevolente, que habitualmente manifiestan los concilios a la hora de castigar a un obispo; incluso sugieren al rey la posibilidad de perdón.

Los magnates, probablemente en vista de la suavidad de la condena, presionaron para que en la sentencia del canon 9 se añadiese la confiscación de todos los bienes de Sisberto.

18.2. *El status de la reina viuda*

Aunque este asunto, tratado en dos concilios, no puede revestir exactamente el nombre de sentencia -puesto que en un sólo canon se presenta como la resolución del caso particular de Liuvigoto, viuda de Ervigio⁴⁷- parece claro que es precisamente este caso particular de esta reina, y quizá de otra, el que se tiene en cuenta en las decisiones adoptadas y, además, está ligado al problema de las conspiraciones, como se explica más abajo.

El Concilio XIII de Toledo, en su canon 4, condena las posibles maquinaciones y persecuciones contra la descendencia de Ervigio y de su esposa Liuvigoto, y prohíbe que nadie imponga ilegalmente el hábito religioso a ella, a sus hijas ni a sus nueras. El canon 5 prohíbe, de manera general y tajante, que nadie se atreva a casarse o unirse adúlteramente a la reina viuda, ni siquiera tratándose del príncipe sucesor. Las razones invocadas son de orden moral: resultaría indecoroso que la viuda del rey se uniese a alguna persona de quien anteriormente fue reina. La hipótesis de tal unión se describe como una situación abominable⁴⁸.

No obstante, no puede dejar de notarse que el argumento de que la reina no puede casarse con un inferior es bastante débil tratándose del príncipe sucesor; pues, una vez rey, ya no es inferior, sino más bien al contrario.

El Concilio III de Zaragoza, so pretexto de afecto paternal para proteger el honor de las reinas viudas, confirma el canon 5 del CT XIII, y dispone además que

⁴⁷ CT XIII, 4 y 5; C. Zaragoza III, 5.

⁴⁸ CT XIII, 5: «Execrabile facinus et adsuetae <ad>modum iniquitatis est opus defunctis regibus supre<sti>tis eius coniugis regale torum appetere, et horrendis pollutionum maculis sordidare. Quis enim christianorum aequanimiter ferat defuncti regis coniugem alieno postmodum conubio uti aut sequutri principis libidini subiugari, ut quae fuit domina gentis sit in postmodum prostibulum foeditatis, et quae toris extitit regalibus honoris regii sublimitate coniuncta stupris eorum vel coniugiis quibus pridem domina<ta> est, abdicetur ut reproba?».

la reina, en cuanto enviude, deberá tomar el hábito religioso con *alegre disposición*. Expresión ésta un tanto cínica, pues presenta de propósito esa obligación como poco penosa, simplemente porque no se quiere reconocer que pudiera no ser del agrado de la reina. Lo cual obedece, sin duda, a que sea menos evidente esta contradicción con lo establecido en el canon 4 del Concilio XIII de Toledo, cuando en realidad, se trata de un cambio absoluto de criterio.

Dado el clima de hostilidad, bien conocido, de los tiempos de Ervigio, es evidente que las disposiciones del canon 4 del Concilio XIII de Toledo responden a un temor real, como lo prueban las actitudes hostiles que manifiesta Egica hacia la familia de Ervigio en el CT XV. Lo mismo puede decirse del canon 5 de este mismo CT XIII. Es decir, que Ervigio temía -y probablemente sabía- que Egica, su sucesor, tenía los ojos puestos en su mujer Liuvigoto⁴⁹. Lo confirma el hecho de que se contempla expresamente la posibilidad de una boda o una unión ilícita de la reina viuda con el príncipe sucesor; cosa que ya había ocurrido en otras ocasiones, pues era, para el nuevo rey, una manera de afianzarse en el trono. Ervigio teme que su mujer se vea obligada a algo que quizá no le apetezca⁵⁰; y también es muy posible que tema por su propia vida, ya que constituye un impedimento a los planes del sucesor que proyecte casarse con su viuda⁵¹. Desde luego, la hipótesis de un deseo de Egica de emparentar con la familia de Ervigio parece fuera de duda, puesto que finalmente se casa con la hija de éste, Cixilo, y parece que no precisamente por amor, pues no dudó en vivir separado de ella largo tiempo, por instigación -o aún mejor, imposición- de su tío Wamba⁵², quien alentaba su rencor retirado en Pampliega.

El Concilio III de Zaragoza trata otra vez del *status* de la reina viuda, lo cual hace suponer que fue un concilio general, ya que no se sabe qué obispos participaron en él. Y, sobre todo, adopta una disposición totalmente contraria a la del CT XIII, al obligar a la reina viuda a tomar el hábito religioso, *velit nolit*.

¿Cómo un concilio provincial puede tener autoridad para tomar acuerdos contrarios a los de un concilio general? Aquí pudiera, acaso, residir la explicación de por qué se celebró en Zaragoza y no en Toledo: se notaría menos la contradicción.

⁴⁹ Ver nota 48.

⁵⁰ Lo que induce a pensar que a Liuvigoto no le interesaba casarse con Egica, es el temor de que se imponga el hábito religioso a la muerte de su esposo, pues hace pensar en un posible «chantaje» de Egica.

⁵¹ Con carácter general, ver J. ORLANDIS, «La reina en la monarquía visigoda», AHDE 17-28, 1957-58, 120-127. Por su parte, Iglesia Ferreirós piensa que los cánones 4 del CT XIII y 5 del III de Zaragoza buscan más bien proteger a la reina viuda que a evitar que el casamiento con ésta induzca al segundo marido a desear conquistar el trono, porque no se entiende que se prohíba tal matrimonio a un rey ya reinante. A. IGLESIA FERREIROS, «Notas en torno a la sucesión al trono en el reino visigodo», AHDE, 40, 1970, 653-682, especialmente p. 682. Pero se puede contestar que el casamiento del príncipe sucesor con la reina viuda no tiene por qué ser condición *sine qua non* del acceso material al poder de aquél, pero sí puede serlo para consolidar su posición; por tanto, no es necesario que sea anterior a dicho acceso: es suficiente que se produzca poco después.

La hipótesis es la siguiente: si el sucesor piensa alcanzar el trono mediante el asesinato del rey, no puede casarse con la viuda antes de cometerlo, pero, nada más cometerlo, prácticamente ya se le puede llamar príncipe sucesor.

⁵² ORLANDIS, «La España Visigótica», 279.

Pero se plantea la cuestión de saber por qué se tomó esta decisión. Está claro que Egica estaba de acuerdo, o incluso lo sugirió, puesto que convocó el concilio, y además era un asunto político. El hecho de que se manifieste en el canon 4 del CT XIII el temor a la imposición del hábito religioso a la reina Liuvigoto, y luego ello se haga realidad en el Concilio III de Zaragoza -si bien con carácter general- hace pensar que el temor tenía su fundamento. Sin embargo, cabe preguntarse por qué se tarda tanto tiempo, desde la muerte de Ervigio, en tomar esta decisión⁵³: cuatro años. Además, la obligación de tomar *alegremente* el hábito religioso que, si va dirigida a Liuvigoto, debe entenderse, seguramente, como un castigo por no haberse casado con Egica, no tiene mucha razón de ser, una vez que éste ha obtenido de otro modo -casándose con Cixilo- lo que ambicionaba: emparentar con la familia real.

En fin, no es seguro que la decisión se aplicase a Liuvigoto, pues en el Concilio XVI de Toledo, posterior en dos años al de Zaragoza, se habla de la intención del obispo Sisberto de hacer asesinar, junto con Egica, a otras personas de su entorno, entre las cuales se nombra a Liuvigoto, que podría ser la viuda de Ervigio⁵⁴. Si ya residía en un convento como *sanctimonial*, y por lo tanto, muerta para este mundo, Sisberto no tenía necesidad de darle muerte. Pero las cosas serían diferentes si residía con los demás en el palacio, sin haber tomado el hábito.

Todo lo cual incita a pensar que quizás la intervención del concilio de Zaragoza, en realidad no iba destinada a la viuda de Ervigio, sino más bien a la eventual viuda de Egica, Cixilo. en efecto, Egica se encontraría en la misma situación que su suegro unos años antes y, temiendo una conspiración -de hecho, los acontecimientos le darían la razón- quiso eliminar una de las maneras que el usurpador tendría de afianzarse en el trono: casarse con la viuda, esta vez de Egica. Este lo entendería perfectamente, por haber tenido antaño similares intenciones. Por ello, el concilio añadió a la prohibición de casarse, impuesta a la reina viuda, la obligación de tomar inmediatamente el hábito religioso, con la intención de hacer más difícil, si no imposible, esa boda.

Existe, además, otro indicio que hace pensar, con toda probabilidad, que la intención de Egica es, efectivamente, que su mujer, Cixilo, una vez viuda, deberá tomar el hábito religioso. en efecto, el canon 7 del Concilio XVII de Toledo, que trata de la protección de la esposa y de la descendencia regias, alude a Cixilo, viviendo religiosamente en el estado de viudez; y más adelante, este mismo canon prohíbe que, una vez muerto el rey, nadie se atreva a imponer el hábito religioso a sus hijos e hijas contra su voluntad. La prohibición no alude, para nada, a la reina⁵⁵.

Lo que diferencia a Ervigio de Egica es que el primero se muestra más benevolente, más pendiente de la felicidad de su mujer, a quien no quiere obligar a hacer nada contra su voluntad, consideraciones que no parecen preocupar, en absoluto, a Egica.

⁵³ Ervigio muere en el año 687. El Concilio III de Zaragoza se reúne en el 691.

⁵⁴ Así lo cree GARCIA MORENO, «Prosopografía», nº 145, nota 1.

⁵⁵ *CT XVII*, 7: «... per hujus definitionis nostrae sanctionem depromimus... ut si quandoque contigerit quia gloriosa domina Cixilo regina, diutinis et felicioribus serenissimi nostri principis Egicanis annis transactis, religiose existat in viduitate superstitis atque ex eo habuerit dulcissimos proles, nulla mordacitate invidiae pulsus... contra eos quisquam conetur assurgere... nullus quoque filiis ac filiabus eorum contra eorum voluntatem religionis habitum imponat...»

CONCLUSIONES

I.1. Los concilios del período que nos ocupa no respetaron ni de lejos la normativa que indicaba cuál debía ser la frecuencia de sus reuniones: una o dos veces al año. Las reuniones fueron tan escasas como irregulares.

Se imponen dos consideraciones respecto de las características fundamentales de estas asambleas conciliares:

I.2. Su naturaleza es esencialmente eclesiástica. Los asuntos tratados revisten siempre este carácter en los concilios provinciales. Los concilios nacionales, aunque en ocasiones tratan de asuntos civiles graves, examinan en mayor medida problemas eclesiásticos y, sobre todo, lo hacen en primer lugar. Aunque sea el rey quien autorice -para los concilios provinciales- o convoque -para los nacionales- la reunión sinodal, no preside él las sesiones. Cuando se deban tratar asuntos civiles, el rey no *exige*, sino que *solicita* la intervención del concilio.

I.3. Existe siempre una relación de interdependencia entre la Iglesia y la monarquía. La Iglesia, por una parte, está sometida al rey en cuanto a su funcionamiento externo; pero el rey necesita su *visto bueno* para dar prestigio, e incluso autoridad, a sus decisiones importantes. Es decir, la autoridad moral de la Iglesia es la mayor de la de todas las instituciones; lo cual no significa que tenga autoridad política, porque casi siempre tuvo que pronunciarse en el sentido indicado por el rey.

II. La normativa conocida de la Iglesia visigoda del siglo VII es la que contiene la Colección Hispana -que recoge, aparte de los españoles, los concilios griegos, africanos y galos- aunque los concilios anteriores a ella mencionen con frecuencia otros no españoles, especialmente los ecuménicos. Las sentencias conciliares del período estudiado aducen, con cierta frecuencia, leyes civiles.

Los cánones sobre juicios van esencialmente encaminados hacia dos fines:

II.1. Conseguir un juicio lo más justo posible.

II.1.1. Se determina con detalle quiénes son las personas aptas para ser jueces, acusadores o testigos, procurando establecer las condiciones necesarias para la cele-

bración de un juicio serio e imparcial. Así por ejemplo, porque se conocía la arbitrariedad de muchos obispos, se les prohíbe intervenir en la deposición de sus clérigos.

II.1.2. Las causas deben examinarse *in situ*: por el concilio provincial correspondiente y no por el de otra provincia.

II.1.3. Se uniformizan las decisiones, indicando con frecuencia que las sentencias pronunciadas deberán servir de modelo para los casos semejantes que pudieran acaecer en el futuro.

II.2. Preservar la buena fama de los miembros de la Iglesia.

II.2.1. Se procura evitar, en la medida de lo posible, que los clérigos se vean envueltos en procesos, así como que sean juzgados por tribunales civiles. Si la autoridad civil puede intervenir, es para ayudar a ejecutar la sentencia conciliar. La única apelación posible a la autoridad civil es la apelación al rey.

II.2.2. Si se admite fácilmente la apelación contra la sentencia de un obispo, es más difícil apelar contra una decisión conciliar, especialmente si se quiere apelar al Papa. Y, en todo caso, se presume la buena fé de los jueces conciliares que actuaron en primera instancia, en caso de que se revoque la sentencia.

III. Las sentencias sobre asuntos de geografía eclesiástica muestran en el siglo VII dos tipos de preocupaciones.

III.1. Mantener la configuración geográfica de las provincias y diócesis ya establecida, probablemente por razones esencialmente económicas, sin excluir el no degradar el honor del rango de obispo, propiciando su proliferación. Se prohíbe crear nuevas sedes, cosa que se había admitido anteriormente. Y se autorizan las reclamaciones de territorios diocesanos ocupados irregularmente por otra diócesis.

III.2. Procurar que estas reclamaciones territoriales -que son el motivo casi exclusivo de las causas sobre geografía eclesiástica- no perturben en exceso la paz de la Iglesia.

III.2.1. Se autoriza la reclamación interdiocesana de territorios solamente dentro de una misma provincia, salvo en el caso de que la ocupación indebida fuese consecuencia de una dominación extranjera, que hubiese modificado los límites geográficos de las provincias eclesiásticas.

III.2.2. Se opone a estas reclamaciones la prescripción tricenal, por posesión pacífica del que ocupa el territorio de manera supuestamente indebida, con la misma salvedad del caso anterior: que la ocupación indebida fuese consecuencia de una dominación extranjera.

IV.1. Las sentencias sobre el ejercicio de la competencia, tanto litúrgica como judicial, del clero muestran un gran rigor, especialmente en cuanto a la ordenación y a la deposición de los clérigos.

IV.2. Sobre las cuestiones de comportamiento moral del clero, se muestra tanta intransigencia al recordar o expresar las normas aplicables, como benevolencia en la condena de los acusados. La razón es que estos últimos casos atañen a obispos y la constante hacia ellos, en cualquier tipo de sentencia que resuelve una acusación en su contra, es la benevolencia. Pero ésta no se aprecia para los demás miembros del clero. La razón de esta actitud debe interpretarse, más que como un trato de favor por parte de los conciliares hacia sus iguales, como el deseo de evitar en lo posible que el escándalo alcance a la Iglesia; pues es cosa inevitable y muy llamativa cuando los condenados son sus más altos representantes. Tal intención no admite duda: incluso es manifestada en alguna ocasión.

V.1. Las sentencias sobre cuestiones relativas al patrimonio eclesiástico conciernen en mayor medida a su componente humano: las personas al servicio de una iglesia, esencialmente los siervos, pero también los clérigos, presentados como trabajadores de ésta.

V.2. La preocupación fundamental en cuanto a la suerte de este patrimonio, considerado en cualquiera de sus componentes, es que quede intacto, sin sufrir ninguna disminución. No obstante, sí se admite la compensación: el obispo no puede hacer prodigalidades con el patrimonio de su iglesia, a menos que sean compensadas con cargo al suyo propio. Y en éste no se comprende lo que el obispo hubiera podido ganar por su diligencia en beneficio de su iglesia.

V.3. En este contexto, y para paliar tales prodigalidades -que no debieron ser raras- se facilitan las reclamaciones sobre la indebida disminución patrimonial. En cuanto a la suerte de las personas que dependen de la Iglesia, si hay conflicto entre los intereses de aquéllos y los de ésta, suele atenderse preferentemente a los de la Iglesia.

VI.1. Los supuestos conocidos de apelación al concilio son tan escasos, que no permiten llegar a conclusiones generales. Del resultado de la investigación, puede apreciarse la repugnancia de los obispos hacia la revisión de un juicio conciliar y, sobre todo, a que aparezca la responsabilidad de los jueces, no así ante la revisión de la sentencia de un obispo aislado.

VI.2. En la España visigoda no conocemos casos de apelación o recurso al Papa; si en cambio en la España romana, bien sea antes de la caída del Imperio de Occidente o más tarde, en la España bizantina.

VI.3. Estos recursos a Roma no son siempre verdaderas apelaciones, sino también consultas o peticiones de respaldo de Roma a las decisiones episcopales españolas. Tales recursos manifiestan la realidad de estrechas relaciones con Roma y la aceptación de su intervención directa, frente a la actitud más distante observada, en este aspecto, por la España visigoda.

VI.4. Las intervenciones de la Sede Apostólica no dejan lugar a dudas sobre su deseo de imponer una autoridad firme e indiscutible, que sólo puede ser limitada,

de un lado, por cuestiones de oportunidad en la política eclesiástica, y de otro, por problemas de política civil: Roma tiene que contar con la aquiescencia del poder imperial.

VII. Los juicios sobre asuntos políticos datan todos del siglo VII, y reflejan principalmente el problema de ese tiempo: las conspiraciones contra el trono, a lo que trata de ponerse remedio. Pero la Iglesia no es un tribunal independiente del poder político, es decir, del príncipe en el trono. Interviene en estas cuestiones a petición de éste y para pronunciarse en el sentido que él desea.

VII.1. Por ello, se da el caso de que al tiempo que el concilio legisla para conseguir la paz en el reino e impedir las rebeliones, tiene que consagrar la legitimidad de reyes rebeldes. No obstante, en éso no está condicionada solamente por la voluntad del rey que pide la legitimación, sino también por necesidades políticas. En efecto, aplicar el castigo merecido por el usurpador -la deposición- es una solución que va contra el fin buscado, de mantener la paz. Esos juicios de legitimaciones sólo tienen la apariencia de juicios sobre los hechos que se examinan: en realidad, encubren decisiones puramente políticas.

VII.2. La falta de independencia de la Iglesia respecto del rey, se manifiesta también en la apreciación y eventual condena de reyes. En efecto, la Iglesia no está capacitada para intervenir en el momento oportuno: siempre tuvo que esperar a que el rey juzgado hubiera dejado de reinar; y que el siguiente deseara que fuese condenado, si bien se debe subrayar cómo, en alguna ocasión, la Iglesia se permitió cierta libertad en esta apreciación, respecto del rey reinante.

VII.3. La lucha contra las conspiraciones fue una preocupación constante de los concilios nacionales. Sin embargo, solamente un caso reviste propiamente figura de juicio: el de Sisberto. En él, junto a la severidad de la pena, se aprecia una actitud compasiva del concilio, que sugiere para este obispo el perdón real.

VII.4. Indirectamente pueden considerarse medidas contra las conspiraciones las adoptadas sobre el *status* de la reina viuda. En este caso, la actitud conciliar es de completa sumisión a la voluntad real, sin intentar disminuir su benevolencia ni mitigar su rigor: la Iglesia llegó -en pocos años- a cambiar totalmente de criterio a propósito de la entrada en religión de la reina viuda -para evitar una posible unión con el monarca sucesor- siguiendo al pie de la letra el deseo del príncipe que a la sazón ocupaba el trono.

Además de las conclusiones referentes a las materias objeto de los distintos capítulos de esta Memoria, es pertinente formular una observación general, válida para el conjunto de la actividad judicial estudiada. Esta es: en la gran mayoría de las sentencias, la preocupación de los jueces -expresión tomada en su más amplio sentido- no es tanto resolver el caso concreto sometido a juicio aplicando la ley correspondiente, sino satisfacer o no vulnerar exigencias superiores, tanto de política eclesiástica como civil.

ANEXO I

CANONES CITADOS EN NOTAS

ABREVIATURAS DE ESTE ANEXO

ANº	Anexo sobre el obispo Potamio de Braga: Item decretum pro Potamio episcopo <Concilio X de Toledo>
DIU	Decretum iudicii universalis <del Concilio VIII de Toledo>
EXP	Exemplar definitivae sententiae translatae de gestis <Concilio I de Toledo>
IF	In fine, sobre los juramentos prestados por Egica a Ervigio <Concilio XV de Toledo>
LRE	Lex edita in eodem concilio a Recesvinto principe glorioso <Concilio VIII de Toledo>
PR	Principio <del Concilio I de Sevilla y I de Toledo>
UNº	canon único <del concilio de Carprentas>

OBSERVACION

El campo NOTA comprende, en números romanos, el capítulo, y en arábigos, la nota o notas. Cuando el campo termina por un asterisco, quiere decir que en la nota se reproduce algún fragmento del canon.

NOMBRE	CANON	NOTA
AGDE	25	II-45
AGDE	32	II-24
ANCIRA	25	II-53
ANTIOQUIA	07	IV-8

NOMBRE	CANON	NOTA
ANTIOQUIA	12	II-39
ANTIOQUIA	12	II-58
ANTIOQUIA	12	II-66
ANTIOQUIA	14	II-33
ANTIOQUIA	15	II-67
ANTIOQUIA	20	II-35
ANTIOQUIA	25	II-44
AUVERNIA II	16	II-65
BRAGA I	22	II-2
BRAGA II	02	IV-48
BRAGA III	07	IV-48
CALCEDONIA	09	II-36
CALCEDONIA	17	III-4
CALCEDONIA	17	II-43
CALCEDONIA	19	II-25
CALCEDONIA	21	II-13
CAPIT. MARTINI	09	III-15
CAPIT. MARTINI	13	II-34
CAPIT. MARTINI	13	IV-23
CAPIT. MARTINI	18	II-35
CARPENTRAS	UN_	II-47
CARTAGO I	10	III-15
CARTAGO I	12	II-52
CARTAGO II	05	III-43
CARTAGO II	06	II-9
CARTAGO II	08	II-60
CARTAGO II	10	II-8
CARTAGO II	11	III-15
CARTAGO III	07	II-46
CARTAGO III	08	II-8
CARTAGO III	09	II-57
CARTAGO III	10	II-69
CARTAGO III	20	III-15
CARTAGO III	38	II-54
CARTAGO III	42	III-43
CARTAGO IV	01	II-30
CARTAGO IV	19	II-23
CARTAGO IV	25	II-22
CARTAGO IV	28	II-62
CARTAGO IV	29	II-37
CARTAGO IV	30	II-18
CARTAGO IV	58	II-14
CARTAGO IV	66	II-60
CARTAGO IV	96	II-14
CARTAGO V	02	II-20

NOMBRE	CANON	NOTA
CARTAGO VII	01	II-10
CARTAGO VII	02	II-11
CARTAGO VII	02	II-4
CARTAGO VII	03	II-11
CARTAGO VII	04	II-16
CARTAGO VII	05	II-17
CT I	03	IV-11
CT I	EXP	VI-17
CT I	EXP	VI-20
CT I	PR.	II-2
CT III	01	II-2
CT III	13	II-25
CT IV	03	II-32
CT IV	03	II-55
CT IV	03	I-56
CT IV	31	II-42
CT IV	34	III-6
CT IV	75	I-50
CT IV	75	VII-2
CT IV	75	VII-4*
CT VI	11	II-15
CT VI	11	II-4
CT VIII	02	I-53
CT VIII	02	I-54
CT VIII	02	I-75
CT VIII	02	VII-19*
CT VIII	02	VII-20*
CT VIII	02	VII-21*
CT VIII	02	VII-22*
CT VIII	04	IV-26
CT VIII	04	IV-26*
CT VIII	DIU	VII-14*
CT VIII	DIU	VII-28*
CT VIII	LRE	VII-24*
CT VIII	LRE	VII-25*
CT X	AN_	IV-40
CT X	AN_	IV-41*
CT X	AN_	IV-44*
CT X	AN_	I-45
CT X	AN_	V-I
CT X	AN_	V-21
CT X	AN_	V-22*
CT X	AN_	V-27*
CT X	AN_	V-29*
CT X	AN_	V-42*

NOMBRE	CANON	NOTA
CT XI	01	I-64
CT XI	06	II-42
CT XI	06	IV-48
CT XII	01	I-50
CT XII	01	I-54
CT XII	01	VII-10
CT XII	01	VII-11*
CT XII	04	III-36*
CT XII	04	III-45*
CT XII	04	III-48*
CT XII	04	II-49
CT XII	04	I-52
CT XII	07	I-53
CT XII	07	VII-33
CT XIII	01	I-53
CT XIII	01	VII-37
CT XIII	01	VII-39*
CT XIII	04	VII-47
CT XIII	05	VII-48*
CT XIII	10	IV-1
CT XIII	10	IV-2,3*
CT XIII	10	I-47
CT XIII	12	II-61
CT XV	IF	VII-40
CT XV	IF	VII-41*
CT XV	IF	VII-42*
CT XVI	09	VII-46
CT XVII	07	VII-55
ELVIRA	73	II-14
ELVIRA	74	II-19
ELVIRA	75	II-19
EPAONA	07	II-24
EPAONA	17	II-28
LAODICEA	58	III-41
MERIDA	07	II-43
MERIDA	08	III-20*
MERIDA	08	III-23*
MERIDA	08	III-24*
MERIDA	08	III-34*
MERIDA	08	III-5*
MERIDA	08	II-49
MERIDA	08	I-46
MERIDA	10	IV-48
MILEVA	21	III-15
MILEVA	21	II-43

NOMBRE	CANON	NOTA
MILEVA	22	II-60
MILEVA	22	II-66
MILEVA	22	II-71
MILEVA	23	II-56
MILEVA	27	II-38
NICEA	05	II-37
NICEA	05	II-62
NICEA	08	III-40
ORANGE	04	IV-4
ORLEANS II	22	II-60
ORLEANS II	23	II-41
ORLEANS II	34	II-24
ORLEANS II	34	II-27
RIEZ	01	II-7
SARDICA	03	II-31
SARDICA	04	II-73
SARDICA	06	III-42
SARDICA	07	II-74
SARDICA	17	II-60
SARDICA	17	II-62
SEVILLA I	01	I-45
SEVILLA I	01	V-1
SEVILLA I	01	V-3
SEVILLA I	01	V-5*
SEVILLA I	02	V-28
SEVILLA I	02	V-3
SEVILLA I	02	V-7*
SEVILLA I	02	V-1
SEVILLA I	PR	V-4
SEVILLA II	01	III-11*
SEVILLA II	01	III-7
SEVILLA II	01	I-46
SEVILLA II	02	III-13
SEVILLA II	02	III-16*
SEVILLA II	02	III-17*
SEVILLA II	02	II-4
SEVILLA II	03	II-4
SEVILLA II	03	II-48
SEVILLA II	03	I-45
SEVILLA II	03	V-1
SEVILLA II	03	V-12
SEVILLA II	03	V-15*
SEVILLA II	04	IV-9,10*
SEVILLA II	04	I-47
SEVILLA II	05	II-50

NOMBRE	CANON	NOTA
SEVILLA II	05	IV-6*
SEVILLA II	06	II-40
SEVILLA II	06	II-51
SEVILLA II	06	IV-13*
SEVILLA II	06	IV-14*
SEVILLA II	06	I-47
SEVILLA II	06	VI-1,2*
SEVILLA II	06	VI-4,5*
SEVILLA II	07	IV-7*
SEVILLA II	08	II-4
SEVILLA II	08	IV-46
SEVILLA II	08	IV-47*
TURIN	02	III-44
TURIN	02	II-7
VAISON I	05	II-64
VAISON I	07	II-21
ZARAGOZA I	05	VI-16*
ZARAGOZA III	05	VII-47

ANEXO II

ELENCHUS CANONUM

AGDE (a.506)

canon 25, Hispana, IV, 130s.

XXV. De saecularibus, qui suas coniuges derelinquunt.

Ii vero saeculares, qui coniugale consortium culpa graviore dimittunt vel etiam dimiserunt, et nullas causas discidii probabiliter proponentes propterea sua matrimonia dimittunt, ut aut illicita aut aliena praesumant, si antequam apud episcopum comprovinciales discidii causas dixerint, et prius uxores quam iudicio damnentur abiecerint, a communione ecclesiae et a sancto populi coetu, pro eo quod fidem et coniugia maculant, excludantur.

canon 32, Hispana, IV, 134.

XXXII. Ut clericus inconsulto episcopo ad iudicem saecularem non pergat.

Clericus nequaquam praesumat apud saecularem iudicem episcopo non permitte pulsare; sed si pulsatus fuerit respondeat, non proponat, nec audeat criminale negotium in iudicio saeculari proponere. Si quis vero saecularium per calumniam ecclesiam aut clericum fatigare tentaverit et evictus fuerit, ecclesiae liminibus et a catholicorum communione, nisi digne paenituerit, arceatur.

ANCIRA (a. 314-315)

canon 25, Hispana, III, 102

XXV. De eo qui sororem sponsae suae vitiavit.

Si quis, sponsam habens, sorori eius forsitan intulerit vitium eique inhaeserit tamquam suae, et sibi expetendam esse coniunctionem; hanc autem deceptam postea uxorem duxerit desponsatam, illa vero quae vitium passa est, si forte necem sibi intulerit, omnes hi qui huius facti sunt conscii decem annis in paenitentiam redigantur secundum canones constitutos.

ANTIOQUIA (a. 341)

canon 7, Hispana, III, 141.

VII. Nullum peregrinum absque epistolio suscipi.

Nullum absque formata, quam Graeci epistolium dicunt, peregrinorum clericorum suscipi oportet.

canon 12, Hispana, III, 144.

XII. De episcopis vel clericis depositis.

Si quis a proprio episcopo depositus vel presbyter vel disconus, aut etiamsi a synodo quilibet episcopus fuerit exactoratus, molestiam imperialibus auribus inferre non praesumat, sed ad maiorem episcoporum synodum sese convertat, et quae se putat habere iusta, in eorum concilio alleget, atque ab his de se expectet quae fuerit deprompta sententia. Quod si deficiens pusillanimitate noluerit facere, sed imperatori fuerit importunus, huiusmodi nullam veniam habeat neque locum illius assertionis suae nec spem recipiendi gradus habeat in futurum.

canon 14, Hispana, III, 145.

XIII. De episcopis accusatis.

Si quis episcopus de aliquibus causis criminalibus in iudicio episcoporum fuerit accusatus, contingat autem de ipsis episcopis provinciae, qui convenerunt, diversas habere sententias, et alios quidem innocentem eum pronuntiare, alios reum, propter huiusmodi itaque controversiam amputandam placuit sanctae synodo, metropolitanum episcopum alterius vicinae provinciae advocare et aliquantos cum eo episcopos alios, qui pariter residentes, quaecumque fuerit, dirimant questionem, propter hoc ut firmum sit iudicium quod ab unius provinciae episcopis fuerit promulgatum.

canon 15, Hispana, III, 145 s.

XV. De quibus supra.

Si quis episcopus criminaliter accusatus, ab omnibus, qui sunt intra provinciam, episcopis exceperit unam consonamque sententiam, ab aliis ulterius iudicari non potuerit; sed manere circa eum oportet tamquam convenientem, quae ab omnibus prolata est, firmam ratamque sententiam.

canon 20, Hispana, III, 147 s.

XX. Ut bis anno synodus celebretur.

Propter ecclesiasticas causas et quae existunt controversias dissoluendas, sufficere visum est bis in anno per singulas provincias episcoporum concilium fieri. Semel quidem post tertiam hebdomadam paschalis festivitatis, ita ut in quarta hebdomada quae consequitur, id est media Pentecosten, concilium compleatur; admoneant autem provinciales episcopos hi qui in amplioribus, id est, qui in metropolitanis civitatibus,

degunt. Secundum vero concilium Idibus Octobribus habeatur, qui dies apud Graecos hyperbereti mensis decimus invenitur. In ipsis autem conciliis et presbyteros et diaconos praesentes esse oportet, et omnes quotquot se laesos existimant, et synodicam expectare sententiam; nec liceat aliquibus apud semetipsos concilia sine metropolitanorum episcoporum conscientia facere, quibus de omnibus causis constat permissum esse iudicium.

canon 25, Hispana, III, 150 s.

XXV. Episcopum habere potestatem in rebus ecclesiasticis disponendis.

Episcopum habere ecclesiasticarum rerum potestatem ad dispensandum omnibus indigentibus cum omni timore et reverentia Dei, ipsum quoque ex eis percipere atque uti debere quibus indiget, si tamen indiget, vel ad suas necessarias expensas vel fratrum qui apud eum hospitalitatis gratia commorantur, ut nulla ex parte per inopiam defraudentur, secundum Apostolum dicentem: "Habentes victum quotidianum et tegumentum corporis, his contenti sumus". Quod si minime contentus atque sufficiens transferat in necessitates domesticas ecclesiasticas res, vel commoda quaelibet ecclesiae aut agrorum ecclesiasticorum fructus citra conscientiam presbyterorum vel diaconorum apud se redigat, et domesticis suis vel etiam affinibus aut fratribus aut filiis earum rerum tribuat potestatem, ut per eorum secretam diligentiam ceteri ecclesiastici laedi videantur, reatum hunc, qui huiusmodi est, apud metropolitanum provinciae praestare debet. Quod si taliter reprehendatur episcopus vel hi qui cum ipso sunt presbyteri, quo dicatur haec quae ad ecclesiam pertinent, sive de agris sive de aliis quibuscumque ecclesiasticis causis eos sibimet usurpare, pauperes vero necessitate et penuria opprimi, atque ex hoc ipso non solum ecclesiasticae rationi verum etiam dispensatoribus eius maledicta et reprehensio augeatur, hos igitur correptionem oportet mereri quae condecet, sancta synodo cognoscente.

AUVERNIA II (a. 549)

canon 16, Hispana, IV, 224 s.

XVI. Placuit etiam, ut si quacumque persona contra episcopum vel auctores ecclesiae se proprium crediderit habere negotium, prius ad eum recurrat caritatis studio, aut familiari ditione munitus sanare ea debeat quae in querimoniam deducuntur. Quam rem si differre voulerit, tunc demum ad metropolitani audientiam veniatur. De qua re cum litteras suas metropolitanus ad comprovincialem suum episcopum dederit et causa inter utrosque quacumque transactione amicis mediis non fuerit definita, ut ipsi metropolitanus necessarium sit in eodem negotio iterare rescipsit, et secundo admonitus sanare aut venire distulerit, tantum a caritate metropolitani sui se noverit esse suspensum donec ad praesentiam eius veniens causae ipsius de qua petitur reddiderit rationem. Quod si patuerit episcopum ipsum contra iustitiam fatigatum, et is qui eum fatigat iniusta interpellatione pulsavit, anni spatio a communione ecclesiastica suspendatur. Si metropolitanus a quocumque comprovinciale episcopo his fuerit causa propria appellatus et eum audire distulerit, ad proximam synodum quae constituitur, negotium suum in concilio habeat licentiam exercendi; quicquid pro iustitia a comprovincialibus suis statutum fuerit, studeat servare.

Id etiam decreto credimus inserendum, ut si quis de comprovincialibus episcopus a metropolitanus suo ad concilium intra sua provincia fuerit evocatus, et praeter evidentem infirmitatem ad concilium venire distulerit, adque a synodali conventu antequam cuncta conveniant sine conmeatum concilii ipsius discedere fortasse praesumpserit, sicut est precedentibus regulis statutum, sex menses a missarum officio suspendatur. Quod si concilium faciendum quecumque necessitas inlatio distulerit, a metropolitanus suo veniam postulans ad missarum faciendarum gratia revocetur.

BRAGA I (a. 561)

Braga II, secundum MANSI.

canon 22, ID, 9, 780

XXII. Item, placuit, ut quaecumque praecepta antiquorum canonum modo in concilio recitata sunt, nullus audeat praeterire. Si quis autem quasi contumax transgreditur, ille necesse est ut de suo degradetur officio.

BRAGA II (a. 572)

Braga III, secundum MANSI.

canon 2, ID, 9, 839.

II. Placuit, ut nullus episcoporum, cum per dioceses suas ambulant, praeter honorem cathedrae suae, id est, duos solidos, aliquid aliud per ecclesias tollat: neque tertiam partem ex quacumque oblatione populi in ecclesiis parochialibus requiret; sed illa tertia pars pro luminaribus ecclesiae vel recuperatione servetur, et singulis annis episcopus inde ratio fiat. Nam si tertiam partem illam episcopus tollat, lumen et sacra sustulit ecclesiae. Similiter et ut parochiales clerici, servili more in aliquibus operibus, episcopis servire non cogantur; quia scriptum est: ‘Neque ut dominantes in clero’.

BRAGA III (a. 675)

Braga IV, secundum MANSI.

canon 7, ID., 11, 158.

VII. Cum beatus apostolus arguere, obsecrare vel increpare in omni patientia praecipiat et doctrina, novimus quosdam a fratribus tantis caedibus in honoratos subditos effervescere, quantas poterant latrocinantium promereri personae. Et ideo, qui gradus iam ecclesiasticos meruerunt, id est, presbyteri, abbates sive Levitae, excepto gravioribus et mortalibus culpis, nullis debeant verberibus subjacere. Non est dignum ut passim unisquisque praelatus honorabilia membra sua, prout voluerit et complauerit, verberibus subjiciat et dolori, ne, dum incaute subdita percutit membra, ipse quoque debitam sibi subditorum reverentiam subtrahat; juxta illud quod quidam sapiens dicit: ‘Leviter castigatus, reverentiam exhibet castiganti, asperitatis nimiae increpatio, nec increpationem recipit nec salutem’. Et ideo, si quis aliter, quam dictum est, praedictos honorabiles subditos, licentia praeceptae potestatis elatus, malitia tantum crediderit verberandos, juxta modum verberum quem intulerit, excommunicatio- nis pariter et exilii sententiam sustinebit.

CALCEDONIA (a. 451)

canon 9, Hispana, III, 253 s.

VIII. Quod non oporteat clericos pretermisso episcopo ad saecularia iudicia commeare.

Si clericus adversus clericum habeat negotium, non relinquat suum episcopum et ad saecularia iudicia concurrat; sed primum negotium ipsum agitetur apud episcopum proprium. Et ita, si fuerit iudicium ipsius episcopi, apud arbitros ex utraque parte electos audiatur negotium. Si quis vero contra haec fecerit, canonum subiaceat correptionibus. Et si clericus adversus suum seu alium episcopum habeat causam, apud audientiam synodi provinciae eius conquiratur. Si vero contra ipsius provinciae ac metropolitanum episcopum episcopus sive clericus habeat controversiam, pergat aut ad ipsius diocesis episcopos, aut certe ad Constantinopolitanae regiae civitatis sedem, et ibi proprium negotium exsequatur.

canon 17, Hispana III, 257 s.

XVII. De ecclesiis et parociis per XXX annis ab episcopo habitis, vel de renovatis urbibus.

Per singulas ecclesias rusticanas parrocias sive in possessionibus permanere immoviles apud eos qui eas tenent episcopos, et maxime qui eas sine violentia iam per XXX annos tenentes gubernaverint. Si vero intra XXX annos etiam facta fuerit aut fiat de eis dubitatio, licere eis qui se dixerint laesos, propter eas movere apud synodum provinciae certamen. Si quis vero putaverit se a proprio metropolitano gravari, apud principem ipsius dioceseos aut apud Constantinopoletanae civitatis sedem agat iudicium, sicut iam dictum est. Si vero quaelibet civitas per auctoritatem imperialem renovata est aut si renovetur in posterum, civilibus et publicis ordinationibus etiam ecclesiarum parrociarum sequatur ordinatio.

canon 19, Hispana, III, 259.

XVIII. Quod oporteat per provincias bis in anno concilium fieri.

Pervenit in nostras aures quod in provinciis statuta episcoporum concilia minime celebrentur et ob hoc probati synodici conventus episcoporum minime celebrentur et quod inde multae, quae correctione opus habeant, ecclesiasticae res neglegantur. Statuit igitur haec sancta synodus secundum Patrum regulas bis in anno in unum convenire per singulas provincias episcopos, ubi metropolitanus probaverit, et sic corrigere singula quae emergerint. Qui vero noluerint convenire episcopi constituti in suis civitatibus, et hoc maxime cum in sui corporis sanitate consistant, etiam omnibus aliis urgentibus et inexcusabilibus negotiis liberi sint, licere eos fraternae caritatis admonitionibus corripere.

canon 21, Hispana, III, 260.

XXI. De episcoporum aut clericorum accusatoribus, quales debeant suscipi in accusatione.

Clericus sive laicus qui accusaverit episcopos aut clericos, temere atque indifferenter non debent suscipi in accusationem, nisi prius eorum opinio fuerit praescrutata.

CAPITULA MARTINI (a. 572)

canon 9, MANSI, 9, 850

IX. Si quis episcopus vacans in ecclesiam habentem episcopum, subripiens populos, sine consilio integri ordinis, intruerit, etiamsi populus quem seduxit desideret illum; alienum eum ab ecclesia esse oportet. Integrum autem et perfectum concilium dicimus illud, in quo metropolitanus episcopus fuerit.

canon 13, MANSI, 9, 850.

XIII. Si quis episcopus in aliquibus iudicatur et viderit ipsos episcopos qui in provincia sunt inter se in iudicio discrepare; ut alii videantur eum qui iudicatur iustificare, alii condemnare; pro definitione hujus dissensionis, hoc placuit sancto concilio, ut de vicina provincia alter metropolitanus convocetur episcopus, ut per eum confirmetur quod secundum rectum placuerit.

canon 18, MANSI, 9, 851.

XVIII. Propter ecclesiasticas curas et altercationum solutiones, bene placuit per singulas provincias bis in anno concilium fieri, convocante metropolitano episcopo omnes provinciae episcopos; ita ut in his conciliis prodeant omnes presbyteri, diaconi, vel hi quorum in concilio causae examinatae ad justum iudicium prodantur. Et qui manifeste episcopi vel presbyteri aut diaconi inventi fuerint in offensa, secundum rationem excommunicentur, quamdiu communi consensu de his placuit dare sententiam. Nulli autem episcopo liceat propria apud semetipsum concilia facere, praeter eos qui sunt metropolis creditae.

CARPENTRAS (a. 527)

canon único, HISPANA, IV, 201 s.

Carpentorate convenientes huiusmodi ad nos querella pervenit, quod ea quae a quibusdam fidelibus parrociis conferuntur, ita ab aliquibus episcopis praesumantur ut aut parum aut prope nihil ecclesiis quibus collata fuerant, relinquuntur.

Hoc nobis iustum et rationabile visum est, ut si ecclesia civitatis eius cui episcopus praeest ita est idonea ut in Christo propitio nihil indigeat, quicquid parrociis fuerit derelictum, clericis qui ipsis parrociis deserviunt, vel reparationis basilicarum rationabiliter dispensetur. Si vero episcopum multas expensas et minorem substantiam habere constiterit, parrociis quibus fuerit collata substantia, hoc tantum quod clericis vel sarcitectis rationabiliter sufficiat, reservetur; quod autem amplius fuerit, propter maiores expensas episcopus ad se debeat revocare, ita tamen ut nihil de facultatula ipsa vel de ministerio clerici loci ipsius licentiam habeant minuendi.

Hoc etiam placuit custodiri, ut sequenti anno in vico Vasensi debeat concilium congregari.

CARTAGO I (a. 348-349)

canon 10, Hispana, III, 295.

X. Ne episcopus alterius episcopi plebes aut fines usurpet.

Felix episcopus Baiensis dixit: Nullus debet collegae suo facere iniuriam; multi enim et trascendunt suas et usurpant alienas plebes ipsis invitis. Gratus episcopus dixit: Avaritiae cupiditatem quam radicem omnium malorum esse qui nemo dubitet? Proinde inhibendum est ne quis alienos fines usurpet aut transcendat episcopum collegam suum, et usurpet alterius plebes sine eius petitu, quia inde cetera mala omnia generantur. Universi dixerunt: Placet, placet.

canon 12, Hispana, III, 296 s.

XII. Ut pacta inter episcopos inita custodiantur.

Antigonus episcopus Magirensis dixit: Gravem iniuriam patior et credo dolere sanctitatem vestram contumeliam meam et computare communem iniuriam. Optantius, cum se repraesentaret, pactum mecum habuit et divisimus plebes; manus nostrae tenentur et pittacia. Contra hoc pactum circuit plebes mihi attributas et susurrrat populis ut illum patrem, me vitricum nominent. Gratus episcopus dixit: Factum hoc dolendum est, ut in se illiceant populorum imperitorum animos contra disciplinam, contra evangelicam traditionem, contra pacis placita. Nam si sibi posse contingere arbitrarentur, nunquam profecto in fratrem aliquis deliquisset. Unde aut inita pacta sui obtineant firmitatem, aut conventus, si se non cohibuerit, ecclesiasticam sentiet disciplinam. Universi dixerunt: Pax servetur, pacta custodiantur.

CARTAGO II (a. 390)

canon 5, Hispana III, 304.

V. Ut diocesis quae episcopum nunquam habuit, non habeat.

Felix episcopus Selemselitanus dixit: Etiam, si hoc placet sanctitati vestrae, insinuo, ut dioeceses quae nunquam episcopos habuerunt, non habeant, vel illa diocesis quae aliquando habuit, habeat proprium. Et si accedente tempore, crescente fide, Dei populus multiplicatus desideraverit proprium habere rectorem, cum eius videlicet voluntate in cuius potestate diocesis constituta est, habeat episcopum. Secundum autem hanc prosecutionem sanctitatis vestrae est estimare quid fieri debeat. Geneclius episcopus dixit: Si placet insinuatio fratris coepiscopi nostri Felicis, ab omnibus confirmetur. Ab universis episcopis dictum est: Placet, placet.

canon 6, Hispana, III, 305.

VI. Ut qui criminibus implicati sunt, clericos non accusent. Numidius episcopus Maxulitanus dixit: Praeterea sunt quamplurimi non bonae conversationis qui existimant maiores natu vel episcopos passim vageque in accusatione pulsandos. Debent tam facile admitti contra apostolicam regulam, necne? Geneclius episcopus dixit: Placet igitur caritate vestrae ut is qui aliquibus sceleribus irretitus est, vocem adversus maiorem natu non habeat accusandi? Ab universis episcopis dictum est: Si criminosus est, ut non admittatur omnibus placet.

canon 8, Hispana, III, 306 ss.

VIII. Ut excommunicatus presbyter si sacrificare praesumpserit, anathematizetur.

Felix episcopus Samselitanus dixit: Nec illud praetermittendum est, ut si quis forsitam presbyter ab episcopo suo correptus aut excommunicatus, tumore vel superbia inflatus putaverit separatim Deo sacrificia offerenda vel aliud erigendum altare contra ecclesiasticam fidem disciplinamque crediderit agendum, non exeat impunitus. Geneclius episcopus dixit: Necessaria disciplinae ecclesiasticae et fidei congrua sunt quae frater noster Felix persecutus est. Proinde quid exinde videtur vestrae dilectioni, edicite. Ab universis episcopis dictum est: Si quis presbyter a praeposito suo excommunicatus vel correptus fuerit, debet utique apud vicinos episcopos conqueri ut ab ipsis eius causa possit audiri ac per ipsos suo episcopo reconciliari. Quod nisi fecerit, sed superbia, quod absit, inflatus secernendum se ab episcopi sui communicatione duxerit ac separatim cum aliquibus schisma faciens sacrificium Deo obtulerit, loco amisso anathema habeatur. Nihilominus et de civitate in qua fuerit, longius depellatur, ne vel ignorantes vel simpliciter viventes serpentina fraude decipiat. Quoniam secundum Apostolum ecclesia una est, una fides, unum baptisma. Et si querimoniam iustam adversus episcopum habuerit, inquirendum est.

canon 10, Hispana, III, 309.

X. Quanti debeant iudicare sacerdotem atque Levitam.

Felix episcopus Semselitanus dixit: Etiam hoc adicio secundum statuta veterum conciliorum, ut si quis episcopus, quod non optamus, reatum aliquod incurrerit et fuerit ei nimia necessitas non posse plurimos congregare, ne in crimine remaneat, a duodecim episcopis audiatur, et a sex presbyter, et a tribus diaconus cum proprio suo episcopo. Geneclius episcopus dixit: Quid ad haec dicit sanctitas vestra? Ab universis episcopis dictum est: Dignum est a nobis veterum statuta debere servari.

canon 11, Hispana, III, 309 s.

XI. Ut nullus parrociam alienam praesumat.

Victor episcopus Abziritanus dixit: Roboranda est ecclesiastica disciplina ne quisquam episcoporum alterius plebis vel diocesim sua importunitate pulsare terminosque sibi statutos conetur excedere. Qui hoc facere tentaverit, quemadmodum coerendum est? Geneclius episcopus dixit: Et lex sancta prohibet et ipsa veritas non sinit quemquam alienum concupiscere. Proinde quid etiam vobis omnibus placet, propria voce signate. Ab universis episcopis dictum est: Placet ut secundum divinae legis auctoritatem nemo nostrum alienos limites transgrediatur.

CARTAGO III (a. 397)

canon 7, Hispana, III, 319 s.

VII. Ut, si episcopus accusatur, ubi vel infra quod tempus examinetur.

Aurelius episcopus dixit: Quisquis episcoporum accusatur, ad primates provinciae ipsius causam deferat accusator; nec a communione suspendatur cui crimen intenditur, nisi ad causam suam dicendam primae sedis litteris evocatus die statuta minime occurrerit, hoc est intra spatium mensis ex ea die qua eum literas accepisse constiterit. Quod si aliquas veras necessitatis causas probaverit quibus eum occurrere non potuisse manifestum sit, causae suae dicendae intra alterum mensem integram habeat facultatem, verum tamdiu post mensem secundum non communicet donec purgetur. Si autem nec ad concilium universale anniversarium occurrere voluerit ut vel ibi causa eius terminetur, ipse in se damnationis sententiam dixisse iudicetur. Tempore sane quo non communicat, nec in sua ecclesia vel parrocchia communicet. Accusator autem eius, si nunquam diebus causae dicendae defuerit, a communione non removeatur; si vero aliquando defuerit subtrahens se, restituto in communione episcopo, ipse removeatur a communione accusator, ita tamen ut nec ipse adimatur facultas causae peragenda si se ad diem occurrere non noluisse sed non potuisse probaverit. Illud vero placuit, ut cum agere coeperit in episcoporum iudicio, si fuerit accusatoris persona culpabilis, ad arguendum non admittatur nisi proprias causas, non tamen si ecclesiasticas asserere voluerit.

canon 8, Hispana, III, 321.

VIII. De presbyteris et diaconibus, quanti episcopi eos audiant.

Si autem presbyteri vel diacones fuerint accusati, adiuncto sibi ex vicinis locis proprius episcopus legitimo numero collegarum, una secum in presbyteri nomine episcopi sex, in diaconi tres, ipsorum causam discutiant, eadem dierum et dilationum et a communione remotio et discussione personarum inter accusatores et eos qui accusantur, forma servata. Reliquorum autem clericorum causam etiam solus episcopus loci agnoscat et finiat.

canon 9, Hispana, III, 321 s.

VIII. Ut clerici publica iudicia non appellent.

Item placuit, quisquis episcoporum, presbyterorum et diaconorum seu clericorum, cum in ecclesia ei crimen fuerit institutum vel civilis causa fuerit commota, si relicto ecclesiastico iudicio publicis iudiciis purgare voluerit, etiam si pro ipso facto fuerit prolata sententia, locum suum amittat, et hoc in criminali actione; in civili vero perdat quod evicit, si locum suum obtinere maluerit. Cui enim ad eligendos iudices undique ecclesiae patet auctoritas, ipse se indignum ecclesiae consortio iudicat qui, de universa ecclesia male sentiendo, in iudicio saeculari poscit auxilium, cum privatorum Christianorum causas Apostolus etiam ad ecclesiam deferri atque ibi determinari praecipiat.

canon 10, Hispana, III, 322.

X. Si quisque ab aliis iudicibus ecclesiasticis ad alios fuerit, non obesse prioribus si diversa sententia proferatur.

Hoc etiam placuit, ut a quibuscumque iudicibus ecclesiasticis ad alios iudices ecclesiasticos ubi est maior auctoritas fuerit provocatus, non eis obsit quorum fuerit

soluta sententia si convinci non potuerint vel inimico animo iudicasse vel aliqua cupiditate aut gratia depravati. Sane, si ex consensu partium iudices electi fuerint, etiam a pauciore numero quam constitutum est, non liceat provocari.

canon 20, Hispana, III, 325.

XX. Ut plebes alienas alius episcopus non usurpet.

Placuit ut a nullo episcopo usurpentur plebes alienae, nec aliquis episcoporum supergrediatur in diocesim collegam suum.

canon 38, Hispana III, 330 s.

XXXVIII. Ut non liceat fieri translationes episcoporum.

Illud autem suggerimus mandatum nobis, quod etiam in Capuensi plenaria synodo videtur statutum, non liceat fieri rebaptizationes, reordinationes vel translationes episcoporum. Nam Crisconius Villaregiensis episcopus, plebe sua derelicta, Tubuniensem invasit ecclesiam et usque in hodie, commonitus secundum quod statutum fuerat, relinquere eandem quam invaserat plebem, contempsit. Adversus istum quae pronuntiata fuerant, confirmata quidem audivimus; sed petimus secundum quod nobis mandatum est, ut dignemini dare fiduciam, quoniam necessitate ipsa cogente liberum nobis sit rectorem provinciae secundum statuta gloriosissimorum principum adversus illum adire, ut qui miti admonitioni sanctitatis vestrae acquiescere noluit et emendare illicitum, auctoritate iudiciaria protinus excludatur. Aurelius episcopus dixit: Servata forma disciplinae non aestimabitur appetitus si a vestra caritate modeste conventus recedere detractaverit, cum fuerit suo contemptu et contumacia, faciente etiam auctoritate iudiciaria, conventus. Honoratus et Urbanus episcopi dixerunt: Hoc ergo omnibus placet? Ab universis episcopis dictum est: Iustum est, placet.

canon 42, Hispana, III, 333 s.

XLII. Ut non accipiat alium episcopum plebs quae in diocesim semper subiacuit.

Epigonius episcopus dixit: Multis conciliis hoc statutum est a coetu sacerdotali, ut plebes quae in diocesibus ab episcopis retinentur, quae episcopos nunquam habuerunt, non nisi cum voluntate eius episcopi a quo tenentur proprios accipiant rectores, id est episcopos. At vero quia nonnulli dominatu quodam adepto communionem fratrum abhorrent, vel certe cum depravati fuerint, quasi in quadam arce tyrannica sibi dominatum vindicant, quod plerique tumidi atque stolidi adversus episcopos suos cervices erigunt presbyteri, vel conviviis sibi concilians plebem vel certe persuasum maligno, ut illicito favore eosdem velint sibi collocare rectores (quod quidem insigne mentis tuae tenemus votum, frater religiose Aureli, quia haec saepe oppressisti non curando tales petitores) sed propter eorum malos cogitatus et prave concinnata consilia hoc dico: Non debere rectorem accipere eam plebem quae in diocesi semper subiacuit nec unquam proprium episcopum habuit. Quapropter, si universo sanctissimo coetui placet, hoc quod prosecutus sum confirmetur. Aurelius episcopus dixit: Fratres et sacerdotis nostri prosecutionem non obsisto, sed hoc me et fecisse et facturum esse profiteor...

CARTAGO IV (a. 398)

canon 1, Hispana, III, 351 ss.

I. Qui episcopus ordinandus est, ante examinaretur si natura prudens est, si docilis, si moribus temperatus, si vita castus, si sobrius, si semper suis negotiis, si hominibus affabilis, si misericors, si litteratus, si in lege Domini instructus, si in scripturarum sensibus cautus, si in dogmatibus ecclesiasticis exercitatus, et ante omnia si fidei documenta verbis simplicibus asserat, id est, Patrem et Filium et Spiritum Sanctum unum Deum esse confirmans, totamque in Trinitate deitatem coessentialem et consubstantialem et coaeternalem et coomnipotentem praedicans; si singulam quamque in Trinitate personam plenum Deum et totas tres personas unum Deum; si incarnationem divinam non in Patre neque in Spiritu Sancto factam, sed in Filio tantum credat, ut qui erat in divinitate Dei Patris Filius, ipse fieret in homine hominis matris filius, Deus verus ex Patre et homo verus ex matre, carnem ex matris visceribus habens et animam humanam rationalem, simul in eo utriusque naturae, id est homo et Deus, una persona, unus filius, unus Christus, unus Dominus; creaturarum omnium quae sunt et auctor et Dominus et creator cum Patre et Spiritu Sancto omnium creaturarum; qui passus sit vera carnis passione, mortuus vera corporis sui morte, resurrexit vera carnis suae resurrectione et vera animae resumptione; in qua veniet iudicare vivos et mortuos. Quaerendum etiam ab eo si Novi et Veteris Testamenti, id est Legis et Prophetarum et Apostolorum unum eundemque credat auctorem et Deum; si diabolus non per conditionem, sed per arbitrium sui factus sit malus. Quaerendum etiam ab eo si credat huius quam gestamus, et non alterius, carnis resurrectionem; si credat iudicium futurum et recepturos singulos pro his quae in carne gesserunt, vel poenas, vel praemia; si nuptias non improbet; si secunda matrimonia non damnet; si carnum perceptione non culpet; si poenitentibus reconciliatis communicet; si in baptismo omnia peccata, id est tam illud originale contractum quam illa quae voluntarie admissa sunt, dimittantur; si extra ecclesiam catholicam nullus salvetur. Cum in his omnibus examinatus inventus fuerit plene instructus, tunc consensu clericorum et laicorum et conventu totius provinciae episcoporum maximeque metropolitani vel auctoritate vel praesentia ordinetur episcopus, suscepto in nomine Christi episcopatu, non suae delectationi nec suis motibus, sed his Patrum definitionibus acquiescens. In cuius ordinatione etiam aetas requiratur quem sancti Patres exemplo Salvatoris in praelegendis episcopis constituerunt.

canon 19, Hispana, III, 358.

XVIII. Ut episcopus pro rebus saecularibus non litiget.
Ut episcopus nec provocatus pro rebus transitoriis litiget.

canon 25, Hispana, III, 359.

XXV. De discordantibus episcopis.
Dissidentes episcopos, si non timor Dei, synodus reconciliet.

canon 28, Hispana, III, 360.

XXVIII. De damnatione episcoporum a synodo retractanda.

Irritam esse iniustam episcoporum damnationem, idcirco a synodo retractandam.

canon 29, Hispana, III, 360.

XXVIII. De episcopo qui alicui crimen obiecerit.

Episcopus, si clerico vel laico crimen impigerit, deducatur ad probationem in synodo.

canon 30, Hispana, III, 360.

XXX. Quod irrita sit episcoporum sententia in absentem.

Caveant iudices ecclesiae ne, absente eo cuius causa ventilatur, sententiam proferrant, qui irrita erit, immo et causam in synodo pro facto dabunt.

canon 58, Hispana, III, 365.

LVIII. De clericis frequenter litigantibus.

Eius qui frequenter litigat et ad accusandum facilis est, testimonium nemo absque gravi examine recipiat.

canon 66, Hispana, III, 366.

LXVI. Ut clericus ab episcopo iniuste damnatus recurrat ad synodum.

Clericus qui episcopi circa se distractionem iniustam putat, recurrat ad synodum.

canon 96, Hispana, III, 372.

LXLVI. De accusatore et accusato.

Quaerendum in iudicio cuius sit conversationis et fidei is qui accusat et is qui accusatur.

CARTAGO V (a. 401)

canon 2, Hispana, III, 379.

II. De clericis pro crimine suo damnatis, ut a quolibet non defensetur.

Et illum statuendum, ut si quis cuiuslibet honoris clericus iudicio episcoporum quocumque crimine fuerit damnatus, non liceat eum sive ab ecclesiis quibus praefuit, sive a quolibet homine defensari, interposita poena damni et pecuniae atque honoris, quo nec aetatem nec sexum excusandum esse praecipiant.

CARTAGO VII (a. 419)

canon 1, Hispana, III, 430.

I. Placuitque omnibus, quoniam superioribus conciliorum decretis de personis quae admittendae sunt ad accusationem clericorum iam constitutum est, et quae personae non admittantur non expressum est, idcirco definimus eum rite ad accusationem non admitti qui, posteaquam excommunicatus fuerit, in ipsa causa adhuc excommunicatione constitutus, sive sit clericus sive laicus, accusare voluerit.

canon 2, Hispana, III, 430.

II. Item placuit ut omnes servi vel proprii liberti ad accusationem non admittantur, vel omnes quos ad accusanda publica crimina leges publicae non admittunt, omnes etiam infamiae macula aspersi, id est histriones ac turpitudinibus subiectae personae, heretici etiam sive pagani sive Iudaei; sed tamen omnibus quibus accusatio denegatur, in causis propriis licentiam non negandam.

canon III, Hispana, III, 431.

III. Item placuit quotiescumque clericis ab accusatoribus multa crimina obiciuntur et unum ex ipsis, de quo prius egerint, probare non valuerint, ad ceteram iam non admittantur.

canon 4, Hispana III, 431.

III. Testes autem ad testimonium non admittendos qui nec ad accusationem admitti praecepti sunt, vel etiam quos ipse accusator de sua domo produxerit; ad testimonium autem intra annos XIII aetatis suae non admittantur.

canon 5, Hispana, III, 431.

V. Item placuit ut, si quando episcopus dicit aliquem sibi soli proprium crimen fuisse confessum atque illi neget, non putet, ad iniuriam suam episcopus pertinere quod illi soli non creditur, etsi scrupulo propriae conscientiae se dicit neganti nolle communicare. Quamdiu excommunicatio non communicaverit, ei episcopo ab aliis non communicetur episcopis, ut magis caveat episcopus ne dicat in quemquam quod aliis documentis convincere non potest.

ELVIRA (a. 300-306)

canon 73, Hispana, IV, 265 s.

LXXIII. De delatoribus.

Delator si quis exstiterit fidelis et per delatiomen eius aliquis fuerit praescriptus vel interfectus, placuit eum nec in finem accipere communionem. Si levior causa fuerit, intra quinquennium accipere poterit communionem. Si catecuminus fuerit, post quinquennii tempora admittetur ad baptismum.

canon 74. Hispana, IV, 266.

LXXIII. De falsis testibus.

Falsus testis, prout crimen, abstinebitur. Si tamen non fuerit mortale quod obicit, et probaverit, quod non tacuerit, biennii tempore abstinebitur. Si autem non probaverit, convento clero placuit per quinquennium abstineri.

canon 75, Hispana, IV, 266.

LXXV. De his qui sacerdotes vel ministros accusant nec probant.

Si quis autem episcopum vel presbyterem vel diaconum falsis criminibus appetierit et probare non potuerit, nec in finem dandam ei esse communionem.

EPAONA (a. 517)

canon 7, Hispana, IV, 193.

VII. Clerici sine ordinatione episcopi sui adire vel interpellare publicum non praesumant; sed si pulsati fuerint, sequi ad saecularem iudicium non morentur.

canon 17, Hispana, IV, 195.

XVII. Laicis, contra cuiuslibet gradus clericorum si quid criminale parant obicere, dummodo vera suggerent, proponendi permittere potestatem.

LAODICEA (a. 364?)

canon 58, Hispana, III, 170.

LVIII. Non oportere in domibus ab episcopis vel presbyteris oblationes fieri.
Non oportet in domibus oblationes ab episcopis et presbiteris fieri.

MERIDA (a. 666)

canon 7, MANSI, 11, 79 s.

VII. Decretum est de priscis canonibus semel in anno fieri concilium, ubi elegerit metropolitanus episcopus; atque in ea sancta regula manet ordinatum ut comprovinciales episcopi, dum a suo metropolitano fuerint admoniti, praesentes esse debeant ad locum temporis debiti; quae res non extra regiam agitur voluntatem. Sunt nonnulli qui pro hoc admonitionem sui metropolitani et regiam iussionem accipiunt, et minime implent quae iubentur: hos priscorum canonum sententiae excommunicatos esse iubent usque ad tempus superventuri concilii, et quamvis excommunicationis damno feriantur, nihil tale in his impenditur quod debeant metuere. Placuit huic sanctae synodo, ut quisquis ille episcopus ad concilium venire distulerit admonitus, illic excommunicationis agat tempus, ubi cum his, qui praesentes fuerint, elegerit metropolitanus. Cella vero et res ad eum pertinentes, quousque ille sub poenitentia fuerit, instantia et sollicitudine regantur metropolitani: quia ideo est hoc electum, ut discat sub poenitentia quod implere noluit voluntate recta. Dum ergo ad suam redierit cellam, rem in statu inveniatur, quae ecclesiae suae est debita.

canon 8, MANSI, 11, 80 s.

VIII. Omnibus pene cognitum manet quomodo divina gratia, quae cor serenissimi atque clementissimi domini nostri et principis Reccesvinthi regis in manu tenet, et ubi vult illud vertet, suggerente sanctae memoriae sanctissimo viro Orontio episcopo, animum eius ad pietatem moverit, ut terminos huius provinciae Lusitaniae cum suis episcopis, eorumque parochiis, juxta priorum canonum sententias, ad nomen provinciae et metropolitanam hanc sedem reduceret et restauraret. His ergo juxta eandem regulam, decreto synodico, iudicii formula, et suae clementiae confirmatione ad hanc metropolim reductis; dum miserante domino, principis jussu in unum ad sanctum convenissemus concilium, unus de his Selva nomine, sanctae Egiditanae ecclesiae episcopus, interpellavit sanctam synodum, eo quod Justus Salmanticensus ecclesiae episcopus debitam illi teneret diocesim: hoc enim etiam adjiciens, ut de eo, id unde ad Galleciae metropolim diocesi suae fuerat possessum, ille reciperet, quamvis longa post tempora, quae parochiae suae fuerant debita. Sed quia antiquorum canonum sunt instituta ut si una provincia quisquis episcopus de alterius diocesi partem aliquam per triginta annos possederit, quietus teneat; justum perpeximus, ut quia nec ille triginta annos adhuc habet, quo ad hujus provinciae metropolim reductus est; et ille quod per longo tempore non possedit, et triginta adhuc non sunt in hoc illi impleti anni; sicut ille ad debitam diocesim rediit, ita et hoc, qui pulsat diocesim sibi debitam, ordinante metropolitano cum suis fratribus, per suum saionem recipiat: ita tamen ut de praesentia metropolitani inspectores dirigantur, qui per evidentia signa dioceses ipsas conscripant et unusquisque, quod sibi debitum est accipiat et habeat. Pacta vero quae juxta canonicam regulam inter episcopos pacificam deliberationem justissime fuerint facta, in omnibus placet esse servanda. Omnibus vero episcopis id instituitur esse servandum, ut parochiam suam bene custodiant, nec a quolibet fratre eam usurpari permit-

tant. Quibus si tricennalis numerus per voluntatem aut negligentiam occurrerit, nullo modo reddenda erit.

canon 10, MANSI, 11, 81.

X. Communi deliberatione sancimus, ut omnes nos episcopi, intra nostram provinciam constituti, in cathedralibus nostris ecclesiis, singuli nostrum archipresbyterum, archidiaconum et primicerium habere debeamus. Sanctus quippe est ordo et a nobis per omnia observandus; ideoque placuit huic magnae synodo, ut quicumque ad hoc officium pervenerit, humilitatem pontifici suo et reverentiam praebeat; ne quolibet modo superbiae fastum quilibet ex his incurrat; sed in ordine, quo quisque fuerit constitutus, benigne persistat, et sui dignitatem officii per omnia teneat. Si quis ex his sui gradus ordinem non custodierit, et quae illi pro tali officio a suo episcopo imperata fuerint adimplere distulerit, prout causa patuerit, excommunicationis damno mul-tandum se noverit.

MILEVA (cánones de diversos concilios, a.402-418)

canon 21, Hispana, III, 449.

XXI. Item placuit ut episcopi quascumque ecclesias vel plebes quas ad suam cathedram existimant pertinere, non ita repetierint ut causas suas episcopis iudicantibus agant, sed alio retinente irruerint sive nolentibus sive volentibus plebibus, causae suae detrimentum patiantur. Et quicumque iam hoc fecerint, si nondum est inter episcopos finita contentio sed adhuc inde contendunt, ille inde discedat quem constiterit praetermissis iudicibus ecclesiasticis irruisse. Nec sibi quisque blandiatur si a primato, ut retineat, litteras impetrarit; sed, sive habeat litteras sive non habeat, conveniat eum qui tenet et eius litteras accipiat, ut appareat pacifice tenuisse ecclesiam ad se pertinentem. Si autem ille aliquam quaestionem retulerit, per episcopos iudices causa finiatur, sive quos eius primatus dederit, sive ipsi vicinos cum consultu primatis delegerint.

canon 22, Hispana, III, 450.

XXII. Item placuit ut presbyteri, diaconi vel ceteri inferiores clerici in causis quas habuerint, si de iudiciis episcoporum suorum questi fuerint, vicini episcopi eos audiant et inter eos, quidquid est, fiant adhibiti ab eis ex consensu episcoporum suorum. Quod si ab eis provocandum putaverint, non provocent nisi ad Africana concilia vel ad primatus provinciarum suarum. Ad transmarina autem qui putaverit appellandum, a nullo intra Africam ad communionem suscipiatur.

canon 23, Hispana, III, 450.

XXIII. Placuit ut quicumque conversus ab haereticis dixerit se apud eos paenitentiam accepisse, unusquisque catholicus episcopus requirat ubi et ob quam causam apud eosdem haereticos paenitentiam suscepit, ut cum certis documentis hoc ipsum sibi approbaverit, pro qualitate peccati sicut eidem episcopo catholico visum fuerit, tempus paenitentiae vel reconciliationis decernat.

canon 27, Hispana, III, 453.

XXVII. Item placuit, ne diutius universi episcopi qui ad concilium congregati sunt tenerentur, ab universo concilio iudices ternos de singulis provinciis eligi. Et electi sunt de provincia Carthaginensi Vincentius, Fortunatianus et Clarus, de provincia Numidia Alipius, Augustinus et Restitutus, de provincia Bizancena cum sancto sene Donatiano primate Cresconius, Iucundus et Aemilianus, de Mauritania Sitifensi Severianus, Casiaticus et Donatus, de provincia Tripolitana Plautius, qui ex more legatus unus est missus. Qui omnes cum sancto sene Aurelio universa cognoscant. A quo petit universum concilium ut cunctis, sive gestis quam confecta iam sunt, seu epistolis, ipse suscribat.

NICEA (a. 325)

canon 5, Hispana, III, 69.

V. De excommunicatis clericis sive laicis.

Servetur et ista sententia, ut hi qui ab aliis excommunicantur ab aliis per communionem non recipiantur. Requiritur sane ne forte quis ex aliqua indignatione animi aut contentione aut qualibet tali commotione stomachi episcopi sui excommunicatione abstenti sint. Ut ergo digna haec possint examinatione perquiri recte visum est per singulos annos in singulis quibusque provinciis, bis in anno episcoporum concilium fieri ut simul in unum convenientes ex omni provincia huiusmodi examinent quaestiones, ita demum hi qui ob culpas suas episcoporum suorum offensas merito contraxerunt digne etiam a ceteris excommunicati similiter habeantur, quousque in communionem vel ipso episcopo suo visum fuerit humaniorem circa eos ferre sententiam. Habeatur autem concilium semel ante dies quadragesimae, ut omnibus, si quae sunt, simultatibus amputatis mundum sollemne Deo munus possit offerri; secundum vero agatur circa tempus autumnii.

canon 8, Hispana, III, 70 s.

VIII. De Novatianis.

Si qui voluerint venire ad ecclesiam catholicam ex Novatianis, placuit sancto concilio ut ordinentur et sic maneant in clero. Ante omnia autem hanc ab eis confessionem per scripturam exigere oportet ut fateantur se communi consensu catholicae ecclesiae statuta observaturos: id est communicaturos se et his qui forte secundas nuptias experti sunt vel his qui persecutionis tempore lapsi sunt, quibus tamen lapsis paenitentiae modus et tempus adscriptus est, ut in omnibus sequantur ea quae in ecclesia catholica observantur. Et sic, ubique idem omnes ipsi fuerint inventi, sive in vicis seu in urbibus, clerici ordinentur a catholicis qui inveniuntur, et sic etiam in clero persistent unusquisque in statu suo. Si vero episcopus vel presbyter catholicae ecclesiae fuerit ad quem aliqui ex his accedunt, certum est quod episcopus quidem catholicus suam habeat dignitatem; similiter autem et presbyter et diaconus habeant. Hi vero qui ab istis veniunt si forte episcopus fuerit habeat presbyterii dignitatem, nisi forte et placeat episcopo catholico concedere ei etiam episcopalis nominis honorem; si vero non placuerit inveniat ei locum ut sit in parrochia in clero episcopus aut presbyter, dum tamen ut in civitate non videantur duo episcopi esse et ille omnimodo in clero permanere videatur.

ORANGE (a.441)

canon 4, Hispana, IV, 85.

III. Paenitentiam desiderantibus clericis non negandam.

ORLEANS II (a. 538)

canon 22, Hispana, IV, 182.

XXII. Si quis clericorum iuxta se aut distictionem aut tractationem episcopi sui putat iniustam, iuxta antiquas consuetudines recurrat ad synodum.

canon 23, Hispana, IV, 182 s.

XXIII. Si quis clericorum, qui nuper multis locis diabolo instigante actum fuisse perpatuit, rebelli auctoritate se in unum coniuratione intercedente collegerint, et aut sacramenta inter se data aut chartula conscripta fuisse putaverit, nullis excusationibus haec praesumptio praelevetur, sed res detecta, cum in synodum ventum fuerit, in praesumptoribus iuxta personarum et ordinum qualitatem a pontificibus, qui tunc in unum collecti fuerint, vindicetur, quia sicut caritas ex praeceptis Dominicis corde, non chartulae subscriptione est vel coniurationibus exhibenda, ita quod supra sacras admittitur scripturas auctoritate et distictione pontificali est reprimendum.

canon 34, Hispana IV, 187.

XXXIII. Clericus cuiuslibet gradus sine pontificis sui permissu nullum ad saeculare iudicium praesumat attrahere, neque laico, inconsulto sacerdote, clericum in saeculare iudicium liceat exhibere.

RIEZ (a. 439)

canon 1, Hispana, IV, 65 ss.

I. De multatione duorum qui ordinationem praesumpserunt.

Itaque eos qui tam incondita ac tam instabilia usurpaverant, placuit misericordiae et caritatis occursu ita in communionem dilectionemque recipi, ut scirent secundum recentem et saluberrimam Taurinatis synodi definitionem ad perpetuam vitae iustius suffusionem nullis se de cetero ordinationibus, nullis ordinariis interfuturos esse conciliis, quia nihil salubre ab illis statuendum expectaretur, quia tantae corruptionis tam detestanda exempla praebuerant.

Ebrudensi ecclesiae ante omnia mature visum est consulendum, quia quatuor de biennium mensibus sacerdote legitimo destituta hoc gravius aegrotaverat, ut clerus innocens ac disciplinae, ut probatum est, memor quorundam aliquorum insolentia ac varia perturbatione vexatus etiam in sacerdotibus ac ministris minas ac iurgia et vim acerbissimam periculose perniciosam nuper caede pertulerat, nec poterat differri bonorum ac disciplinae memorum expectatio, ne viderentur contumacium et inquietorum vota palpari, quorum conspirationes machinationesque et in praeteritum, quantum deprehendi possint, animadversione ecclesiastica puniendae et in futurum anticipandae erant.

Itaque ordinationem, quam canones irritam definiunt, nos quoque vacuandam esse censuimus, in qua praetermissa trium praesentia nec expetitis comprovincialium litteris, metropolitani quoque voluntate neglecta, prorsus nihil quod episcopum faceret ostensum est.

SARDICA (a. 347)

canon 3, Hispana, III, 122.

III. De duobus episcopis unius provinciae inter se contentionem habentibus.

Osius episcopus dixit: Providendum est etiam ut, si in aliqua provincia forte aliquis episcopus contra fratrem suum episcopum litem habuerit, unus e duobus ex alia provincia non advocet episcopos ad iudicium.

canon 4, Hispana, III, 122.

III. De episcopo adiudicato.

Osius episcopus dixit: Quod si aliquis episcopus adiudicatus fuerit in aliqua causa et putat se bonam causam habere ut iterum iudicium renovetur, si vobis placet, sancti Petri apostoli memoriam honoremus, ut scribatur vel ab his qui examinarunt vel etiam ab aliis episcopis qui in provincia proxima morantur, Romano episcopo; si iudicaverit renovandum esse iudicium, renovetur et det iudices. Si autem probaverit talem causam ut ea non refricentur quae acta sunt, quae decreverit Romanus episcopus confirmata erunt. Si hoc ergo omnibus placet, statuatur.

Synodus respondit: Placet.

canon 6, Hispana, III, 123 s.

VI. De quibus supra.

Osius episcopus dixit: Si contigerit in una provincia, in qua fuerint plurimi episcopi, unum forte remanere episcopum, ille vero per negligentiam noluerit ordinare episcopum et populi convenerint episcopos vicinae provinciae, debet illi prius conveniri episcopos qui in eadem provincia morantur et ostendi quod populi petant sibi rectorem et hoc iustum esse, ut ipse veniat et cum ipso ordinent episcopum. Quod si conventus litteris tacuerit et dissimulaverit nihilque rescripserit, tunc satisfaciendum esse populis ut veniant ex vicina provincia et ordinent episcopum. Sed iterum licentia danda passim non est; si enim subito aut vicus aliquis aut modica civitas, cui satis est unus presbyter, voluerit sibi episcopum ordinari ad hoc ut vilescat nomen episcopi et auctoritas, non debent illi ex alia provincia invitati facere episcopum, nisi aut in his civitatibus quae episcopos habuerunt, aut si qua tam populosa est civitas vel locus qui mereatur habere episcopum.

canon 7, Hispana, III, 124.

VII. De episcopis accusatis.

Osius episcopus dixit: Et hoc placuit si episcopus accusatus fuerit et iudicaverint congregati episcopi regionis ipsius et de gradu suo deiecerint eum, si appellaverit qui deiectus videtur et confugerit ad beatissimum ecclesiae Romanae episcopum et voluerit audiri, si iustum putaverit ut renovetur examen, scribere episcopis dignetur Romanus episcopus his qui in finitima et propinqua altera provincia sunt, ut ipsi diligenter omnia requirant et iuxta fidem veritatis definiant. Quod si his qui rogat causam

iterum audiri, deprecatione sua moverit episcopum Romanum ut e latere suo presbyteros mittat, erit in potestate ipsius quid velit et quid aestimet; et si decreverit mittendos esse qui praesentes cum episcopis iudicent ut habeant etiam auctoritatem personae illius a quo destinati sunt, erit eius arbitrio; si vero crediderit sufficere episcopos provinciales ut negotio terminum imponant, faciet quod sapientissimo consilio suo iudicaverit.

canon 17, Hispana, III, 131 s.

XVII. Licere clericis, si iniuste fuerint excommunicati, vicinos adire episcopos.

Osius episcopus dixit: Quid me adhuc moveat reticere non debeo: si episcopus quis forte iracundus, quod esse non debet, cito aut aspere commoveatur adversus presbyterum aut diaconum suum et exterminare eum de ecclesia voluerit, providendum est ne innocens damnetur et perdat communionem. Et ideo habeat potestatem qui deiectus est, ut finitimos episcopos interpellat et causa eius audiatur et diligentius tractetur, quia non oportet ei negari audientiam roganti; et ille episcopus qui aut iuste aut iniuste abiecit eum, patienter accipiat ut negotium discutiatur ut vel probetur sententia eius a plurimis vel emendetur. Tamen, priusquam omnia diligenter et fideliter fuerint examinata, eum qui fuerat a communionem separatus, nullus alius debet praesumere ut recipiat et communioni societ. Qui autem convenerint ad audiendum, si clericorum esse fastidium viderint et superbiam, quia non decet ut episcopus aut iniuriam aut contumeliam patiat, austerioribus eos verbis castigent ut oboediant honesta praecipienti episcopo, quia sicut ille sincerum amorem debet clericis exhibere et caritatem, ita quoque vicissim ministri infucata debent episcopo suo obsequia exhibere.

SEVILLA I (a. 590)

principio y canon 1, MANSI, 10, 449 s.

Epistola episcoporum de concilio Hispalensi ad Pegasium episcopum missa.

I. De mancipiis ecclesiae ab episcopo manumissis.

Interea considerantibus nobis in ecclesia Hispalensi sancta Jerulasem, brevem mancipiorum ecclesiae, quos liberasse visus fuerat decessor tuus, sanctae recordationis Gaudentius episcopus, vestri nobis diacones obtulerunt, et non solum quos liberaverat ibidem relegimus, sed etiam quos proximis suis de familiis ecclesiae donaverat, in eodem breve recensuimus annotatos. Qua de re canonum instituta consulimus, si talis libertas aut transactio potuisset esse stabilis: comperimus autem in canone, ut episcopus qui res proprias, excepto filiis et nepotibus, alteris et non ecclesiae suae dimiserit, quidquid de ecclesiae rebus aut donavit aut vendidit, aut quoquo modo ab ecclesia transtulit, irritum haberetur. Et ideo, si res praecessoris tui Gaudentii episcopi ecclesia vestra non possidet, liberi qui ab eo facti sunt, non sunt absoluti. Ceterum si res illius in compensationem ecclesiae vestrae deserviunt, illi prorsus maneat liberi: nam si (ut dictum est) praestitum de suis rebus non fecit ecclesiae, damnum utique inferre non debuit. Propterea ergo de uno consensu omnes significamus, magis humanius quam severius cogitantes, ut hi, quos constat tali conditione fuisse liberos, in jure ecclesiae maneat ut idonei, et peculium suum non aliis personis, sed tantum suis filiis derelinquant, ipsis quoque filiis et nepotibus cum peculio ipsorum, quasi idoneis in jure ecclesiae permanentibus, in extraneam eis personam non liceat quippiam transmutare: sed qui eorum sine herede discesserunt, peculium eorum vestrae proficiat ecclesiae.

canon 2, MANSI, 10, 450.

II. De mancipiis ecclesiae ab episcopo suis collatis.

Ea vero mancipia quae memoratus episcopus de jure ecclesiae sublata suis proximis contulit, si similia de proprio suo ecclesiae ipsius non compensavit, ecclesia vestra absque alia oppositione recipiat. Hanc formam non solum vestra, hoc est, Astigitana servabit ecclesia; sed et si qui per omnem Baeticam provinciam tali conditione vel forte de jure ecclesiae commearunt, pari sententiae subjacebunt: durum est enim atque irreligiosum ut episcopus, qui ecclesiasticis stipendiis vivit, et proprietatem suam lucris ecclesiae minime confert, aliorum oblationes a jure ecclesiae privet.

SEVILLA II (a. 619)

canones 1 a 8, MANSI, 10, 557-560.

I. De Theodulfi Malacitanae ecclesiae episcopi querimoniis adversus reliquos episcopos, pro quibusdam parochiis.

Prima actione Theodulfi Malacitanae antistitis ecclesiae ad nos oblata praecatio est, asserentis antiquam ejusdem urbis parochiam militaris quondam hostilitatis discrimine fuisse decissam, et ex parte aliqua ab ecclesiis Astigitanae, Eliberitanae, atque Agabrensis urbium esse retentam. Pro qua re placuit, ut omnis parochia, quae ab antiqua ditione ante militarem hostilitatem retinuisse ecclesiam suam comprobaret, ejus privilegio restitueretur. Sicut enim per legem mundialem, his quos barbarica feritas captiva necessitate transvexit, postliminio revertentibus redditur antiqua possessio, non aliter est de ecclesia receptura parochiam, quam ante retinuit cum rebus suis, sive ab aliis ecclesiis possideantur, sive in cujuslibet possessionem transfusa sunt. Non enim erit obijcienda praescriptio temporis, ubi necessitas interest hostilitatis.

II. De querimoniis Fulgentii et Honorii episcopi, pro quibusdam parochiis.

Secundo examine inter memoratos fratres nostros, Fulgentium Astigitanum et Honorium Cordubensem, episcopos, discussio agitata est; propter parochiam basilicae, quam horum alter Caelestiensem, alter Reginensem asseruit. Et quia inter utraque partes hactenus liminis actio vindicata est; (cujus, quamvis vetusta, retentio nullum juris praejudicium afferret) ideoque, ne in dubium ultra inter eos nostra advocaretur sententia, prolatis Canonibus synodalia decreta perlecta sunt; quorum auctoritas praemonet ita oportere inhiberi cupiditatem, ut ne quis terminos alienos usurpet. Ob hoc placuit inter alternas partes inspectionis viros mittendos: ita ut sit in diocesi possidentis (si tamen basilicam veteribus signis limes praefixus monstraverit) ecclesiae, cujus est justa retentio, aeternum dominium. Quod si et limes legitimus eandem basilicam non concludet, et tamen longi temporis probatur objecta praescriptio, appellatio repetentis episcopi non valebit: quia illi tricennalis objectio silentium ponit: hoc enim et saecularium principum edicta praecipiant, et praesulum Romanorum decrevit auctoritas. Sin vero infra metas tricennalis temporis, extra alienos terminos basilicae injusta retentio reperitur, repetentis episcopi sine mora restituetur.

III. De desertoribus clericis, ut episcopis suis restituantur.

Tertia definitione ad nos oblata praecatio est a reverendissimo fratre nostro Cambrane, Italicensi episcopo, pro quodam clerico Ispassando, qui deserens ecclesiae cultum suae, in qua dicatus ab exordiis infantiae fuerat, ad ecclesiam Cordubensem se contulit. Quem elegimus, ut si nihil proponeretur de eo, citra dilationis objectae proprio reformaretur episcopo: scribitur enim in lege mundiali, de colonis agrorum, ut ubi esse jam quisque coepit, ibi perduret. Non aliter et de clericis, qui in agro ecclesiae operantur, canonum decreto praecipitur; nisi ut ubi permaneant, ubi coeperunt. Ideoque placuit, ut si quis clericus ministeriis ecclesiae propriae destitutus, ad aliam transitum fecerit, compellente ad quem fuerit sacerdote, ad ecclesiam quam prius incoluerat

remittatur. Qui vero eum susceperit, nec statim sine ullo nixo exceptionis ad propriam ecclesiam remittendam elegerit, quamdiu eum restituat, communionem se privatum agnoscat. Desertorem autem clericum cingulo honoris atque ordinis sui exutum, aliquo tempore monasterio deligari convenit; sicque postea in ministerio ecclesiastici ordinis revocari. Nam non poterit in talibus pervagationibus aboleri licentia, nisi fuerit in eis propter correptionem disciplinae subsecuta censura.

IV. De bigamis ad presbyterium vel diaconatum non promovendis.

Quarta actione nuntiatum est nobis apud Astigitanam ecclesiam quasdam nuper ordinationes illicitas extitisse, ita ut quidam viduarum mariti Levitarum ministerio sacrarentur; quos quidem convenit a gradu suscepto in irritum devocari, nec ultra provehari ad diaconii ministerium, qui contra divina atque ecclesiastica jura instituti reperiuntur.

V. Ne presbyter diaconum aut presbyterum ordinare praesumat.

Quinto iudicio ad cognitionem nostram Aniani Egabrensis diaconi relatu deductum est, de quibusdam ipsius ecclesiae clericis, quorum unus ad presbyterium, duo ad Levitarum ministerio sacrarentur, episcopus eorum oculorum dolore detentus, fertur manum suam super eos tantum posuisse, et presbyter quidam illis, contra ecclesiasticum ordinem benedictionem dedisse. Qui licet, propter tantam praesumptionis audaciam, poterat accusatus iudicio praesenti damnari, si adhuc in corpore positus, non fuisset mortis vacatione praeventus; sed quia jam ille examine divino relictus, humano iudicio accusari non potest, hi qui supersunt, et ab eo non consecrationis titulum, sed ignominiae potius eulogium perceperunt: ne sibi licentiam talis ultra usurpatio faciat, decrevimus a gradu sacerdotalis vel Levitici ordinis quem perverse adepti sunt, depositi aequo iudicio abutantur. Tales enim merito iudicati sunt removendi, quia prave inventi sunt constituti.

VI. De presbyteris vel diaconibus ab uno episcopo non removendis.

Sexta actione comperimus Fragitanum cordubensis ecclesiae presbyterum a pontifice suo injuste olim dejectum et innocentem exilio condemnatum. Quem rursus ordinis suo restituentes, id denuo adversus praesumptionem nostram decrevimus, ut juxta priscorum patrum synodalem sententiam, nullus nostrum sine concilii examine dejiciendum quemlibet presbyterum, vel diaconum audeat. Nam multi sunt, qui indiscussos potestate tyrannica, non auctoritate canonica damnant, et sicut nonnullos gratiae favore sublimant, ita quosdam odio invidiaque permoti humiliant, et ad levem opinionis auram condemnant, quorum crimen non aprobant. Episcopus enim sacerdotibus ac ministris solus honorem dare potest, auferre solus non potest. Si enim hi qui in saeculo a dominis suis honorem libertatis adepti sunt, in servitutis nexum non revolvuntur, nisi publice apud praetores ac praetides <sic> tribunali foro fuerint accusati, quanto magis hi, qui divinis altaribus consecrati, honore ecclesiastico decorantur? Qui profecto nec ab uno damnari, nec uno iudicante poterunt honoris sui privilegiis exui; sed praesentati synodali iudicio quod canon de illis praeceperit definiri.

VII. De his quae prohibentur presbyteris in ecclesiasticis sacramentis.

Septimo examine relatum est nobis, venerandissimum quondam Agapium, Cordubensis urbis episcopum, frequenter presbyteros destinasse, qui absente pontifice altaria erigerent, basilicas consecrarent. Quod quidem non est mirum id praecepisse virum ecclesiasticis disciplinis ignarum et statim a saeculari militia in sacerdotale ministerium delegatum. Ergo ne ultra talis a nobis licentia usurpetur, communi sententia statuendum oportuit; scientes quia sicut presbytero illicita consecratio est altaris, ita et constitutio. In divinis enim literis, praecipiente Domino, solus Moyses in tabernaculo Dei erexit altare, solus ipse unxit, utique quia summus sacerdos Dei erat, sicut scriptum est: 'Moyses et Aaron in sacerdotibus eius'. Ideoque id quod tantum facere principibus sacerdotum justum est, quorum typum Moyses et Aaron tenuerunt, presbyteri, qui filiorum Aaron praestant figuram, arripere non praesumant. Nam quamvis cum episcopis plurima illis ministeriorum communis sit dispensatio, quaedam novellis et ecclesiasticis regulis sibi prohibita noverint: sicut presbyterorum et diaconorum ac virginum consecratio; sicut constitutio altaris, benedictio vel unctio; siquidem nec licere eis ecclesiam vel altarium consecrare, nec per impositionem manus fidelibus baptizatis, vel controversis ex haeresi paraclatum Spiritum tradere, nec chrisma conficere, nec chrismate baptizatorum frontem signare, sed nec publice quidem in missa quemquam poenitentium reconciliare, nec formatas cuilibet epistolas mittere. Haec enim omnia illicita esse presbyteris, quia pontificatus apicem non habent, quem solis deberi episcopis auctoritate canonum praecipitur: ut per hoc et discretio graduum et dignitatis fastigium summi pontificis demonstratur: sed neque coram episcopo licere presbyteris in baptisterium introire, nec praesente antistite infantem tingere aut signare, nec poenitentes sine praecepto episcopi sui reconciliare, nec eo praesente sacramentum corporis et sanguinis Christi conficere, nec eo coramposito populum docere, vel benedicere, aut salutare, nec plebem utique exhortari.

VIII. De superbis ecclesiae libertis, ad servitium revocentur.

Octava discussio agitata est de quodam Eliseo ex familia Agabrensis ecclesiae, qui ab episcopo suo traditus libertati, de libertate confestim, ad contumaciae morbum transiit; sicque per superbiam non solum ejusdem episcopi veneficis artibus salutem laedere voluit, sed etiam patronam ecclesiam libertatis immemor, praedamnavit. Adversus quem ingrati actio canonum ac legum auctoritate juste dirigitur; scilicet ut immeritae libertatis damno multatus, ad servitii nexum, quo natus est, revocetur. Talium enim status, qui contra episcopum suum, vel patronam ecclesiam nituntur, decidi potius quam conservari convenit: ut quorum libertas perniciose est, sit salutifera virtus *<servitus en VIVES, "Concilios", 169>*, et qui superbire noverunt adepta libertate praediti discant obedire subjecti.

TOLEDO I (a.400)

principio, Hispana, IV, 326 s.

Convenientibus episcopis in ecclesia Toletana, id est, Patruinus, Marcellus, Afrodisius, Licianus, Iucundus, Severus, Leonas, Ilarius, Olimpius, Orticius, Asturius, Lampius, Serenus, Florus, Leporius, Eustocius, Aurelianus, Lampadius, Exuperantius de Gallecia, Lucensis conventus, municipii Celenis, omnes XVIII (isti sunt qui et in aliis gestis adversus Priscilliani sectatores et haeresem quam adstruxerat, libellarem direxere sententiam), consedentibus praesbyteris, adstantibus diaconibus, et ceteris qui intererant concilio congregatis, Patruinus episcopus dixit: Quoniam singuli coepimus in ecclesiis nostris facere diversa et inde tanta scandala sunt quae usque ad schisma perveniunt, si placet, communi consilio decernamus quid ab omnibus episcopis in ordinandis clericis sit sequendum. Mihi autem placet et constituta primitus concilii Nicaeni perpetuo esse servanda nec ab his esse recedendum. Episcopi dixerunt: Hoc omnibus placet; ita ut si qui, cognitis gestis concilii Nicaeni, aliud quam statutum est facere praesumpserit et non in eo perseverandum putaverit, tunc excommunicatus habeatur nisi per correptionem fratrum emendaverit errorem.

canon 3, Hispana, IV, 329.

III. Item constituit sancta synodus ut lector fidelis, si viduam alterius uxorem acceperit, amplius nihil sit, sed semper lector habeatur, aut forte subdiaconus.

Exemplar diffinitivae sententiae translatae de gestis.
MANSI, 3, 1.005 ss.

Die supra, episcopi dixerunt: Legatur scriptura sententiae. Et legit: Etsi diu desiderantibus verum, post Caesaraugustanum concilium, in quo sententia in certos quosque dicta fuerat, sola tamen una die, praesente Symphosio, qui postmodum declinando sententiam, praesens audire contempserat, arduum nobis esset audire iam dictos, literis tamen sanctae memoriae Ambrosii, quas post illud concilium ad nos miserat; ut si condemnassent quae perperam egerant et impleissent condiciones quas praescriptas literae continebant, reverterentur ad pacem (adde quae sanctae memoriae Siricii papa suasisset) magnam nos constat praestitisse patientiam. Et si prius indictum in Toletana urbe concilium declinarant, ad quod illos evocarem et audissemus, cur non impleissent condiciones quas sibi ipsi, sancto Ambrosio praesente et audiente, posuissent, patuit respondisse Symphosium se a recitatione eorum qui dicebant martyres recessisse, ac dehinc deceptum tentumque per plurimos secus aliqua gessisse reperimus, nullis libris apocryphis aut novis scientiis, quas Priscillianus composuerat, involutum: Dictinium epistolis aliquantis pene lapsum, quas omnes sua professione condemnans, correctionem petens, veniam postularet. Quem constat, ut Symphosius fecit, quaecumque contra fidem catholicam Priscillianus scripserat, cum ipso auctore damnasse. Ceterum exortum sibi de multitudine plebis probaret Symphosium ut ordinaret

Dictinium episcopum quem sanctus Ambrosius decrevisset, bonae pacis locum tenere presbyterii, non accipere honoris augmentum. Confitentur etiam illud, quod alios per diversas ecclesias ordinassent, quibus deerant sacerdotes; habentes hanc fiduciam, quod cum illis propemodum totius Galliciae sentiret plebium multitudo. Ex quibus ordinatus est Paternus bracarensis ecclesiae episcopus. In hanc vocem confessionis primus erupit et sectam Priscilliani se scisse, sed factum episcopum liberatum se ab ea, lectione librorum Sancti Ambrosii, esse iuraret.

Item Isonius nuper baptizatus se a Symphosio et episcopum factum, hoc se tenere, quod in praesenti concilio Symphosius professus est, respondit.

Vegetinus vero olim ante Caesaraugustanum concilium episcopus factus, similiter libros Priscilliani cum auctore damnaverat, ut de ceteris acta testantur. De quibus, qui consuluntur episcopi, iudicabunt.

Herenas clericos suos sequi maluerat, qui sponte nec interrogati, Priscillianum catholicum sanctumque matyrem clamassent; atque ipse usque ad finem catholicum hunc esse dixisset, persecutionem ab episcopis passum. Quo dicto omnes sanctos, iam plurimos quiescentes, aliquos in hac luce durantes, suo iudicio deduxerit in reatum. Hunc cum his omnibus, tam suis clericis quam diversis episcopis, hoc est, Donato, Acurio, Emilio, qui ab eorum professione recentes, maluissent sequi consortium perditorum, decernimus ab sacerdotio submovendum, quem constaret etiam de reliquis verbis suis convictum per tres episcopos, multos quoque presbyteros sive diaconos, cum perjurio esse mentitum. Vegetinum autem, in quem nulla specialiter dicta fuerat ante sententia, data professione quam synodus accepit, statuimus communioni nostrae esset reddendum. Paternum, licet pro catholica fidei veritate et publicatae haeresis errore, libenter amplexi, ecclesiam in qua episcopus fuerat constitutus, tenere permisimus; recepturi etiam in nostram communionem cum sedes apostolica rescripserit. Reliqui qui ex provincia Galliciae ad concilium convenerant et in Symphosii semper communionem duraverant, accepta forma a concilio missa, si subscripserint, etiam ipsi in coelestis pacis contemplatione consistant; expectantes pari exemplo, quid papa qui nunc est, quid sanctus Simplicianus Mediolanensis episcopus, reliquique ecclesiarum rescribant sacerdotes. Si autem subscriptionem formae quam misimus non dederint, ecclesias quas detinent non retineant neque his communicent qui reversi de synodo, datis professionibus ad suas ecclesias reverterunt. Sane Vegetinum solum cum Paterno communicare decrevimus. Symphosius autem senex religiosus, qui quod egerit supra scripsimus, in ecclesia sua consistat, circumspiciatur circa eos quos ei reddemus, futurus, inde expectabit communionem, unde prius spem futurae pacis acceperat. Quod observandum etiam Dictinio et Anterio esse decrevimus. Constituimus autem, priusquam illis per papam ver per sanctum Simplicianum communio reddatur, non episcopos, non presbyteros, non diaconos ab illis ordinandos, ut sciamus si vel nunc sciant, sub conditione remissi, tamen synodicae sententiae praestare reverentiam. Meminerint autem fratres et coepiscopi nostri enixe excubandum, ne quis communionem depulsus, collectiones faciat per mulierum domos, et apocrypha quae damnata sunt, legant; ne communicantes his, pari societate teneantur. Quoniam quicumque has susceperint, certum est eos etiam graviore sententiae retinendos esse. Fratri autem nostro Ortygio ecclesias, de quibus pulsus fuerat, pronuntiamus esse redendas.

TOLEDO III (a.589)

canon 1, Hispana, V, 108 s.

I. Ut conciliorum statuta et praesulum Romanorum decreta custodiantur.

Post damnationem haeresis Arrianae et fidei sanctae catholicae expositionem hoc sanctum praecepit concilium ut, quia in nonnullis vel haeresis vel gentilitatis necessitate per Spaniarum ecclesias canonicus praetermissus ordo dum et licentia abundaret transgrediendi et disciplinae optio negaretur dumque omnis excessus haeresis fovetur patrocínio et abundantia mali teperet districtio disciplinae, pace ecclesiae Christi misericordia reparata, omne quod praeceptorum canonum auctoritas prohibet sit resurgente disciplina inhibitum, et agatur omne quod praecipit fieri. Maneant in suo vigore conciliorum omnium constituta simul et synodicae sanctorum praesulum Romanorum epistolae. Nullus deinceps ad promerendos honores ecclesiasticos contra vetita canonum aspiret indignus. Nihil ex hoc fiat quod sancti Patres Spiritu Dei pleni sanxerunt debere non fieri; et qui praesumpserint, severitate priorum canonum dstringantur.

canon 13, Hispana, V, 119 s.

XIII. Ut clerici qui saeculares iudices appetunt, excommunicentur.

Diuturna disciplinatio et licentiae inolita praesumptio usque adeo illicitis ausibus aditum patefecit ut clerici conclericos suos relicto pontifice suo ad iudicia publica pertrahant. Proinde statuimus hoc de cetero non praesumi, sed si quis hoc praesumpserit facere, et causam perdat et a communione efficiatur extraneus.

TOLEDO IV (a. 633)

canon 3, Hispana, V, 184 s.

III. Nulla paene res disciplinae mores ab ecclesia Christi depulset.

Nulla paene res disciplinae mores ab ecclesia Christi depulit quam sacerdotum negligentia qui contemptis canonibus ad corrigendos ecclesiasticos mores synodum facere neglegunt. Ob hoc a nobis universaliter definitum est ut, quia iuxta antiqua Patrum decreta bis in anno difficultas temporis fieri concilium non sinit, saltem vel semel a nobis celebretur, ita tamen ut, si fidei causa est aut quaelibet alia ecclesiae communis, generalis totius Spaniae et Galliae synodus convocetur; si vero nec de fide nec de communi ecclesiae utilitate tractabitur, speciale erit concilium uniuscuiusque provinciae, ubi metropolitanus elegerit peragendum. Omnes autem qui causas adversus episcopos aut iudices ac potentes aut contra quoslibet alios habere noscuntur, ad eundem concilium concurrant, et quaecumque examine synodali a quibuslibet prave usurpata inveniuntur, regii exsecutoris instantia iustissime his quibus iura sunt reformentur, ita ut pro compellendis iudicibus vel saecularibus viris ad synodum metropolitani studio idem exsecutor a principe postuletur. Quinto decimo autem kalendarum iuniarum congreganda est in unaqueque provincia synodus propter vernale tempus, quando herbis terra vestitur et pabula germinum inveniuntur.

canon 31, Hispana, V, 219.

XXXI. Quod saepe principes contra quoslibet maiestatis obnoxios sacerdotibus negotia sua committunt.

Saepe principes contra quoslibet maiestatis obnoxios sacerdotibus negotia sua committunt, et quia sacerdotes a Christo ad ministerium salutis electi sunt, ibi consentiant regibus fieri iudices ubi iureiurando supplicii indulgentia promittitur, non ubi discriminis sententia praeparatur. Si quis ergo sacerdotum contra hoc commune consultum discussor in alienis periculis exstiterit, sit reus effusi sanguinis apud Christum et apud ecclesiam perdat proprium gradum.

canon 34, Hispana, V, 221 s.

XXXIII. Quicumque episcopus alterius episcopi diocesem per XXX annos sine aliqua interpellatione possiderit.

Quicumque episcopus alterius episcopi diocesem per triginta annos sine aliqua interpellatione possiderit, quia secundum ius legis eius iam videtur esse diocesis, admittenda non est contra eum actio repossedendi, sed hoc intra unam provinciam, extra vero nullo modo ne, dum diocesis defenditur, provinciarum termini confundantur.

canon 75, Hispana, V, 248 ss.

LXXV. De ecclesiastici ordinis instituta vel decreta quae ad quorundam pertinent disciplinam.

Post instituta quaedam ecclesiastici ordinis vel decreta quae ad quorundam pertinent disciplinam, postrema nobis cunctis sacerdotibus sententia est pro robore nostrum regum et stabilitate gentis Gotorum pontificale ultimum sub Deo iudice ferre decretum.

Multarum quippe gentium, ut fama est, tanta exstat perfidia animorum ut fidem sacramento promissam regibus suis servare contemnant et ore simulent iuramenti professionem dum retineant mente perfidiae impietatem. Iurant enim regibus suis et fidem quam pollicentur praevaricant nec metuunt volumen illud iudicii Dei per quo inducitur maledictio multaque poenarum comminatio super eos qui iurant in nomine Dei mendaciter. Quae igitur spes talibus populis contra hostes laborantius erit? Quae fides ultra cum aliis gentibus in pace credenda? Quod foedus non violandum? Quae in hostibus iurata sponsio permanebit quando nec ipsis propriis regibus iuratam fidem conservant? Quis enim adeo furiosus est qui caput suum manu propria desecet? Illi, ut notum est, immemores salutis suae propria manu se ipsos interimunt, in semetipsos suosque reges proprias convertendo vires. Et dum Dominus dicat: 'Nolite tangere christos meos', et David: 'Quis, inquit, extendet manum suam in christum Domini et innocens erit?', illis, nec vitare metus est periurium nec regibus suis inferre exitium. Hostibus quippe fides pacti datur nec violatur; quod si bello fides valet, quanto magis in suis servanda est? Sacrilegium quippe esse si violetur a gentibus regum suorum promissa fides, quia non solum in eis fit pacti transgressio, sed et in Deum quidem, in cuius nomine pollicetur ipsa promissio. Inde est quod multa regna terrarum caelestis iracundia ita permutavit ut per impietatem fidei et morum alterum ab altero solveretur. Unde et nos cavere oportet casum huiusmodi gentium ne similiter plaga feriamur praecipiti et poena puniamur crudeli.

Si enim Deus angelis in se praevaricantibus non pepercit, qui per inobedientiam caeleste habitaculum perdiderunt, unde et per Esaiam dicit: 'Inebriatus est gladius meus in caelo', quanto magis nos nostrae salutis interitum timere debemus, ne per infidelitatem eodem saevientis Dei gladio pereamus? Quod si divinam iracundiam vitare volumus et severitatem eius ad clementiam provocare cupimus, servemus erga Deum religionis cultum atque timorem, custodiamus erga principes nostros pollicitam fidem atque sponsonem. Non sit in nobis sicut in quibusdam gentibus infidelitatis subtilitas impia, non subdola mentis perfidia, non periurii nefas, nec coniurationum nefanda molimina. Nullus apud nos praesumptione regum arripiat, nullus excitet mutuas seditiones civium, nemo meditetur interitus regum, sed defuncto in pace principe primatus totius gentis cum sacerdotibus successorem regni consilio communi constituent, ut dum unitatis concordia a nobis retinetur, nullum patriae gentisque discidium per vim atque ambitum oriatur.

Quod si haec admonitio mentes nostras non corrigit et ad salutem communem cor nostrum nequaquam perducit, audite sententiam nostram: Quicumque igitur a nobis vel totius Spaniae populis qualibet coniuratione vel studio sacramentum fidei suae, quod pro patriae gentisque Gotorum statu vel conservatione regiae salutis pollicitus est, temeraverit, aut regem nece attractaverit aut potestate regni exuerit, aut praesumptione tyrannica regni fastigium usurpaverit, anatema sit in conspectu Dei Patris et angelorum atque ab ecclesia catholica, quam periurio profanaverit, efficiatur extra-

neus et ab omni coetu Christianorum alienus cum omnibus impietatis suae sociis, quia oportet ut una poena teneat obnoxios quos similis error invenerit implicatus.

Quod iterum secundo replicamus dicentes: Quicumque amodo ex nobis vel cunctis Spaniae populis quolibet tractatu vel studio sacramentum fidei suae, quod pro patriae gentisque Gotorum statu vel conservatione regiae salutis pollicitus est, violaverit, aut regem nece attractaverit aut potestate regni exuerit, aut praesumptione tyrannica regni fastigium usurpaverit, anathema in conspectu Christi et apostolorum eius sit atque ab ecclesia catholica, quam periurio profanaverit, efficiatur extraneus et ab omni consortio Christianorum alienus, et damnatus in futuro Dei iudicio habeatur cum participibus suis, quia dignum est qui talibus sociantur, ipsi etiam damnationis eorum participatione obnoxii teneantur.

Hoc etiam tertio acclamamus dicentes: Quicumque amodo ex nobis vel cunctis Spaniae populis qualibet meditatione vel studio sacramentum fidei suae, quod pro patriae salute gentisque Gotorum statu vel incolumitate regiae potestatis pollicitus est, violaverit, aut regem nece attractaverit aut potestate regni exuerit, aut praesumptione tyrannica fastigium regni usurpaverit, anathema sit in conspectu Spiritus Sancti et martyrum Christi atque ab ecclesia catholica, quam periurio profanaverit, efficiatur extraneus et ab omni communionem Christianorum alienus, neque partem iustorum habeat sed cum diabolo et angelis eius aeternis suppliciis condemnetur una cum eis qui eadem coniuratione nituntur, ut per poena perditionis constringat quos in pernicie prava societas copulat.

Et ideo si placet omnibus qui adestis haec tertio reiterata sententia, vestrae vocis consensu firmate.

Ab universo clero vel populo dictum est: Qui contra hanc vestram definitionem praesumpserit, anathema maranata, hoc est perditio in adventum Domini sit et cum Iuda Scarioth partem habeat et ipsi et socii eorum. Amen.

Quapropter nos ipsi sacerdotes ecclesiam Christi ac populum admonemus ut haec tremenda et totiens iterata sententia nullum ex nobis praesenti atque aeterno condemnet iudicio, sed fidem promissam erga gloriosissimum domnum nostrum Sisenandum regem custodientes ac sincera illi devotione famulantes, non solum divinae pietatis clementiam in nobis provocemus sed etiam gratiam antefati percipere mereamur.

Te quoque praesentem regem futurosque aetatum sequentium principes humilitate qua debemus deposcimus ut moderate et mites erga subiectos existentes cum iustitia et pietate populos a Deo vobis creditos regatis, bonamque vicissitudinem, qui vos constituit, largitori Christo respondeatis regnantes in humilitate cordis cum studio bonae actionis, nec quisquam vestrum solus in causis capitum aut rerum sententiam ferat, sed consensu publico cum rectoribus ex iudicio manifesto delinquentium culpa pateat, servata vobis inoffensis mansuetudine ut non severitate magis in illis quam indulgentia polleatis, ut dum omnia haec auditore Deo pio a vobis moderamine conservantur, et reges in populis et populi in regibus et Deus in utrisque laetetur.

Sane de futuris regibus hanc sententiam promulgamus, ut si quisque ex eis contra reverentiam legum superba dominatione et fastu regio in flagitiis et facinora sive cupiditate crudelissimam potestatem in populis exercuerit, anathematis sententia a Christo Domino condemnetur et habeat a Deo separationem atque iudicium propter quod praesumpserit prava agere in perniciem regnum convertere.

De Suinthilane vero, qui scelera propria metuens se ipsum regno privavit et potestatis fascibus exuit, id cum gentis consulto decrevimus, ut neque eundem vel uxorem eius propter mala quae commiserunt, neque filios eorum unitati nostrae unquam consociemus, nec eos ad honores a quibus ob iniquitatem deiecti sunt, aliquando promoveamus; quique etiam sicut fastigio regni habentur extranei, ita et possessione rerum quas de miserorum sumptibus hauserat, maneant alieni praeter in id quod pietate piissimi principis nostri fuerint consecuti. Non aliter et Geilanem, memorati Suinthilani et sanguine et scelere fratrem, qui nec in germanitatis foedere stabilis existit nec fidem gloriosissimo domino nostro pollicitam conservavit, hunc igitur cum coniuge sua, sicut et antefatos, a societate gentis atque consortio nostro placuit separari nec in amissis facultatibus, in quibus per iniquitatem creverant, reduces fieri praeter in id quod consecuti fuerint pietate clementissimi principis nostri, cuius gratia et bonos donorum paremii ditat et malos a beneficia sua non separat.

TOLEDO VI (a. 638)

canon 11, Hispana, V, 317 s.

XI. Ne sine accusatore legitimo quispiam condemnetur.

Dignum est ut vita innocentium non maculetur pernicie accusantium. Adeo quisquis a quolibet criminatur, non ante accusatus supplicio deditur quam accusator praesentetur atque legum et canonum sententiae exquirantur, ut si indigna ad accusandum persona invenitur, ad eius accusationem non iudicetur nisi ubi pro capite regiae maiestatis causa versatur.

TOLEDO VIII (a. 653)

canon 2, Hispana, V, 386-412*

II. Secundae disputationis occursum adfuit negotium tam difficile quam grave, in quo de refugis atque perfidis disputatione commota, utrumne posset eorundem temperari sententia damnatorum, magno satis conatu est exquisitum. Sed cum illarum series condicionum, ad quas decursis non longe temporibus pro eorum penuria hostilitatis vastitas nos iurare coegerat, nostris esset auditibus recensita, tantam reperimus obligationis illic inesse texturam, ut macularum suarum nodositas non tantum videretur prohibitionem dedisse transgressionum, quantum conclusisse viscera pietatum. Aderat enim quod in utroque pavor agebat: et ne sancti nominis profanatio fieret, et ne miserationis operatio interiret. Quia et ex Dei nominis profanatione non aberat quod terrebat, et ex prohibitionem pietatis aderat quod taedebat. Dumque alterno periculorum obiectu se prolatae sententiae compugnarent, periclitabamur ancipites in bifido partium dissidentium calle, quo diremptionis tramite iudicium properaret.

Sed cum gressibus disputationis nostrae sese difficultatis congressio devia obieisset, properandi tandem relicto discrimine cum fragore singultuum et imbribus lacrimarum ad Deum, qui pietatis fons est, verba simul et corda convertimus:

Aspira, Sancte Spiritus, et ducito nos in portum voluntatis tuae, sedatis fluctibus ignorantiae nostrae. Ecce enim periculorum Sires in litore cursus nostri pervenimus atque hinc inde obiurantibus naufragiorum obicibus, quo dispositionis nostrae vela pandamus, attentionis consideratione non cernimus. Sed aspira rursus, Sancte Spiritus, et dato nobis, te donante, nosse quid iubeas, ac, te iuvante, implere posse quod iusseris, ut et perlustrando illumines quod nescimus, et adiuvando perficias quod implere pavemus. Si iam ergo in te requiescentes, erroneorum fluctuum pavoribus abdicatis, commercia nos iubere disponere pacis, incohemus illa quae et in gloriam tuae omnipotentiae conferantur et humanae salutis te annitente donentur.

Temporibus non procul excursis, cum quorundam refugarum tumultuosa seditio frequenter vastationes terris inferret et scandala populis cum excidiis irrogaret (adeo ut captivorum turmas reducere et desolationes terrae quae tali concussae sunt peste, quilibet conatus nequeat reparare), exactum est vi potius necessitatis exortae quam deliberatione iudicii, ut contra eosdem eisdemque simillimos cum omni fere populo acerrima iuramenta daremus.

Unde iurasse nos per attestationem divini nominis condicio iuramenti demonstrat, et ne resolvi queat, Sacrae Scripturae auctoritas instat. Scribitur enim in Exodo: <20,7>... Item in Levitico: <19,12>...

At vero quia illata pressurarum acerbitas resolvi possit ac debeat, tam vinculo- rum et lamentorum horror insinuat quam eiusdem auctoritatis Dominicae praecepta

* En este canon, se ha optado por no transcribir las citas bíblicas o de los Santos Padres, excepto las de San Isidoro, al objeto de no hacerlo más largo de lo inevitable.

commendant. Etenim iuxta veterem translationem ita quosdam per Esaiam gravi exprobratione Dominus increpitat dicens: <30,1>... Item Iheremias: <5,26-27>... Et per Micheam: <7,1-3>... Ad beneficentiam certe, quae divinis oculis tanto est gratior quanto et invenitur esse praestantior, sic nos Esaias dicens: <58,6>... Paulus etiam, vas electionis: <1 Tim 4,8>... Et Iacobus <2,13>... Iohannes idem: <1 Io 3,15>... Et per semetipsam Veritas: <Mt, 5,14; Lc 6,27>... Et iterum: <Lc 6,37>... <Mt 6,144; Mc 11,26>... Ecce sunt Dominicae iussionis hinc inde astipulata firmissima cautione praecepta ac proinde, quia sunt divini oris prosecutione taxata, manebunt per omnia aeterna lege praefixa.

Quid ergo? Numquid aut iuramenti iustitiam aut misericordiae pacem sibi contraire narrabimus, dum scriptum sit: <Ps 84,11>... Aut quia controversiarum lapsus sese in contentione diffundunt, adeo unius partis assertionem narrabimus non implendam? Cur alterius assertio partis iacturae comminatur instantiam? Et quia iuramenti custodia ultionem non temperat pavescendam, idcirco impietatis atrocitas mortem pariet exsecrandam? Absit. Etenim si publicis sacramentorum gestis (quod Deus avertat) a quibuslibet illicita vel non bona exstisset condicio alligata quae aut iugulare animam patris aut agere compelleret stuprum sacratissime virginis, numquid non tolerabilius esset stultae promissionis recidere vota quam per inutilium promissiorum custodiam exhorrendam criminum implere mensuram? Quod si ita esset, quomodo crederetur unius observantia iussionis esse fons pietatis cum emitteret rivulos ultionis? Aut quaenam illa esset sacrae observatio legis quae sacrilegia committeret pravitatis? Vel cuius mensurae aequitas videretur ut ex unius praecepti cautela necis exoriretur immanitas truculenta?

At nunc, non ita contendimus ut contentionum divortiis concitatis nos ipsos contentionis certaminibus misceamus. Est vere pax in utroque quod dicimus, quia sic Sanctus Spiritus iter nostrorum cursum temperat, ut in nullo devitium hoc a sua dispositione secludat.

Unde plena iam voce, pleniori fide, plenissimaque intentione praedicimus atque in totam sanctae ecclesiae universitatem praedicamus pariter et optamus, nulla profanatione solius et summae divinitatis nomen exsistere assumendum, nullo periurii sacrilegio indebite profanandum, nullo uspiam contractu fallaciae contingendum. Nam si attestante Veritate propter profanationem periurii evitandam prohibetur omnino iurare cum dicitur: <Mt 5,37>..., quomodo impunitum erit nomen tantae gloriae voluntarie profanasse, dum in eo taxata fides dinoscitur interisse? Vel quatenus pacis foedera in gentium discidia ligabuntur, si non iuramenti pacta sanctiori integritate serventur? Etenim omne quod in pacis foedere venit, tunc solidius substat cum iuramenti hoc interpositio roborat. Sed et omne quod animos amicorum conciliat, tunc fixius durat cum eos sacramenti vincula ligant. Omne etiam quod testis astipulat, tunc verius constat cum id adiectio iurationis affirmat. Quod si testis deficiat, innocentis fidem sola iurisiurandi taxatio manifestat. Hinc, et ut in motibus humanis divina voluntas panderet quod volebat, ne labens fragilitas pro incerto teneret quod inviolate Veritatis promissio exprimebat, per Esaiam loquitur dicens: <45, 22-23>... Si ergo tantae institutionis limite sunt votiva iuramenta servanda, quis alienorum a veritate haec astruat exsecrabilius violanda?

Stabunt ergo sanctae auctoritatis vivida iussa nec vana profanatione erunt aliquatenus temeranda. Verum ne iuramenta quae data sunt videantur in nos ita penitus miserationum conclusisse praecordia, ut nullam de pietatis affectu animae viscera concipiant indulgentiam parituram, sic stabilitis contractibus iuramenti sinum misericordiae aperimus, atque ita cunctis Deo placita devotione misereri censemus, ut nos nec iuramenti teneat cautio reos nec inhumanitas faciat execrandos. Occurrere certe miserorum ruinis debet subsidio unusquisque quo valet et revelatione alienae vindictae a se Dei removere vindictam. Libat enim Domino prospera qui ab afflictis pellit perversa. Inde Iob ante passionis experientiam, impendens patientibus quod in passionis suae patientia memorabat, suarum virtutum catalogum texens inter cetera sic conectit: <29,13>... Et paulo post: <30,25>... Hinc et Salomon: <24,11>... Quibus sanctae auctoritatis instructi decretis nec sanctum nomen profanasse nos constat, quod nullatenus profanandum vox nostrae praedicationis insinuat, et indulgentiae visceribus adapertis, licet oris sui professione damnati difficile mererentur absolvi -iuxta quod scriptum est: <2 Sam 1,16>..., et iterum: <Mt 12,37>...- tamen pietatis intuitu et parcendi viam pandimus et misericordiam prorogamus.

Huius sane promissionis incautae crudam cruentamque temperare sententiam illa quam maxime compellimur causa, quod haec duo mala, licet sint omnino cautissime praecavenda, tamen si periculi necessitas ex his unum temerare compulerit, id debemus resolvere quod minori nexu obligare. Quid autem ex his levius, quidve sit gravius, pio rationis acumine vestigemus. Etenim dum periurare compellimur, creatorem quidem offendimus, sed nos tantummodo maculamus; cum vero noxia promissa complemus, et Dei iussa superbe contemnimus et proximis impia crudelitate nocemus et nos ipsos crudeliori mortis gladio trucidamus. Illic enim dupplici culparum telo percutimur, hic tripliciter iugulamur. Restat ergo ut eo nostra pergat sententia quo misericordiae patuerit via, quae ita Domino probatur accepta, ut plus eam cupiat quam sacrificia veneranda, dicente ipso: <Os 6,6,; Mt 9,13; 12,7>...

Hac indulgentiae concessa licentia, miserationis ipsius opus in gloriosi principis potestate redigimus, ut quia Deus illi miserendi aditum patefecit, remedia pietatis ipse quoque non deneget. Quae ita principali discretione moderata persistent, ut et illis sit aliquatenus misericordia contributa et nusquam gens aut patria per eosdem aut periculum quodcumque perferat aut iacturam.

Haec miserationis obtentu temperasse sufficiat; ceterum, quaecumque iuramenta pro regiae potestatis salute vel contutatione gentis et patriae vel hactenus sunt exacta vel deinceps extiterint exigenda, omni custodia omnique vigilantia insolubiliter decernimus observanda, a membrorum truncatione mortisque sententia religione penitus absoluta.

Sed ne pravaram mentium versuta nequitia nosmet ad periurii quandoque devocet culpam nec a sanctae fidei regula hanc asserat venire sententiam, tam divinae auctoritatis oracula quam precedentium Patrum asserta huic narrationi curavimus innectenda.

Etenim incommutabilis idemque semper existens Dei summi natura praecellens sua saepe in sacris litteris legitur mutasse promissa et pro misericordia temperasse sen-

tentiam. Unde, quamlibet sit impassibilis atque immutabilis identitate firmissima, crebro tamen eius et iuramenta leguntur et paenitentia, quae sacris exstant mysteriis adoperta. Iurare namque Dei est a se ipso nullatenus ordinata convellere, paenitere vero eadem ordinata, cum voluerit immutare. Sic enim, per Iheremiam dicit: <18,7-8>... Et per Ezechielem: <33, 13-15>... Si ergo nostra conversio sic divinam mutat sententiam, cur miserorum tantae lacrimae vel pressura tam crudam non temperent ex miseratione vindictam? Hinc etiam a populo Israelitico saepe ultio suspenditur, et Ninivitarum perditio divinae sententiae permutatione sedatur.

At vero illustri laudum titulo praeclarus auctor Ambrosius in libro 'De Officiis' primo huiusce rei causa sic loquitur: <I, 49,254>... Item, in libro tertio: <III,12,76-77>...Et post pauca de Iepte disserens: <III,12,78-79>... Et post paululum: <III,12,79>... Vir quoque sanctissimus Augustinus, vestigationis acumine cautus, inveniendi arte praecipuus, asserendi copia profluus, eloquentiae flore venustus, sapientiae fructu fecundus, haec in suis narrat affatibus: <Enarrationes in psalmos, V,7>... Idem ipse: <ibidem, 58,1,25>... Beatus etiam papa Gregorius, et libris et meritis honorandus, atque in ethicis assertionibus paene cunctis merito praefendus, sic in libris infert 'Moralibus': <Moralia in Iob, 32,20,38-39>... Nostri quoque saeculi doctor egregius, ecclesiae catholicae novissimum decus, praecedentibus aetate postremus, doctrinae comparatione non infimus et, quod maius est, in saeculorum fine doctissimus atque cum reverentia nominandus, Isidorus in libro 'Sententiarum' secundo haec pro tali narrat negotio: "Non est conservandum sacramentum quo malum incaute promittitur, veluti si quisquam adulterae perpetuam cum ea permanendi fidem polliceatur. Tolerabilius est enim non implere sacramentum quam permanere in stupri flagitium". Similiter in 'Synonimis': "In malis promissis rescinde fidem; in turpe votum muta decretum; quod incaute vovisti, non facias. Impia est promissio quae scelere adimpletur".

Haec de sacris paginis auctoribusque praecipuis brevissimi sufficiat praelibasse, nam plurima colligere poterit qui haec attentius legendo quaesierit. Ceterum quibus haec nequaquam sufficiunt, vel hinc summant cum rubore silentium, quia optamus, ut Vas electionis, anathema esse in Christo pro fratribus nostris, quam perdurare crudelibus in delictis.

canon 4, Hispana, V, 415 s.

III. Quartae congressionis eventu obvius sese nobis intulit pontificalis culminis lapsus, quem ante flere quam disponere compulsi ex ordine sumus. Nam cum secundum carnis assumptae mysterium ecclesiae suae fuerit dignatus caput existere Christus, merito in membris eius intentio episcoporum officia peragere cernitur oculorum. Ipsi enim de sublimiori celsitudine ordinum regunt et disponunt subiectas multitudines plebium. Unde quanto ipsi fiunt sequentium educatores, tanto merito lumine debent esse fulgentes. Quapropter omnes episcopi inter ceterarum ornamenta virtutum nitore carnis debent propensius enitere, ut ex hoc audientes munditiam appetant ex quo doctores immunditia non deturpat. Adeo si deinceps episcopi detecti fuerint execrabilibus flagitiis cum quibuslibet feminis pollui aut familiari peculiaritate versari, noverint se irrevocabili sententia Patrum ulcisci, id est, de loci et ordinis sui dignitate privari.

Decretum iudicii universalis editum in nomine principis

Hispana, V, 448-457.

Soliditatem redidisse fracturae atque fecisse consurgere quod exstiterat concidisse, et incrementum est usuatae mercedis et plenitudo consummatae perfectionis. Ponderi etenim collidentis ruinae si aequalium proximorum curam convenit obviare, quanto grandioris erit culpa praelatos incuriae crimen incurrere si non, quo valent, ex comminationis onere commissos procurent populos sublevare? Properandum ergo est inter ruinas collisionum catervas eripere collisorum, ut ex hoc iugiter et ultra nec vigorem nocendi habeat execranda pressura, et omnis compressus noverit sanctae sanctionis esse sacra sibi collata remedia.

Cum decursis ergo temporibus durae dominationis sese potestas gravis attolleret et in subiectis populis imperium dominantis non formaret iura regiminis sed excidia ultionis, aspeximus subditorum statum non ex ordine vegetari rectoris sed deici ex gravidine potestatis. Contraxerant enim leges elata fastigia in bifronti discidio motionis, et aut in culpis lex ardua saeviebat aut in spoliis favorem lex voluntaria commodabat. Inde maestos animos non spes fovebat ex munere sed tolerantia vexabat in funere. Unde iam in reparationis occursu non tantum nos abire sola ratio cogit, verum ipsa commotio rerum impellit, ut ex omnium animorum deliberatione concordia illa emanat sententia dicti quae et finem ausibus rite ponat illicitis et consultum salvandis iure ferat in populis. Quosdam namque conspeximus reges, postquam fuerint regni gloriam assequentes, extenuatis viribus populorum rei propriae congerere lucrum, et obliti quod regere sunt vocati, defensionem in vastatione convertunt, qui vastationem defensione pellere debuerunt, illud gravius innectentes, quod ea quae videntur acquirere, non regni deputant honori vel gloriae, sed ita malunt in suo iure confundi, ut veluti ex debito decernant haec in liberorum posteritate transmitti. Quam itaque ob rem in proprietatis illa conantur redigere sinu quae pro solo constat illos imperiali percepisse fastigio? Aut quo libitu in iuris proprii collocant antro quod publicae utilitatis acquisitum esse constat obtentu? Nam nunquid illos aut populorum adventus aut rerum poterat concurrere census nisi exstitissent gloriae sublimati culminibus? Aut ab aequalibus illi poterunt rerum coacervatione ditari nisi subiectis glorioso apice potuissent attolli? Omnia certe totius plebis membra subiecta, dum ad principale caput relevant attentum debitae visitationis obtutum, ab illo negotiorum prospectat remedium cui modo gratum modo debitum irrogat censum. Regalis proinde ordo ex hoc cuncta sibi deberi convincit ex quo se regere cuncta cognoscit, et inde conquisita non alteri quam sibi iuste defendit. Unde non personae sed potentiae suae haec deberi non ambigit. Regem etenim iura faciunt, non persona, quia nec constat sui mediocritate, sed sublimitatis honore. Quae ergo honori debent, honori deserviant, et quae reges acumulant, regno relinquunt, ut quia eos gloria regni decorat, ipsi quoque gloriam regni non extenuent, sed exornent. Habeant deinceps iure conditi reges in regendo corda sollicita, in operando facta modesta, in decernendo iudicia iusta, in parcendo pectora prompta, in conquirendo studia parca, in conservando vota sincera, ut tanto gloriam regni cum felicitate retentent quanto iura regiminis et mansuetudine conservaverint et aequitate direxerint. Promississe praemium dictionis ne non prodisse putetur ex fomite rationis, rebelare convenit evidentissimam speciem operis, ut ex illo nos idoneos assertores

habeat probitas veritatis, ex quo se per semetipsam reservaverit qualitas actionis. Ecce etenim ita ex gentis nostrae mediocribus maioribusque personis multos hactenus corruisse repperimus et deflemus, ut eorum agnitis ruinis non aliud possimus quam divinae iudicia considerare permissionis. Quorum quidem domorum spolia et potentiarum divitas simul ac praedia ita conspicimus prorsus exinanita, ut nec fiscus usibus commoda nec palatinis officiis reperiantur in remedium salutare collata. Cuius rei ex utroque concurrente defectu, dum et adiudicatos sententia iudiciorum elisit et eorum bonis ad ipsorum vicem munificatus nemo surrexit, paene non res ista disciplinam in ordine, sed defectum posuisse pensatur in gente, illo maiori salutis dispendio cumlato, quod tam haec quae adiudicatis vigor iudiciorum abstraxerat, quam illa quae qualiscumque proventus ordine profligationis congesserat, tota proprietatis principum amplitudo in sinum suae receptionis incluserat. Sicque solo principali ventre suppleto, cuncta totius gentis membra vacuata languerent ex defectu. Unde evenit ut nec subsidium mediocres nec dignitatem valeant obtinere maiores, quia dum solius potestatis vigor maxima occupavit, totius plebis status nec minima iure defendit.

Adeo cum omni palatino officio simulque cum maiorum minorumque conventu nos omnes tam pontifices quam etiam sacerdotes et universi sacris ordinibus famulantes concordi definitione decernimus et optamus ut omnis conquisitionis profligatio in omnium rerum viventium ac non viventium, immobilium atque moveri valentium, corpore vel specie, forma vel genere, quae a gloriosae memoriae Chindasvinto rege a die quo in regnum dinoscitur conscendisse repertus, quolibet modo exstiterit augmentasse, omnia in serenissimi atque clementissimi domini nostri Recesvinti principis perenni transeat potestate et perpetuo deputentur in iure, non habenda parentali successione, sed possidenda regali congressione, ita ut iuste sibi debita quisque percipiat, et de reliquis ad remedia subiectorum quaecumque elegerit, principis voluntas exerceat, illis tantundem exceptis quae memoratus divinae memoriae Chindasvintus princeps ante regnum aut ex propriis aut ex iustissimi conquisitis visus est habuisse. In quibus cunctis filiis eius una cum glorioso domino nostro Recesvinto rege maneat et divisio libera et possessio pace plenissima. Sed et illae res quas praedictus princeps de iustis provenibus filiis suis vel quibuslibet iustissime visus est contulisse vel reliquisse, omnes in eorum iure maneant inconvulsae, illa negotii huius veritate servata ut, quia grata voluntas gloriosi domini nostri Recesvinti regis reddere decernit unicuique iustissime debita, nemo invasionis calumniam moveat aut damna requirat propter quod gloriosae memoriae genitorem eius quaedam indebite abstulisse constiterat.

Lex edita in eodem concilio a Recesvinto principe glorioso

Hispana, V, 457-464.

In nomine Domini Flavius Recesvintus rex.

Eminentiae celsitudo terrenae tunc salubrius sublimia probatur appetere cum saluti proximorum pia cernitur compassione prodesse. Unde solet contingere ut plus commodi de aliena salute conquirat quam de propria utilitate quisque percipiat. In multis enim, quia multorum salus attenditur, maioris lucri summa percipitur; in se autem, quia privati commodi fructus apperitur, non satis est si unius beneficii praemia conquirantur. Hinc et illa regendarum tantundem salus est plebium quae non suos

fines privata voluntate concludit, sed quae universitatis limites communi prosperitatis lege defendit. Quapropter, ne salutaris ordo imperialibus videatur verbis potius obtineri quam factis, de sublimitatis obtentu reclinamus ad vota supplicium tranquillae visionis aspectum, ut inde salutaris compassio habeat commodum, unde turmae plabium adeptae fuerint supplicationis effectum.

Cum igitur praecedentium serie temporum immoderatio aviditas principum sese prona diffunderet in spoliis populorum et auget rei propriae censum aerumna flebilis subiectorum, tandem supernae respectio afflatu nobis est divinistis inspiratum ut, quia subiectis leges reverentiae dederamus, principum quoque excessibus retinaculum temperantiae poneremus. Proinde sincera mansuetudinis deliberatione tam nobis quam cunctis nostrae gloriae successoribus adfuturis, Deo mediante, legem ponimus decretumque divalis observantiae promulgamus, ut nullus regum impulsio suae quibuscumque motibus aut factionibus scripturas de quibuslibet rebus alteri debitis ita extorqueat vel extorquendas instituat, quatenus iniuste ac nolenter debitarum sibi quisque privari possit dominio rerum. Quod si alicuius gratissima voluntate praequippiam de rebus a quocumque perceperit vel pro evidenti statione lucratus aliquod fuerit, in eadem scriptura patens voluntatis ac praestiti condicio annotetur, per quam aut impressio principis aut conferentis fraus evidentissime detegatur. Et si patuerit a nolente fuisse scripturam exactam, aut respiscat improbitas principis et evacuet quod male contraxit, aut certe post eius mortem ad eum cui exacta est scriptura, vel ad haeredes eius res ipsae sine cunctatione debeant revocare. Illae autem res quae seclusa omni compressionis argumentatione directo modo transierint in principis potestate, in eius perenniter iure perdurent, et quicquid ex rebus ipsis idem princeps ordinare voluerit, suae potestatis arbitrio subiacebit. Verum ut omne huius negotium actionis roboraret sinceritas veritatis, cum quarumcumque rerum scripturae in principis nomine exstiterint factae, mox testes qui in eadem scriptura subscriptores accesserint, ab his quos elegerit princeps diligentissime perquirantur si non aliquod indicium aut de impressione principis aut de fraude scripturam facientis modo quocumque cognoverint. Ac sic aut rite facta series scripturae permaneat aut irrita confecta vanescat. Similis quoque ordo de terris, vineis atque familiis observetur, si sine scripturae textu tantummodo coram testibus quaelibet facta fuerit definitio. De rebus autem omnibus a tempore Suintilani regis hucusque a principibus acquisitis aut deinceps, si provenerit, acquirendis, quaecumque forsitan princeps inordinata sive reliquit seu reliquerit, quoniam pro regni apice probantur acquisita fuisse, ad successorem tantundem regni decernimus pertinere, ita habita potestate ut quicquid ex his elegerit facere, liberum habeat velle. In illis autem rebus quae ipsi aut de bonis parentum aut de quorumcumque provenerit sucessionibus proximorum, ita eidem principi eiusque filiis aut, si filii defuerint, heredibus quoque legitimis hereditatis iura patebunt, sicut etiam ceteris lege vel sucessionem patere noscuntur. Quod si aliquid ex rebus de quorumcumque parentum aut proximorum non solum sucessionem sed etiam qualibet collatione aut quocumque contractu ad ius ipsius pervenisse patuerit, si contigat haec inordinata relinqui, non ad successorem regni sed ad filios vel haeredes eius qui conquisivit, specialiter omnis eadem conquisitio pertinebit. Nam et de illis rebus quae idem princeps ante regnum aut ex proprio aut ex iustissime conquisitio dinoscitur habuisse, irrevocabili ordine aut faciendi quod voluerit potestatem habebit, aut certe filiis eius sucessio plena patebit; quod si filii defuerint, legitimis haeredibus ex his quae inordinata reliquerit, hereditatem adire licebit. Huius sane legis sententia in solis erit principum negotiis observan-

da atque ita perpetim valitura, ut non ante quispiam solium regale conscendat quam iuramenti foedere hanc legem se in omnibus implere promittat. Quemcumque vero aut per tumultuosas plebes aut per absconsa dignitati publicae machinamenta adeptum esse constiterit regni fastigia, mox idem cum omnibus tam nefarie sibi consentientibus et anathema fiat et Christianorum communionem amittat, tam dirae percussione ultione collisus ut omni divini ordinis cultor qui illi communicare praesumpserit, simili cum ipso damnatione dispereat et poena tabescat. Nam et si quis legis huius seriem ex officio palatino malivole detrahendo lacerare voluerit, aut evacuandam quandoque vel silenter musitans vel aperte resultans proloqui detectus exstiterit, cunctis palatinae dignitatis et consortiis et officiis mox nudatus omnium rerum suarum dimidiam partem amittat et in deputato sibi loco redactus a totius palatii maneat societate seclusus. Religiosus etiam qui se in eadem culpa devoluerit, simili rerum proprietatis suae dispendio subiacebit.

TOLEDO X (a. 656)

anexo sobre el obispo Potamio de Braga, Hispana, V, 537 ss.

Item decretum pro Potamio episcopo.

Assumere poteramus canoram in cantu fraternae laetitiae tibiam, quia divina pietas conventum nostrum ad concordiae convocaverat studia, et convenerat abnuere maestitiam vitae, quoniam usitatione disciplinae videbamus Paternas regulas innovasse, sed gravius collisi threnum pro cymbalo sumimus et funus pro carmine decantamus, gementesque cum Ieremiae questibus dicimus: 'Dissolutum est gaudium cordis nostri, versus est in luctu chorus noster'. Unde et vae coram nobis esse conspiciamus quoniam cecidisse coronam capitis nostri videmus, dum tam ignobile et infirmum corrui quod in tam sublime sanctitatis optimum stetit.

Ecce enim tractantibus nobis in pace Dei de ecclesiasticis regulis delatum est conventui nostro epistolium confusae confessionis et abolendae subscriptionis quod Potamius Bracarensis ecclesiae episcopus de factis propriis suis verbisque annotarat articulis. Quo reserato, quid oblitteranda pagina et abolenda litterarum panderent elementa, fletibus potius quam sermonibus lacrimanda cognitio recensuit.

Tunc solitarie tantum secretimque adunatis pontificibus Dei praedictum episcopum adesse fecimus coram nobis, quem singultibus aggredientes amplius quam loquelis reseratam illi suae deformitatis et nostrae confusionis protulimus scripturam. Quam accipiens et recurrens, sciscitantibus nobis utrum suae operis suaeque annotationis intimatio esset, illico suum actum sui que oris eloquium suorumque digitorum esse robur asseruit quod illic relegendo praevидit. Rursum sub divini nominis contestatione hunc adiurantes obtestati sumus ut, si non aut de se sponte mendacium diceret aut alicuius violentiae proventu perterritus talia enarraret, veraciter indicaret. Qui mox flebili voce luminibusque ploratu madentibus et fragore singultuum cum unius Dei nominis iuramento clamavit se et vera eadem mala de se confiteri et ad haec confitenda nulla se violentia praegravari. Unde etiam et ferme per novem menses sponte deseruisse regimen ecclesiae suae et ergastulo quodam ob admissum flagitium acturus paenitentiam se conclusisse praedixit.

Tunc per fidelem confessionem eius agnitio quod tanto femineo sorduisset stupro, et licet hunc antiquitas Paterna sacris regulis deicere ab honore decerneret, nos tamen miserationis iura servantes non abstulimus nomen honoris, quod ipse sibi sui criminis confessione iam tulerat, sed valida auctoritate decrevimus perpetuae paenitentiae hunc inservire officii et aerumnis, providentes melius illum per asperam et dumosam paenitentiae solitudinem quandoque pervenire ad refrigerii mansionem, quam relictum in voluntatis suae latitudine ad praecipitium deici aeterna damnatione.

Tunc venerabilem Fructuosum ecclesiae Dumiensis episcopum communi omnium nostrorum electione constituimus ecclesiae Bracarensis gubernacula continere, ita ut omnem metropolim provinciae Galliciae cunctosque episcopos populosque conventus ipsius omnemque curam animarum et rerum Bracarensis ecclesiae guber-

nanda suscipiens ita componat atque conservet, ut et Deum nostrum de rectitudine operis sui glorificet, et nobis de incolomitate ecclesiae eius gaudium praestet.

Quia vero ad futurum prospicere convenit, ne exoriri in statu pacis possit quaedam commotio litis, Patrum sententiam quae iam dictum Potamium episcopum rectitudine damnat, huic decreto conectere vigilantia nostra procurat.

III Ex concilio Valentino titulo IIII. Nec illus, fratres, scribere alienum ab ecclesiae utilitate censuimus, ut sciretis, quicumque sub ordinatione vel diaconatus vel presbiterii vel episcopatus mortali crimine dixerint se esse pollutos, a suprascriptis ordinationibus submovendos, reos scilicet vel veri confessione vel mendacio falsitatis. Neque enim absolvi potest in his si in se ipsos edixerint quod dictum in alios puniretur, cum omnis qui sibi fuerit mortis causa, maior homicida sit.

Multae quidem et aliae sententiae huic poterant innecti decreto quae praedictum Potamium episcopum severissima austeritate abicere iubent, sed ex omnibus hanc conscriptam ponere sententiam maluimus, ne si tota condemnationis edicta replicassemus, gravissimae ultionis auctores existere videremur.

Factum decretum sub die kalendas decembres anno feliciter octavo gloriosissimi domni nostri Recesvinti regis.

anexo sobre los testamentos de Martín y Ricimiro de Dumio, Hispana, V, 544 ss.

Item aliud decretum.

Vividis tractantibus invenire quod iustum est, et experientia esse iudicantium comprobatur, et iusti summa iudicii plenior invenitur. Adeo mentis intentionem orisque simul studia deducentes in cognitione audiendi negotii, delatum est ad nos in conventu sancti concilii ex directo gloriosi domni nostri Recesvindi regis per illustrem virum Vambanem testamentum gloriosae memoriae sancti Martini ecclesiae Bracarenensis episcopi, qui et Dumiese monasterium visus est construxisse, ut reserato eo, quid illic memoratus beatissimus vir decrevisset, nostrae cognitioni pateret. Quo testamento in omnium conventu relecto, comperimus ex ordine a memorato principe ad nos esse directum, quoniam idem gloriosae memoriae sanctissimus vir ita decreverat, ut succedentibus per ordinem regibus ad complementum eius ipsius testamenti constitutio commendata maneret.

Tunc deinde illatum est nobis testamentum Ricchimiri memoratae Dumiensis ecclesiae episcopi, quod de rebus suis in eadem ecclesia decreverat, examinatione veridica dirimendum. Quo relecto cognovimus eundem auctorem suum illic diversae constitutionis edidisse condiciones, inter quas unam valida conatus est religatione constringere, deputans et illationes tributorum et pretia frugum absque aliqua diminutione annua vice pauperibus erogare, nihilque esse absque deliberatione relictum quod usibus ecclesiae posset, quadam liberalitate servire.

Tunc ex voce partis ecclesiae Dumiensis astructum est quod universae speciei, generis et corporis rem quam in eiusdem ecclesiae dono intrinsecus ad usus domesticos et tempore suae ordinationis idem episcopus Ricchimirus invenit, et quae ipse aut

de opere utriusque sexus artificum familiarum ecclesiae potuit habere confecta atque illata, aut quae sua provisione habuisse visus est conquisita, omnia moriens iussisset pauperibus erogare; quaedam vero ita viliori pretio vendere ordinasse ut negotiatio earum rerum perditio potius quam mercatio censeretur; edidisse quoque quosdam libertos ex eiusdem ecclesiae familiis, quibus etiam cum aliis ad se pertinentibus amplius quam quingenta reperitur utriusque sexus dedisse mancipia.

Quibus damnis ita cognitis, quia et cuncta remedia intrinsecus domus tam indiscrete largita fuerant, ne quid ad dignitatem ecclesiae reliquum superesset, cum nulla imminens causa pauperum necessitas existeret quae hoc tam ex amussim erogare deposceret, atque pro libertis illis nihil secundum canonicam sanctionem datum in commutatione pateret, sed nec pro mancipiis et reliquis rebus eisdem libertis collatis aliquid in repensatione relictum ecclesiae innotesceret, verum et rem suam ita in nomine pauperum religasset ne aliquid remedii ex hoc ecclesiasticus usus attingeret, diucti sumus tam rationis intuitu quam Paternarum sanctionum edicto ipsius testamenti seriem, etsi non usquequaque in irritum devocare, in quodam tamen rationabili temperamento deducere: scilicet, ut quia tantorum dispendiorum damnis a memorato Ricchimiro episcopo factis res ecclesiastica dinoscitur subiacere, omnis res eius, quam alligatam relinquit pauperum nomini, tamdiu Dumisiensi ecclesiae plena deserviat facultate donec omne hoc damnum quod in utensilibus domus sustinuit, valeat evidentius reparari, ac tunc completa restitutione damni observetur, sicut decreta est, series testamenti. Libertos vero qui ex familiis ecclesiae facti sunt, seu res universa quae in mancipiis aliisque corporibus vel illis vel suis hominibus collata esse dinoscitur, cuncta in discretionem venerabilis fratris nostri Fructuosi episcopi disponenda relinquimus, ut quia haec evidens ordo Patrum in irritum devocat, illius temperamentum hoc ad miserationem adducat, qualiter nec regulam Paternam modus excedat et miserationem severitas non exstinguat, ut secundum meritum servientium et libertatis praemia et rerum donaria vel subtrahat vel concedat.

Editum decretum sub die Kalendas decembres anno feliciter octavo regno glorioso domni nostri Recesvinti regis.

TOLEDO XI (a.675)

canon 1, MANSI, 11, 137

I. Ne tumultu concilium agitetur.

In loco benedictionis considerantes domini sacerdotes nullis debent aut indiscretis vocibus perstrepere aut quibuslibet tumultibus perturbari; nullis etiam vanis fabulis vel risibus agi et, quod est deterius, obstinatis concertationibus tumultuosas voces effundere. 'Si quis enim (ut apostolus ait) putat se religiosum esse, non refrenans linguam suam, sed seducens cor suum, huius vana est religio'. Cultum enim sua justitia perdit, quod silentia iudicii obstrepentium turba confundit, dicente propheta: 'Erit cultus justitiae silentium'. Debet ergo quidquid aut contententium collationibus agitur, aut accusantium parte proponitur, sic mitissima verborum relatione proferri, ut nec contentiosis vocibus audientiam turbent, nec iudicantium vigorem de tumultu enervent. Quicumque ergo in conventu concilii haec quae promissa sunt violanda crediderit et contra haec interdicta, aut tumultu aut contumeliis vel risibus concilium perturbaverit, juxta divinae legis edictum, quo praecipitur: 'ejice derisorem et exhibit cum eo furgium' et cum omni confusionis dedecore abstractus a communi coetu secedat, et trium dierum excommunicationis sententiam perferat.

canon 6, MANSI, 11, 141.

VI. Non debere sacerdotes quaslibet in ecclesia familiis truncationes membrorum facere, nec aliquid quod morte plectendum est iudicare.

His a quibus domini sacramenta tractanda sunt, iudicium sanguinis agitare non licet; et ideo magnopere talium excessibus prohibendum est; ne indiscretae praesumptionis motibus agitati, aut quod morte plectendum est, sententia propria iudicare praesumant, aut truncationes quaslibet membrorum quibuslibet personis aut per se inferant, aut inferendas praecipiant. Quod si quisquam horum immemor praeceptorum, aut ecclesiae suae familiis aut in quibuslibet personis tale quod fecerit, et concessi ordinis honore privatus, et loco suo, perpetuo damnationis teneatur religatus ergastulo: cui tamen communio exeunti ex hac vita non neganda est, propter domini misericordiam, 'qui non vult peccatoris mortem, sed ut convertatur, et vivat'.

TOLEDO XII (a. 681)

canon 1, MANSI, 11, 1027 ss.*

I. In nomine gloriosi domini nostri Ervigi regis, primi diei synodali exordio considentibus episcopis atque senioribus palatii universis, habita primum est de sancta Trinitate

Post pacifica igitur hujus sanctae fidei collationum studia, illa se primum nostris sensibus salutaris cognitio agnoscendam invexit, quae tanto corda omnium ardore caritatis astringit, quanto se per eandem ipsa cognitio in conventu generalis concilii praenoscendam exhibuit. Etenim sub qua parte vel ordine serenissimus Ervigius, princeps regni conscenderit culmen, regnandique per sacrosanctam unctionem suscepit potestatem, ostensa nos scripturarum evidentiā edocet in quibus praecedentis Wambae principis poenitentiae susceptio noscitur, et translatus regni honor in hujus nostri principis nomine derivatur. Idem enim Wamba, dum inevitabilis necessitudinis tenetur eventu, suscepto religionis debito cultu, et venerabili tonsurae sacrae signaculo, mox per scripturam definitionis suae hunc inclytum dominum nostrum Ervigium post se praelegit regnaturum, et sacerdotali benedictione ungendum. Vidimus, intuitu praelucēte perspeximus hujus praemissi ordinis scripturas, id est, notitiam manu seniorum palatii roboratam, coram quibus antecedens princeps, et religionis cultum et tonsurae sacrae adeptus est venerabile signum; scripturam quoque definitionis ab eodem editam, ubi gloriosum dominum nostrum Ervigium post se fieri regem exoptat; aliam quoque informationem jam dicti viri, in nomine honorabilis et sanctissimi fratris Juliani, Toletanae sedis episcopi; ubi eum separavit pariter, et instruxit, ut sub omne diligentiae ordine jam dictum dominum nostrum Ervigium in regno ungerere deberet, et sub omni diligentia unctionis ipsius celebritas fieret. In qua scriptura et subscriptio nobis ejusdem Wambae principis claruit, et omnis evidentiā confirmationis earundem scripturarum sese manifeste monstravit. Quibus omnibus approbatis atque perlectis, dignum satis nostro coetui visum est, ut praedictis definitionibus scripturarum nostrorum omnium confirmatio apponatur ut quia ante tempora in occultis Dei judiciis praescitus est regnaturus, nunc manifesto in tempore generaliter omnium sacerdotum habeatur definitionibus consecratus. Et ideo soluta manus populi ab omni vinculo juramenti, quae praedicto viro Wambae, dum regnum adhuc teneret, alligata permansit, hunc solum serenissimum Ervigium principem obsequenda grato servitii famulatu sequatur et libera; quem et divinum iudicium in regno praelegit et decessor princeps successorem sibi instituit, et quod superest, quem totius populi amabilitas exquisivit. Unde his precognitis atque praescitis, serviendum est sub Deo coeli praedicto principi nostro Ervigio cum pia devotione; obsequendum etiam promptissima voluntate, agendum et enitendum quidquid ejus saluti proficiat, et quidquid genti, vel utilitatibus patriae suae consulerit. Unde non erit jam deinceps, aut ab anathematis sententia alienus, aut a divinae animadversionis ultione securus, quisquis superne contra salutem deinceps aut erexerit vocem aut commoverit caedem, aut quamcumque exquisierit laedendi occasionem.

* Se han omitido en este canon los fragmentos que no se refieren a la cuestión de Wamba.

canon 4, MANSI, 11, 1030 ss.

IV. Majorum institutionum contraire et sanctorum patrum decreta convellere, quid aliud est, quam vinculum societatis Christi abrumpere et usurpatae praesumptionis licentia statum totius ecclesiae dissipare? Prosequente igitur venerabile et sanctissimo fratre nostro Stephano Emeritensis sedis episcopo, res nobis novellae praesumptionis usurpatione sese intulit pertractanda, tanto communionis nostrae iudicio evellenda, quanto et privatis noscitur ausibus perpetrata. Dixit enim violentia principali se impulsus fuisse, in monasterio villulae Aquis, in qua venerabile corpus sanctissimi Pimenii confessoris debito quiescit honore, novam episcopalis honoris ordinationem efficeret. Et ideo, quia indiscreto et facillimo assensu, injustis Wambae principis iussionibus parens, novam et injustam illic pontificalis sedis praelectionem induxerit, ubi canonica institutio id fieri omnimoda ratione refellit; praedictus idem vis postratus humo, medicamine nostri praecepti et sibi dari veniam petiit, et quid potissimum oportet fieri de persona eius, qui illic ordinatus fuerat, nostri oris sententia decernendum poposcit. Sed quia veraciter, imo communiter noveramus praedictum principem consilio levitatis agentem, non solum praecepisse, ut in praedicto loco Aquis episcopus fieret, sed etiam ita eum consuetis obstinationibus definisse, ut hic in suburbio Toletano in ecclesia Praetoriensi sanctorum Petri et Pauli, episcopum ordinaret; nec non et in aliis vicis vel villulis similiter faceret; ideo pro tam insolenti hujusmodi disturbance licentia, quid de hac re haberent canonum instituta perlecta sunt. In primis ex epistola Pauli, ubi Tito discipulo, ut episcopos per civitates constituere debeat, praecepit; item ex concilio Nicaeno titulo octavo, ubi inter caetera praecipitur ut in civitate non videantur duo episcopi esse; item ex concilio Laodiceno, titulo quinquagesimo septimo ubi dicit: 'Non oportet in vicis et villulis episcopos ordinari', etc; item ex concilio Africae secundo, titulo quinto ubi dicit: 'Ut diocesis quae episcopum nunquam habuit, non habeat. Felix episcopus Silensitanus dixit etiam: Si hoc placet sanctitati vestrae, insinuo, ut dioceses, quae numquam episcopos habuerunt, non habeant, vel illa diocesis, quae aliquando habuit, habeat proprium. Secundum autem hanc prosecutionem sanctitatis vestrae est aestimare, quid fieri debeat. Genedius episcopus dixit: Si placet insinuatio fratris et coepiscopi nostri Felicis, ab omnibus confirmetur. Ab universis episcopis dictum est: Placet'. Item, ex concilio Africae tertio, titulo quadragesimosecundo, ubi dicitur, ut non accipiat alium episcopum plebs, quae in diocesi semper subiavit. Epigonius enim episcopus inter caetera sic dixit: 'Hoc dico, non debere rectorem accipere eam plebem quae in diocesi semper subiavit, nec unquam proprium episcopum habuit. Quapropter, si universo sanctissimo coetui placet hoc quod prosecutus sum, confirmetur. Aurelius episcopus dixit: Fratris et consacerdotis nostri prosecutioni non obsisto, sed hoc me et fecisse, et facturum esse profiteor'. Item ex concilio Sardicensi, ubi inter caetera praecipitur: 'Licentia danda enim passim non est. Si enim subito aut vicus aliquis aut modica civitas, cui satis est unus presbyter, voluerit sibi episcopum ordinari, ad hoc ut vilescat nomen episcopi et auctoritas, non debent illi ex alia provincia invitati facere episcopum'. Item de sententia eorum, qui hujusmodi ordinationes faciunt, vel de his qui contra haec instituta canonum ordinantur, ex concilio Tauritano titulo secundo, ubi dixit: 'Gestorum quoque seriem conscribi placuit ad perpetuam disciplinam, quod circa Octavium, Ursionem, Remigium et Attrefoerium episcopos synodus sancta decrevit: qui in usurpationem quandam de ordinatione sacerdotum ad invidiam vocabantur. Quod eatenus his videtur indultum, ut de cetero hac auc-

toritate commoniti nihil usurpare conentur; siquidem ea se ab hac causa excusatione defenderint, qua dicerent prius se non esse conventos. Proinde iudicavit synodus, ut si quis ex hoc fecerit contra instituta majorum, sciat his qui ordinatus fuerit sacerdotii se honore privandum, et ille qui ordinaverit, auctoritatem se in ordinationibus vel in conciliis minime retenturum. Non solum autem circa memoratos episcopos haec sententia praevalebit, sed etiam circa omnes, qui simili errore decepti hujusmodi ordinationes perpetrarunt'. His igitur fortissimis regulis effectum pii operis apponentes, id communi definitione elegimus, ut in locum villulae supradictae Aquis deinceps sedis episcopalis non maneat, neque episcopus illis ultra constituendus existat. Hic tamen Cunialdus, qui contra majorum decreta illici videtur institutus fuisse episcopus, nullis canonum erit ad condemnationem sui sententiis ulciscendus, quia non ambitione, sed principis impulsione illic constitit ordinatus. Et ideo hoc illi remedium humanitatis concedimus, ut in sede alia decedentis cujuslibet episcopi traduscatur, et praedictus locus sub monastica deinceps institutione mansurus, non episcopali ultra privilegio fretus, sed sub abbatis regimine sicut hucusque fuit, erit modis omnibus mancipandus. Jam vero de cetero generale ponentes edictum, si quis contra haec apostolica jussa, si quis contra haec canonum interdicta venire conaverit, ut in his locis illis episcopum eligat fieri ubi episcopus nunquam fuit, sit in conspectu omnipotentis Dei anathema et insuper tam ordinans quam ordinatur gradum sui ordinis perdat, quia non solum antiquorum patrum decreta, sed et apostolica ausus est convellere instituta.

canon 7, MANSI, 11, 1033 s.

VII. Omnis disciplina sic subjectos debet arguere, ut spem veniae non videatur auferre; nec funditus curvationis inducere jugum, sed temperantiae semper adhibere consultum. Et ideo quia legem illam a domino Wambane principe editam, quae de progressionem exercitus annotata, hujus principis nostri et domni Ervigii mansuetudo temperare disposuit, ideo annuente nobis glorioso et religiosissimo Ervigio principe nostro, necessarium hoc sanctum concilium definivit, ut hi, qui super praedictam legem, testificandi dignitatem perdiderant, recepto testimonio pristinae dignitatis, causas exequi possint debitae actionis; qualiter nobilitatis solitae titulum reportantes, et quaeque de praeteritis legitime testificare voluerint, licentiae obtineant votum, et a iudicibus nullis prohibitionibus arceantur; hoc videlicet adjicientes, ut si quid in praeteritis testificare voluerint, si pro sola rei infamationis dejecti sunt, testimonio suo nuper conquirant, quod in praeteritis conquirere poterant: tantum si illo tempore, quo in praeteritis ad testimonium dicendum vocati sunt, et supradictae legis institutionis reprobatum, aut aliam criminis notam eos tunc non habuisse patuerit, aut tricennium tum effluxisse, cum ad testimonium fuerint prolati, hi qui eos reprobaverant manifeste convincerint.

TOLEDO XIII (a. 683)

canon 1, MANSI, 11, 1063 s.

I. De reddito testimonio dignitatis eorum quos profanatio infidelitatis cum Paulo traxit in societate tyrannidis.

Praeconabile signum est illis semper negotiis interesse, quae a pietate incipiunt, et per pietatis viscera temperantur: 'Pietas enim, ut ait apostolus, ad omnia utilis est'. Cujus virtutis admirabili dono cor gloriosi atque religiosissimi principis nostri divino igne succensum decrevit pariter, et elegit, ut in unum coetum omnes Hispaniae aggregati pontifices, illa decernerent, quae et gravedines pressurarum removeant, et sublevationis opem dejectis opulenter impendant. Primo igitur negotiorum exorsu, hortante pariter et jubente religiosissimo domino nostro Ervigio rege, decernendum nobis occurrit, ut omnes, quos scelerata quondam contra gentem et patriam conjuratio Pauli in perfidiam traxit, et titulo testimonii honestioris abjecit, ad statum dignitatis pristinae redeant et nulla deinceps illis ob hoc catena judicialis obsistat, sed omnes ita generosae stirpis ac nobilitatis propriae subeant decus ut praeteritae infidelitatis nullum perferant dedecus. Quod etiam et filiis eorum decernimus observandum, qui post admissum parentum praememoratae profanationis scelus nati esse produntur, sive de ceteris omnibus qui ex tempore divae memoriae Cinthilani regis simili hucusque infamationis nota reperti sunt. Et quia incassum a servitute exiit qui spoliis premitur, hoc etiam adjiciendum praecelsi principis nostri clementia jussit ut aggregati coetus nostri sententia definiret quo cum recepto testimonio dignitatis, congruis alerentur substantiis. Unde consonam votis ejus sententiam praefirmantes elegimus, ut ea quae de rebus eorum nulli donata, neque in stipendiis data, sed tantum fisci sunt viribus applicata, unusquisque quod cuique proprium fuerit incunctanter auctoritates regias possidendum recipiat et receptum proprii arbitrii libertate disponat. Illa vero quae de eorum bonis largitione principali cuilibet donata, vel in stipendio data sunt, in eorum jure quibus concessa sunt, perpetim tenebuntur. Hujus ergo pietatis sententiam quam, ordinante praedicto glorioso principe nostro formavimus, si quis immutandam elegerit, et tantae misericordiae fabricam subruere tentaverit, per judicium omnipotentis Dei anathema sit.

canon 4, MANSI, 11, 1066 s.

IV. De munitione prolis regiae.

Pridianae diei exercitia gloriosa, quibus per trium capitulorum annotationem pietas principalis se monstravit eximia, cogunt coetus nostri reverentiam aliquid promulgare, quo valeat et pietati regiae vicem beneficentiae reddere et principali soboli ad futurum prodesse. Providentia enim salutaris semper est utilis; imo semper est utile quod ad veram pertineat salutem. Et ideo piae sollicitudinis cura extenti, defensionis decretum promulgare prelegimus in regiam prolem; et tuitionis in futurum obtendere pietatem, qui paternis beneficiis nequivimus reddere vicem. De hoc sane principe nostro Ervigio rege id nos definisse conveniat, cujus profida fide pacato imperio regimur, affectu fovemur, praemiis fruimur, qui profanatoribus perditum libertatis decus restituit, qui de accusatis modum, quo justissime examinentur, decrevit, qui terram gentis propriae et illaesam ab hoste servavit, et multiplici tributorum relaxatione erexit. Et

ideo, qui tot erga gentis suae populos ejus beneficia persentimus, dignum est, ut saltem ejus filiis fortia tuitionis ad futurum adminicula prorogemus. Contestamus ergo omnes praesentes et absentes, seu etiam futuris temporibus subsequentes, sacerdotes vel principis seu cujuscumque honoris aut ordinis homines, coram Deo et sanctis angelis ejus, ut nullus ad futurum posteritati ejus, vel gloriosae conjugis suae Liubigotoni reginae, atque his qui gloriae suae filiis vel filiabus conjuncti esse noscuntur, seu etiam qui adhuc conjuncti non sunt, injustas laedendi occasiones exquirat; nullus occulte vel publice, per quae abdicentur, malitiae suae contra eos vota extendat; non eos gladio vel qualibet perniciose factione interimat; nullus consilium vel opus, quibus injuste dejiciantur vel nudentur rebus, exhibeat; nullus his injuste violentum tonsure signaculum imprimat; nullus vestem, contra ordinem gloriosae conjugis ejus vel filiabus suis atque nuris mutare praesumat; nullus etiam, extra evidentis culpa indicium aut exiliis eos relegandum inducat, aut eorum corporibus quarumlibet detruncationum vel flagellorum inferat detrimenta; quo cum praememoratis omnibus, omnis ejus in tota ad futurum gloriosa posteritas nec laesionis injustam perferat notam, nec rerum sentia <ed. VIVES, *sentiat*> detrimenta. Si quis autem hominum, cujuslibet sit ordinis atque honoris, huic nostrae sententiae non acquiescens, filios filiasve gloriae suae, una cum serenissima conjuge sua Liubigotone regina, vel supradictis omnibus amodo vel quandoque sine justo partis suae negotio, aut laedendos impetierit, aut dejicendos elegerit, vel ex propria deliberatione consenserit, quo aut de rebus sibi debitis injuste expoliati nudentur, aut dolo vel machinamento quolibet dejiciantur, sit aeterno anathemate ultus, et futuri examinis judicio condemnatus.

canon 5, MANSI, 11, 1067 s.

V. Ne defuncto principe relictam ejus conjugem aut in conjugio sibi quisquam aut in adulterio audeat copulare.

Execrabile facinus, et assuetae admodum iniquitatis est opus, defunctis regibus, superstitis ejus conjugis regale torum appetere et horrendis pollutionum maculis sordidare. Quis enim Christianorum aequanimiter ferat defuncti regis conjugem alieno postmodum connubio uti? aut secuturi principis libidini subjugari? Et quae fuit domina gentis, sit postmodum prostibulum foeditatis? Et quae toris extitit regalibus honoris regii sublimitate conjuncta stupris eorum vel conjugis, quibus pridem dominata est, abdicetur ut reproba? Quid ergo si moriuntur principes, numquid inhonorandas reliquunt sui corporis partes? aut quia ad gaudia caelestia Christiani transeunt reges, propterea ad contumeliam in saeculo eorum devocandae sunt conjuges? Nusquam ergo inhonorum esse oportet, quod honorandum convenit opportune haberi. Nulli ergo licebit superstitem reginam sibi in conjugio ducere, non sordidis contactibus maculare. Non hoc secuturis regibus licitum, non quidam hominum licebit esse permissum. Quod si facere tale aliquid quisquam praesumpserit, quo aut superstitem reginam post decedentis principis mortem, sibi in coniugio copulet, aut de adulterina pollutione contamine, sive sit rex sive quilibet hominum, qui hujus nostrae sanctionis sententiam violare praesumpserit, sit ab omni Christianorum communione seclusus et sulphureis cum diabolo contradatur ignibus exurendus. Quicumque igitur hujus constitutionis nostrae praesumpserit convellere vel abradere sanctionem, sit nomen ejus abrasum et deletum de libro vitae, ut Tartareas judicii poenas excipiat, qui haec decreta honestatis devoverit violanda.

canon 10, MANSI, 11, 1071 ss.

X. Utrum audeant ministrare hi qui poenitentiam accipiunt in sacerdotio constituti.

Tertii diei necessario collationis eventu, visum nobis est antiquorum patrum indagare de poenitentium regulis institutum. Etenim digno nobis venerandus honore sanctissimus frater noster Gaudentius, Valeriensis sedis episcopus, per vicarium personae suae ad concilium destinatum, congressus est nostri reverentiam coetus; insinuans sacrosancto synodali conventui, quod incommodae valetudinis nimietate praeventus, per manus impositionem subactus fuisset poenitentiae legibus. Sed utrum accepta poenitentia, liceret sibi praecepta sui ordinis contrectare mysteria <VIVES: *contractare ministeria*>, vel missarum solita explere officia, per synodalia institutionis se maluit certificari responsa. Tunc collatis in unum de hujusmodi canonicis instrumentis, hoc sancta synodus definivit ut reconciliatione praemissa, soliti ordinis retentet officia. Si enim regulae praecedentium patrum, eos qui poenitentiam in discrimina mortis accipiunt et nulla de se manifesta scelera confitentur (si adsit tamen in his et talibus probitas morum) ad ecclesiasticos gradus pervenire permittunt, quanto magis ut hi, qui in ipso sacerdotio constituti poenitentiam accipiunt, a sui ordinis officio retrahantur? tantum si se ipsi mortalium criminum possessione propria non notarunt. Cum enim omnis sacerdos tunc sibi licitum sacrificare sciat quando a malis actibus vacat, qua ratione, qui poenitentiae remedium suscipit, quod datur in remissionem peccati, a sacrificiis divinis se abigit? Poenitentia enim ad hoc suscipitur ut peccatum diluat et peccati sordes hominem iterare non sinat. Qui ergo confidit per susceptam poenitentiam dimissa sibi peccata, cur confidenter ad altare domini non accedat? vel cur ordinis sui non audeat retentare officia, cum hoc alteri non liceat, nisi ei qui se a peccatis abtineat? Etenim cum poenitentiam accepimus, ad similitudinem conditoris nos reformare conamur. Reformatio igitur ipsa medicamentum est, quo delentur piacula. Si enim medicamentum istud assumitur recte, creatori suo anima reformatur, recte etiam sacrificandi Deo cultus assumitur; quia in eo similitudo conditoris agnoscitur; si autem poenitentiae medicamentum subtrahitur, quod in remissionem peccatorum accipitur, ad similitudinem factoris uspiam non venit. Etenim poenitentia (ut dictum est) in remedium peccati accipitur; sacerdotium vero propter munditiam retentatur; ut hoc sacerdotis et vita ita fructu bonorum operum floreat, quo et in se delicti passiones extinguat, et praedicamento suo in aliis peccati regnum potentialiter destruat. Huic igitur taliter, ut praemisimus, sacerdoti viventi quid obierit, si post acceptas poenitentiae leges divinis altaribus propositionis offerat panes? Aut numquid poenitentiae donum, quod in remedium sit peccati, in prohibitione devocandum est sacramenti? Nusquam ergo poenitentiae praecepta privabunt jura celestia. Poenitens enim abstinere a peccatis pariter et negotiorum saecularium tumultibus debet, non ab iis quae sancta videntur et summa se abstrahere, quae operantem plus expiant, quam commaculando deturpant. Scriptum est enim: 'Sacerdos ad hominem mortuum non accedat', id est, mortalium criminum se implicatione non polluat. Non enim dicit Deus, ut sacerdos, ad sacra quaeque non auderet accedere, de quibus praeceperat, ut nullo modo sacerdos de sanctis exiret; set ut mortis opera non auderet contingere. Ergo abigenda sunt ab omni sacerdote quae maculant, exercenda quae mundant. His ergo rationabili sanctione praemissis, hoc sancta synodus definivit, ut stante priscorum canonum sanctione, quicumque pontificum vel sacerdotum, deinceps per manus impositionem poenitentiae

donum exceperint, nec se mortalium criminum professione notaverint, tenorem retinendi regiminis non omittant, sed per metropolitanum reconciliatione poenitentium more suscepta, solita compleant ordinis sui officia vel cetera mysteriorum sibi credita sacramenta. Hoc tantum est observandum, ut si aut ante acceptionem poenitentiae adjudicatus, nec reconciliatus reperitur pro culpis, aut si in ipsa perceptione poenitentiae reconciliatus implicatum se dixerit moralibus factis, juxta aestimationem metropolitani abstinere hujusmodi oportet a praemissis officiis. Ceterum, si (ut dictum est) sub poenitentiae praeceptione consistens, nihil mortalis criminis se admisisse praedixerit, attamen, quod fateri hominibus erubescit, absconsum intra claustra sui pectoris delitescit; noverit ipse sibi de se potestatem esse concessam, ut juxta conscientiae suae fiduciam, utrum audeat aut non audeat sacrificare Deo, ex sui potius arbitrii potestate, quam ex nostri iudicii permissione procedat.

canon 12, MANSI, 11, 1074 s.

XII. De non excommunicandis a proprio episcopo personis illis, qui ad metropolitanum suum negotia sua gesturi accesserint.

Quicumque ex clericis vel monachis causam contra proprium episcopum habens, ad metropolitanum suum causaturus accesserit, non ante debet a proprio episcopo excommunicationis sententia praedamnari, quam per iudicium metropolitani sui, utrum dignus excommunicatione habeatur, possit agnosci. Quod si ante iudicium quis episcoporum in talium personas excommunicationis sententiam praemiserit, illis penitus quos ligaverint absolutis, in se illam noverint retorquendi sententiam. Quod etiam et inter metropolitanos convenit observari; si praegravatus quis a metropolitano proprio, ad alterius provinciae metropolitanum molestiam pressurae suae agnoscendam detulerit; aut si inauditus a duobus metropolitans, ad regios auditus negotia sua perlaturus accesserit; et ob hoc excommunicationis jugulum a proprio episcopo illi videatur infigi, hoc tantum est observandum; ut si prius unumquemque excommunicationem contigerit suscepisse, antequam a proprio episcopo ad alium pertransiret, tamdiu excommunicatus apud eum, cujus iudicium petiit, habeatur, quamdiu excommunicatoris sui objectibus, utrum juste an injuste alligatus sit, agnoscatur.

TOLEDO XV (a. 688)

Sobre los juramentos prestados por Egica a Ervigio*
In fine, MANSI, 12, 17-20

<1> His itaque super sanctae fidei professionem explicatis, ad contuendam illarum seriem conditionum nos vertimus, quarum nexibus se illigatus praedictus princeps fuerat protestatus. Etenim tempore, quo divae memoriae Ervigius princeps hunc praesentem dominum nostrum Egicanem regem ad copulam filiae sustinuit, his eum primum ligaminibus implicavit. Clara igitur pronunciantis voce, earumdem conditionum nobis textu praecognito, invenimus illic tam impossibilia vincula quaedam iuramenti innexa, ut difficulter mens jurantis ab earum illigatione sit libera: etiamsi esset a regni curis et solitudinibus aliena. Quarum textrinii evidens ligatura, inter cetera conexionum capitula, his verbis habeatur expressa. <2> Circa cognatos meos, filios vestros, quos de gloriosa coniuge vestra, domina mea Liubigotone regina progenitos habere videmini, tam carum me amicum in sincera mentis dilectione sine fraudulenta calliditate exhibere et esse polliceor; et ita cum eis in affectu dulcedinis et caritatis omnibus diebus vitae meae vivere spondeo, ut nec ipsos nec partem eorum, pro quibuslibet capitulis aut ordinibus vel occasionibus, quoquolibet tempore inquietari aut stimulari debeam. Nec ullum dolorem ullamque malitiam in corde vel animo meo contra eos amodo et deinceps quandoque retinebo aut excogitabo: neque aliquam occasionem aut argumentum enutribo, per quod, aut praefata ancilla vestra sponsa mea, sive jam nominati filii vestri, qui de totiens dicta clementissima coniuge vestra domina mea Liubigotone regina progeniti sunt, aut in maximum aut in modicum conturbentur vel stimulentur, excepto propter justissimas causas unde legalis mihi veritas patuerit, quas ut cum caritatis affectum ad eosdem cognatos meos quaerere debeam, mihi licentiam reservo et tam de promptissima dilectione et caritate eorum nunquam recedam: nam pro causis eorum quas aut ipsi contra qualibet personas habuerint, si quicumque contra eos pro quibusdam rebus intenderint, ita usque quoad vixero in eorumdem filiorum vestrorum adiutorium, cum omni mentis meae intentione, inquantum valuero et Deus mihi dederit posse, exurgebo et intendebo veluti si pro causa propria mea: ut nec illi damnum aut perditionem quamcumque sustineant, et negotia eorum cum Dei auxilio, me intendente, agente et prosequente, celerem ad affectum perveniant.

<3> Perlectis igitur his conditionibus quae divae memoriae Ervigius princeps praesenti principi nostro ob suorum tantum filiorum vindicationem extorserat, aliae iterum condiciones ex communi voto sese nobis retractandae objiciunt, ad quas praefatus princeps Egica in regno adscitus juramentorum suorum Deo redidit vota, cum se justitiam populis redditurum promisit, ac ne quemquam contra justitiam laederet, jurisjurandi attestazione devovi. <4> Prima igitur conditionum illa series pertractata, multis his secundis conditionibus videtur esse contraria. Quomodo enim pro cognatis

* Las actas de este Concilio no constan de cánones numerados, es más no existe numeración alguna. La deliberación sobre los juramentos mencionados ocupa el tercio final de las actas, de ahí su denominación como "in fine". Dado que se trata de un fragmento muy largo, se han introducido números entre <>, al objeto de facilitar su consulta.

causaturus exurgens decertantibus contra eos dabit justitiae palmam, si ipse contra eos sententiam suam defendat? aut si ipse, sicut juravit, negotii sit objector? Quis expectabitur iudicis terminator, aut quomodo data in populis iuramenta servabit, ut nullum, sicut est pollicitus, contra justitiam gravet, si intantum cognatis protectionis adminicula praestet, quamdiu negotia eorum se prosequente ad effectum videantur pertingere. Sic enim, sicut jam superius dictum est, jurasse praefatum principem constat ut negotia eorum, se intendente et prosequente, ad effectum perveniant. Illigatum itaque principem utriusque partis vinculis contuentes, perpendimus, quia utraque promissio simul ab eodem inculpabiliter impleri non possit. Quamquam si bene res considerata tractetur, tunc ab illis primis conditionibus absolutus ostensus est, quando ad secundas has conditiones populorum jurare coactus est: quia uno eodemque compulsionis auctore, utrumque contestatus est. Quapropter perpensis utrarumque conditionum allegationibus, atque communi omnium collatione tractatis, pervenimus in illis conditionibus, quas primum hic princeps noster socero jurasse dignoscitur, sola illi proprii iuris commoda cogitata; in his autem conditionibus honestatis vota pollicita: illic ante regnum unius tuendae domus fides exacta; hic post regnum inoffensa regendarum plebium vota pollicita; illic privatus amor ob defensionem filiorum protenditur, hic generalis patriae et gentis affectio pollicetur; juratio illa offensis forsitan plurimis uni tantum domui portabit effectum, haec vero generale aequitatis servans in singulis compromissum, nulli parti dabit veritatis excidium. Quod igitur ex utroque justo disputationis fine confiscitur, numquid paucorum salus erit extintio plurimorum? aut numquid tantum valere debet privatae rei commodum, quantum generalis revelatio populorum? absit. Quia ergo in illa iuratione acceptio privaturum cogitata est personarum, in hac autem generalis protectio plebium; quae ex his duabus sit potius observanda, divina nobis pandat sententia.

<5> Scriptum est enim in Proverbiis Salomonis: 'Cognoscere personam in iudicio non est bonum'. Christus quoque in evangelio: 'Nolite iudicare secundum faciem, sed iustum iudicium iudicate'. Paulo etenim apostolo, specialiter praestruente: 'ut non quaeramus quod nobis utile est, sed quod multis, ut salvi fiant'. Jam ergo in promptu est, quid ex duobus salubri pietate praeponderetur, et ideo intemerata plus erunt quae patriae sunt salubri pollicitatione jurata, quam illa, quae ob unius tantum domus sunt utilitatem pollicita. Nec hoc quidem sic dicimus, ut illa, quae quidem pro cognatis jurata sunt, penitus destruantur, sed potius ut unus idemque affectus populis cognatisque servetur; unum quid ex duobus unitatis gratiam redolens, neutrum dividat, sed componat. Non enim possunt utraque sejuncta aequa observantiae lance servari, quia si promissa cognatis fides servetur, populis quae promissa sunt, deperibunt; et iterum, si data populis intemerata Deo sacramenta serventur, cognatis procul dubio promissa beneficia negabuntur; nec unius partis praestatio sine alterius partis potest esse dispendio. <6> Quid ergo? numquid ob hoc utraque iuramentorum promissa solvenda sunt, quia singula invicem sine culpa agi non possunt? Absit: transfundendum ergo unum in alterum et ad unam regulam redigendum, ita ut minoris partis vota potioribus sint conjuncta, et affectus protectionis qui privatim socero promissus est et cognatis, transfusus generaliter servetur in populis; non quo, ut aut hinc aut inde promissa fides patiatur dispendium, sed conjuncta atque in alterutrum transfusa commune defensionis sentiat lucrum. <7> Dicimus ergo per Spiritum Dei et proximam sententiam ponimus, eo in nobis loquente, qui se in suo nomine aggregatis medium adesse

promisit. Sic ergo, ab illis vinculis juramenti, quibus socero ante juravit, principem nostrum Egicanem regem sancta synodus absolvendum elegit, ut aut cognatos ad populorum regulam dirigat, aut populos in cognatorum justam deffensionem assumat, ut quasi unius partis, germinisque filios utrumque uno devocans in affectu, nec in cognatorum justis negotiis favorem populorum obtendat nec rursus in populorum questionibus cognatis favore pertentet, ut tam in populorum quam in cognatorum negotiis una eademque illi fides servanda sit, nec alio affectu tractandos eligat cognatos, quam populos, quo in adeptum coelitus regnum directo aequitatis gradiens calle, nec profanationis in utrumque subeat notam, nec pietatis claudiat utriusque partibus viscera.

<8> Secunda post hae nostro coetui retractanda se collatio intullit, pro conditionibus scilicet illis, quas jam dictus princeps Ervigius ob tuitionem filiorum suorum, totius regni sui populos jurare coegit. Quibus inspectis et diutissime retractatis, nihil illic invenimus quod aequitati sit obvium, nihil quod et pietati adversum: occasiones tantum malitiae amputantur, nam justorum negotiorum aditus non excluditur. Hoc enim singulariter illic servandum promittitur, quod generaliter a domino omni Christiano jubetur; scilicet, ut malitia caveatur, innocentia illibata servetur, frustretur nocendi propositum, admittatur negotiosum justumque judicium; hoc enim si communi omnium lege servetur et illaesum semen regum a nocibilitate servabitur, et veritas populis sine perjurii profanatione reddetur. <9> Nec enim illic juramentum est, ut aut causantes contra filios suos nemo juvaret, ut aut nullus super aequitatis judicium promeret, ubi jam dictus princeps non solum in singulis negotia sua judicialiter proponendi aditum tribuit, sed et scelera filiorum suorum, si qua accidissent, legibus ulciscenda permisit. Quod ergo illic non est juramentum et tamen juramentum fuisse impudenter asseritum, non devocabit populos in perjurii crimen, quia nec alligatum cernitur in conditionum serie; nec enim in nobis est cohibendum quod in illis conditionibus non invenimus esse cohibitum. Recedendum tamen est a malitia et exercenda sunt negotia opportuna. Neque enim quorundam incauta illa dicacitas attendit quae impudenter adstruere nititur, illos tantum innoxios esse a perjurii crimine, qui negotia sua tantum visi fuerint objecisse; illos autem qui vel talia negotia judicanda susceperint, vel hujusmodi pro aequitate adjuverint inexprabili profanationis crimine irretiri; haec quippe dicunt contentiose magis quam rationabili strepitu obstrepentes; nescientes videlicet, quia si negatus fuisset illic aditus jurandi, negaretur et proponendi; sed qui admisit justae propositionis negotium, non voluit prolatae aequitatis amputare judicium; nec qui proponentem admisit potestatem juste judicandi judicibus abstulit. Magna ergo stultitiae vox est haec sentire vel proloqui. <10> Nam e contra, ecce per totam divinae seriem scripturae plus judicibus praecipitur judicare justitiam, quam populis sua objectare negotia. Dicit enim scriptura: 'Juste judicate, filii hominum'; nec addit: Juste proponite causas vestras, filii hominum: numquid quia iudices juste judicari admonet, ideo populis proponendi sua negotia interdixit in eo quod de negotiis proponendis nihil protulit? Numquid super eo iudicii formula rejicitur, quia mutum et absque propositione sentitur? Non ergo aut a iudicia sine objectis, aut objecta sine iudicibus esse possunt, quo aut iudex desit causanti, aut causans desit sine ullo modo iudici. Quapropter conditiones ipsae, in quibus nec veritas est praecisa, nec pietatis amputata sunt viscera, non tenebunt aut juste proponentes ad perjurii sacrilegium, aut juste judicantis ad profanationis reatum. <11> Hac igitur reddita ratione conficitur, ut ad praedictam seriem conditionum nullus teneatur obnoxius, quisquis repulsa a mali-

tia contra jam dicti principis partem, aut negotia sibi debita iudicibus iudicanda ob-
cerit, aut qui talium mandata susceperint, aut testis iudex, qui advocatus testimonium
dixerit, aut iudices ipsi, qui huiusmodi iuste negotia terminaverint, vel hi etiam, qui
parti iustitiam habenti simpliciter fautores extiterint, ad relevationem potius misero-
rum currentes, quam parti cuiquam delectantes esse nocibiles. Scriptum est enim:
'Pietas ad omnia utilis est'. Neque enim cessandum est a misericordiae opere, quod illo
non interdictum est foedere. Quia ergo illic iustitiae aditus non negatur, consequens est
ut nec pietas abnegetur: non enim plene iustitiam diligit qui pietatem proximo non
impendit; sic enim inconfuse pietatis servantes affectum, illud apostolicum praelegi-
mus observandum, quam manifeste praecipitur: 'invicem onera vestra portate, et sic
adimplebitis legem Christi'. Hac igitur ratione praemissa, absolutis et discretis perso-
nis, atque vocibus singulorum negotia ipsa, quae contra partem dicti piae memoriae
Ervigii principis, vel filiorum eius habeantur proponenda, admisimus, definientes, ut
legibus canonibusque designata iustitia, inter oppositos et respondentes a iudicibus
inconcussa servetur. His itaque excursis, quae placita dispositionis fine conclusa sunt,
damus soli Deo gloriam et honorem, poscentes eius profundissimam pietatem, ut eius
virtus atque potentia, et nostrarum solvat mentium ligaturam, a glorioso amatori
Christi Egicani, principi nostro tribuat felicem retentasse, sceptrum felicioris vitae
reducere cursum, ac diuturnum cum pace in populis tenere imperium, eo praestante
qui est rex omnium regum, et cuius regnum manet in saecula saeculorum. Amen.

TOLEDO XVI (a. 693)

canon 9, MANSI, 12, 76 s.

IX. De Sisberto episcopo.

Sic summum bonum est, valdeque conspicuum, superno numini amanter fideliterque inhaerere, ejusque praeceptioni patientiam votis gliscentibus exhibere, ita consequens bonum est, post Deum regibus, utpote jure vicario ab eo praelectis fidem promissam quemque inviolabili cordis intentione servare, et nulla contra eum occasione quidquam nocibilitatis excogitare nihilque nequius definire, dicente domino: 'Nolite tangere Christos meos', et iterum David: 'Quis enim extendit manum suam in Christum domini et innocentis erit <?>'. Item ipse cuidam comminans: 'Quare non timuisti manum tuam mittere, ut occideres Christum domini?' Unde opportunum satis est, ut sponsio principibus compromissa absque aliquo fraudis naevo custodiatur, et fides eis reddita nullis factionibus nullisque etiam nequitiae machinationibus temeretur. Nam si nuda tantum verbi pollicitatio qualibet occasione violetur, criminis denotatione censetur; quanto magis si fides regibus sub jurisjurandi attestazione promissa nequaquam profanare pertimescatur. Est enim quorundam saecularium et (quo pejus est) sacerdotum improbanda satis obstinatio animorum: et fidem suis principibus sub juramento promissam observare contemnunt, et verborum fuco juramenti obnubilant promissionem, dum in arcano pectoris retentent infidelitatis perversitatem. Et dum scriptum sit: 'Non assumes nomen Domini Dei tui in vanum, nec enim habebit insonthem dominus eum qui assumpserit nomen domini Dei sui frustra', et iterum: 'Non perjurabis in nomine meo, nec pollues nomen Domini Dei tui, ego dominus', rursusque: 'Maledictus omnis qui jurat in nomine domini sui mendaciter'; illi jurantes fidem promissam temerare non metuunt, et juramenti sui pollicitationem praevaricare nullatenus pertimescunt. Unde Sisbertus Toletanae sedis episcopus talibus machinationibus denotatus repertus est, pro eo quod serenissimum dominum nostrum Egicanem regem non tantum regno privare, sed et morte cum Flogello, Theodomiro, Liubilane, Liubigotone quoque, Tecla et ceteris interimere definivit, atque genti ejus vel patriae inferre conturbium et excidium cogitavit; qui etiam per decreti nostri definitionem jam et loco et honore privatus existit. Ideo nostrum in commune per hujus canonicae sanctionis decernit collegium, ut hoc ipsum unionis nostrae decretum, quod etiam his synodicis definitionibus innectendum decrevimus, omni subsistat valore subnixium, atque in perpetuum obtineat inconvulsibile robur. Ipse vero Sisberto pro sui juramenti transgressione facinorisque tanti machinatione, secundum antiquorum canonum institutionem, qua praecipitur ut quisquis inventus fuerit talia fecisse, et vivente principe in alium attendisse pro futura regni spe, a conventu catholicorum excommunicationis sententia repellatur, honore simul et loco depulsus, omnibusque rebus exutus, quibusque in potestate praedicti principis redactis, perpetui exilii ergastulo maneat relegatus; ita nempe ut secundum eorundem antiquorum canonum decreta, in fine vitae suae tantum communionem accipiat: excepto si regia eum pietas ante absolvendum crediderit. Simili quoque et ceteri de religiosis, cujuslibet sint ordinis aut honoris, qui deinceps talia contra principem egisse vel definisse reperti extiterint, censura multandi sunt.

TOLEDO XVII (a. 694)

canon 7 in fine, MANSI, 12, 100 s.

VII. ... Ideo nos pro tot et tantis beneficiis, quibus tam sanctae ecclesiae, quam genti ac patriae suae prorrogare intendit, cupientes un aliquo eidem principi retributionem rependere, per huius definitionem nostrae sanctionem depromimus, et per individuae Trinitatis inviolabile sacramentum, cunctos tam nunc consistentes, quam futuris temporibus cujuslibet ordinis vel generis homines succedentes, convenimus et contestamur, ut si quandoque contigerit qua gloriosa domina Cixilo regina, diutinis et felicioribus serenissimi nostri principis Egicani annis transactis, religiose existat in viduitate superstes, atque ex eo habuerit dulcissimas proles, nulla mordacitate invidiae pulsus, nullo odii stimulo actus, nullo diabolicae fraudis instinctu permotus, contra eos quisquam conetur assurgere; nullus, citra evidentium culparum indicium, per quas-cumque subtilissimas indagaciones nocibilitatis adversus eos perquirat occasiones; nullis eorum vita cujuslibet instantia obteratur injustissimis taediis, nullis maceretur inediis, nullus quoque filiis ac filiabus contra eorum voluntatem religionis habitum imponat, aut exilii ergastulis mancipandus statuat, neque flagellorum verberibus cruciet, per quod et dignitate priventur, et extra debitum justitiae ordinem, rerum suarum eis ambitio auferatur: sed quietis ac tranquillitatis ope fulciti, tam quod ei de parentali facultate debita successio dederit, quam etiam quod per auctoritatem oracula idem clementissimus dominus noster illis conferre maluerit, vel quae ab illis juste conquisita extiterint, imperturbato jure possideant, et de rebus ipsis judicare quod voluerint incunctatam licentiam habeant. Necessarium enim unicuique debet videri, ut sacerdotalibus praemuniantur oraculis, et eorum edictis reddantur per omnia liberales. Quod si quandoque extiterint destituti, secundum canonici vigorem edicti sacerdotum manebunt defensionis contuendi. Si quis igitur hoc pietatis edictum violandum delegerit, infirmandum crediderit, aut quoquo pacto temerare intenderit, sit perpetui anathematis ultione damnatus, a pagina caelesti abrasus, atque cum diabolo ejusque sociis acrioribus suppliciis alligatus.

TURIN (a. 397?)

canon 2, Hispana, IV, 59 s.

II. Gestorum quoque serie conscribi placuit ad perpetem disciplinam quod circa Octavium, Ursionem, Remigium ac Treferium episcopis synodus sancta decrevit, qui in usurpationis quandam de ordinatione sacerdotum ad invidiam vocabantur, quod eatenus his videtur indultum ut de cetero hac auctoritate commoniti nihil usurpare conentur, siquidem ea se ab hac causa excusatione defenderint, qua dicerent prius se non esse conventos. Proinde iudicavit synodus ut si quis ex hoc fecerit contra statuta maiorum, sciat is qui ordinatus fuerit, sacerdotii se honore privandum, et ille qui ordina-verit, auctoritatem se in ordinationibus vel in conciliis minime retenturum. Non solum autem circa memoratos episcopos haec sententia praevalebit, sed et circa omnes qui simili errore decepti ordinationes huiusmodi perpetrarunt.

VAISON I (a. 442)

canon 5, Hispana, IV, 103.

V. Si quis episcopi sui sententiae non acquiescit, recurrat ad synodum.

canon 7, Hispana, IV, 105.

VII. Placuit praeterea accusandi licentiam etiam in nostri ordinis, si qua existit, levitate comprimere, ut si episcopus, si quem iudicat abstinendum, si pro humiliatione et correctione fratris assurgit, exorari a ceteris acquiescat, fratri de quo agitur correptione et comminatione adhibita; sin autem de crimine aliquem putet esse damnandum, accusatoris vice discutiendum sciat; fas est enim ut quae uni probantur, probentur omnibus.

ZARAGOZA I (a. 380)

canon 5, Hispana, IV, 295.

V. Ut qui a suis episcopis privantur, ab aliis non recipiantur.

Item lectum est: Ut ii qui per disciplinam aut sententiam episcopi ab ecclesia fuerint separati, ab aliis episcopis non sint recipiendi. Quod si scientes episcopi fecerint, non habeant communionem.

Ab universis episcopis dictum est: Qui hoc comiserit episcoporum, non habeat communionem.

ZARAGOZA III (a. 691)

canon 5, MANSI, 12, 45 s.

V. Ut defuncto principe superstes regina statum et vestem saecularem deponat, et in coenobio virginum mancipetur permansura.

Licet plenissime in concilio Toletano de principum relictis institutum fuisset ut nulli licitum esset superstitem reginam in conjugio ducere aut sordidis contactibus maculare, neque secuturis regibus nec cuilibet hominum esse permissum, tamen nostri ordinis causa est, ut crebrissime ad hoc aciem mentis nostrae condirigamus, quae animae intuemur exhibere profectum. Unde quia praeteritis temporibus multas scimus atque cognovimus principum relictas, post earum vocationem pro apice regni, quem regendo in cunctis tenuerunt nullam reverentiam honoris eis adhiberi a populis, sed passim (unicuique probatum est) diversas assumentes occasiones non solum latenter in eorum contrarietate insidias moliuntur, verum etiam (quod veritati contrarium est) procaciter verba contumeliosa in conventu multorum eas afficiunt; et, quod omni religioni abominandum atque horrendum est, de his detrahere non sinunt, quas in caterva populi cernunt commorari. Proinde paterna pietate commoti atque condigna circa tanto culmine providentes, per hujus decreti nostri paginam non solum quae in praedicto concilio exarata sunt de conjugio principum perenniter custodire, atque firma stabilitate decernimus permanere; sed etiam ea quae sunt conspicua honestati necessaria modo advertere procuramus, ut servatas in omnibus sanctiones canonum totius Toletani concilii, quae de principum relictis promulgatae atque definitae esse noscuntur, deinceps relictas principis superiorem sententiam illibato animo pudice servans, statim arcessito ab hoc saeculo principe, vestem saecularem deponat et alacri curiositate religionis habitum assumat. Quam etiam et confestim in coenobio virginum mancipandam esse censemus, et ut ab omni turbine mundi remota, nequaquam cuilibet locus attribuatur, per quod ad contumelia tantae potestati in publico ingeratur, aut subdita plebi esse haesisse patescat, quorum ante dudum agnoscitur domina fuisse; sed in claustra monasterii jugi fedulitate persistens, atque sanctimoniam vitam peragens, de regno temporali opitulatione divina ad regnum aeternitatis mereatur pervenire. Quicumque igitur superiores constitutiones, quae salubri consilio a nobis definitae esse noscuntur, violaverit, vel execrari quacumque sanctione pertentaverit aut permisit, noverit se excommunicationis percepturum sententiam, atque etiam exilii damnationis diuturno tempore incurrere jacturam.

ANEXO III

TRADUCCION DEL JUICIO ENTRE MARCIANO Y AVENCIO

Texto traducido del juicio entre los obispos Marciano y Avencio (Astigitanos).*

638, enero, 9.

Enrique FLOREZ, "España Sagrada", XV, Madrid 1759, primeras páginas sin numerar.

Fidel FITA, "Suplementos al Concilio Nacional VI", Madrid 1881, 9-18.

Juan TEJADA Y RAMIRO, "Colección de cánones de todos los Concilios de la Iglesia de España y de América", II, Madrid 1859, 325-331, (con traducción).

<1> En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, Selva, Juliano, Eugenio, Honorato, Protasio, obispos metropolitanos y sus demás comprovinciales y los restantes presbíteros, vicarios de los obispos. A menudo las acciones perversas de los malos perturban la vida de un inocente y la iniquidad del engaño se introduce so color de justicia, cuando trampas diabólicas imprimen una mancha sobre las iglesias, porque la envidia, siempre rival de las virtudes, golpea con una acusación mendaz al que no puede destruir por una acción de justicia. <2> Por éso Marciano, obispo de la iglesia de Ecija, antes destituido por el concilio de Sevilla en virtud de una acusación falsa, ha recurrido para disculparse, al presente concilio universal, y en una queja indignada, nos ha suplicado reformar el juicio que le condenó. Ya de hecho fue parcialmente oído por un anterior concilio universal, y restablecido solamente en su grado, pero no en su silla porque, a causa de la falta de tiempo, el concilio fue interrumpido, de suerte que su asunto no pudo ser examinado íntegramente. <3> Nosotros también, a quienes la solicitud pastoral que nos es delegada hace compartir la responsabilidad de que, si se diera el caso, el inocente no pague por los culpables y de que, en el caso de que nuestra investigación se parase, la inocencia, sin que haya falta de nuestra parte, no esté amenazada;

* Este texto, bastante extenso y muy oscuro, no tiene numeración. Se han introducido números entre <> al objeto de facilitar su manejo.

si bien es verdad que un número, conforme a la ley, de obispos elegidos por él ha estimado que había sido privado de toda dignidad, cargado de injusticias y condenado más bien por la maldad de los seculares, lo cual es probado por el examen del caso, sin embargo, hemos preferido pedir al obispo Avencio, que le sustituyó en su sede, y a aquellos cuya sentencia fue el deponerle de su grado, rectificar ese mismo juicio.

<4> A éstos en actitud negativa, y protestando delante de la imagen divina, que no saben ni ha llegado a su conocimiento dónde es detentado o por quién fue escondido, se trajeron documentos que todos han reconocido y afirmado ser verdaderos y, aunque la mayor parte de los jueces hayan dejado de vivir, los que han sobrevivido, de acuerdo con nosotros, e igualmente después de una resolución unánime con los sucesores de los difuntos, eligieron revisar ese juicio en la persona de los testigos; <5> en efecto, el dilatado período de tiempo transcurrido no ha podido ser obstáculo porque, a consecuencia de su separación, después de la pérdida de su honor, ninguna posibilidad de reclamación le fue abierta en el transcurso del año; pero acogió la sentencia como no coherente por parte de los jueces, dado que en aquel momento unos, como ellos mismos lo confesaron, le declararon inocente y los demás le proclamaron culpable. Por ello, en cuanto a los acusadores del susodicho obispo Marciano, hemos convocado sus contemporáneos a nuestro tribunal.

<6> Así fue como el diácono Eulalio, habiéndonos revelado en el transcurso de nuestra búsqueda de la verdad, diversas causas de obligación contra él <Marciano>, la investigación del sacratísimo concilio y el rigor de la discusión sin tregua de su caso, le han empujado a declarar abiertamente que había sido condenado injustamente, e inculminado como consecuencia de malignas maquinaciones; para probar la veracidad de estas alegaciones, reclamó al obispo Avencio las pruebas escritas, hechas de diversos compromisos, por los que se había ligado, de suerte que siendo vendido a él <Avencio> en el marco de una asociación perpetua, no se pudiera encontrar nada más verídico que sus acusaciones contra el obispo Marciano, y que le fuese siempre hostil por sus reproches. <7> Pero, dado que los acuerdos para tales asociaciones o conjuras no están solamente privados de efecto por los concilios, sino anulados por la ley, el mismo diácono, invocándolos en su defensa, los cita, diciendo: "No podemos contraer ni contra la ley ni contra las buenas costumbres". Se ha referido incluso al concilio Hilerdense, que prescribe recurrir a la caridad en satisfacción de la penitencia. En efecto, se dice en el séptimo canon: "El que ha contraído una obligación bajo juramento, de suerte que, estando en litigio con cualquiera, esté impedido por su perjurio para restablecer la concordia, que, después de haber sido apartado durante un año de la comunión del cuerpo y de la sangre del Señor, se purifique de su falta por limosnas, llantos y tantos ayunos como pueda, y que se apresure a recurrir a la caridad, que hace olvidar multitud de pecados". <8> Así, delante de las escrituras, arrepentido del mal causado por la conspiración, hizo volver ante nosotros a todos los testigos que se habían presentado en aquella época; los cuales, siendo examinados con atención, y la verdad buscada en su raíz, y tomándoles alternativamente por separado, nos han confesado que lo que habían compuesto de la misma manera y en los mismos términos eran mentiras; hemos encontrado allí la representación de fabricaciones de mentiras tales, que presentaban declaraciones redactadas por otros, las cuales repasadas muy a menudo en su mente, aprendían de memoria las mentiras que expresaban.

<9> Pero, para que la verdad sobre el asunto apareciese de forma manifiesta, nos fue traído Recesvindo, quien había atestiguado que, por orden del susodicho obispo Marciano, le había traído, acompañada de Dormicio, una adivina de nombre Simplicia, a quien había consultado sobre la vida del rey o sobre la suya; el cual Recesvindo, presentándose ante nosotros, declaró tomando a Dios por testigo, que nada de su testimonio, escrito más arriba, lo había sabido de boca del obispo Marciano pero que, empujado entonces por una noticia acompañada de amenazas, se había resuelto a atestiguarlo en justicia. <10> Además, se han presentado dos testigos, Scivila y Gundulfo, quienes han atestiguado bajo juramento que Recesvindo no tenía la edad de testificar, porque no tenía catorce años y que, como Dormicio quedaba como único de los dos testigos, era ilegal creerle a él sólo. <11> Además, Franca y Honorata han revelado que no habían mandado a Simplicia sola a casa del obispo, pero que, así como habían entrado juntas, habían salido juntas, y que no habían oído allí cuentos tales, como figuraba en su primer testimonio; han añadido haber testificado aquí bajo juramento, y no así en su primer testimonio, donde se había leído un escrito y que, no sabiendo leer, habían sido engañadas a consecuencia de su rusticidad. Su persona se manifestaba tan vulgar, que una acusación tan abyecta contra un sumo Pontífice no sería admitida <no debía ser admitida>.

<12> En lo que concierne a la sirvienta Ustania, que le reprochan <a Marciano> haber empleado como camarera, examinando a un testigo único, un presbítero llamado Gregorio, él nos ha dicho que le había visto entrar en la habitación del obispo, lo que habían dicho igualmente los demás testigos de aquella época. Pero, intentando hacer aparecer claramente la verdad, hemos encontrado una prueba, en este caso el presbítero Tonanto, el diácono Juan, el subdiácono Loayla, quienes han atestiguado bajo juramento que, después que el obispo Marciano hubiese accedido al episcopado, la susodicha sirvienta no tuvo nunca las llaves de la habitación del obispo, sino su hermano, llamado Velesario, quien cuidaba la habitación del obispo, que ella venía a ver a ése, en razón de la relación fraternal y que no había desempeñado nunca el oficio de camarera.

<13> Después, se llegó a lo que se dice que murmuró contra el príncipe, cosas que, refiriéndonos a las declaraciones de los que prestaron testimonio, hemos sabido ser falsas: en efecto, se descubría que no había pronunciado el nombre, ni del príncipe ni de ninguno de los que se le acusaba haber hablado con acritud.

<14> En cuanto a Bonella, cuyo caso se dice haberse examinado en Ecija y después en Sevilla, aunque no haya sido interrogada públicamente, sino en secreto, ha presentado un testimonio cambiante, hasta el punto de que lo que en su confesión de Ecija dijo haber hecho el día en que se le fue mandado, en su confesión de Sevilla dice haberlo hecho otro día. Creerla frente a la persona del obispo, porque era la única en haber confesado el crimen por sí misma, y haber sido sometida a tormento y porque era una sirvienta, fue inicuo. <15> En cuanto a los otros puntos particulares que nos fueron sometidos, no hemos podido, de la manera más evidente, encontrar allí faltas de las que se pueda hablar, sino inquisiciones vilísimas y malévolas. Pero ahora, han traído ante nosotros a clérigos: Trasoario, Esteban, Adeodato y Hospital, que eran ligados por el obispo Avencio con unos compromisos, de manera que debiesen testificar mendaz-

mente contra el obispo Marciano. Los compromisos, habiendo sido remitidos a nosotros por el obispo Avencio, hemos ordenado que les fuesen restituidos. Habiéndoles recibido, declararon en una confesión inequívoca que habían recibido de manos de Timoteo, entonces clérigo, pero simple diácono, instrucciones, destruidas por el obispo Avencio al mismo tiempo que el compromiso del clérigo Adeodato, sobre las cuales Dormicio y Recesvindo habían anteriormente testificado, según las cuales deberían ellos mismos también, en retorno, hacer contra el mismo obispo Marciano numerosos falsos testimonios; pero han atestiguado bajo juramento no saber nada de lo que contenían estas instrucciones. No solamente han confesado ésto ellos mismos, sino que es manifiesto que ésto nos ha llegado también por la confesión del diácono Timoteo; de donde se entiende de la manera más clara que, primero según esos designios y por su acción <de Avencio>, han sido reunidas tantas acusaciones contra el obispo Marciano, de lo cual incluso apareció un testimonio, según el cual se descubrió que la acusación transmitida por el diácono Timoteo era falsa; de donde en efecto hemos sabido, en nuestro examen del asunto, que es él <Avencio> quien había trabajado en ello, puesto que antes de que se hubieran debatido las acusaciones mismas, hechas contra el obispo Marciano, hemos descubierto que un acuerdo había sido firmado a favor de su elevación al episcopado. Una decisión a este respecto del concilio de Calcedonia, en el canon diez y ocho, la cual condena el crimen de fraternidad o de este género de conjura, en los siguientes términos: "El crimen de conjura o de conspiración (que los griegos llaman fraternidad), que es sin duda condenado totalmente por las leyes civiles, conviene aún más proscribirlo eficazmente en la santa Iglesia de Dios. Si se ha descubierto que algunos clérigos o monjes han conspirado, organizando fraternidades o asociaciones cualesquiera contra sus obispos u otros clérigos, que sean en todo caso depuestos de sus grados".

<16> Pero se han visto incluso presentarse Gonderes y Nepociano, a quienes había acusado <Avencio?> de haber emitido acusaciones falsas contra el rey Sisenando, de buena memoria. En virtud del canon, se había puesto en grave peligro, a causa de ellos, pero estaba bajo el peso de otras múltiples acusaciones y estaba convencido de haber actuado por su excesiva severidad, de manera impía, tanto hacia sus hermanos como hacia las familias de las iglesias; nos hemos dirigido entonces a sus instructores, para recoger sus opiniones: éstos, compartiendo la convicción de la bribonería del uno y de la inocencia del otro, han elegido en su juicio retirar al obispo Avencio de su silla de la iglesia de Ecija y, aunque tardíamente, reponer en ella al obispo Marciano. <17> La bondad divina, tanto como la unidad de nuestra asamblea, mostrando su simpatía hacia su sentencia, y puesto que (como lo dice uno de los Padres) nunca se ha tenido vergüenza para inclinar una sentencia hacia lo mejor, nosotros, aportando un asentimiento unánime a su juicio mejorado, le conferimos, so reserva de su confirmación por Dios, una validez perpetua. <18> Además, sobre el obispo Avencio, promulgamos por unanimidad de nuestro concilio, la sentencia moderada siguiente: que, a causa de sus excesos expuestos, sea sometido sin perder el honor a la autoridad de nuestro hermano hasta que esté purificado por una profunda contrición y esté corregido de su inclinación a tal crimen. <19> En cuanto a los jueces, en presencia de los cuales nuestro hermano el obispo Marciano fue antaño apartado, nuestra búsqueda de la verdad nos ha hecho descubrir ésto: puesto que no actuaron por malignidad ni por corrupción del juicio, sino que fueron engañados por las mentiras de los testigos, cerramos por ello la vía de la apelación a Marciano y a Avencio contra ellos. <20> Si cualquiera creyese

deber reclamar contra ellos o contra la formulación de nuestro juicio, que para la paz de la Iglesia y el olvido del escándalo hemos querido moderar, se encontrará excluido de la comunión y privado de su honor.

<21> Decisión del juicio dado en el pretorio de Toledo en la Iglesia de Santa Leocadia mártir, el quinto día de los idus de enero en el feliz segundo año del reinado glorioso de nuestro Señor el rey Chintila. Era 676.

ANEXO IV

CRONOLOGIA DE LOS REYES GODOS

AGUSTI, J. VOLTES, P. y VIVES, J., «Manual de Cronología española y universal», Madrid 1952, 344 s.

Ataulfo, dic. 410-sep. 415.
Sigerico, 415.
Walia, sept. 415-419.
Teodoreda <o Teodorico I>, 419-jul. 451.
Turismundo, jul. 451-453.
Teodorico II, 453-466.
Eurico, 466-dic. 484.
Alarico II, 28 dic. 484-primavera 507.
Gesaleico, 507-511.
Teodorico el Ostrogodo, regente, 511-26 ag. 526.
Amalarico <ya mayor>, sept. 526-531.
Teudis, dic. 531-jun. 548.
Teudiselo <o Teudisclo>, jun. 548-18/31 dic. 549.
Agila, dic. 549-mar. 555.
Atanagildo, 555-567.
Liuva I, 568-573.
Leovigildo, 553-586.
Recaredo, abr. 586-dic. 601.
Liuva II, 601-603.
Witérico, 603-610.
Gundemaro, 610-feb./mar. 612.
Sisebuto: 612-feb./mar. 621.
Recaredo II, 621.
Suíntila, mar. 621-mar. 631.
Sisenando, mar. 631-mar. 636.

Khíntila, mar. 636-dic. 639.
Tulga, 20 dic. 639-abr. 642.
Chindasvinto, abr. 642-30 sept. 653.
Recesvinto, 20 en. 649-1 sept. 672.
Wamba, 1 sep. 672-14 oct. 680.
Ervigio, 15 oct. 680-15 nov. 687.
Egica, 15 nov. 687-nov. 702.
Witiza, 14 nov. 700-710.
Rodrigo, 710-jul. 711.

ANEXO V

INDICE ONOMASTICO

Notas: 1. Los nombres citados en latín aparecen solamente en el Elenchus Canonum, Anexo II.
2. Las cifras seguidas de punto, indican la página y la nota en que está citado el nombre.

- AAcurio, hereje priscilianista, 269.
Adeodato, clérigo, 108, 112, 316, 317.
Aemilianus, eps. Bizancenus, 256.
Agapio, ob. de Córdoba, 94, 266.
Alipius, eps. Numidiensis, 256.
Afrodisius, eps. 268.
Ambrosio (S.), obispo de Milán, 268, 269.
Anianus, eps. Egabrensis, 265.
Anterio, hereje priscilianista, 154, 270.
Antigonus, eps. Magirensis, 241.
Apiario, presbítero, 66, 67.
Arcadio, emperador, 164, 165.
Ascanio, metropolitano de la Tarraconense, 155, 156, 157, 158, 160, 161.
Asturius, eps. 268.
Augustinus, eps. Numidiensis, 256.
Aurelianus, eps. 268.
- A-DAurelius, eps. 244, 245, 246, 257, 292.
Avencio, obispo de Ecija, 14, 89, 103.26, 104.27, 105, 105.31, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 116, 117, 148, 169, 313, 314, 316, 317, 318.
Bonella, esclava, 107, 111, 114, 316.
Bonifacio, Papa, 59.46.
Braulio, obispo de Zaragoza, 22.8.
Cambra, obispo de Itálica, 132, 264.
Casiaticus, eps. Mauritaniae Sitigensis, 256.
Chindasvinto, 30.34, 35.52, 42.68, 43.70, 115.36, 171, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 283.
Chintila, 31.35, 194.30, 197, 319.
Cixilo, esposa de Egica, 208, 210, 211.55.
Clarus, eps. Cartaginensis, 256.

Comiciolo, funcionario imperial, 162, 163, 164, 167.

Constantino, emperador, 29.27.

Cresconius, eps. Bizancenus, 256

Cuniuldo, ob. Aquis, 88, 292.

Dámaso I, Papa, 150.

Dictinio, hereje priscilianista, 154, 269, 271.

D-EDonatianus, eps. prim. Bizancenus, 256.

Donato, hereje priscilianista, 269.

Donatus, eps. Mauritaniae Sitigensis, 256.

Dormicio, testigo, 107, 108, 110, 114, 315, 316, 317.

Egica, 42, 43.71, 44, 99, 198, 199, 200, 200.41, 201, 202, 203, 203.46, 207, 207.50, 208, 209, 210, 211, 211.55, 299, 300, 301, 303, 304.

Eladio, obispo de Toledo, 19.1, 33.44, 89, 100, 100.15, 101, 101.20, 102.

Eliseo, liberto, 89, 122, 123, 124, 266.

Elpidio, laico, 150.

Emilio, hereje priscilianista, 269.

Epigonius, eps., 246, 291.

Ervigio, 32.39, 35.50, 35.53, 36.54, 42, 86, 88, 171, 172, 176, 181, 182, 182.11, 183, 184, 184.13, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 290, 292, 293, 295, 299, 300, 301, 302.

Espasando, clérigo, 132, 133.15, 133, 134, 264.

Esteban, clérigo, 108, 112, 316.

Esteban, obispo hispano-bizantino, 162, 163, 164, 165, 166, 168.

Esteban, obispo de Mérida, 85, 88, 291.

E-GEugenius, eps., 312.

Eulalio, diácono, 109, 313, 314.

Eustocius, eps. 268.

Exuperantius, eps. Gallaeciae, 268.

Faustino, obispo de Braga, 204.

Felix, eps. Baiensis, 241.

Felix, eps. Semselitanus, 242, 243, 291.

Florus, eps. 268.

Fortunatianus, eps. Cartaginensis, 256.

Fragitano, presbítero de Córdoba, 97, 143, 144, 145, 145.2, 145.4, 146, 265.

Franca, testigo, 107, 110, 114, 315.

Frogelo, palatino, 203.46, 204, 304.

Fructuoso, obispo de Braga, 33.44, 121, 139, 139.27, 187, 287, 288.

Fulgencio, obispo de Ecija, 75, 264.

Gaudencio, obispo de Ecija, 128, 129.5, 130.7, 263.

Gaudentius, eps. Valeriensis, 296.

Geila, hermano de Suínthila, 175, 275.

G-IGelasio, Papa, 58.43, 71.4, 74.10.

Geneclius, eps. 242, 243, 291.

Gonderes, 112, 317.

- Graciano, emperador, 151, 165.
 Gregorio I, Papa, 20, 143, 161, 162.36, 169.50, 169.52.
 Gregorio, testigo, 111, 111.34, 115, 315.
 Gundulfo, 110, 315.
 Herenas, hereje priscilianista, 269.
 Hilario, Papa, 155, 155.21, 156.24, 157.26, 157.27, 159.30, 160.33.
 Honorata, testigo, 107, 110, 114, 315.
 Honorato, obispo, 312.
 Honorio, emperador, 164, 165.
 Honorio, obispo de Córdoba, 75, 264.
 Hormidas, Papa, 37.
 Hospital, clérigo, 108, 112, 316.
 Idacio, obispo de Mérida, 150, 151.
 Ilarius, eps., 268.
 Inocencio I, Papa, 65.70.
- I-L**
- Instancio, obispo, 150, 151, 152.
 Ireneo, obispo de Barcelona, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 159.30, 160, 161.
 Isidoro (S.), obispo de Sevilla, 19.1, 22.8, 33.44, 47, 89, 100, 100.15, 100.17, 101, 102, 102.24, 147, 148, 280.
 Isonius, obispo priscilianista, 269.
 Iucundus, eps. Bizancenus, 256.
 Iucundus, eps., 268.
 Jenaro, obispo hispano-bizantino, 162, 163, 164, 167, 168, 169.
 Juan, defensor, 20, 48, 162, 162.35, 166, 167, 168.
 Juan, diácono, 111, 115, 316.
 Juan, obispo de Cabra, 72.8.
 Julián (S.), obispo primado de Toledo, 21.6, 32.39, 182.11, 198.40, 290.
 Juliano, obispo, 312.
 Justiniano, emperador, 164, 166.
 Justo, obispo de Salamanca, 77, 254.
 Lampadius, eps., 268.
 Lampius, eps. 268.
- L-N**
- León, emperador, 165.
 Leonas, eps., 268.
 Leovigildo, 28, 82.29.
 Leporius, eps., 268.
 Licianus, eps., 268.
 Liuvigoto, esposa de Ervigio, 198, 203.46, 204, 206, 207, 209, 295, 299, 304.
 Liuvilana, palatina, 203.46, 204, 304.
 Loaila, subdiácono, 111, 115, 316.
 Marcellus, eps., 268.
 Marciano, emperador, 29.27.
 Marciano, obispo de Ecija, 14, 33.44, 34.49, 36.55, 89, 101, 103.26, 104.27, 105, 105.31, 106, 107, 108, 109, 109.33, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 143, 146, 148, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318.

- Martín (S.), obispo de Dumio, 87.46, 121.45, 138, 287.
 Mauricio, emperador, 162, 167.
 Máximo, emperador, 152.
 Nepociano, testigo, 112, 317.
 Numidius, eps. Maxulitanus, 242.
- N-R**
- Nundinario, obispo, 155.
 Octavio, obispo, 88.48, 292, 307.
 Olimpius, eps., 268.
 Oroncio, obispo de Mérida, 77.19, 83, 83.30.
 Optantius, eps., 241.
 Orticius, eps., 268.
 Osius, eps. Cordubensis, 261, 262.
 Paterno, hereje priscilianista, 154, 269.
 Patruinus, eps., 268.
 Paulo, duque, 31.35, 35.53, 172, 197, 198.39, 294.
 Pegasio, obispo de Ecija, 128, 128.4, 263.
 Pimenius (S.), confessor, 291.
 Plautius, eps. Tripolitanus, 256.
 Potamio, obispo de Braga, 33.44, 89, 103.26, 119, 119.40, 120, 121, 223, 286.
 Prisciliano, 33.43, 143, 149, 150, 152, 152, 153, 269.
 Protasio, obispo, 312.
 Recaredo, 28, 28.26, 29.27, 41, 63.61.
 Recesvindo, testigo, 107, 108, 110, 114, 314, 315,
- R-S**
- 316, 317.
 Recesvinto, 32, 77.19, 83.30, 84, 138, 183, 187, 188,
 190, 190.24, 191, 193, 193.28, 194.30, 194.31, 223, 254, 283, 287.
 Remigio, obispo, 88.48, 292, 307.
 Restitutus, eps. Numidiensis, 256.
 Ricimiro, obispo de Dumio, 13, 33.45, 126, 127, 137, 138, 139, 139.25, 140,
 141.29, 287, 288.
 Salviano, obispo, 150, 151, 152.
 Scivila, 110, 315.
 Sclúa, obispo de Idanha, 77.
 Selva, obispo, 312.
 Serenus, eps., 268.
 Severianus, eps. Mauritaniae Sitigensis, 256.
 Severus, eps. 268.
 Silvano, obispo de Calahorra, 155, 155, 156, 157, 159, 160.
 Simplicia, adivina, 107, 110, 315.
 Simpliciano (S.), obispo de Milán, 152, 152.17, 153, 154.20, 269, 270.
 Sinfosio, obispo priscilianista, 19.1, 152.17, 154, 268, 269.
- S-U**
- Sintharius, hereje, 22.8
 Siricio, Papa, 91.4, 268.
 Sisberto, obispo primado de Toledo, 36.55, 99, 172, 194.31, 203, 203.46,
 204, 209, 220, 304.

- Sisebuto, 43.70.
 Sisenando, 35.50, 43.70, 112, 171, 174, 176, 177, 178, 176, 183, 275, 317.
 Suínthila, 35.50, 43.70, 43.71, 175, 175.4, 176, 177, 178, 180, 189, 190.24,
 191, 284.
 Sulpicio Severo, 150.
 Tarra, monje, 63.61.
 Tecla, palatina, 203.46, 204, 304.
 Teodomiro, palatino, 203.46, 204, 304.
 Teodosio, emperador, 164, 165.
 Teodulfo, obispo de Málaga, 72, 264.
 Teudemundo, espatario, 172, 202, 202.45.
 Timoteo, diácono, 106, 108, 112, 116, 316, 317.
 Tonanto, presbítero, 111, 115, 316.
 Trasoario, clérigo, 108, 112, 316.
 Treferio, obispo, 88.48, 292, 306.
 U-W Urbano, obispo de Sicca, 66.
 Ursio, 88.48, 292, 306.
 Ustania, sirvienta, 107, 111, 115, 315.
 Valentiniano, emperador, 165.
 Vegetinus, eps., 269.
 Velesario, criado, 111, 316.
 Víctor, eps. Abziritanus, 243.
 Vincentius, eps. Cartaginensis, 256.
 Wamba, 31.35, 32.39, 35.52, 35.53, 36.54, 42.69, 43.70, 60, 85, 88, 138, 171,
 181, 182, 182.11, 183, 184.13, 185, 186.16, 195, 196, 202, 208, 287, 290, 291,
 292.
 Witérico, 82.28.

ANEXO VI

INDICE TEMATICO

- A-Cacusaciones falsas o abusivas: 23, 51, 53, 112.
acusadores: 50,, 51, 52, 53, 214.
ager ecclesiae: 135.
amnistía: 35, 242.
antigüedad tardía: 8.
apelaciones: 13, 34, 62, 64, 65, 66, 67, 97, 108, 109, 115, 116, 144, 147, 149,
152, 153, 162, 168, 215, 218, 219.
arrianismo: 22, 44.
cánones: 9, 48, 87, 91.
clérigos errabundos: 24, 59, 132, 135.
concilios: 9, 10, 12.
clases: 18 ss., 26, 28, 30.
naturaleza: 21, 213.
régimen interno: 36 ss., 213.
comparecencia: 59.
competencia conciliar: 55, 56, 57, 97, 98, 138, 144, 215.
competencia episcopal: 12, 24, 26, 56, 94, 95, 97.
condena moral: 185.
conspiraciones: 13, 30, 42, 57, 99, 106, 112, 117, 123, 175, 203, 204, 206,
219, 220.
- C-Jconstitución del reino: 31, 274.
constituciones imperiales: 164, 165.
defensor: 162, 167.
deposición de clérigos: 93, 97, 98, 122.
deposición de obispos: 101, 104, 112, 117, 120, 121, 136, 151, 166, 167,
204.
Digesto: 165.
diócesis: 70, 71, 75, 82.
disciplina eclesiástica: 12, 23 ss. 25, 45, 90.
excomuni3n: 54, 133, 151, 154, 175.

geografía eclesiástica: 12, 27, 33, 58, 60, 70, 215, 216.
 herejes: 33.
 indulto: 197.
iudices: 30.
ius postliminii: 73, 84.
 juicio en primera instancia: 107, 108, 113, 118, 158.
 juicios conciliares: 47, 175, 204.
 juramentos: 36, 42, 114, 186, 187, 188, 198, 199, 201.

L-Plegitimidad del rey: 13, 35, 74, 75, 176, 177, 178, 179, 181, 183, 219, 220.

lex in confirmatione concilii: 43.

límites diocesanos: 69, 76.

manumisión: 122, 123, 128, 129, 130, 137, 140.

matrimonio: 24.

Novelas: 166.

numerarius: 202.

oficio palatino: 39.

ordenación sacerdotal: 24, 92, 95, 96, 157, 217.

ordenación episcopal: 29, 155, 158.

pacto de fidelidad: 108, 110, 112.

patrimonio eclesiástico: 11, 13, 27, 33, 58, 59, 128, 131, 132, 142, 217,
 218.

patrimonio regio: 188, 189, 190, 191.

penitencia pública: 25, 91, 92, 181.

perjurio: 117.

poder eclesiástico: 25.

posesión pacífica: 71, 76, 78.

P-*Spotentes*: 30.

prescripción: 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 84, 216.

priscilianismo: 22, 149, 151.

proceso civil: 54.

provincias: 69, 70, 71, 72, 77, 80, 93, 84.

rector provinciae: 62.

recurso a la autoridad civil: 62, 63, 215.

regius executor: 62.

reina viuda: 42, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 220.

relaciones sexuales: 23, 24, 100, 102, 103, 119.

sayón: 79.

sede episcopal: 12, 70, 85, 86, 87, 88.

seniores palatii: 182.

sentencia: 8, 12, 61, 63, 79, 127, 144, 145, 169, 180, 196, 199.

símbolos de Fé: 21, 22.

simonía: 24.

spatarius: 202.

S-Vsucesión ab intestato: 189, 192.
sucesión en el trono: 31.
territorios diocesanos: 72, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 84, 216.
testamento: 127, 137, 139, 140, 190.
testigo: 50, 52, 55, 113, 114, 117, 163, 197, 214.
tiranía: 176, 178.
tomo regio: 9, 29, 188, 198.
vicios del consentimiento: 120.

FUENTES

- BICLARO, Juan de, «Chronica Iohannis, Abbatis Biclarenensis», en MGH, AUCTORES ANTIQUISSIMI, vol. 11, *Chronica Minora*, II, München 1981, 163 ss. Otra edición crítica en CAMPOS, Julio, «Juan de Bicláro, Obispo de Gerona. Su vida y su obra», Madrid 1960.
- BRAULIO DE ZARAGOZA, «Epistolario», edición crítica en RIESCO TERRERO, Luis, «Epistolario de San Braulio. Introducción, edición crítica y traducción», Sevilla 1975.
- Carta del monje Tarra a Recaredo*, en GIL, Iohannes, «Miscellanea Wisigothica», Sevilla 1972
- Colección Canónica Hispana*, edición de Gonzalo MARTINEZ DIEZ, CSIC, 6 vols., Madrid, 1964-1985.
- Concilios Visigóticos*, en VIVES, José, «Concilios visigóticos e Hispano-romanos», Barcelona-Madrid 1963.
- CONTINUATIO HISPANA, en MGH, AUCTORES ANTIQUISSIMI, vol. 11, *Chronica Minora*, II, München 1981, 334 ss.
- Exemplar iudicii inter Martianum et Aventium episcopos*, en FLOREZ, Enrique (y otros), *España Sagrada*, XV, Madrid 1759, primeras páginas del tomo, sin numerar. También en FITA, Fidel, «Suplementos al Concilio Nacional VI, Madrid 1881, 9- 18; y en TEJADA Y RAMIRO, II, 325-331 (ver cita *infra*)
- GREGORIO I, PAPA, «Epistolas», en MGH, EPISTOLARUM, II, *Gregorii I Papae Registrum Epistolarum*, ed. L. HARTMANN, Berlín 1957.
- GREGORIO DE TOURS, «Historiarum Libri X», en MGH, SCRIPTORES RERUM MEROVINGICARUM, vol. 1, *Gregorii Episcopi Historiarum Libri X*, (ed. Bruno KRUSCH), Hannover 1937, reimpresión en 1983.
- HILARIO, PAPA, «Epistolae», en MIGNE, «Patrologiae Latinae Cursus completus...», 58, 11-20 (ver cita *infra*). Se contienen las siguientes: *Epistola I Hilarii papae ad episcopos tarraconenses 'De Synodali decreto'*, dos epístolas que motivan la anterior, *Epistola Tarraconensium episcoporum ad Hilarium papam (I y II)*, la *Epistola III Hilarii papae ad Ascanium et reliquos Tarraconensis provinciae episcopos* y la *Epistola III Hilarii papae ad Ascanium Tarraconensem episcopum privatim subscripta*.
- ILDEFONSO DE TOLEDO, «De Viris illustribus», edición crítica en CODOÑER MERINO, Carmen, «El 'De Viris illustribus' de San Ildefonso de Toledo. Estudio y edición crítica», Salamanca 1972.

ISIDORO DE SEVILLA, «De Viris illustribus, edición crítica en CODOÑER MERINO, Carmen, «El ‘De Viris illustribus’ de San Isidoro. Estudio y edición crítica», Salamanca, 1972.

JAFFE, Philippus, «Regesta Pontificum Romanorum», 2 vols., Graz 1956.

LEX ROMANA VISIGOTHORUM, edición de Gustaf HAENEL, reimpresión, Verlag-Aalen, 1962.

LEX VISIGOTHORUM, MGH, LEGUM SECTIO I, *Legum Nationum Germanicarum*, I, 33 ss.

LUCAS DE TUY, «Crónica de España», edición de Julio PUYOL, Madrid, 1926.

MANSI, Johannes Dominicus, «Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio...», 53 vols, (reedición) Graz-Austria 1960-1961.

MIGNE, J.P., «Patrologiae Cursus completus, sive biblioteca universalis, integra, uniformis, commoda, oeconomica omnium sanctorum, patrum, doctorum scriptorumque ecclesiasticorum, qui ab aevo apostolico ad usque Innocentii III tempora floruerunt... Series latina», (vulg. «Patrología Latina»= «P.L.»), París 1844-1864.

MOMMSEN, Theodor (ed.), «Corpus Iuris Civilis», 3 vols., (reimpresión), Wiedmann 1973.

Ordo de celebrando concilio, en MUNIER, Charles, «L’Ordo de celebrando concilio’ wisigothique», *Revue des Sciences Religieuses*, XXXVI, 1963, 250-271.

PRISCILIANO, «Tratados y Cánones», edición, preámbulo y notas de Bartolomé SEGURA RAMOS, Madrid 1975. Se incluye traducción del *Liber ad Damasum* en pp. 53-61.

Reglas Monásticas de S. Isidoro, S. Leandro y S. Fructuoso, en CAMPOS RUIZ, Julio y ROCA MELIA, Ismael, «Reglas Monásticas de la España Visigoda», col. BAC, Madrid 1971.

SULPICIO SEVERO, «Obras completas», Estudio, traducción y notas de Carmen CODOÑER, Madrid 1987.

TEJADA Y RAMIRO, Juan, «Colección de cánones y de todos los concilios de la Iglesia de España y de América», 2 tomos, Madrid 1859.

Tomos Regios de los Concilios de Toledo VIII, XII, XIII, XV, XVI y XVII, en MGH, LEGUM SECTIO I, *Leges Nationum Germanicarum*, I, Hannover-Leipzig 1902, 472 ss.

Vidas de los Santos Padres de Mérida, en GARVIN, J.E., «Vitae Sanctorum Patrum Emeritensium», Washington, D.C. 1946.

BIBLIOGRAFIA

- ABADAL, Ramón d', «Dels Visigots als Catalans», t. I: *La Hispania visigótica i la Catalunya carolingia*, Barcelona 1986.
- AGUSTI, Jacinto, VOLTES BOU, Pedro y VIVES, José, «Manual de Cronología española y universal», Madrid 1952.
- ALVAREZ CORA, Enrique, «La noción de ley postgótica» en *Historia, Instituciones, Documentos*, 22, 1995, 1-38.
- ANTON, H.H., «Der König und die Reichskonzilien im westgotischen Spanien», en *Historischer Jahrbuch*, 1972, 257-281.
- ARENILLAS, Ignacio, «La autobiografía de San Valerio (siglo VII), como fuente para el conocimiento de la organización eclesiástica visigótica», *AHDE*, 11, 1934, 116-137.
- AYERBE IRIBAR, María Rosa, «La mujer y su proyección familiar en la sociedad visigótica a través de los Concilios», en *Actas de las II Jornadas de investigación interdisciplinar sobre la mujer: Las mujeres medievales y su ámbito jurídico*, Univ. Autónoma de Madrid (ed.), Madrid 1983, 11-31.
- BARBERO DE AGUILERA, Abilio, «El pensamiento político visigodo y las primeras uniones regias en la Europa medieval», *Hispania*, XXX, 1970, 245-326.
- , «La sociedad visigótica y su entorno histórico», Madrid 1992.
- , y VIGIL, Marcelo, «La formación del feudalismo en la Península Ibérica», Barcelona 1978.
- BAUDRILLART, Alfred (dir.), «Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques, publié sous la direction de Mgr....», Paris 1912 ss.
- BELTRAN TORREIRA, Federico-Mario, «El conflicto por la formación eclesiástica de la Cartaginense y el III Concilio de Toledo», en *XIV Centenario de del Concilio III de Toledo*, Toledo 1991, 497-510.
- BISHKO, Charles J., «Spanish Abbots and the visigothic Councils of Toledo», *Humanistic Studies in honor of F.C. Metcalf*, Virginia University 1941, 139-150.

- BOUSQUET, J., «Histoire du Clergé en France, depuis l'introduction du Christianisme dans les Gaules jusqu'à nos jours», I, Paris 1851.
- BOULENGER, A., «Historia de la Iglesia», Barcelona 1952.
- BRUNNER, Heinrich y VON SCHWERIN, Claudius, «Historia del Derecho germanico», (trad.), Barcelona 1936.
- CHADWICK, Henry, «Priscilian of Avila», Oxford 1976. Existe traducción española de José Luis LOPEZ MUÑOZ, Madrid 1978.
- DANIEL-ROPS (pseudónimo), «L'Eglise des temps barbares», Paris 1950.
- DAVID, P. «Etudes historiques sur la Galice et le Portugal du VI au XII siècles», Lisboa-París 1947.
- DIAZ Y DIAZ, Manuel, «Los discursos del rey Recaredo: el 'tomus'», en *XIV Centenario del Concilio III de Toledo*, Toledo 1991, 223-236.
- , «Reglas monásticas españolas allende los Pirineos», en la obra colectiva *L'Europe, héritière de l'Espagne wisigothique, Rencontres de la Casa de Velázquez*, Madrid 1992, 159 ss.
- DOMINGUEZ DEL VAL, V., «El candidato al sacerdocio en los concilios de Toledo», *Ciudad de Dios*, 155, 1943.
- DUCHESNE, L. (Mgr.), «L'Eglise au VI siècle», París 1925.
- FERNANDEZ ALONSO, Justo, «La cura pastoral en la España Romanovisigoda», Roma 1955.
- FERREIRO, A., «The Visigoths in Gaul and Spain. A bibliography», Leiden 1988.
- FONTAINE, J., «Isidore de Séville et la culture classique en Espagne wisigothique», Paris 1985.
- FOURNIER, Paul y LE BRAS, Gabriel, «Histoire des collections canoniques depuis les fausses Décrétales jusqu'au Décret de Gratien», 2 vols, Paris 1931-1932.
- FUENTE, Vicente de la, «Historia Eclesiástica de España», III, Madrid 1873.
- GALLEGO BLANCO, Enrique, «Los Concilios de Toledo y la sucesión al trono visigodo», *AHDE*, 44, 1974, 723-739.
- GARCIA-GALLO, Alfonso, «Consideración crítica de los estudios sobre la legislación y la costumbre visigodas», *AHDE*, 44, 1974, 343- 464.
- , «El testamento de San Martín de Dumio», *AHDE*, 26, 1956, 369- 386.
- GARCIA Y GARCIA, Antonio, «El juramento de fidelidad en los Concilios visigóticos», en la obra colectiva *Innovación y continuidad en la España visigoda*, Toledo, 1981, 105-123.
- GARCIA IGLESIAS, L., «Los judíos en la España antigua», Madrid 1978.
- GARCIA MORENO, Luis Antonio, «Historia de España Visigoda», Madrid 1989.
- , «Prosopografía del Reino Visigodo de Toledo», Salamanca 1974.
- , «Estudios sobre la organización administrativa en el Reino Visigodo de Toledo», *AHDE*, 44, 1974, 5-155.

- GARCIA VILLADA, Zacarías, «Historia eclesiástica de España», II, Madrid 1932.
- GAUDEMET, Jean, «L'Eglise dans l'Empire Romain (IV-Vème siècles)», en LE BRAS, Gabriel (dir.), *Histoire du Droit et des Institutions de l'Eglise*, <III>, Paris 1958, puesta al día en 1989.
- , «La formation du droit séculier et du droit de l'Eglise», París 1979.
- , «Les sources du Droit Canonique» (colección de artículos), París 1993.
- , «Les sources du Droit de l'Eglise en Occident du IIème au VIIème siècles», París 1985.
- , y BASDEVANT-GAUDEMET, B., «Les canons des conciles mérovingiens», París 1989.
- GIRVES, M. «La España bizantina», Madrid 1994.
- GONZALEZ, Teodoro, «La Iglesia desde la conversión de Recaredo hasta la invasión árabe», en GARCIA VILLOSLADA, Ricardo (dir.), *Historia de la Iglesia en España*, I, *La Iglesia en la España Romana y Visigoda*, Madrid 1979, 401-747.
- , «La política en los Concilios de Toledo», Facultad de Historia de la Universidad Gregoriana (ed.), Madrid 1977.
- GONZALEZ RIVAS, S., «La Penitencia en la primitiva Iglesia española», Salamanca 1949.
- HEFELE, J. y LECLERCQ, H., «Histoire des Conciles», París 1921.
- HERWEGEN, I. «Das 'pactum' des hl. Fruktuosus von Braga», Stuttgart 1907.
- HILLGARTH, J.N., «El III Concilio de Toledo y Bizancio», en *XIV Centenario del Concilio III de Toledo*, Toledo 1991, 297-306.
- IGLESIA FERREIROS, Aquilino, «Notas en torno a la sucesión al trono en el reino visigodo», *AHDE*, 40, 1970, 653-682.
- JEDIN, Hubert, «La Iglesia Imperial después de Constantino hasta fines del s. VII», en su *Manual de Historia de la Iglesia*, II, Barcelona 1980.
- KASER, Max, «Das römische Zivil processrecht», München 1966.
- KURTSCHIED, Bertrandus y WILCHES, Félix, «Historia fontium et scientiae Iuris Canonici», en su *Historia Iuris Canonici*, I, Roma 1943.
- LINAJE CONDE, Antonio, «En torno a la 'Regula Monachorum' y a sus relaciones con otras reglas monásticas», *Bracara Augusta*, 21, 1967, 123-163.
- LLOBELL TUSET, Joaquín, «Historia de la motivación de la sentencia canónica», Zaragoza 1985.
- LLORCA, B., GARCIA VILLOSLADA, R., y MONTALBAN, F.J., «Historia de la Iglesia Católica», 4 vols, en esp. I, «Edad Antigua», *BAC*, Madrid 1964.
- LOPEZ FERREIRO, Antonio, «Estudios histórico-críticos sobre el priscilianismo», Santiago de Compostela 1878.
- LOZANO SEBASTIAN, F., «La Penitencia canónica en la España romano- visigoda», Burgos 1980.

- MAASSEN, Friedrich, «Geschichte der Quellen und der Lireratur der canonischen Rechtes im Abendlande», I, Gratz 1870.
- MADOZ, José, S.I., «El símbolo del XVI Concilio de Toledo», Madrid 1946.
- , «Le symbole du XI Concile de Tolède», Lovaina 1938.
- MAGNIN, E., «L'Eglise wisigothique au VIIème siècle», París 1912.
- MANSILLA REOYO, Demetrio, «Geografía eclesiástica de España: estudio histórico-geográfico de las Diócesis», 2 vols., Roma 1994.
- MARIANA, Juan de, «Historia de España», en *Biblioteca de Autores Españoles*, XXX, Madrid 1950.
- MARTIN HERNANDEZ, Francisco, «El clero y el Concilio III de Toledo», en *XIV Centenario del Concilio III de Toledo*, Toledo 1991, 303-323.
- MARTINEZ DIEZ, Gonzalo, «Cánones patrimoniales del Concilio de Toledo del 589», en *XIV Centenario del Concilio III de Toledo*, Toledo 1991, 565-579.
- , «Concilios particulares españoles anteriores a Trento», en *Los concilios romano-visigodos*, I. Repertorio de las Ciencias eclesiásticas en España, 5, Salamanca 1976, 299- 350.
- , «Concilios nacionales y provinciales», en ALDEA VAQUERO, Quintín, MARIN MARTINEZ, Tomás y VIVES GATELL, J., (dirs.) *Diccionario de Historia Eclesiástica de España*, I, Madrid 1972, 537-577.
- , «El patrimonio eclesiástico en la España visigoda. Estudio histórico-jurídico», *Miscelánea*, Comillas 1959.
- , «Funciones de inspección y vigilancia del episcopado sobre autoridades seculares en el período visigodo católico», *Revista Española de Derecho Canónico*, 15, 1960, 579-589.
- , «La autoridad episcopal a la luz de los concilios particulares» en *El Colegio episcopal*, I, Madrid 1964, 283- 303.
- , «La tortura judicial en la legislación histórica española», *AHDE*, 32, 1962, 223-300.
- MELLADO RODRIGUEZ, Joaquín, «Léxico de los Concilios visigóticos de Toledo», 2 vols., Córdoba 1990.
- , Intervención episcopal en la política judicial y fiscal de Recaredo (Problemas filológicos y jurídicos), *AHDE*, 65, 1995, 837-847.
- MEREA, Paulo, «Precarium e stipendium», en su *Historia e Direito*, I, Coimbra 1967, 1-29.
- , «Sobre o testamento de S. Martinho de Dume», en sus *Estudos de Direito Hispanico medieval*, II, Coimbra 1953, 50-53.
- MICHEL, A. «Conciles de Tolède», en VACANT-MANGENOT, *Dictionnaire de Théologie Catholique*, XVI, París 1946, 1176-1208.
- MORENO CASADO, J., «Los concilios nacionales visigóticos, iniciación de una política concordataria», *Boletín de la Universidad de Granada*, 18, 1936.
- MUNDO, A., «Les anciens synodes abbatiaux et les 'Regulae Patrum'», *Studia Anselmiana*, 44, 107 ss.

- MUSSET, L., «Les invasions», París 1969.
- OLIGER, P. R., «Les évêques réguliers. Recherches sur leurs conditions juridiques depuis les origines du monachisme», Paris-Louvain 1958.
- ORLANDIS, José, «Concilios de Toledo», en *Gran Enciclopedia Rialp*, 22, Madrid 1975, 523-526.
- , «El cristianismo y la Iglesia en la España visigótica», en MENENDEZ PIDAL, Ramón (dir.), *Historia de España*, III.1, Madrid 1991, 433-511.
- , «El significado del Concilio III de Toledo en la Historia Hispánica y Universal», en *XIV Centenario del Concilio III de Toledo*, Toledo 1991, 325-332.
- , «En torno a la noción visigoda de tiranía», *AHDE*, 39, 1959, 5-143.
- , «Estudios sobre instituciones monásticas medievales», Pamplona 1971.
- , «Hispania y Zaragoza en la Antigüedad tardía», Zaragoza 1984.
- , «Historia del Reino visigodo español», Madrid 1988.
- , «Historia social y económica de la España visigoda», Madrid 1975.
- , «Iglesia, concilios y episcopado en la doctrina conciliar visigoda», en *El Colegio Episcopal I*, Madrid 1964, 305-331.
- , «La España visigótica», *Historia de España*, editorial Gredos, Madrid 1977.
- , «La Iglesia en la España visigótica y medieval», Pamplona 1976.
- , «La Iglesia visigoda y los problemas de la sucesión al trono en el siglo VII», en *Estudios Visigóticos*, III, Roma- Madrid 1962, 43-102.
- , «La problemática conciliar en el reino visigodo de Toledo», *AHDE*, 48, 1978, 277-306.
- , «La reina en la monarquía visigoda», *AHDE*, 27-28, 1957-58, 109-135.
- , «Las relaciones intereclesiales en la Hispania visigótica», *Temis*, 1969, 9-32.
- , «Los laicos en los concilios de Toledo», *AHDE*, 50, 1980, 177-187.
- , «Semblanza de Recaredo», en *Homenaje a Ismael Sánchez Bella*, Pamplona 1992, 411-420.
- , «Semblanzas visigodas», Madrid 1992.
- , «Sobre el origen de la ‘Lex in confirmatione concilii’», *AHDE*, 41, 1971, 113-126.
- , «Tras la huella de un concilio Isidoriano de Sevilla», *Anuario de Historia de la Iglesia*, IV, 1995, 237-246.
- , y RAMOS LISSON, Domingo, «Historia de los Concilios de la España romana y visigoda», Pamplona 1986.
- PEREZ, J. de J. «La cristología de los símbolos toledanos», Roma 1934.
- PEREZ DE URBEL, Justo, «San Martín y el monaquismo», *Bracara Augusta*, 8, 1957, 49-67

- , «Vida y caminos del Pacto de San Fructuoso», *Revista Portuguesa de Historia*, 7, 1957, 337-397.
- PETIT, Carlos, «Iustitia y Iudicium en el reino de Toledo. Un estudio de teología jurídica visigoda», en *La giustizia nell'alto Medioevo*, Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo, XLII, 1995, 843-932.
- RAMOS LISSON, Domingo, «Los laicos y el III Concilio de Toledo», en *XIV Centenario del Concilio III de Toledo*, Toledo 1991, 343-356.
- RAMOS LOSCERTALES, José M^a, «Prisciliano. Gesta Rerum», *Acta Salmanticensia*, V, n^o 5, Salamanca 1952.
- REYDELLET, M., «La royauté dans la littérature latine de Sidoine Apollinaire à Isidore de Séville», ed. Ecole Française de Rome, Roma 1981.
- SALVADOR VENTURA, Francisco, «El Concilio III de Toledo y los Concilios béticos», en *XIV Centenario del Concilio III de Toledo*, Toledo 1991, 627-640.
- SANCHEZ-ALBORNOZ, Claudio, «Fuentes para el estudio de las divisiones eclesiásticas visigodas», *Boletín de la Universidad de Santiago de Compostela*, 2, 1930, 97 ss.
- SCHÄFERDICK, K., «Les conséquences politiques de l'arrianisme chez les Goths, Burgonds, Vandales, etc.», en *Colloque International d'Histoire, à l'occasion du XVème centenaire de Clovis*, Reims, septiembere 1996 (en curso de impresión).
- SEJOURNE, P. «Le dernier Père de l'Eglise, Saint Isidore de Séville. Son rôle dans l'Histoire du Droit Canonique», Paris 1929.
- THIERRY, Agustin, «Récits des temps mérovingiens», París 1887.
- THOMPSON, E.A. «Los godos en España», Madrid 1971.
- TORRES LOPEZ, Manuel, «El Estado visigótico», *AHDE*, 3, 1926, 307- 475.
- , *Lecciones de Historia del Derecho español*, II, Salamanca 1936.
- VACANT, A., MANGENOT, E., AMANN, E. (dirs.), «Dictionnaire de Théologie Catholique», 15 vols, París 1930-1950. Existe una puesta al día en 4 vols. a cargo de B. LOTH y A. MICHEL, París 1951-1972.
- VALLEJO GIRVES, Margarita, «Bizancio ante la conversión de los visigodos: los obispos Jenaro y Esteban», en *XIV Centenario del Concilio III de Toledo*, Toledo 1991, 477-483.
- , «Bizancio y la España tardoantigua (ss. V-VIII): un capítulo de historia mediterránea», (ed.) Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares 1993.
- VARIOS AUTORES, «I Concilio Cesaraugustano, MDC aniversario», Zaragoza 1981.
- VEGA, A.C., «El Primado romano en la Iglesia española desde sus orígenes», *Revista Española de Teología*, 2, 1942, 63-99.
- , «El Primado romano y la Iglesia española en los siete primeros siglos», *Ciudad de Dios*, 155, 1943, 70-103.

VIVES, José, «Las diócesis visigodas y la invasión bizantina», *Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona*, 28, 1959-60.

—, «Nuevas diócesis visigodas ante la invasión bizantina», *Span Forsch*, 17, 1961.

WOLFRAM, H., «Histoire des Goths», París 1990.

ZEUMER, Karl, «Historia de la legislación visigoda», (trad.), Barcelona 1944.

ZIMMERMAN, N., «Les sacres des rois wisigoths» en *Colloque International d'Histoire à l'occasion du XVème centenaire de Clovis*, Reims, septiembre 1996 (en curso de impresión).